JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2004-00629-00**
Demandante:	**MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ y OTROS**
Demandado:	**MUNICIPIO DE LA MESA y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR**
Medio de Control:	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS-ACCIÓN POPULAR-VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Encontrándose el presente proceso en verificación de cumplimiento del fallo, mediante el auto de 27 de agosto de 2020, se dispuso:

> «***PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO*** *de la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., el informe rendido por el apoderado judicial del MUNICIPIO DE LA MESA el 23 de julio de 2020 contentivo del informe técnico de fecha 13 de julio de 2020 y, de la certificación expedida por la secretaría de Planeación del MUNICIPIO DE LA MESA, con el fin de que se pronuncie al respecto, para el efecto se concede el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de la presente providencia.*
>
> ***SEGUNDO: CONMÍNASE*** *a la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR-, para que imparta celeridad al proceso de permiso de vertimientos y ocupación de cauce para la descarga residual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Villas de Nuevo Siglo en el Municipio de la Mesa, tramitada en el expediente*

radicada bajo el No. 70204, el cual se encuentra en proceso de evaluación en dicha dependencia desde enero de 2020.

(…)».

1.2. En virtud de lo anterior, el 1° de septiembre de 2020 el apoderado judicial de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA allegó informe técnico No. 0600 de 26 de agosto, proferido por la Dirección de Evaluación Seguimiento y Cultura Ambiental dentro del expediente No. 70204. (*«010InformeCAR1Septiembre2020»*).

1.2.1. Del informe presentado se advierte como últimas actuaciones para el permiso de vertimientos dentro del expediente No. 70204 las siguientes:

- El 16 de octubre de 2019, la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., solicitó prórroga para radicar los requerimientos del AUTO DRTE No. 2058 de 23 de septiembre de 2019.

- En virtud de ello, mediante auto DRTE No. 2360 de 28 de octubre de 2019, se concedió un plazo de un mes para dar cumplimiento a los requerimientos realizados mediante el auto DRTE No. 2058 de 23 de septiembre de 2019.

- El 29 de noviembre de 2019, la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., solicitó prórroga adicional a la otorgada en el auto DRTE No. 2360 de 28 de octubre de 2019.

- En razón a dicha solicitud, mediante auto DRTE No. 2737 de 4 de diciembre de 2019, se concedió a la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., un plazo de un mes para dar cumplimiento a los requerimientos hechos mediante el auto DRTE No. 2058 de 23 de septiembre de 2019.

- El 9 de enero de 2020 la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., allegó a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DE CUNDINAMARCA la documentación requerida mediante al auto DRTE No. 2058 de 23 de septiembre de 2019.

- Mediante el memorando DESCA No. 20203126330 de 18 de junio de 2020, la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL-DESCA, solicitó la verificación de fuente hídrica en las coordenadas *«E 957226 – N 1004410»*, a la DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES-DRN.

- Con memorando DRN No. 20203127161 de 24 de junio de 2020, la DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES-DRN, señaló que no existen cuerpos hídricos reconocidos o identificados por el INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI en el área de interés en las coordenadas *«E 957226 – N 1004410»*, en donde se ubica el cabezal de descarga. Pero que sobre las coordenadas *«E 957208 – N 1004719»*, inicia una quebrada innominada.

1.2.2. En dicho concepto técnico se indicó que se dio cumplimiento parcial a los requerimientos realizados mediante auto DRTE No. 2737 de 4 de diciembre de 2019, a partir de la evaluación de la documentación realizada en el Informe Técnico DESCA No. 1447 de 22 de agosto del mismo año. Que la quebrada innominada sí corresponde a una fuente hídrica pero con diferentes coordenadas, pues, en donde se ubica el cabezal de descarga no existen cuerpos hídricos reconocidos o identificados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sin embrago, el vertimiento de aguas residuales domesticas tratadas proveniente de la PTAR, se puede entregar a la quebrada innominada.

1.2.3. Como recomendaciones se dispuso en primer lugar que el área jurídica de la Dirección Regional Tequendama– DRTE estudie la procedencia legal de la quebrada innominada como fuente hídrica receptora del vertimiento de aguas residuales domesticas tratadas, y subsiguientemente realice las acciones pertinentes con el fin de acoger las siguientes recomendaciones:

«7.1. Con base en lo conceptuado en los numerales 6.2 y 6.3 del presente informe técnico solicitar a la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P., identificada con NIT No. 900.126.313 – 7, a través de su representante legal, realizar la gestión para llevar el vertimiento desde el cabezal de descarga hasta la quebrada innominada, teniendo en cuenta que en las coordenadas E 957226 – N 1004410, en donde se ubica el cabezal de descarga no existen cuerpos hídricos reconocidos o identificados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y adicionalmente este canal recibe las aguas lluvias del sector.

7.2. <u>Evaluación Ambiental del Vertimiento:</u> Con base en lo conceptuado en el numeral 6.4 del presente informe técnico, solicitar a la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P., identificada con NIT No. 900.126.313 – 7, a través de su representante legal, complementar la siguiente información:

a. Descripción y valoración de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo.

7.3. <u>Modelación de Calidad del Agua:</u> Con base en lo conceptuado en el numeral 6.5 del presente informe técnico, solicitar a la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P., identificada con NIT No. 900.126.313 – 7, a través de su representante legal, presentar la siguiente información:

a. Hidráulica: Debe presentarse una comparación de los valores obtenidos con el modelo hidráulico con los valores obtenidos del ensayo con trazadores para profundidad y velocidad. Las curvas potenciales deben obtenerse para un rango de caudales cercanos al valor registrado durante el ensayo con trazadores, según la recomendación realizada en el IT DESCA No. 1447 de 2019. Si bien el usuario determina los tiempos de viaje a través de ensayos con trazadores, esos corresponderían a la condición de caudal registrada el 11 de agosto de 2017, el usuario debe aclarar si la velocidad obtenida para el caudal del día de ensayo con trazadores es equivalente a la velocidad del día de toma de muestras (03 de noviembre de 2019).

b. Calidad del canal adyacente a la PTAR y de la quebrada Innominada: De acuerdo con los resultados del laboratorio no se daría cumplimiento al objetivo de calidad en la quebrada Innominada, a pesar de las reducciones en las concentraciones identificadas.

c. Puntos de Monitoreo: Se deben presentar las aclaraciones con respecto a las coordenadas dadas por el laboratorio.

d. Reportes de Laboratorio: Presentar un análisis sobre el incremento observado en la estación denominada 90 m aguas abajo. Presentar los soportes de acreditación del laboratorio subcontratado por el laboratorio H2O es Vida, considerando lo establecido en el artículo 2.2.3.3.5.2. del Decreto 1076 de 2015, "Los análisis de las muestras deberán ser realizados por laboratorios acreditados por el IDEAM, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 9 del Título 8, Parte 2, Libro 2 del presente Decreto o la norma que lo modifique, adicione o sustituya". Se deben presentar las

cadenas de custodia que permitan evidenciar la trazabilidad de la muestra desde el momento de su toma hasta su análisis.

e. *Extensión de los impactos del vertimiento: El usuario considera que el parámetro que presenta la mayor distancia para su asimilación sería la DBO5, la cual se recuperaría antes de 1 km, sin embargo, los reportes de laboratorio muestran que, si bien existe una depuración, la descarga en las condiciones modeladas no permitirían alcanzar el objetivo de calidad al final de la quebrada Innominada y el impacto podría trascender hasta la quebrada San Javier. Se requiere revisar la extensión de los impactos del ARD tratada y sin tratamiento en función del cumplimiento del objetivo de calidad, establecido para la Clase II en el Acuerdo CAR No.043 de 2006.*

f. *Longitud de mezcla: Presentar los cálculos de la longitud de mezcla para diferentes condiciones de caudales (mínimo, medio y máximos), incluyendo los soportes de cada una de las variables ingresadas.*

g. *Soportes digitales del modelo: El CD presentado por el usuario contiene una carpeta que correspondería a los soportes digitales del modelo de simulación, sin embargo, al abrir esta carpeta aparece vacía. Por lo tanto, es necesario que se alleguen estos soportes digitales del modelo (extensión de archivo de hoja de cálculo de ExcelR .xls), así como el archivo ejecutable (extensión de archivo ejecutable .exe) de forma pueda revisarse por parte de la Corporación la información ingresada al modelo.*

h. *Usos y usuarios del recurso: Si el impacto llegase a trascender hasta la quebrada San Javier, tal como se puede observar en los resultados de laboratorio y en lo esperado al mover el punto de vertimiento, la identificación de usuarios debe considerar también La quebrada San Javier.*

i. *Actualización del modelo de calidad: Considerando que el punto de descarga debe modificarse, el usuario debe presentar la justificación de si se actualiza el modelo de calidad presentado actualmente, el cual debe cumplir con los demás requerimientos planteados en el presente Informe Técnico, o si es necesario implementar un nuevo modelo de simulación.*

De acuerdo con lo conceptuado en el Informe Técnico DESCA No. 1447 de 2019, se recomienda realizar la calibración del modelo haciendo uso de valores confiables de los parámetros de calidad del agua requeridos en el modelo. Adicionalmente, se sugiere realizar la medición de la fracción de materia orgánica particulada con el fin de soportar el ingreso de información al modelo. Se debe presentar la justificación y consideraciones frente a la trasformación de variables reportadas por el laboratorio, con fines de su inclusión en el modelo.

j. *Área de Influencia: Considerando que el punto de descarga debe modificarse, a partir de los resultados de la modelación debe revisarse si se modifica el área de influencia, y de ser necesario, esta debe incluir el tramo de la quebrada San Javier que pueda verse afectado. Este análisis debe considerar a menos DBO5, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos totales y coliformes, en condiciones que limiten o impidan el tratamiento del agua residual.*

7.4. Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo del Vertimiento: Con base en lo conceptuado en el numeral 6.6 del presente informe técnico, solicitar a la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P., identificada con NIT No. 900.126.313 – 7, a través de su representante legal, presentar la siguiente información, teniendo en cuenta los requisitos para cada ítem, establecidos en los términos de referencia adoptados por la Resolución 1514 de 2012:

a. *Área de influencia: Tener en cuenta el Sistema de Gestión del Vertimiento desde el inicio y el canal natural donde se ubica el cabezal de descarga, previo a la quebrada innominada.*

b. *Geología: Presentar la identificación y descripción de las condiciones de amenaza.*

c. *Geotecnia: Presentar la caracterización geotécnica de las áreas donde se instalarán o están ubicados los elementos del Sistema de Gestión del Vertimiento, con el objetivo de identificar condiciones que puedan afectar la normal operación del sistema y de sus redes asociadas. Presentar en un mapa a una escala representativa a la magnitud del proyecto y a la cantidad y calidad de información.*

d. *Suelos, cobertura y usos del suelo: Presentar las características físicas y químicas de los del suelo.*

e. *Ecosistemas acuáticos: Realizar la identificación y descripción de los ecosistemas acuáticos y su dinámica en el área de influencia del Sistema de Gestión del Vertimiento, con base en muestreos de perifiton, bentos y fauna íctica, aguas arriba y aguas abajo del vertimiento, georreferenciando los puntos de muestreo.*

f. *Ecosistemas terrestres: Identificar y describir la fauna asociada.*

g. *Consolidación de los escenarios de riesgo: Presentar una calificación del riesgo en función de la intensidad y/o magnitud de los daños esperados y de los impactos en el logro de los objetivos del tratamiento. Presentar la calificación del riesgo en términos de pérdidas físicas de la infraestructura o de los impactos técnicos en la operación del sistema de Gestión del Vertimiento que impidan o limiten el tratamiento de las aguas residuales. Como escenario principal de riesgo se debe presentar el generado por el vertimiento de aguas sin tratar sobre el medio natural y las condiciones sociales de la zona afectada.*

h. *Preparación para la respuesta: Definir un SGV temporal en el Plan Operativo y presentar el Plan Informático, según los Términos de Referencia de la Resolución MADS 1514 del 2012.*

i. *Preparación para recuperación Postdesastre: Definir de manera general las acciones a desarrollar, en relación con los efectos que se puedan generar sobre el recurso suelo asociado a un acuífero, el agua y sus recursos hidrobiológicos, y los efectos sobre la población usuaria de la misma.*

7.5. Ocupación de cauce: Con base en lo conceptuado en el numeral 6.7 del presente informe técnico, solicitar a la EMPRESA REGIONAL AGUAS

DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P., identificada con NIT No. 900.126.313 – 7, a través de su representante legal, presentar la siguiente información:

a. *Formulario de solicitud: Completar la información*

b. *Fotocopia simple de un documento legal que contenga el número de cedula catastral del predio si corresponde a solicitud: Dar respuesta a lo requerido mediante Oficio CAR No. 20192125512 del 25 de abril de 2019, la Corporación solicita a la ERAT S.A. E.S.P., para que haga unas aclaraciones respecto al predio en el que se encuentra la PTAR y la obra de ocupación de cauce.*

c. *Certificado de Tradición y Libertad expedido dentro del mes anterior a la presentación de la solicitud: Dar respuesta a lo requerido mediante Oficio CAR No. 20192125512 del 25 de abril de 2019, la Corporación solicita a la ERAT S.A. E.S.P., para que haga unas aclaraciones respecto al predio en el que se encuentra la PTAR y la obra de ocupación de cauce y allegar los Certificados de Tradición y Libertad de los predios correspondientes en caso de ser necesario.*

d. *Planos generales de localización, planos planta perfil, planos obras civiles y plano de detalles: Es necesario resaltar que el vertimiento se deberá llevar desde el cabezal de descarga hasta la quebrada innominada, por tal motivo es necesario allegar a la Corporación los planos que contengan esta información adicional.*

e. *Descripción explicativa del proyecto, obra o actividad, que incluya por lo menos su localización, dimensión, memorias técnicas y costo estimado: Memorias técnicas del proyecto y presentar las autorizaciones de los propietarios de los predios que la tubería que conduce el efluente atraviese, y del dueño del predio donde se va a efectuar la descarga (servidumbres).*

7.6. <u>Punto de Control del Vertimiento:</u> Con base en lo conceptuado en el numeral 6.8 del presente informe técnico, solicitar a a la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P., identificada con NIT No. 900.126.313 – 7, a través de su representante legal, determinar un punto de control de vertimiento, de acuerdo con lo establecido en el numeral 25 del artículo 2.2.3.3.1.3 del Decreto 1076 de 2015.

7.7. <u>Requisitos del Permiso de Vertimientos:</u> Con base en lo conceptuado en el numeral 6.9 del presente informe técnico, solicitar a la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P., identificada con NIT No. 900.126.313 – 7, a través de su representante legal, presentar la siguiente información:

a. *Nombre, dirección e identificación del solicitante y razón social si se trata de una persona jurídica: Completar la información del Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos.*

b. *Certificado actualizado del Registrador de Instrumentos Públicos y Privados sobre la propiedad del inmueble, o la prueba idónea de la posesión o tenencia: Dar respuesta a lo requerido mediante Oficio CAR No. 20192125512 del 25 de abril de 2019, la Corporación solicita a la ERAT S.A. E.S.P., para que haga unas aclaraciones respecto al predio en el que se*

encuentra la PTAR y la obra de ocupación de cauce y allegar los Certificados de Tradición y Libertad de los predios correspondientes en caso de ser necesario.

c. Nombre y localización del predio, proyecto, obra o actividad: Dar respuesta a lo requerido mediante Oficio CAR No. 20192125512 del 25 de abril de 2019, la Corporación solicita a la ERAT S.A. E.S.P., para que haga unas aclaraciones respecto al predio en el que se encuentra la PTAR y la obra de ocupación de cauce y allegar los Certificados de Tradición y Libertad de los predios correspondientes en caso de ser necesario.

7.8. Concepto de uso del suelo y predio donde se localiza la PTAR y la Ocupación de Cauce: De acuerdo con lo indicado en el Oficio CAR No. 20192125512 del 25 de abril de 2019 y lo conceptuado en el numeral 6.11 del presente informe, solicitar a la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P., identificada con NIT No. 900.126.313 – 7, a través de su representante legal, allegar la información referente al predio donde se encuentra la PTAR Villas del Nuevo Siglo y la estructura de Ocupación de Cauce de esta, y allegar los permisos de los propietarios de dichos predios para la realización y establecimiento de las obras (conducción del efluente y cabezal de descarga) en caso de que sea necesario.

7.9. Con base en lo conceptuado en el numeral 6.11 del presente informe técnico solicitar a la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A E.S.P., identificada con NIT No. 900.126.313 – 7, a través de su representante legal, que tome las medidas de ajuste a los diseños y operación de la PTAR, para mejorar la calidad del vertimiento».

1.3. El 25 de septiembre de 2020 el apoderado judicial de la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., allegó informe en donde señaló que desde hace aproximadamente dos años y medio se ha ido realizando ante la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA todo el proceso de obtención del permiso de vertimientos y ocupación de cauce de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLAS DEL NUEVO SIGLO, el cual aduce se ha ido tramitando junto con la administración Municipal, sin embargo, señala que en atención a una aclaración predial del terreno donde se encuentra ubicada la PTAR, la cual es necesaria para el otorgamiento del permiso de vertimiento, que ha sido solicitada desde febrero de 2019, sin obtener respuesta. No obstante, indicó que en el mes de agosto de 2020 se certificó que dicho predio está a nombre de la Alcaldía Municipal de La Mesa y que inmediatamente se remitió la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA para poder seguir dando trámite a la obtención del permiso de vertimientos. (*«011InformeERAT25Septiembre2020»*).

1.4. El 12 de enero de 2021 el doctor CAMILO ANDRÉS OSSA AYA, radicó renuncia al poder conferido por la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., atendiendo la terminación de su vínculo contractual, sin embargo no adjunto la comunicación enviada al poderdante en tal sentido (*«012RenunciaPoder»*).

1.5. El 19 de enero de 2021 el GUILLERMO AUGUSTO VILLALBA BUITRAGO apoderado judicial del MUNICIPIO DE LA MESA allegó renuncia al poder conferido, sin embargo no adjunto la comunicación enviada al poderdante en tal sentido (*«013RenunciaPoder»*).

1.6. El 17 de febrero de 2021 el doctor ISNARDO GÓMEZ URQUIJO allegó poder a él conferido por parte del MUNICIPIO DE LA MESA junto con la documental que acredita la calidad de poderdante, por lo que se le reconocerá personería adjetiva para actuar en los términos y para los efectos del poder a él conferido, se pone de presente que el 24 de febrero allegó correo electrónico en similares términos (*«014PoderMunicipio»* y *«016PoderMunicipioMesa»*).

1.7. El 25 de febrero de 2021 se allegó poder conferido por parte de la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., al doctor NELSON IVAN GARCÍA TARQUINO, junto con la documental que acredita la calidad de poderdante, por lo que se le reconocerá personería adjetiva para actuar en los términos y para los efectos del poder a él conferido (*«017PoderAguaTequendama»*).

1.8. El proceso ingresó al Despacho el 22 de febrero de 2021 (*«015ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Expuesto lo anterior, se advierte que en el informe técnico DESCA No. 0600 de 26 agosto de 2020 de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y

CONTROL AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, se plasmaron una serie de recomendaciones con el fin de conceder el permiso de vertimientos y de ocupación de cauce para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales-PTAR Villas del Nuevo Siglo, del Municipio de la Mesa, en primer lugar al área jurídica de la DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA-DRTE para que estudiara la procedencia legal y realizara otras acciones que considerara pertinentes con el fin de acoger otras recomendaciones, las cuales fueron transcritas en el numeral 1.2.3., del presente proveído.

Así las cosas, como quiera que el cumplimiento de dichas recomendaciones competen al área jurídica de la DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA-DRTE, y a la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., como solicitante de dicho permiso de vertimiento, se hace necesario requerirlas para que indiquen y acrediten las gestiones adelantadas respecto a lo indicado en el informe técnico DESCA No. 0600 de 26 agosto de 2020 de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRASE a la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., para que dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la notificación de este proveído indique y acredite el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el informe técnico DESCA No. 0600 de 26 agosto de 2020 de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA.

SEGUNDO: REQUIÉRASE al área jurídica de la DIRECCIÓN REGIONAL TEQUENDAMA-DRTE, de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, para que dentro de los quince (15) días siguientes

contados a partir de la notificación de este proveído indique y acredite el cumplimiento de las recomendaciones indicadas en el informe técnico DESCA No. 0600 de 26 agosto de 2020 de la DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA.

TERCERO: NO ACEPTAR la renuncia presentada por el doctor CAMILO ANDRÉS OSSA AYA, al poder conferido por la Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P., conforme a lo expuesto en este auto.

CUARTO: NO ACEPTAR la renuncia presentada por el doctor GUILLERMO AUGUSTO VILLALBA BUITRAGO, al poder conferido por el Municipio de La Mesa, conforme a lo expuesto en este auto.

QUINTO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar al doctor ISNARDO GÓMEZ URQUIJO como apoderado judicial del MUNICIPIO DE LA MESA en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en el archivo «014PoderMunicipio», en ese orden, **TÉNGASE** por terminado el poder conferido al doctor GUILLERMO AUGUSTO VILLALBA BUITRAGO, en los términos del artículo 76 del Código General del Proceso.

SEXTO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar al doctor NELSON IVÁN GARCÍA TARQUINO como apoderado judicial de la EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A. E.S.P., en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en el archivo «017PoderAguaTequendama», en ese orden, **TÉNGASE** por terminado el poder conferido al doctor CAMILO ANDRÉS OSSA AYA, en los términos del artículo 76 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
dd6f607e05eb126559191cf59a4b470df21d60f767f9af015c0ed2f2fd8ab86e
Documento generado en 03/06/2021 11:53:06 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2005-01390-00**
Demandante:	**CARMEN ELISA OYOLA Y OTROS**
Demandado:	**COMGIRARDOT EN LIQUIDACIÓN y OTROS**
Medio de Control:	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS-ACCIÓN POPULAR-VERIFICACIÓN DE FALLO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Encontrándose el presente proceso en verificación de cumplimiento de fallo, mediante auto de 30 de julio de 2020 se dispuso requerir en los mismos términos del auto de 5 de diciembre de 2019, habida cuenta que no obraba pronunciamiento en cuanto a lo requerido en dicho proveído. En el mencionado auto se dispuso:

> «***PRIMERO: REQUERIR*** *a la Inspectora Municipal, doctora Mónica Piedad Reyes Ochoa, o a quien haga sus veces para que adelante el respectivo proceso policivo en relación con la casa 16 de la manzana 13 de la Ciudadela Comgirardot.*
>
> ***SEGUNDO: NO ACCEDER*** *a la solicitud elevada por la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Girardot, por lo expuesto en la parte motiva. En su lugar,* ***REQUERIR*** *al Secretario de Infraestructura del Municipio de Girardot, ingeniero Álvaro Fernando Melendro Meneses, con el fin de que indique detalladamente las actuaciones desplegadas con relación a las casas 24, 26, 27 y 32 de la manzana 13 de la ciudadela Comgirardot.*

> ***TERCERO: Téngase como acreditada la ausencia de riesgo e inestabilidad*** *de la casa 22 de la manzana 13 de la ciudadela Comgirardot, de propiedad de la la señora María Milvia Quintero de Quintero. En tal sentido* ***ofíciese*** *al señor Registrador de Instrumentos Públicos del Circulo de Girardot, para que proceda a inscribir la cancelación de la medida en la matricula inmobiliaria N° 307-52389, perteneciente a la casa 22 de la manzana 13 de la ciudadela Comgirardot, atendiendo el artículo 22 de la ley 1579 de 2012 y demás normas concordantes.*
>
> ***CUARTO: REQUERIR*** *nuevamente a la señora Irma Susana Gómez Rodríguez, propietaria de la casa 10 de la manzana 11, con el fin de que allegue el dictamen pericial expedido por el profesional idóneo que certifique y de fe del reforzamiento estructural y que se encuentra dentro de la norma sismo-resistente NSR-10, lo anterior teniendo en cuenta que, mediante proveído del 12 de agosto de 2019 de la Inspección de Policía, fue declarada estabilizada y sin riesgo de colapso de ruina e inminente peligro.*
>
> ***QUINTO: SE PONE EN CONOCIMIENTO*** *de las partes interesadas el oficio N° 3072019EE01616 allegado por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot y que obra en los folios 1886 al 1890 del expediente».*

1.2. En virtud de lo anterior, el 24[1] de agosto de 2020 el SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, señor JUAN PABLO DÍAZ VANEGAS allegó el oficio No. 150.47.02 S.I.G. 1248 en el que señaló poner en conocimiento las actuaciones desplegadas en relación con las casas 24, 26, 27 y 32 de la manzana 13 de la Ciudadela COMGIRARDOT. (*«003InformeMunicipioGirardot21Agosto2020»*).

1.2.1. Adjunta el informe técnico realizado el 20 de agosto de 2020 por los ingenieros ALLISON MANUELA GARZÓN REINA y ANDRÉS FELIPE NAVAS BAQUERO cuyo objeto consistía en la *«INSPECCIÓN VISUAL CIUDADELA COMGIRARDOT CASA 24, 26, 27 Y 32 DE LA MANZANA 13»*, en el mismo se indica que se realizaron demoliciones parciales de las casas 26 y 27 *«retiro de la cubierta y la carpintería metálica en ambos predios y de igual manera en ambas plantas, también los muros divisorios de las segundas plantas»*. En cuanto a la casa 24 refiere que se demolió por completo y respecto a la casa 32 *«presenta el desmonte de la cubierta, carpintería metálica en ambas plantas de esta edificación,*

[1] Fue presentada el 21 de agosto de 2020, pero en horario no laboral, por lo que se tiene por presentada al día hábil siguiente.

esta demolición fue realizada de manera parcial ya que aún se encuentra con los muros divisorios tanto de la primera planta como en la segunda».

1.2.2. Refiere que se suscribió un acta de vecindad a las viviendas contiguas de las casas 24, 26, 27 y 32 y un informe de inspección a las viviendas que se les ejecutó una demolición parcial, en donde se evidenció el deterioro consistente en agrietamientos o fisuras, hundimientos, afectación en la estructura y elementos no estructurales. Por lo que atendiendo los deterioros se diligenció formato de acta de vecindad en las cuales se informa el estado general actual de las casas 25, 28, 31 y 33.

1.2.3. Indica que se realizó el informe de inspección ocular donde se evidencian las condiciones de las viviendas que se encuentran con una demolición parcial plasmando el estado los mismos, señalando que las mencionadas viviendas se encuentran al 80% de la demolición total, teniendo en cuenta que falta por demoler las placas de entrepiso, las escaleras de las casas 26 y 27 , además, la casa 32 se encuentra con la placa de entrepiso, las escaleras, muros divisorios de ambas plantas, destacando que la vivienda 24 se encuentra totalmente demolida.

1.2.4. Finalmente, en dicho informe indica que el comportamiento estructural de las viviendas es de modulo estructural lo que se traduce a que se comparten muros y placas de entrepiso, por lo que no existe garantía en cuanto que al hacer la demolición de las viviendas no se vean afectadas las viviendas contiguas. Aunado a que manifiesta que sólo la casa 31 cuenta con el refuerzo estructural, sin que ello signifique que sea el adecuado para soportar la demolición. En ese orden, refiere que el proceso de demolición de las casas 26, 27 y 32 de la manzana 13, demanda garantizar la integridad estructural de los predios colindantes, habida cuenta que, reitera, el sistema de constructivo es «*mampostería estructural reforzada y es compartido y toda intervención que se pretenda ejecutar, pueden verse afectados los inmuebles contiguos identificados como casa 25, 28, 31 y 33 de la misma manzana».* Considerando necesario que las

viviendas colindantes a las de la demolición realicen un reforzamiento estructural y/o certificación de los propietarios de la existencia de este refuerzo estructural, avalado por un profesional idóneo que garantice y se responsabilice de que las mismas soportarían la demolición y no existiría afectación en dichos inmuebles, ni se pondría en riesgo la estabilidad de la estructura y la integridad de los habitantes de dicha comunidad durante y después de la demolición solicitada. Puntualizando que la demolición se debe llevar a cabo con personal especializado, idóneo, competente y capacitado sin que en la actualidad el Municipio cuente con el mismo, debiéndose realizar una contratación de una empresa especializada en realizar demoliciones, sin que se cuente con la disponibilidad de recursos para el efecto.

1.3. El 31 de agosto de 2020, la Oficina Asesora Jurídica del MUNICIPIO DE GIRARDOT, remitió nuevamente el informe realizado por el SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA señor JUAN PABLO DÍAZ VANEGAS (*«004InformeMunicipioGirardot31Agosto2020»*).

1.4. El 18 de septiembre de 2020, se allegó por parte de la secretaria de la INSPECCIÓN DE POLICÍA, señora ESPERANZA GUZMÁN BEJARANO, el oficio SIG No. 150.47.01 Of- 1252 de 24 de agosto de 2020 suscrito por el Secretario de Infraestructura Municipal en donde informa sobre la visita realizada a la casa 29 de la manzana 13 de la Ciudadela Comgirardot evidenciando que la vivienda no se encontraba habitada, observándose un reforzamiento estructural consistente en la intervención e implantación de columnas en la parte exterior, destacando que el comportamiento estructural de dichas viviendas es de *«modulo estructural»*, es decir que comparten muros y placas de entrepiso por lo que no se puede garantizar que al realizar la demolición de las viviendas colindantes no se ve a afectada, siendo necesario que las viviendas colindantes a dicho predio realicen reforzamiento estructural y/o certificación de la existencia del mismo. Y el auto de 4 de septiembre de la misma anualidad proferido por la Inspectora Municipal dentro del proceso 2014-036 en el cual se instó al titular de la Secretaría de Infraestructura de

Girardot para que se atuviera a lo resuelto en la Resolución No. 001 de 17 de enero de 2020, teniendo en cuenta los protocolos de pertinentes y necesarios para su cumplimiento, sin afectar la estructura de los bienes inmuebles colindantes al predio ubicado en el lote 29 de la manzana 13 de la Ciudadela Comgirardot, y en tal sentido adelantar el trámite de contratación para dar cumplimiento a lo ordenado (*«005InformeInspeccionPolicia18Septiembre2020»*).

1.5. El 29 de septiembre de 2020 la señora HERMENCIA SUÁREZ GÓMEZ, quien señaló ser propietaria de la casa 29 de la manzana 13 de la Ciudadela Comgirardot allegó correo electrónico en los siguientes términos: (*«006PeticionDemandante29Septiembre2020»*).

> *«buenas tardes Hice una solicitud al juzgado primero de Girardot en el año 2014 Y emitieron un fallo en el 2015, el cual debía ser notificado a la INSPECTORA DE POLICÍA DE GIRARDOT y a la fecha hoy 29 de septiembre 2020 no lo han hecho, fui a entregar los documentos para que en la inspección de policía verificaran y me dicen que ellos no reciben nada, que deben ser ustedes los que notifiquen entonces por favor necesito que lo más pronto posible comuniquen a quien corresponda, ya que está en juego la demolición de una casa».*

1.6. El 12 de febrero de 2021 la secretaria de la INSPECCIÓN DE POLICÍA, señora ESPERANZA GUZMÁN BEJARANO allegó el oficio No. INSP. 122.47-02 Of N. 042 donde se puso en conocimiento el informe SIG-No. 150.47.02 Of.1633 de 26 de octubre de 2020 presentado por la Secretaría de Infraestructura de Girardot en el que se informó que se requirió a la prometiente compradora allegar el informe técnico estructural sobre el reforzamiento realizado a la vivienda ubicada en la casa 29 de la manzana 13, reiterando que para proceder con la demolición de dichos predios se requiere necesariamente el reforzamiento estructural de los colindantes. (*«007InfoemeInspeccionPolicia»*).

1.7. El proceso ingresó al Despacho el 15 de febrero de 2021 (*«008ConstanciaDespacho»*).

1.8. El 18 de mayo de 2021 el Secretario de Infraestructura del Municipio de Girardot allegó el informe SIG No. 150.47.02. Of. 1067, mediante el cual indicó que la señora HERMENCIA SUÁREZ GÓMEZ en calidad de prometiente compradora del inmueble ubicado en la manzana 13, casa 29 presentó el informe pericial suscrito por el ingeniero HARVEY MEDINA LAGUNA *«en donde se puede destacar sin lugar a equívocos que se han subsanado en debida forma los requerimientos realizados por la autoridad, y por ende, este inmueble cumpliría de esta forma con los rigorismos propios para su habitabilidad, y sin riesgos colaterales que puedan afectar derechos de terceros»*, dictamen en el cual se señalaron como conclusiones las siguientes (*«009EscritoMunicipioGirardot»*):

> *«1. LA ESTRUCTURA ESTÁ DETERMINADA POR PÓRTICOS EN CONCRETO CONFORMADOS POR COLUMNAS EN CONCRETO Y VIGAS AÉREAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL*
>
> *2. SEGÚN LOS ENSAYOS DE ESCLEROMETRÍA DE LOS ELEMENTOS EN CONCRETO TIENE UNA RESISTENCIA PROMEDIO DE 3000 PSI, NO PRESENTA AGRIETAMIENTOS NI ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES*
>
> *3. AL REALIZAR EL MODELO MATEMÁTICO DE LA ESTRUCTURA TAL CUAL SE ENCUENTRA CUMPLE CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA NSR-10,*
>
> *4. LA ESTRUCTURA ACTUALMENTE CUMPLE CON LOS FACTORES DE DISEÑO EXIGIDOS EN LA NSR -10 LOS CUALES ESTÁN TODOS INCLUIDOS EN LA MEMORIA DE CALCULO REPORT SAP14*
>
> *5. AL REALIZAR EL MODELO MATEMÁTICO CON EL REFORZAMIENTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS CON LA NRS-10 TANTO COMO DERIVAS Y TORCIOS COMO ÁREAS DE ACERO DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL PÓRTICO.*
>
> *6. TODA LA INFORMACIÓN ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA INCLUIDA EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES*
>
> *7. LA ESTRUCTURA DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA APTA PARA SER OCUPADA».*

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En primer lugar, en atención a los informes allegados por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA y la INSPECCIÓN DE POLICÍA, contrastados con el escrito allegado por la señora HERMENCIA SUÁREZ GÓMEZ, quien señaló ser propietaria de la casa 29 de la manzana 13 de la Ciudadela Comgirardot, resulta imperioso recordar que en el proveído de 24 de noviembre de 2015 se tuvo por acreditada la ausencia de riesgo de inestabilidad de la casa en mención, en efecto se dispuso (folio 159 a 162 del cuaderno del folio 1467 a 1674):

> «***SEGUNDO: Téngase como acreditada la ausencia de riesgo de inestabilidad,*** *respecto de la casa 21 y 29 de la Manzana 13, y 19 de la Manzana 11 de la Ciudadela COMGIRARDOT de esta localidad*».

Posteriormente, con el fin de realizar la cancelación de la medida respecto a los anteriores predios, se libraron los oficios No. 1930 de 9 de diciembre de 2015 y No. 0122 de 27 de enero siguiente dirigidos a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE GIRARDOT.

No obstante, al encontrar el Despacho que no se había realizado el registro de la cancelación de la medida frente a la casa 29 de la manzana 13 de la ciudadela Comgirardot por auto de 22 de agosto de 2019 se dispuso requerir a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE GIRARDOT, con el fin de que indicara el motivo por el cual no se había procedido con el respectivo registro pese a haber sido oficiado.

En virtud del anterior requerimiento, la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE GIRARDOT allegó el oficio No. 3072019EE01616 de 19 de septiembre de 2019 en el que indicó sobre la imposibilidad de realizar el registro, documento que fue puesto en conocimiento de las partes por auto de 5 de diciembre siguiente como quiera que la efectividad del registro mencionado se escapaba de la órbita del Despacho sin que se hubiera hecho manifestación al respecto.

Lo anterior para señalar que desde el momento en que se tuvo por acreditada la ausencia de riesgo de inestabilidad de la casa 29 de la manzana 13, esto es, el 24 de noviembre de 2015, las partes tuvieron conocimiento por lo que es inadmisible para el Despacho que después de transcurrir un poco más de cinco años la INSPECTORA DE POLICÍA DE GIRARDOT se encuentre librando órdenes relacionadas con la demolición de dicha vivienda, ahora, en cuanto a la solicitud hecha por la señor HERMENCIA SUÁREZ GÓMEZ, también se pone de presente que el expediente siempre se encontró y se encuentra a su disposición en el evento en que requiera copias de proveídos u otros documentos para realizar el levantamiento de la medida en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente.

Aunado a lo anterior, se tiene que el 18 de mayo de 2021 el Secretario de Infraestructura del Municipio de Girardot informó que la señora HERMENCIA SUÁREZ GÓMEZ en calidad de prometiente compradora del inmueble ubicado en la manzana 13, casa 29 presentó el informe pericial suscrito por el ingeniero HARVEY MEDINA LAGUNA *«en donde se puede destacar sin lugar a equívocos que se han subsanado en debida forma los requerimientos realizados por la autoridad, y por ende, este inmueble cumpliría de esta forma con los rigorismos propios para su habitabilidad, y sin riesgos colateralesque puedan afectar derechos de terceros».*

Así las cosas, se pondrá en conocimiento tanto de la INSPECCIÓN DE POLICÍA como de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE GIRARDOT, no sólo el auto de 24 de noviembre de 2015, sino el informe pericial suscrito por el ingeniero HARVEY MEDINA LAGUNA, para que se abstengan de proceder con la demolición de la casa 29 de la manzana 13 de la ciudadela Comgirardot, así también se requerirá a la señora HERMENCIA SUÁREZ GÓMEZ, para que realice los trámites correspondientes a la cancelación de la medida frente al predio en mención como quiera que ya se tuvo por acreditada la ausencia de riesgo de inestabilidad.

De otro lado, se reitera que el Despacho está actuando en verificación del cumplimiento del fallo, por lo que lo ordenado por la INSPECCIÓN DE POLICÍA DE GIRARDOT dentro de los procesos policivos frente a las casas 24, 26, 27 y 32 de la manzana 13 de la ciudadela Comgirardot, debe acatarse, y realizarse lo correspondiente para su cumplimiento, pues no basta con presentar informes señalando que el comportamiento estructural de las viviendas es de modulo estructural lo que se traduce a que se comparten muros y placas de entrepiso, por lo que no existe garantía en cuanto que al hacer la demolición de las viviendas no se vean afectadas la viviendas contiguas. Pues, para el efecto, dicha Secretaría cuenta con personal capacitado.

Finalmente, como quiera que algunas de las órdenes dadas en el proveído de 5 de diciembre de 2019 no han sido acatadas se reiterarán en este proveído.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la señora HERMENCIA SUÁREZ GÓMEZ, de la INSPECCIÓN DE POLICÍA y de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE GIRARDOT el auto de 24 de noviembre de 2015 que obra del folio 159 a 162 del cuaderno del folio 1467 a 1674 y el informe pericial suscrito por el ingeniero HARVEY MEDINA LAGUNA obrante en el archivo «009EscritoMunicipioGirardot». En ese sentido, **ORDÉNASE** que se abstengan de proceder o impartir órdenes respecto a la demolición de la casa 29 de la manzana 13 de la ciudadela Comgirardot, como quiera que ya se tuvo por acreditada la ausencia de riesgo de inestabilidad.

SEGUNDO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la señora HERMENCIA SUÁREZ GÓMEZ el oficio No. 3072019EE01616 allegado por la oficina de REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE GIRARDOT obrante en los folios 245 a 250 del cuaderno del folio 1467 a 1674. **REQUIÉRASE** para que proceda en el menor tiempo posible si no lo ha hecho, a realizar los trámites correspondientes ante la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS

PÚBLICOS DE GIRARDOT para que se realice la cancelación de la medida de la casa 29 de la manzana 13 de la ciudadela Comgirardot.

TERCERO: REQUIÉRASE a la INSPECTORA DE POLICÍA, doctora MÓNICA PIEDAD REYES OCHOA, o a quien haga sus veces para que adelante el respectivo proceso policivo en relación con la casa 16 de la manzana 13 de la ciudadela Comgirardot. Así mismo para que dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la notificación de este proveído allegue informe sobre las gestiones adelantadas respecto a los procesos policivos de la casa 11 de la manzana 11 y casas 6, 15, 16, 26, 27 y 32 de la manzana 13.

CUARTO: REQUIÉRASE a la señora IRMA SUSANA GÓMEZ RODRÍGUEZ, propietaria de la casa 10 de la manzana 11, con el fin de que allegue dictamen pericial expedido por el profesional idóneo que certifique y de fe del reforzamiento estructural y que se encuentra dentro de la norma sismo resistente NSR-10, lo anterior, teniendo en cuenta que mediante proveído de 12 de agosto de 2019 de la Inspección de Policía, fue declarada estabilizada y sin riesgo de colapso de ruina e inminente peligro. Así también, **REQUIÉRASE** a la INSPECTORA DE POLICÍA para que preste colaboración respecto a la efectividad de la presente comunicación.

QUINTO: CONMÍNASE al SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT para que acate las disposiciones impartidas por la INSPECTORA DE POLICÍA, dentro de los procesos policivos adelantados frente a las casas 26, 27 y 32 de la manzana 13 de la ciudadela Comgirardot, desplegando las acciones correspondientes para su cumplimiento.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
2f5dada3d991e4f0fcddc58dc4c58a1e4b02ce30e38cc0320e19001e43f009e6
Documento generado en 03/06/2021 11:53:07 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2007-00184-00**
Demandante:	**ARTURO RODRÍGUEZ CASTRO**
Demandado:	**MUNICIPIO DE SILVANIA Y OTROS**
Medio de Control:	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS-ACCIÓN POPULAR-VERIFICACIÓN DE FALLO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 6 de agosto de 2020 este Despacho dispuso:

> «***PRIMERO: REQUERIR*** *a la Alcaldesa del Municipio de Silvania, NOHORA ELIZABET SÁNCHEZ, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído informe y acredite el estado en que se encuentra:*
>
> *- La solicitud de cofinanciación al proyecto cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE UNA LONGITUD DE 100 METROS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SUBIA, SECTOR CASCO URBANO MUNICIPIO DE SILVANIA", radicado bajo el número 0000921".*
>
> *- La solicitud de cofinanciación de los "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE AVENIDA TORRENCIAL Y REMOCIÓN EN MASA EN LOS BARRIOS PINARES DEL RIO, EL PROGRESO, MOLINO ROJO, URBANIZACIÓN SASIPA, URBANIZACIÓN EL TAMBO MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA".*
>
> *- La aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.*

> ***SEGUNDO: REQUERIR*** *al Director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca LUIS FERNANDO SANABRIA MARTÍNEZ, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído informe y acredite el estado en que se encuentra:*
>
> *- La solicitud de cofinanciación al proyecto cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE UNA LONGITUD DE 100 METROS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SUBIA, SECTOR CASCO URBANO MUNICIPIO DE SILVANIA", radicado bajo el número 0000921".*
>
> *- La solicitud de cofinanciación de los "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE AVENIDA TORRENCIAL Y REMOCIÓN EN MASA EN LOS BARRIOS PINARES DEL RIO, EL PROGRESO, MOLINO ROJO, URBANIZACIÓN SASIPA, URBANIZACIÓN EL TAMBO MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA".*
>
> ***TERCERO: REQUERIR*** *al Personero Municipal de Silvania, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído allegue las actas del comité de verificación de fallo realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 2018».*

1.2. En virtud de lo anterior, el 18 de agosto de 2020 la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA allegó escrito en el que indicó (*«003InformeCAR18Agosto2020»*):

1.2.1. Respecto al proyecto No. 956: *«ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE AVENIDA TORRENCIAL Y REMOCIÓN EN MASA EN LOS BARRIOS PINARES DEL RIO, EL PROGRESO, MOLINO ROJO, URBANIZACIÓN SASIPA Y URBANIZACIÓN EL TAMBO, MUNICIPIO DE SILVANIA, CUNDINAMARCA»*, manifiesta que fue devuelto al MUNICIPIO DE SILVANIA el 19 de julio de 2019, con el Oficio CAR No. 20192147952 y No. de guía 8037144206 de 30 de julio de 2020, en el que se informó los requerimientos a cumplir para presentar un proyecto en calidad de cofinanciación a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR, y adicional a ello, se le invitó a *«que en el momento de ser presentado de nuevo el proyecto ante la Corporación, debe estar completo y cumplir con todos los requerimientos anteriormente citados»*. Por lo que concluye que el proyecto está en estado *«Devuelto por Requerimiento»* y se encuentra en el MUNICIPIO DE SILVANIA, quien tiene la potestad de presentarlo

nuevamente, para su cofinanciación en los términos establecidos en el Acuerdo No. 037 de 2005 «*Por medio del cual se establecen los mecanismos para acceder a los recursos destinados a la cofinanciación de proyectos para la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables en jurisdicción de la CAR*».

1.2.2. Referente al Proyecto No. 921 «*CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION DE UNA LONGITUD DE 100 METROS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIOS SUBIA, SECTOR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA*», mencionó que el proyecto fue declarado no viable técnicamente, según el Informe Técnico DIA No. 064 de 8 de agosto de 2019, señalando lo siguiente:

> *«10. CONCEPTO De acuerdo con la información suministrada por el proyecto 00921, visita realizada, verificación de presupuesto y demás documentos presentados y relacionados en el presente informe, se determina que técnicamente el proyecto presentado por el municipio de Silvanía no se puede desarrollar, debido a la falta de documentos básicos y técnicos, vitales para la evaluación del proyecto, lo cual puede generar riesgos de orden jurídico y presupuestal para la Corporación, dado que no hay garantía del alcance real ni de los costos de las obras propuestas. Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE UNA LONGITUD DE 100 METROS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SUBÍA, SECTOR CASCO URBANO MUNICIPIO DE SILVANÍA", se considera técnicamente NO VIABLE, para su materialización, hasta que el municipio subsane las observaciones realizadas en el presente informe.*
>
> *11. RECOMENDACIONES O CONCLUSIONES Enviar el presente informe técnico a la Oficina Asesora de Planeación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, para que acoja las consideraciones planteadas en el presente concepto».*

1.2.3. Así también, refiere que La OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, informó los resultados de la Evaluación Técnica realizada por la DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL y devolvió el proyecto al MUNICIPIO DE SILVANIA, con el Oficio CAR No. 20192153168 de 13 de agosto de 2019 y guía de entrega No. 8037243975 de 16 de agosto de 2019, expresando al Municipio que «*queda a consideración del señor alcalde, una vez se atiendan las observaciones realizadas en el informe técnico, presentar una nueva propuesta de cofinanciación, la cual debe ser radicada nuevamente con toda la*

documentación». Por lo que concluye que el proyecto está en estado de «*No Viable*» y se encuentra en el MUNICIPIO DE SILVANIA, quien tiene la potestad de presentar el proyecto nuevamente previa atención de las observaciones realizadas en el informe técnico en mención y los requisitos del Acuerdo No. 037 de 2005.

1.3. El 21 de agosto de 2020 el MUNICIPIO DE SILVANIA allegó el informe en el que señaló (*«004InformeSilvania21Agosto2020»*):

1.3.1. Refiere que en cuanto a la solicitud de cofinanciación al proyecto cuyo objeto es la «*CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE UNA LONGITUD DE 100 METROS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SUBIA, SECTOR CASCO URBANO MUNICIPIO DE SILVANIA*» radicado bajo el número 0000921 y a los «*ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE AVENIDA TORRENCIAL Y REMOCIÓN EN MASA EN LOS BARRIOS PINARES DEL RIO, EL PROGRESO, MOLINO ROJO, URBANIZACIÓN SASIPA, URBANIZACIÓN EL TAMBO MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA*», ha desplegado las siguientes acciones:

> «***PINARES DEL RIO, EL PROGRESO Y URBANIZACIÓN EL TAMBO.***
>
> • *Estudio hidrológico e hidráulico, análisis climatológico, morfometría de la cuenca del rio Subia, para el paso por el casco urbano de los sectores en mención, así mismo levantamiento topográfico, georreferenciación y restitución fotogramétrica. El proyecto se realizó anclado a los puntos de amarre existentes en el sistema MAGNA SIRGAS con origen BOGOTÁMAGNA. (…)*
>
> • *Radicación de los estudios descritos con anterioridad ante la Corporación Autónoma Regional – CAR con el fin de adelantar el proceso de cofinanciación, remitido vía web el 19 de agosto del presente año. (me permito anexar prueba de envío)*
>
> • *Se está adelantando la etapa precontractual para la consultoría de "La realización de estudios de socavación, revisión y actualización de estudios hidráulico, hidrológico, geotécnico del muro de contención de la margen izquierda del rio Subia en el sector del casco urbano" (Se anexa, solicitud banco de proyectos, certificación banco de proyectos, solicitud de disponibilidad y estudios previos).*

URBANIZACIÓN SASIPA y BARRIO MOLINO ROJO:

• Levantamiento topográfico, georreferenciación y restitución fotogramétrica. El proyecto se realizó anclado a los puntos de amarre existentes en el sistema MAGNA SIRGAS con origen BOGOTÁ-MAGNA. (…)

• Visita e informe adelantados por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgos de Desastres del Departamento de Cundinamarca (UAEGRD), según solicitudes realizada por la Alcaldía Municipal de Silvania. (Se anexa en archivo PDF).

• Se está adelantando con la UAEGRD del Departamento de Cundinamarca un sistema de monitoreo con topografía dinámica, para analizar progresividad de la afectación, lo cual hace parte de del análisis para determinar las acciones requeridas. (Se anexa -en archivo PDF- acta No. 18, Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y desastres, donde se registra compromiso)

• Topografía correspondiente a la zona de Sásipa y el sector las Villas, como plan de acción acordado en el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo. (Fue remitido a la CAR, se anexa en archivo PDF)

• Avance en estudios y diseños del alcantarillado de la zona Yayatá – sector las Villas para el manejo de aguas residuales en el sector.

• Se está adelantando la etapa contractual para la consultoría en la realización de los estudios aplicables a la condición de riesgo.

• De acuerdo a nuestra solicitud -del 2 de julio de 2020- y gestión realizada, quedo programada, según respuesta recibida el 20/08/2020, para el día 28 de agosto de 2020, donde se realizará la visita de inspección ocular con la Corporación Autónoma Regional – CAR. (Anexo copia solicitud y respuesta, en archivo PDF)».

1.3.2. En cuanto al estado en que se encuentra la aprobación del PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL mencionó que luego de haber sido remitido a la CAR para concertación, ellos lo devuelven con 360 observaciones, las cuales el Municipio contestó, lográndose la concertación de 55 observaciones, del componente general, que posteriormente la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL-CAR lo devolvió porque se vencieron los términos, por lo que indica que en la actualidad están revisando la información que había remitido la anterior administración, haciendo énfasis en que ese diagnóstico data del año 2017, siendo necesaria la actualización del expediente municipal, y toda la parte de formulación en sus tres componentes *«1- General. 2- Rural y 3- Urbano»*, encontrándose en ajustes, para

posteriormente radicarlo nuevamente ante la CAR, para su concertación, y posterior aprobación por el Concejo Municipal.

1.4. El 30 de septiembre de 2020 el doctor RODRIGO ALEJANDRO CARVAJAL CUBILLOS en calidad de Personero Municipal de Silvania allegó el oficio No. 616-2020 de 15 de septiembre de 2020 mediante el cual remite el acta de audiencia del Comité de Verificación de Fallo realizada el 19 de agosto de 2020 e informó que revisados los archivos de la Personería aparece un acta del mes de marzo de 2019 en donde se dejó constancia que sólo asistió el accionante y que para el mes de febrero de 2020 se había convocado a comité pero que el demandante solicitó aplazamiento por motivos de salud (*«007InformePersoneria30Septiembre2020»*).

1.4.1. Del acta del comité de verificación de fallo aportada de 19 de agosto de 2020 se destaca que en la intervención hecha por la Alcaldesa del Municipio de Silvania se refirió que el Municipio se encuentra económicamente en una situación critica con ocasión del poco recaudo de impuestos, y que en virtud de la pandemia no cuenta con todos los recursos que le hubieran ingresado en un año normal, no obstante, refiere que ha realizado diferentes reuniones en los meses de febrero y marzo con la CAR generando acuerdos, de los cuales respecto a la cofinanciación de la construcción del muro se comprometió a allegar a dicha Entidad algunos documentos faltantes, sin embargo con ocasión de la pandemia no fueron posibles radicar algunos archivos, refirió además que conforme a estudios en Silvania no se ha presentado lluvias torrenciales sino inundaciones. Finalmente indica que se encuentra buscando optimizar recursos.

1.4.2. En uso de la palabra, el Presidente del Concejo Municipal, señalando que el 15 de julio se aprobó el Plan de Desarrollo Municipal Acuerdo No. 006-2020-2023 *«todos construimos el cambio»,* en donde en donde se estableció como meta No. 209 la complementación de estudios y diseños para la construcción del muro de contención en margen izquierda del río Subia barrio el progreso.

1.4.3. En la intervención del demandante señor Arturo Rodríguez, inicia señalando que han transcurrido 20 años desde la avenida torrencial, desastre que aduce ocurrió el 2 de diciembre de 2001, seguidamente se refirió a los puntos en donde el río ha hecho erosión.

1.4.4. Finalmente el demandante preguntó a la alcaldesa sobre el estado del POT quien indicó que la administración Departamental antecesora, contrató estudios para la actualización en vario Municipios del Departamento, entre ellos Silvania, cuenta que al recibir el Municipio se estaba adelantando una concertación con la CAR, pues eran más de 300 observaciones, por lo que solicitaron una prórroga y que por el tema de la pandemia se encuentra «*quieto*», reitera que se encuentra buscando la forma de optimizar recursos. Seguidamente se refirió a lo manifestado por el accionante frente a la zona de alto riesgo del barrio el progreso, destacando que así quedó contemplado en el fallo de la acción popular.

1.5. El 27 de enero de 2021[1] el señor Arturo Rodríguez Castro Accionante allegó escrito en el que realizó análisis, precisiones y peticiones frente a Informe Técnico DRSU No. 1262 de 30 de noviembre de 2020, indicando que han pasado casi 10 años desde que se profirió el fallo dentro del asunto de la referencia y que ninguno de los 3 alcaldes anteriores, ni la alcaldesa actual han dado cumplimiento a lo ordenado por este Despacho, sin que además, por parte del Despacho se haya dado ningún pronunciamiento sancionatorio al respecto.

1.5.1. Seguidamente informó que la CAR y la alcaldía, en la visita de las ingenieras de la CAR y el informe presentado, no se detectó ni se informó del represamiento que se da en baja temporada de lluvias, en el sitio «*curva Bonanza*», a raíz de la sedimentación de materiales en el lecho del Río Subia, lo que aduce, hace que el nivel de la fuente se haya subido y se genere por el represamiento una contaminación ambiental del aire, llevando hacia el Barrio el progreso y otros sectores aledaños un fétido olor de «*cañería o cloaca*»,

[1] Día hábil siguiente a la fecha de radicación

situación que aduce, denunció ante el Comité de Verificación de Obras, y a la Secretaria de Gobierno de Silvania el 22 de enero de 2021.

1.5.2. Finalmente elevó las siguientes peticiones:

> *«I. En mi calidad de Accionante de la Acción Popular que nos ocupa y a la vez como Veedor Ciudadano, me permito Peticionar al señora Alcaldesa Municipal Doctora NOHORA ELIZABETH SÁNCHEZ SUAREZ, se dé cumplimiento inmediato a todas y cada una de LAS RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES, plasmadas en el más reciente Informe emanado de la vista de la CAR, el cual ya fue remitido a su Despacho, al igual que al fallo del Juzgado, que ha sido dilatado por su despacho, hasta hoy en 13 meses.*
>
> *II. En el Ítem PRECISIÓN DENUNCIA ESPECIAL, de este Informe, se hace una denuncia directamente relacionado con las obras ordenadas hace 10 años, las que no han sido objeto de cumplimiento y en tal razón, PETICIONO a su Despacho Señora Juez, se ordene a quien corresponda; CAR Fusagasugá, Alcaldía de Silvania, Gestión del Riesgo Municipal, se dé solución inmediata a esta CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL AIRE, que está afectando de manera grave al Ancianato de la Finca Bonanza, y la comunidad del Barrio El Progreso».*

1.6. El proceso ingresó al Despacho el 24 de mayo de 2021 (*«009ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Expuesto lo anterior, el Despacho no desconoce que tal y como lo afirma el demandante RODRÍGUEZ CASTRO, ha transcurrido más de 10 años de haberse proferido los fallos de primera y segunda instancia, sin que se evidencie su cumplimiento, no obstante, debe tenerse en cuenta que para su cumplimiento, se requiere de la realización de estudios correspondientes y disponibilidad presupuestal que demanda tiempo para lograr *i)* la inclusión en el PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL al barrio el Progreso como zona de alto grado de riego por amenaza de inundabilidad por encontrarse en ronda de protección hidráulica del Río Subia y *ii)* para la construcción en la margen izquierda del Río Subia en el sector del barrio el Triunfo que lo proteja

del impacto dela corriente y cese el proceso de erosión hídrica y *iii)* para la construcción en el área baja susceptible a ser superada por la corriente, en la margen derecha el jarillón u otra estructura capaz de superar tal amenaza. Sin embargo ello tampoco puede ser excusa por parte del MUNICIPIO DE SILVANIA para no gestionar lo pertinente con el fin de dar cumplimiento al fallo.

Así también se recuerda que en la diligencia de inspección realizada por este Despacho el 12 de diciembre de 2018 la Juez solicitó de la colaboración por parte de todas las dependencias de la Alcaldía y de los presentes para lograr el cumplimiento del fallo, así como para prevenir eventuales tragedias.

En ese orden, del informe allegado por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CUNDINAMARCA se concluye que se está a la espera que por parte del MUNICIPIO DE SILVANIA se realicen los ajustes indicados en el Informe Técnico con el que fueron devueltos los proyectos de cofinanciación y dando cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo No. 037 de 2005.

Requisitos frente a los cuales la Alcaldesa Municipal de Silvania señaló estar adelantando, advirtiendo que se encontraba buscando optimizar recursos para el efecto.

No obstante, como quiera que los informes obrantes en el expediente datan de hace 9 meses aproximadamente, se hace necesario tener conocimiento sobre qué adelantos se han tenido, por lo que se requerirá en tal sentido.

Por otro lado en cuanto al escrito allegado el 26 enero de 2021 por el demandante señor, RODRÍGUEZ CASTRO, obrante en el archivo *«008EscritoVeedor»,* este Despacho encuentra pertinente ponerlo en conocimiento del MUNICIPIO DE SILVANIA y de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-CAR- para que se pronuncien al respecto, pues en el mismo se denunció que en la visita realizada

por los ingenieros «*no se detectó ni se informó del represamiento que se da en baja temporada de lluvias, en el sitio curva Bonanza, bajos del colegio Santa Inés, a raíz de la sedimentación de materiales en el lecho del Rio Subia, lo que hace que el nivel de la fuente se haya subido y se genere por el represamiento una contaminación Ambiental del Aire, llevando hacia el Barrio el progreso y otros sectores aledaños un fétido olor de cañería o cloaca*». Aunado a que en el mismo se realizó una petición para el Municipio.

Así también, en cuanto a la petición para el Despacho consistente en ordenar a «*quien corresponda; CAR Fusagasugá, Alcaldía de Silvania, Gestión del Riesgo Municipal, se dé solución inmediata a esta CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DEL AIRE, que está afectando de manera grave al Ancianato de la Finca Bonanza, y la comunidad del Barrio El Progreso*», se pone de presente que en principio de pondrá en conocimiento del MUNICIPIO DE SILVANIA y de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA con el fin de que desplieguen las acciones correspondientes, habida cuenta que en efecto sí se ordenó dentro del fallo la «*Prevención de obstrucción de su cauce o de los drenajes, mediante el retiro oportuno de escombros y basuras, y del control policivo de quienes les viertan*».

Finalmente, se hace necesario requerir al PERSONERO MUNICIPAL DE SILVANIA para que allegue las actas del comité de verificación de fallo realizadas con posterioridad al 19 de agosto de 2020, como quiera que es la última allegada al Despacho.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRASE al alcalde del MUNICIPIO DE SILVANIA para que dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la notificación de este proveído allegue un informe de manera puntual, clara, concisa y actualizado *i)* respecto a las gestiones adelantadas para dar cumplimiento a lo requerido por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA respecto a la cofinanciación del proyecto cuyo objeto es la

«CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE UNA LONGITUD DE 100 METROS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SUBIA, SECTOR CASCO URBANO MUNICIPIO DE SILVANIA» radicado bajo el número 0000921 y a los *«ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE AVENIDA TORRENCIAL Y REMOCIÓN EN MASA EN LOS BARRIOS PINARES DEL RIO, EL PROGRESO, MOLINO ROJO, URBANIZACIÓN SASIPA, URBANIZACIÓN EL TAMBO MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA»* y *ii)* en lo que concierne a la aprobación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.

SEGUNDO: PONER EN CONOCIMIENTO del MUNICIPIO DE SILVANIA y de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA el escrito allegado el 26 enero de 2021 por el demandante señor, RODRÍGUEZ CASTRO, obrante en el archivo *«008EscritoVeedor»*, con el fin de que se pronuncien al respecto para el efecto contaran con quince (15) días siguientes a la notificación de este proveído.

TERCERO: REQUIÉRASE la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA con el fin de que dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la notificación de este proveído indique si el MUNICIPIO DE SILVANIA ha atendido los requerimientos efectuados respecto a la a la cofinanciación del proyecto cuyo objeto es la *«CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE UNA LONGITUD DE 100 METROS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SUBIA, SECTOR CASCO URBANO MUNICIPIO DE SILVANIA»* radicado bajo el número 0000921 y a los *«ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE AVENIDA TORRENCIAL Y REMOCIÓN EN MASA EN LOS BARRIOS PINARES DEL RIO, EL PROGRESO, MOLINO ROJO, URBANIZACIÓN SASIPA, URBANIZACIÓN EL TAMBO MUNICIPIO DE SILVANIA CUNDINAMARCA»*.

CUARTO: REQUIÉRASE al PERSONERO MUNICIPAL DE SILVANIA para que dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la notificación

allegue las actas del comité de verificación de fallo realizadas con posterioridad al 19 de agosto de 2020, como quiera que es la última allegada al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
d3b9e90bb69990cc772803894e9aaebf91af4b51ec43c56d027cbf94f7f3161e
Documento generado en 03/06/2021 11:53:09 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2007-00439-00**
Demandante:	**YISSET CASTELLANOS RODRÍGUEZ Y OTROS**
Demandado:	**MUNICIPIO DE GIRARDOT**
Medio de Control:	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS (ACCIÓN POPULAR) en verificación de fallo**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Encontrándose el proceso en verificación de cumplimiento del fallo, este Despacho mediante auto de 30 de julio de 2020 dispuso (*«002AutoRequiere»*):

> *«**PRIMERO: OFÍCIESE** a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot para que certifique si del folio de matrícula inmobiliaria N° 307-0055415, se efectuó un desenglobe, del cual surgió la apertura al folio de matrícula inmobiliaria N° 307- 108741.*
>
> ***SEGUNDO: REQUERIR** al Alcalde del Municipio de Girardot FRANCISCO LOZANO, para que i) sin necesidad de requerimientos, allegue informes bimensuales que den cuenta de las labores desplegadas en labor del cumplimiento del fallo y ii) despliegue las acciones correspondientes con el fin de impedir más asentamientos subnormales en el predio Pozo Azul, sector SAMAN y GUAYACAN.*
>
> ***TERCERO: CONMINAR** al Alcalde del Municipio de Girardot FRANCISCO LOZANO y, a los accionantes para que asistan a los comités de verificación de fallo convocados por la Personería Municipal de Girardot, so pena de hacerse acreedores a la imposición de sanción por desacato».*

1.2. El 5[1] y 10 de agosto de 2020 el Defensor Público Administrativo doctor HERBERTH GIOVANNI HENAO HURTADO, allegó escritos mediante los cuales solicitó a la PERSONERÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT la implementación de audiencias virtuales (*«003SolicitudDefensoriaDelPueblo4Agosto2020»* y *«004SolicitudDefensoriaDelPueblo10Agosto2020»*).

1.3. El 23 de septiembre de 2020, la PERSONERÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT allegó el informe PMG-20.05.01-OF.2594-20 de 18 de septiembre de ese mismo año, en donde señaló adjuntar el acta del comité de verificación de fallo realizado el 15 del mismo mes y año con la anuencia del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la Directora de Vivienda y la Defensoría del Pueblo, así como los informes allegados por la Dirección de Vivienda Municipal, del acta se destaca lo siguiente (*«005InformePersoneria23Septiembre2020»*):

- El ingeniero JOSÉ JULIÁN FRANCISCO DÍAZ de la Dirección de Vivienda Municipal señaló que en virtud de la pandemia no se había podido englobar los predios GUAYACÁN y SAMAN en un predio de mayor extensión, para luego proceder con el desenglobe y la titulación del predio *«Pozo Azul»*, pero que una vez se cuente con el aval por parte del Ministerio de Vivienda se realizarían las minutas para proceder con la escrituración. Además señala que se realizaron estudios con la finalidad de verificar que el predio no se encuentre en zona de alto riesgo, ni zonas protegidas, finalizando su intervención indicando que el MINISTERIO DE VIVIENDA ya cuenta con la base de datos de POZO ASUL para tener la viabilidad para la titulación.

- La doctora DANEYI MARTÍNEZ HERRERA como Jefe de la Oficina Jurídica del Municipio intervino señalando que se efectuó intervención por parte de todo el equipo institucional del Municipio de Girardot, con la coadyuvancia de la Policía de vigilancia, el Esmad y el Ejército

[1] Fue allegado el 4 de agosto de 2020 pero fuera del horario laboral, por lo que se tiene por radicado al día hábil siguiente.

Nacional, realizándose un sistema de caracterización de las personas ubicadas en ese sitio para entregar ayudas humanitarias, y que luego de una serie de reuniones se logró que desocuparan el inmueble de manera voluntaria y que en la actualidad se realiza de manera permanente patrullaje por parte del Ejército Nacional con el fin de evitar que se presenten situaciones de invasiones subnormales.

- Como compromisos quedaron establecidos por parte del MUNICIPIO DE GIRARDOT ***i)*** la Dirección de Vivienda debería adelantar las actuaciones necesarias para que una vez se cuente con el aval por parte del MINISTERIO DE VIVIENDA, se realice la parte técnica y jurídica para la elaboración de las minutas para la titulación de los predios y ***ii)*** la Oficina Jurídica realizar el soporte jurídico pertinente para la legalización de los predios.

1.4. Por secretaría mediante oficios No. 0241 y No. 0243 de 3 de marzo de 2021 se requirió a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot y al Municipio de Girardot en cumplimiento de lo dispuesto en auto de 30 de julio de 2020 (*«006OficioRequiereInstrumentosPublicos»* y *«007OficioRequiereMunicipioGirardot»*).

1.5. El 12 de abril de 2021 la DIRECCIÓN DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT allegó el informe No. D.V. 180.47 OFICIO 0358 de 16 de marzo de 2021 suscrito de manera conjunta por la Dirección de Vivienda y la Dirección Técnica de Planeación Municipal en donde se informó (*«008EscritoMunicipioGirardot»*).

- Se adquirió el lote denominado SAMAN identificado con matrícula inmobiliaria No. 307-55415, conforme la anotación No. 13 de 4 de septiembre de 2019.
- La Dirección de Vivienda adelantó el proceso de legalización urbanística del asentamiento humano pozo azul conforme al Decreto No. 1077 de 2015. Además se ejecutó el contrato para el levantamiento topográfico.

- Que el estudio y plano urbanístico final delimitaba las zonas públicas y aéreas de loteo.
- El 15 de julio de 2019 se citó a la comunidad a beneficiarse del programa de legalización para dar a conocer el estudio y plano urbanístico. La cual se llevó a cabo el 19 del mismo mes y año.
- El plano de legalización y el estudio urbanístico se puso a disposición de los habitantes del asentamiento por 10 días hábiles, término dentro del cual se recibieron las siguientes objeciones:

RADICADO	FECHA	AÑO	PETICIONARIO	DIR_NOTIFICACION
641	23-jul-19	2019	JORGE URQUIZA TAFUR	MANZANA E CASA 16 POZO AZUL
642	23-jul-19	2019	MARÍA ELVIA MUÑOZ	MANZANA D CASA 1 POZO AZUL
644	23-jul-19	2019	CINDY ALEJANDRA RODRÍGUEZ CORTES	MANZANA A CASA 2 POZO AZUL
645	23-jul-19	2019	HERMINIA STERLING HERNÁNDEZ	MANZANA A CASA 3 POZO AZUL
649	24-jul-19	2019	EPIFANIO MORALES DÍAZ	MANZANA G CASA 2 POZO AZUL
712	02-ago-19	2019	MARÍA LUZ ANGARITA LANCHEROS	MANZANA B CASA 12 POZO AZUL
715	02-ago-19	2019	DAYRA NATALIA PLAZA PINZÓN	MANZANA C CASA 14 POZO AZUL
716	02-ago-19	2019	ALIRIA BARRAGÁN	MANZANA B CASA 20 POZO AZUL
721	08-ago-19	2019	ALIZ RODRÍGUEZ	MANZANA D CASA 29 POZO AZUL
728	08-ago-19	2019	JEOANNA LISSETTE HERRERA TRONCOSO	MANZANA A CASA 9 POZO AZUL
733	08-ago-19	2019	CRISTHIAN ESTEBAN SERRANO	MANZANA E CASA 6 POZO AZUL
749	13-ago-19	2019	DIANA PATRICIA BRIÑEZ FLÓREZ	MANZANA D CASA 18 POZO AZUL
1029	02-dic-19	2019	MARÍA ARCENETH POLANCO RONDÓN	MANZANA D CASA 11 POZO AZUL

- Que la totalidad de las objeciones fueron revisadas y verificadas, constatando y corrigiendo los errores de las medidas (áreas y linderos), para proceder con el ajuste del plano urbanístico de la legalización. En este punto destaca que dos de las objeciones no se pudieron revisar porqué se les impidió el ingreso a la vivienda.
- Señala que se cumplieron los requisitos exigidos por la Ley para la legalización del asentamiento humano pozo azul, se ajustó el plano urbanístico al plan de ordenamiento municipal, Acuerdo No. 024 de 2011.
- El 31 de diciembre de 2019 la Dirección Técnica de Planeación selló y aprobó los planos de legalización del asentamiento humano pozo azul.
- La Dirección de Vivienda suscribió el convenio No. 717 de 2020 con el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio para la titulación y saneamiento predial del Municipio de Girardot, conforme al Decreto No. 149 de 2020.
- La Dirección de Vivienda presentó ante el Concejo Municipal el Acuerdo No. 010 de 2020 *«Por medio de la cual se faculta al Alcalde Municipal de Girardot Cundinamarca para subdividir y/o lotear y titular los terrenos baldíos urbanos y los predios fiscales urbanos de propiedad del municipio a las familias que los ocupan con vivienda de interés social urbana y rural».*
- Refiere que se realizará estudio técnico y jurídico para el proceso de titulación y saneamiento predial, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto No. 149 de 2020.
- Finalmente señala que se envió al MINISTERIO DE VIVIENDA 29 predios con el fin de que por medio del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI-IGAC-, se realicen las visitas correspondientes y se realice el levantamiento de las mejoras para poder continuar el proceso con los demás predios.

1.6. El proceso ingresó al Despacho el 10 de mayo de 2021 (*«009ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En primer lugar, debe señalarse que lo requerido en proveído de 30 de julio de 2020 no ha sido cumplido pues, ***i)*** la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot no ha certificado si del folio de matrícula inmobiliaria No. 307-0055415, se efectuó un desenglobe, del cual surgió la apertura al folio de matrícula inmobiliaria No. 307- 108741 y ***ii)*** el Municipio de Girardot no ha allegado los informes bimensuales que den cuenta de las labores desplegadas en labor del cumplimiento del fallo, por lo que se requerirá en tal sentido nuevamente.

Por otro lado, conforme a la reunión de comité de verificación de fallo realizada el 15 de septiembre de 2020 se advierte que por parte del MUNICIPIO DE GIRARDOT sí se desplegaron acciones con el fin de impedir más asentamientos subnormales en el predio Pozo Azul, sector SAMAN y GUAYACAN.

Además, de la documental aportada por la PERSONERÍA MUNICIPAL DE GIRARDOT se advierte la Resolución No. 734 de 31 de diciembre de 2019 *«POR MEDIO DE LA CUAL SE LEGALIZA EL ASENTAMIENTO POZO AZUL»*, en donde se advierte que en la parte resolutiva se señaló (folios 22 a 47 archivo *«005InformePersoneria23Septiembre2020»*):

> *«**PRIMERO.- DECLARAR LEGALIZADO,** El Asentamiento Humano Pozo Azul.*
>
> ***SEGUNDO.- ORDENAR** a la Dirección Técnica de Planeación, **SELLAR EL PLANO URBANÍSTICO DE LEGALIZACIÓN DE POZO AZUL,** de acuerdo al proyecto presentado por el Arquitecto **STEVEN ACUÑA ESPINOSA,** Profesional Universitario Código 2019 Grado 05 de la Dirección de Vivienda del Municipio de Girardot.*
>
> ***TERCERO.-** La presente resolución de Legalización hace las veces de Licencia de Urbanismo, del hoy BARRIO POZO AZUL y hará las veces de licencia de subdivisión, para el desenglobe de las áreas de loteo de acuerdo al cuadro de áreas que se describe a continuación, y la delimitación de zonas públicas.*
>
> ***CUARTO.- Adóptese** la delimitación y el cuadro de áreas del proyecto POZO AZUL así: (…)».*

En dicha Resolución se advieten legalizados un total de 183 predios.

Por otro lado, en el informe allegado de manera conjunta por parte de la Dirección de Vivienda y la Dirección Técnica de Planeación Municipal se advierte como otros avances la suscripción del convenio No. 717 de 2020, el cual se destaca no fue aportado, además la presentación del Acuerdo No. 010 de 2020 ante el Concejo Municipal de Girardot, frente al cual no se tiene conocimiento si fue aprobado o no y tampoco fue allegado, a la fecha no se tiene conocimiento sobre el estado en que se encuentra estudio técnico y jurídico para el proceso de titulación y saneamiento predial, finalmente no entiende el Despacho el por qué sólo se adujo enviar al MINISTERIO DE VIVIENDA 29 predios con el fin de que por medio del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC), se realizaran las visitas correspondientes y se realizara el levantamiento de las mejoras para poder continuar el proceso con los demás predios, situaciones que deberán ser acreditadas e informadas por parte de la SECRETARÍA DE VIVIENDA MUNICIPAL.

En consecuencia se **DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot para que dentro del término de los quince (15) días siguientes a la comunicación del presente proveído certifique si del folio de matrícula inmobiliaria No. 307-0055415, se efectuó un desenglobe, del cual surgió la apertura al folio de matrícula inmobiliaria No. 307- 108741.

SEGUNDO: REQUIÉRESE a alcalde del MUNICIPIO DE GIRARDOT para que dentro del término de los quince (15) días siguientes a la comunicación del presente proveído allegue informe que dé cuenta de las labores desplegadas en labor del cumplimiento del fallo, así mismo para que en lo sucesivo y sin necesidad de requerimientos rinda informes bimensuales en tal sentido.

TERCERO: REQUIÉRESE a la DIRECCIÓN DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT para que dentro del término de los quince (15) días siguientes a la comunicación del presente proveído allegue copia íntegra y legible de:

- El convenio No. 717 de 2020 suscrito con el MINISTERIO DE VIVIENDA
- El Acuerdo No. 010 de 2020 presentado ante el Concejo Municipal de Girardot y, en caso de que haya sido aprobado deberá allegar la prueba que lo acredite
- Un informe en el que de manera clara y concisa señale el estado en que se encuentra el estudio técnico y jurídico para el proceso de titulación y saneamiento predial, y el por qué sólo adujo enviar al MINISTERIO DE VIVIENDA 29 predios con el fin de que por medio del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC), se realizaran las visitas correspondientes y se realizara el levantamiento de las mejoras para poder continuar el proceso con los demás predios.

CUARTO: REQUIÉRESE al PERSONERO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ para que dentro del término de los quince (15) días siguientes a la comunicación del presente proveído allegue las actas de los comités de verificación de fallo realizados el 6 de noviembre de 2019 y el 11 de febrero de 2021, así como los demás realizados después del 11 de febrero hogaño.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
6a02fe4c148933e560ab3e7f9a55d2b7c479b5830d738cdf4c7a36f67c8ca342
Documento generado en 03/06/2021 11:52:52 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2010-00571-00**
DEMANDANTE:	**HÉCTOR JULIO BALLESTEROS HUERTAS**
DEMANDADO:	**MUNICIPIOS DE APULO, VIOTÁ Y TOCAIMA**
ACCIÓN:	**TUTELA-INCIDENTE DE DESACATO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Encontrándose el presente proceso pendiente de decidir sobre la apertura de incidente por desacato, impetrada por el señor DAGOBERTO HERNÁNDEZ PEÑA, quien aduce ser delegado por la comunidad de las veredas San Carlos, la Horqueta y la Ceiba y beneficiario de la sentencia T-312 de 2012 contra los Alcaldes de los MUNICIPIOS DE APULO, VIOTÁ y TOCAIMA, así como al Gerente de la EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA-EPC-, por el presunto incumplimiento al fallo de tutela proferido por la Sala Novena de Revisión de la H. Corte Constitucional mediante sentencia T-312 de 26 de abril de 2012 que revocó lo dispuesto por la Subsección "B", de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia proferida el 21 de enero de 2011 por este Juzgado, se encuentra que mediante auto de 23 de marzo de 2021 se dispuso:

*«**PRIMERO: REQUIÉRASE** al alcalde del MUNICIPIO DE APULO para que **de manera inmediata** de cumplimiento a lo ordenado en auto de 4 de marzo de 2021 y allegue un informe de las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo de tutela dentro del asunto de la referencia y, aporte las pruebas que denoten el cumplimiento de la orden. **SO PENA DE DAR APERTURA AL INCIDENTE DE DESACATO** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.*

***SEGUNDO: REQUERIR** a los Alcaldes de los MUNICIPIOS DE APULO, VIOTÁ y TOCAIMA, así como al Gerente de la EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA-EPC- o a quienes hagan sus veces, para que suministren el agua potable a los habitantes de las veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos **diariamente y en cantidad de 100 y 150 litros por cada habitante,** y en consecuencia, mensualmente alleguen informes que acrediten dicho suministro de agua **diariamente y en cantidad de 100 y 150 litros por cada habitante, SO PENA DE DAR APERTURA AL INCIDENTE DE DESACATO** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.*

***TERCERO: REQUIÉRASE** a los alcaldes de los MUNICIPIOS DE APULO, VIOTÁ y TOCAIMA, o a quienes hagan sus veces para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído informen las gestiones desplegadas y avances en cumplimiento de la mesa de trabajo realizada en virtud del cambio de administración (2020-2023).*

***CUARTO: REQUIÉRASE** a los Alcaldes de los MUNICIPIOS DE APULO, VIOTÁ y TOCAIMA, o a quienes hagan sus veces para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído informen las gestiones desplegadas y avances en el marco del convenio interadministrativo de cooperación entre los municipio de Apulo, Viotá y Tocaima No. 001 de 10 de marzo de 2021 cuyo objeto corresponde a «AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ENTRE LAS ALCALDÍAS DE TOCAIMA APULO Y VIOTÁ CUNDINAMARCA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS BOCATOMAS DEL RÍO RUISITO Y RÍO LINDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS CON EXPEDIENTES NOS. 25000232400020110042501 Y 25307333300120100057100», para el efecto deberán allegar el acta de inicio».*

1.2. En virtud del anterior requerimiento, el 9 de abril de 2021 el MUNICIPIO DE VIOTÁ allegó informe en donde señaló que a través de la Empresa de Servicios Públicos de Viotá, quien es el prestador de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio de Viotá, en el mes de febrero de 2021 se suministró de agua potable a cada suscriptor de las veredas LA HORQUETA, LA CEIBA Y SAN CARLOS facturando un total de «*mil doscientos (1.200) m3, lo que quiere decir que un total de un millón doscientos (1.200.000) litros, en la actualidad a un total de 166 suscriptores*», lo que aduce, significa que «*para el mes de febrero de 2021 cada suscriptor debió recibir un total de 7.228 litros en el mes, y diariamente suministro 258,17 litros de agua potable por*

suscriptor día, superando el límite establecido en la sentencia de la alta corporación de la corte constitucional». Sin embargo señala que el número de suscriptores del servicio en las veredas de la Horqueta y La Ceiba de Viotá, y, San Carlos de Tocaima, en la actualidad supera la cantidad existente al momento de la sentencia, situación frente a la cual manifiesta que el acueducto construido estaba proyectado para un menor número de suscriptores, sin contar los aumentos desmedidos de la población actual, la población flotante y los usos diferentes al consumo humano. Finalmente indica que el servicio de agua potable lo efectúa la Empresa de Servicios Públicos de Viota, a través del acueducto que suministra el servicio de agua potable para el centro poblado de El Piñal, sistema que a su vez suministra agua potable a las veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos, Bejucal, Espino y San Vicente, y, cuando es deficiente se complementa con agua potable transportada en carro tanques (*«016EscritoMunicipioViota»*).

1.2.1. En cuanto a los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo mencionó que respecto a la adquisición del predio para la construcción del tanque Alto Serrano se encuentra trabajando conjuntamente con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CUNDINAMARCA y los MUNICIPIOS DE TOCAIMA Y APULO, en el proyecto regional Apulo, Tocaima y Viotá, en la cual se evidencia la necesidad de determinar una tercera fuente de abastecimiento de agua y alternativas para el acueducto, por lo que indica que hasta que exista tal definición, no se concreta la línea de conducción del agua para abastecimiento y servidumbre, por lo tanto, el compromiso de adquirir el predio para la construcción del tanque alto Serrano no puede ser cumplido.
1.2.2. En lo que atañe a la legalización de servidumbres indica que se cuenta con permisos para el trazado de servidumbre en los predios en los cuales pasa actualmente el alcantarillado que distribuye el agua a las veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos y predios aledaños, y que cuando se determinen definitivamente las fuentes hídricas de abastecimiento, se determinaran las líneas de conducción y, se identificaran los predios sobre los cuales se constituirán servidumbres.

1.2.3. Respecto a la solicitud ante la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA de la ampliación de las concesiones de aguas concedidas mediante las Resoluciones No. 0853 de 27 de marzo y No. 0896 de 29 de marzo de 2019, menciona que frente a las mismas se encontró un error de asignación de los caudales necesarios para el suministro del servicio de acueducto, por lo que elevó la solicitud de revisión y modificación de la Resolución 853 de 2019, indicándose que el caudal que se debió otorgar en dicha licencia era de 15 litros por segundo, petición frente a la cual la CAR señaló al no haberse presentado el recurso de reposición dentro los términos ya se había prescrito los tiempos de las reclamaciones, motivo por el cual se inició el trámite de ampliación de caudal, para lo cual la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, informó que debía cumplirse con varias obligaciones, por lo que se encuentra a la espera de realizar las contrataciones con los recursos del convenio interadministrativo tripartito celebrado entre los municipios de Viotá, Apulo, Tocaima, estando a la espera de la transferencia de los recursos.

1.2.4. En lo que concierne a los programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua cuenta que fueron realizados por EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA y enviados a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VIOTÁ SAS ESP siendo radicados ante la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA para su revisión y aprobación quien para el 18 de mayo de 2020 realizó unas observaciones, que fueron requeridas por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VIOTÁ SAS ESP., a EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA. Sin embargo menciona que como medida de mitigación y compensación requerida por la CAR, la empresa de servicios de Viotá está obligada a sembrar 1.264 elementos forestales nativos, con una altura de 80 centímetros de las especies de caucho o higuerón, yarumo negro, balso, cajeto o nacedero, cámbulo, caracolí, sangregao u otras adaptables a la zona, las cuales deberán tener un desarrollo adecuado en un buen estado fitosanitario, y que el sitio de siembra deberá definirse sobre las zonas de manejo y preservación de fuentes hídricas superficiales o en áreas de recarga de acuíferos, especialmente en el área periférica paralela al nivel máximo de

aguas en la zona de ronda de la fuente de uso público denominada Quebrada Ruisito, no obstante, refiere que el proceso de siembra de los árboles se efectuará una vez la CAR autorice el lugar de la siembra.

1.2.5. Finalmente, en cuanto a las gestiones desplegadas y avances en el marco del convenio interadministrativo de cooperación entre los municipio de Apulo, Viotá y Tocaima No. 001 de 10 de marzo de 2021 cuyo objeto corresponde a «*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ENTRE LAS ALCALDÍAS DE TOCAIMA APULO Y VIOTÁ CUNDINAMARCA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS BOCATOMAS DEL RÍO RUISITO Y RÍO LINDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS CON EXPEDIENTES NOS. 25000232400020110042501 Y 25307333300120100057100*», indicó que En el numeral 3 de la cláusula segunda de dicho convenio como obligación de los municipios de Apulo y Tocaima se estipulo que debían entregar al municipio de Viotá el aporte en dinero que se debería depositar en la cuenta del municipio de Viotá, previa presentación de la cuenta de cobro, por lo que refiere que el municipio de Viotá aperturó la cuenta corriente para recibir los aportes, y envío cuenta de cobro a los municipios de Apulo y Tocaima, por correo electrónico, quienes efectuaron la transferencia correspondiente, al respecto señala que una vez se cuente con todos los aportes, se efectuaría la incorporación de los recursos al presupuesto del municipio, y se suscribiría el acta de inicio, para iniciar el proceso contractual.

1.3. El 14 de abril de 2021 el MUNICIPIO DE APULO allegó informe en el que señaló que a través de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE APULO con apoyo del carro tanque de EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA se suministra agua potable a las veredas de la CEIBA, la HORQUETA de APULO y SAN CARLOS de TOCAIMA (*«016EscritoMunicipioApulo»*).

1.3.1. Indica que a través de la sana posesión se adquirió el inmueble donde funciona el tanque de almacenamiento el cual es operado por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VIOTÁ, mediante escritura No. 181 de 4 de abril de 2019, compromiso que destaca fue adquirido por la administración anterior,

en cuanto a las demás servidumbres manifestó que se estableció con EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA que podían ir paralelas sobre la vía.

1.3.2. Informa que como quedó establecido en una de las mesas técnicas del año 2015, el MUNICIPIO DE APULO realizó un contrato de suministro cuyo objeto correspondió a *«ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS LA HORQUETA Y LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA»,* haciéndose entrega al MUNICIPIO DE VIOTÁ para que instalara y mejorara la calidad del suministro del agua, señalando que el acueducto de VIOTÁ se encuentra en servicio hace más de cinco años y presta el servicio a las veredas objeto de la presente acción y además al casco urbano, debido a la problemática en la concesión de aguas pues con las Resoluciones No. 853 y No. 896 de 27 y 29 de marzo de 2019 se señalado un caudal que no es suficiente para atender la demanda a nivel urbano y rural, por lo que dentro de las acciones a realizar conjuntamente se encuentra la de en el término de dos meses contratar los estudios y diseños de la bocatoma y así solicitar la ampliación del caudal.

1.3.3. Manifiesta que en enero y febrero de 2021 se han reunido los tres MUNICIPIOS donde se determinó y se elaboró por el MUNICIPIO DE APULO el convenio tripartita y la ejecución del mismo quedando a cargo del MUNICIPIO DE VIOTÁ la realización de los estudios, diseños en la bocatoma que surtirá al acueducto de dicho municipio y de esa manera optimizar la captación, terminados los estudios y diseños que deben de cumplirse en un término de dos meses, el MUNICIPIO DE VIOTÁ deberá presentar la actualización del PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA ante la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA, el censo actualizado dela población beneficiaria de dicho sector, así como el proyecto de reforestación para solicitar aplicación del caudal de la captación aprobada, proceso que aduce, podría durar un año.

1.3.4. Cuenta que se han realizado reuniones entre los MUNICIPIOS de APULO, TOCAIMA, VIOTÁ y EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA, con el fin de determinar los avances de los diseños, construcción de la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, estando pendiente por cumplir por parte del MUNICIPIO DE APULO la compra del predio las delicias, donde se construiría la PTAR.

1.4. El 15 de abril de 2021 el MUNICIPIO DE TOCAIMA en atención al requerimiento respecto de la mesa de trabajo realizada en virtud del cambio de administración (2020- 2023), señaló que dentro de los compromisos adquiridos, el Municipio de Tocaima, le correspondía solicitar ante el ICCU y la concesionaria DEVISAB la suspensión del permiso de intervención vial concedido a través de la Resolución No. 527 de 4 de septiembre de 2019 hasta que se cuente con el cronograma, el valor total del proyecto y la fecha de inicio de la obra, por lo que en virtud a que aún no se han realizado dichas actividades y gestiones, se ha tomado atenta nota y se está a la espera de que se den los presupuestos referidos, para proceder a enviar la solicitud pertinente a fin de suspender la intervención vial. Destaca que se está frente a una obra de gran impacto presupuestal para las entidades involucradas y que a la fecha se están realizando los estudios y diseños del proyecto que beneficiaría a la comunidad de las veredas la Ceiba, la Horqueta, San Carlos y otras, que son las afectadas y que hacen parte de los Municipio de Apulo, Viotá y Tocaima (*«018EscritoTocaima»*).

1.4.1. Por otro lado, cuenta que de acuerdo con el Convenio Interadministrativo suscrito entre los municipios de Apulo, Viotá y Tocaima, dentro del cual los municipios de Apulo y Tocaima designaron, una partida con destino a este Convenio y en consecuencia ser girados al municipio de Viotá, quien es el ejecutor del mismo, para el efecto menciona que por parte de la Secretaría de Hacienda se realizó la transferencia del valor acordado a través del Banco Popular. Sin embargo, con relación al acta de inicio, atendiendo que el referido convenio lo ejecutará el Municipio de Viotá, es quien debe iniciar el proceso de

contratación de conformidad con la Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, es decir, que una vez se seleccione el contratista se procederá a suscribir la respectiva Acta de inicio, por lo que una vez suscrita se allegará la copia pertinente.

1.5. El 23 de abril de 2021 el MUNICIPIO DE TOCAIMA allegó el acta de inicio del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN entre los MUNICIPIOS de APULO, VIOTÁ y TOCAIMA No. 001-2021, con fecha 12 de abril de 2021. (*«020EscritoTocaima»*).

1.6. El 6 de mayo de 2021 el MUNICIPIO DE VIOTÁ allegó el informe del suministro de agua entregada a los habitantes de las veredas la Ceiba, la Horqueta del municipio de Apulo, y, San Carlos del municipio de Tocaima, para el mes de marzo de 2021, habida cuenta que se factura mes vencido y que hasta el 10 de mayo se estaría generando el reporte correspondiente al mes de abril. Informa que la Empresa de Servicios Públicos de Viotá por concepto del servicio domiciliario de acueducto para dichas veredas para marzo 2021 facturó un total de 699 m3, lo que quiere decir que un total de 699.000 litros, en la actualidad a un total de 166 suscriptores, lo que significa que cada suscriptor en promedio debió recibir un total de 4.211 litros en el mes, y diariamente suministro 135,8 litros de agua potable por suscriptor día, superando el límite establecido en la sentencia de la corte constitucional (Archivo *«021EscritoViota»*).

1.7. El proceso ingresó al Despacho el 26 de abril hogaño (Archivo *«019ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, se advierte de los informes presentados que para cumplir con los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo realizada en virtud del cambio de administración (2020-2023), debe contarse con la ejecución del convenio interadministrativo de cooperación suscrito entre los municipio de Apulo, Viotá y Tocaima No. 001 de 10 de marzo de 2021 cuyo objeto corresponde a

«AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ENTRE LAS ALCALDÍAS DE TOCAIMA APULO Y VIOTÁ CUNDINAMARCA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS BOCATOMAS DEL RÍO RUISITO Y RÍO LINDO EN CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS CON EXPEDIENTES NOS. 25000232400020110042501 Y 25307333300120100057100», con plazo de ejecución de 2 meses a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual fue suscrita el 12 de abril de 2021 con fecha de terminación 11 de junio hogaño, en ese orden se ha de requerir al MUNICIPIO DE VIOTÁ para que allegue informe respecto a su ejecución y así poder continuar con los demás compromisos adquiridos consistentes en:

- MUNICIPIO DE VIOTÁ: respecto al avance predial debería realizar gestiones y acciones pertinentes con el fin de adquirir el predio para la construcción del tanque Alto Serrano, así como la imposición de cuatro servidumbres y solicitar ante la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA-TEQUENDAMA la ampliación de las concesiones de aguas otorgadas mediante las Resoluciones No. 0853 de 27 de marzo y No. 0896 de 29 de marzo de 2019.

- MUNICIPIO DE APULO: en lo que concierne al avance predial debía verificar un nuevo trazado de la tubería de paso para no afectar el predio del que se requiere la servidumbre en compañía de la Consultoría cargo del proyecto, así como presentar la sana posesión respecto al predio del tanque el Bejucal.

- MUNICIPIO DE TOCAIMA: le correspondía solicitar ante el ICCU y la concesionaria DEVISAB la suspensión del permiso de intervención vial concedido a través de la Resolución No. 527 de 4 de septiembre de 2019 hasta que se cuente con el cronograma, el valor total del proyecto y la fecha de inicio de la obra.

Así las cosas, debe puntualizarse que los MUNICIPIOS DE APULO, TOCAIMA Y VIOTÁ allegaron informes que denotan las acciones desplegadas

con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dentro del asunto de la referencia, por lo que atendiendo la complejidad del asunto el Despacho por el momento se abstendrá de dar apertura a un incidente por desacato, sin embargo se continuará con el trámite de verificación de cumplimiento del fallo. Sin perjuicio de que los Alcaldes de los MUNICIPIOS DE APULO, VIOTÁ y TOCAIMA, así como al Gerente de la EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA-EPC- o a quienes hagan sus veces, continúen suministrando el agua potable a los habitantes de las veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos **diariamente y en cantidad de 100 y 150 litros por cada habitante,** para el efecto, mensualmente deberán allegar informes que acrediten dicho suministro de agua **diariamente y en cantidad de 100 y 150 litros por cada habitante, SO PENA DE DAR APERTURA AL INCIDENTE DE DESACATO** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991[1].

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: ABSTENERSE de abrir incidente por desacato conforme a lo señalado en parte motiva-

SEGUNDO: REQUIÉRASE al alcalde del MUNICIPIO DE VIOTÁ para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído informe las gestiones desplegadas y avances en cumplimiento del convenio interadministrativo de cooperación suscrito entre los municipio de Apulo, Viotá y Tocaima No. 001 de 10 de marzo de 2021.

TERCERO: REQUIÉRASE a los Alcaldes de los MUNICIPIOS DE APULO, VIOTÁ y TOCAIMA, así como al Gerente de la EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA-EPC- o a quienes hagan sus veces, para que suministren

[1] «**Artículo 52.** ***DESACATO***. La persona que incumpliere una orden de un juez, proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción».

el agua potable a los habitantes de las veredas La Ceiba, La Horqueta y San Carlos **diariamente y en cantidad de 100 y 150 litros por cada habitante,** y en consecuencia, mensualmente alleguen informes que acrediten dicho suministro de agua **diariamente y en cantidad de 100 y 150 litros por cada habitante, SO PENA DE DAR APERTURA AL INCIDENTE DE DESACATO** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: NOTIFÍQUESE a las partes del presente proveído por el medio más expedito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
B0A72F7D82DCBC100D6E61449EAF7B41AB0C1758A8F904A53B1C5CD411EB3302
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 11:52:54 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2013-00581-00**
Demandante:	**BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR**
Demandado:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Habiéndose radicado solicitud de terminación del proceso por pago total de la obligación por la Entidad Ejecutada[1], el 15 de abril de 2021, entre otras, se requirió a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- para que aportara el Comprobante de Orden de Pago Presupuestal de Gastos correspondiente a las sumas de $1.479.567.08, $20.665.124.56 y $4.548.476.64 que se reputaron pagadas a la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR; en el mismo sentido, se requirió al apoderado de la parte ejecutante[2].

---

[1] «069SolicitudTerminación» Co1Principal
[2] «073AutoRequiere» Co1Principal

1.2. Atendiendo el requerimiento efectuado, el 19 de abril de 2021[3] se recibió escrito del apoderado judicial de la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR en el que indicó *«Que bajo la gravedad de juramento manifiesto que la entidad ha cancelado a favor de mi mandante BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR las sumas de $20.665.124.56+$4.548.476.64+$1.479.567.08, para un total de* ***$26.693.168.28*** *tal como consta en los comprobantes SIIF que anexo»* y solicitó decretar la terminación del proceso por pago total de la obligación.

A su escrito adjuntó los siguientes documentos:

- Comprobante de Orden de Pago Presupuestal de Gastos No. 298352620 por $1.479.567.08 de fecha 27 de octubre de 2020 a favor de BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR[4].

- Comprobante de Orden de Pago Presupuestal de Gastos No. 298352420 por $4.548.476.64 de fecha 27 de octubre de 2020 a favor de BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR[5].

- Resolución No. SFO000380 de 22 de octubre de 2020 en la que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- ordena pagar $20.665.124.56 a la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR[6].

1.3. De igual manera, el 29 de abril de 2021[7] el subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- allegó escrito al que adjuntó los siguientes documentos:

---

[3] «075EscritoDemandante» Co1Principal
[4] Folios 4 y 5 «075EscritoDemandante» Co1Principal
[5] Folios 6 y 7 «075EscritoDemandante» Co1Principal
[6] Folios 8 a 10 «075EscritoDemandante» Co1Principal
[7] «076EscritoUGPP»Co1Principal

- Comprobante de Orden de Pago Presupuestal de Gastos No. 298352420 por $4.548.476.64 de fecha 27 de octubre de 2020 a favor de BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR[8].

- Comprobante de Orden de Pago Presupuestal de Gastos No. 298352520 por $20.666.124.56 de fecha 27 de octubre de 2020 a favor de BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR[9].

- Comprobante de Orden de Pago Presupuestal de Gastos No. 298352620 por $1.479.567.08 de fecha 27 de octubre de 2020 a favor de BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR[10].

1.4. El 24 de mayo de 2021 ingresó el expediente al Despacho[11].

1.5. El 26 de mayo de 2021 se allegó escrito de la apoderada judicial de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- en respuesta al requerimiento efectuado, al que adjuntó los siguientes documentos:

- Orden de pago presupuestal SIIF Nación No. 298352620 del 27 de octubre de 2020, por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($1.479.567,08), a favor de la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR.

- Orden de pago presupuestal SIIF Nación No. 298352520 del 27 de octubre de 2020, por valor de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

[8] Folios 11 y 12 «076EscritoUGPP»Co1Principal
[9] Folios 13 y 14 «076EscritoUGPP»Co1Principal
[10] Folios 15 y 16 «076EscritoUGPP»Co1Principal
[11] «077ConstanciaDespacho» Co1Principal

($20.665.124,56), a favor de la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR.

- Orden de pago presupuestal SIIF Nación No. 298352520 del 27 de octubre de 2020, por valor de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS ($20.665.124,56), a favor de la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1. El artículo 461 del Código General del Proceso señala:

> «**Artículo 461.** ***TERMINACIÓN DEL PROCESO POR PAGO*****.** Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.
>
> Si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta la liquidación adicional a que hubiere lugar, acompañada del título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez sea aprobada aquella, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.
>
> Cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del crédito y de las costas, podrá el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompañadas del título de su consignación a órdenes del juzgado, con especificación de la tasa de interés o de cambio, según el caso. Sin que se suspenda el trámite del proceso, se dará traslado de ella al ejecutante por tres (3) días como dispone el artículo 110; objetada o no, el juez la aprobará cuando la encuentre ajustada a la ley.
>
> Cuando haya lugar a aumentar el valor de las liquidaciones, si dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del auto que las apruebe no se hubiere presentado el título de consignación adicional a órdenes del juzgado, el juez dispondrá por auto que no tiene recursos, continuar la ejecución por el saldo y entregar al ejecutante las sumas depositadas como abono a su crédito y las costas. Si la consignación se hace oportunamente el juez declarará terminado el proceso y

> dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.
>
> Con todo, continuará tramitándose la rendición de cuentas por el secuestre si estuviere pendiente, o se ordenará rendirlas si no hubieren sido presentadas.»

En ese orden, para resolver la solicitud se encuentra con relevancia en el plenario que el 16 de mayo de 2019 se profirió auto en el que se fijó el valor del crédito a favor de la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR en VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($26.693.168.28)[12], valor que guarda identidad con el resultante de sumar los que le fueron pagados a la señora HUERTAS CORREDOR de conformidad con los comprobantes de pago que fueron allegados al proceso, como se observa a continuación:

No. Comprobante	Fecha	Valor Pagado
298352420	27 de octubre de 2020	$4.548.476.64
298352520	27 de octubre de 2020	$20.666.124.56
298352620	27 de octubre de 2020	$1.479.567.08
Total		**$26.694.168.28**

Así pues, se evidencia el pago total del valor de la obligación que se ejecutaba en el presente asunto, hecho reafirmado por el apoderado judicial de la señora BLANCA ARSENIA HUERTAS CORREDOR, quien además por ello solicitó terminar el proceso, petición a la que accederá sin perjuicio de que el togado no cuente con la facultad para recibir, por cuanto, se reitera, se encuentra acreditado que el pago fue efectivamente realizado a la demandante.

En virtud de lo expuesto, el Juzgado **DISPONE:**

[12] «059AutoModificayApruebaLiquidacionCredito» C01Principal

PRIMERO: DECLÁRASE TERMINADO EL PROCESO por pago total de la obligación, de conformidad con lo señalado.

SEGUNDO: ORDÉNASE la entrega de los títulos judiciales que se hubieren consignado a órdenes del Juzgado o los que en el futuro se constituyan, a favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-

TERCERO: DECRÉTASE EL LEVANTAMIENTO de las medidas cautelares que se hubieren determinado. Por secretaría **OFÍCIESE** de ser el caso.

CUARTO: En firme esta providencia, de ser el caso **LIQUÍDENSE** los gastos del proceso, de existir remanentes, **ENTRÉGUENSE** al apoderado judicial de la parte demandante y **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
6d4917053f562587115099961ac4f463526b3e995b717a9cb59e35e8dc48015b
Documento generado en 03/06/2021 12:04:26 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2014-00052-00**
Demandante:	**DIANA MARCELA COBOS ROJAS**
Demandado:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA Y OTROS**
Medio de Control:	**REPARACIÓN DIRECTA**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante auto de 15 de abril de 2021 notificado por estado No. 15 al día siguiente, se puso en conocimiento de las partes el informe No. UBMDE-DSANT-02662-2021 de 8 de marzo de 2021 rendido por la profesional universitaria forense doctora ANA MARÍA GRANADA TORO del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE dentro del número de caso interno UBMDE-DSANT-1281 1-C-2020 correspondiente a la señora DIANA MARCELA COBOS, obrante en el archivo «125EscritoMedicinaLegal» (*«128AutoPoneConocimiento»* y *«129NotificacionEstado16Abril»*).

2.2. El 21 de abril de 2021 el apoderado judicial de la demandante, doctor JORGE LUIS JIMENEZ CORREA allegó escrito mediante el cual indicó que del dictamen emitido por la profesional Dra. ANA MARIA GRANADA TORO, se observa que la profesional requiere de información adicional para determinar si el niño SAMUEL ANDRÉS recibió un tratamiento adecuado, por lo que

considera que el dictamen se encuentra incompleto y debe ser adicionado por la profesional, pero para ello se debe requerir a las demandadas con el fin de que alleguen la Historia Clínica Completa del niño Samuel Andrés por parte de «*pediatría y cirugía pediátrica que incluya reporte de la nota operatoria o de la descripción del procedimiento realizado por parte de cirugía pediátrica del 30 de Enero de 2012, para determinar detalladamente que fue lo que produjo la sepsis neonatal de origen abdominal, compromiso multiorganico y finalmente hipoxia fetal y la muerte*». («*131EscritoDemandante*»).

2.4. El proceso ingresó al Despacho el 24 de mayo de 2021 («*132ConstanciaDespacho*»).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, se observa que al poner en conocimiento de las partes el informe No. UBMDE-DSANT-02662-2021 de 8 de marzo de 2021 rendido por la profesional universitaria forense doctora ANA MARÍA GRANADA TORO del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE dentro del número de caso interno UBMDE-DSANT-1281 1-C-2020 correspondiente a la señora DIANA MARCELA COBOS, obrante en el archivo «*125EscritoMedicinaLegal*», el apoderado judicial de la actora consideró que el dictamen se encuentra incompleto y que debe ser adicionado por la profesional, pero para ello se debe requerir a las demandadas con el fin de que alleguen la Historia Clínica Completa del niño Samuel Andrés por parte de «*pediatría y cirugía pediátrica que incluya reporte de la nota operatoria o de la descripción del procedimiento realizado por parte de cirugía pediátrica del 30 de Enero de 2012, para determinar detalladamente que fue lo que produjo la sepsis neonatal de origen abdominal, compromiso multiorganico y finalmente hipoxia fetal y la muerte*».

Bajo ese contexto se tiene que la solicitud de la prueba pericial tal y como fue decretada en la audiencia inicial realizada 27 de junio de 2017 consistía en determinar si a la señora DIANA MARCELA COBOS ROJAS y al niño

SAMUEL ANDRÉS COBOS ROJAS se les brindó el tratamiento adecuado y en el evento de que no lo sea, indicar el tratamiento que debieron recibir.

Por lo que conforme con lo señalado en el informe No. UBMDE-DSANT-02662-2021 de 8 de marzo de 2021 donde se sugirió solicitar evaluación de la historia clínica completa del recién nacido por parte de especialista en pediatría y cirugía pediátrica, con la inclusión del reporte de la nota operatoria o de la descripción del procedimiento por parte de cirugía pediátrica el 30 de enero de 2012, con el fin de determinar si la malformación abdominal o el manejo médico postnatal fue lo que llevó al recién nacido a la «*sepsis neonatal de origen abdominal, compromiso multiorgánico y finalmente hipoxia fetal y muerte*», se torna necesario requerir a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ para que allegue la documental solicitada de manera completa íntegra y legible con el fin de ponerla en conocimiento del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES-DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE y que proceda con la complementación y adición al dictamen pericial contentivo en el informe No. UBMDE-DSANT-02662-2021 de 8 de marzo de 2021.

En consecuencia se **DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRASE a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ para que dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación del presente proveído allegue de manera íntegra, legible y completa la historia clínica del recién nacido SAMUEL ANDRÉS COBOS ROJAS en la que se incluya el reporte de la nota operatoria o de la descripción del procedimiento realizado por parte de cirugía pediátrica el 30 de enero de 2012.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
b4e25f54c780f1d8c5485dedb4715839c363dddca48977e8fea699895ad2033e
Documento generado en 03/06/2021 12:04:06 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2014-00082-00**
Demandante:	**PROSPERO DE JESÚS RINCÓN RINCÓN**
Demandado:	**MUNICIPIO DE SILVANIA** **GLEKAL INVERSIONES S en C**
Medio de Control:	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS (ACCIÓN POPULAR)-VERIFICACIÓN DE FALLO.**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

En la sentencia de primera instancia No. 85 proferida el 13 de junio de 2016, el Juzgado Administrativo de Girardot amparó los derechos colectivos al goce del espacio público y al goce de un ambiente sano, y ordenó:

> «***SEGUNDO: ORDÉNASE A LA EMPRESA GLEKAL INVERSIONES S. en C.,*** *que en término no superior a los tres (3) meses, siguientes a la ejecutoría de este fallo, inicie la construcción de las obras necesarias para llevar a cabo las correspondientes adecuaciones, equipamientos, aprovechamientos y dotaciones para la entrega de la cesión TIPO A de la franja de terreno, constituida por el camino, sendero, carretera y/o vía veredal en controversia, a favor del Municipio de Silvania, dando continuidad al trazo del mismo fuera del área de la estación de servicios para la venta de gasolina; toda vez que, este camino, sendero, carretera y/o vía veredal colindaba con el predio llamado EL MIRADOR, individualizado de la siguiente manera, escritura pública No. 487 de fecha 19 de mayo de 2014, Matricula Inmobiliaria No. 157-515 y código catastral No. 00-01-0001-0726-000.*
>
> ***TERCERO: ORDÉNASE AL MUNICIPIO DE SILVANIA.*** *que en el término de tres (3) meses, siguientes a la ejecutoria de este fallo, realice el respectivo seguimiento y determine las especificaciones, parámetros, directrices y procedimientos, para la entrega de la Cesión TIPO A, del*

*camino, sendero, carretera y/o vía veredal en controversia, por parte de **LA EMPRESA GLEKAL INVERSIONES S. en C.***

***CUARTO: DECLÁRAR** no probadas las excepciones propuestas por las entidades accionadas. Municipio de Silvania y la empresa GLEKAL INVERSIONES S. en C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.*

QUINTO: FÍJASE** el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, para concluir las obras que den continuidad al camino, sendero, carretera y/o vía veredal en colindancia con el inmueble de propiedad de **LA EMPRESA GLEKAL INVERSIONES S. en C.

***SEXTO: CONFÓRMESE** para la verificación del cumplimiento de la sentencia, Comité integrado por las partes, comprendiendo dentro de estas, la **DEFENSORIA DEL PUEBLO** y el **PERSONERO MUNICIPAL DE SILVANIA**, quien le presidirá y deberá rendir informe a este Despacho, cada quince (15) días, detallando sobre el avance en la ejecución de las medidas ordenadas.*

***SÉPTIMO:** Para los fines previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, remítase al Defensor del Pueblo copia de la presente decisión. Así mismo y para los fines ordenados en los numerales segundo, tercero y cuarto, comuniqúese a las partes y al señor PERSONERO MUNICIPAL DE SILVANIA, remitiendo a este copia de la sentencia a efectos se rinda el correspondiente informe y advirtiendo sobre tal deber.*

***OCTAVO:** Ejecutoriada archívese, una vez vencido el término concedido para ejecución de las medidas ordenadas».*

El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN "A", mediante sentencia de segunda instancia de 21 de junio de 2018 modificó la sentencia de primera instancia quedando en los siguientes términos:

*«**PRIMERO: CONCÉDASE** el amparo al derecho colectivo del goce del espacio público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y NIÉGASE la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias y al detrimento del patrimonio público por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia"*

***SEGUNDO: ORDÉNASE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILVANIA** que en término no superior a los tres (3) meses siguientes a la ejecutoría de esta sentencia inicie la recuperación del espacio público ocupado por la construcción de la estación de servicio EL MIRADOR, individualizado de la siguiente manera, escritura pública No. 487 de fecha 19 de mayo de 2014, Matricula inmobiliaria No 157-515 y el código catastral No 00-01-0001- 0726-000.*

> ***TERCERO: ORDÉNASE AL MUNICIPIO DE SILVANIA,*** *que en el término de tres (3) meses, siguientes a la ejecutoria de este fallo, inicié el proceso sancionatorio contra* ***LA EMPRESA GLEKAL INVERSIONES S. en C,.*** *por haber adelantado la construcción de la estación de servicio sin licencia de construcción,*
>
> ***CUARTO: DECLÁRASE*** *no probadas las excepciones propuestas por las entidades accionadas, Municipio de Silvania y la empresa GLEKAL INVERSIONES S, en C., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.*
>
> ***QUINTO: CONFORMASE*** *para la verificación del cumplimiento de la sentencia, Comité integrado, por las partes, comprendiendo dentro de estas, la* ***DEFENSORIA DEL PUEBLO*** *y el* ***PERSONERO MUNICIPAL DE SILVANIA,*** *quien le presidirá y deberá rendir informe a este Despacho, cada quince (15) días, detallado sobre el avance en la ejecución ^de las ^ medidas ordenadas.*
>
> ***SEXTO:*** *Para los fines previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, remítase al Defensor del Pueblo copia de la presente decisión.*
>
> ***SÉPTIMO:*** *Ejecutoriada archivase, una vez vencido el término concedido para ejecución de las medidas ordenadas»*

En virtud del citado fallo se ha venido adelantando el trámite de verificación del mismo.

Mediante correo electrónico remitido el 2 de junio de 2021 el señor ÉDGAR ALFONSO RODRÍGUEZ PEDRAZA, en calidad de apoderado judicial del demandante ,solicita la apertura del incidente de desacato pues, aduce que pese de haber trascurrido casi tres años desde el momento en que fue proferida la sentencia de segunda instancia, no ha sido posible que se dé cumplimiento a los fallos proferidos, y se proceda al restablecimiento del derecho conforme a lo ordenado, precisa que la administración Municipal de Silvania por intermedio de la Inspección de Policía de Subía, inició el trámite policivo de Proceso Verbal Abreviado contemplado en los artículos 223 y siguientes del Código Nacional de Policía y Convivencia para determinar las posibles faltas urbanísticas cometidas, sin que a la fecha exista siquiera pronunciamiento de primera instancia y que a la fecha la estación de servicio terminó de ser construida, y se encuentra prestando el servicio de comercialización de combustibles y la vía veredal no ha sido restituida, hechos que considera, han contado con la anuencia de la administración Municipal de Silvania (archivos

denominados «*002EscritoIncidenteDesacato*» y «*003CorreoElectronicoDesacato*» de la carpeta «*004IncidenteDesacato*»).

Puestas en ese estadio las cosas, teniendo en cuenta la mencionada solicitud, para el Despacho es menester, previo a resolver sobre la apertura del incidente de desacato, se requiera a la autoridad concernida para que acredite el cumplimiento de las órdenes de la sentencia en comento y remita los soportes del cumplimiento.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a la Alcaldesa del Municipio de Silvania, NOHORA ELIZABET SÁNCHEZ, o a quien haga sus veces, para que en el término de los tres (3) días contados a partir de la notificación de la presente providencia informe al Despacho las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo No. 85 dentro del presente medio de control proferido proferida el 13 de junio de 2016 que fue modificado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA SUBSECCIÓN "A", mediante sentencia de segunda instancia de 21 de junio de 2018 y aporte las pruebas que denoten el cumplimiento, **SO PENA** de dar curso al incidente de desacato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes del presente proveído por el medio más expedito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
C2E5AFEAC97D8870D1B5E6165E03453A7AF6835B80AA9F9604A8EFD5916AB0B2
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 11:52:55 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2014-00082-00**
Demandante:	**PRÓSPERO DE JESÚS RINCÓN RINCÓN**
Demandado:	**MUNICIPIO DE SILVANIA** **GLEKAL INVERSIONES S en C**
Medio de Control:	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS-ACCIÓN POPULAR-VERIFICACIÓN DE FALLO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Encontrándose el presente proceso en verificación de cumplimiento de fallo, mediante auto de 30 de julio de 2020, se tuvo por cumplido el numeral tercero de la sentencia de primera instancia No. 85 de 13 de junio de 2016 que fue modificada por el numeral primero de la sentencia de segunda instancia de 21 de junio de 2018, y se dispuso requerir en los siguientes términos:

> «***SEGUNDO: REQUERIR*** *a la Alcaldesa del Municipio de Silvania, NOHORA ELIZABET SÁNCHEZ, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la* notificación del presente proveído informe y acredite las gestiones desplegadas para el cumplimiento de lo ordenado por el ad-quem, en proveído de 21 de junio de 2018, consistente en "*la recuperación del espacio público ocupado por la construcción de la estación de servicio EL MIRADOR, individualizado de la siguiente manera, escritura pública No.487 de fecha 19 de mayo de 2014, Matricula inmobiliaria No 157-515 y el código catastral No 00-01-0001-0726-000*".

> ***TERCERO: REQUERIR*** *al Personero Municipal de Silvania, RODRIGO ALEJANDRO CARVAJAL, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído, allegue las actas del comité de verificación de fallo realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 2018».*

1.2. En virtud de lo anterior, el 18 de febrero de 2021, el doctor RODRIGO ALEJANDRO CARVAJAL CUBILLOS, en calidad de Personero Municipal, allegó el oficio No. 158-2021 mediante el cual adjunto las actas del comité de verificación de fallo de 26 de agosto y 10 de diciembre de 2020, y un informe presentado por el Municipio de 10 de diciembre de 2020. (*«005EscritoPersoneriaSilvania»*).

1.2.1. En el acta de 26 de agosto de 2020 se evidencia que se realizó en presencia de las partes, el Personero Municipal y el Defensor del Pueblo, en donde luego de realizar la intervención por cada uno de ellos se concluyó que la entidad territorial debería presentar un informe respecto al cumplimiento del fallo, destacándose que no había lugar a modificar la orden impartida y que se debería recuperar el espacio público.

1.2.2. Del informe de fecha 10 de diciembre de 2020, presentado por el apoderado judicial del Municipio de Silvania a la Personería Municipal se destaca que se encontraba programada por parte de la INSPECCIÓN RURAL DE POLICÍA DE SUBIA una diligencia dentro de la querella por posible infracción urbanística contra GLEKAL INVERSIONES, la cual no se ha realizado con ocasión del COVID-19.

1.2.3. En el acta de 10 de diciembre de 2020 se evidencia que se realizó en presencia de las partes, la Inspectora de Policía de Subia, el Personero Municipal y el Defensor del Pueblo, se expuso nuevamente sobre la diligencia programada por parte de la INSPECCIÓN RURAL DE POLICÍA DE SUBIA dentro de la querella por posible infracción urbanística contra GLEKAL INVERSIONES, destacando que la misma no había sido posible de realizarse por diferentes razones, entre ellas, el COVID-19, la parte actora manifestó su

inconformiso frente a la demora del cumplimiento del fallo, por su parte GLEKAL INVERSIONES señaló que la construcción realizada se había hecho en virtud de una licencia urbanística y el apoderado del Municipio de Silvania manifestó encontrarse a la espera sobre lo que se decida en el proceso de contravención urbanística, para no quedar expuesto a otros riegos jurídicos.

1.3. El proceso ingresó al Despacho el 15 de febrero de 2021 («*004ConstanciaDespacho*»).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Visto el informe presentado por el PERSONERO MUNICIPAL DE SILVANIA, frente al cual se advierte que fue allegado un poco más de seis meses después del requerimiento efectuado por el Despacho, y que por su parte el MUNICIPIO DE SILVANIA se ha abstenido de allegarlo, resulta evidente de la lectura de las actas de comité de verificación de fallo, la desidia por parte de la Entidad territorial encargada de dar cumplimiento a la orden impartida dentro del asunto de la referencia, pues, si bien no se desconoce las consecuencias que ha implicado el COVID-19, ello no puede servir de resguardo para abstenerse a dar cumplimiento a una orden judicial, ni mucho menos el hecho de que por el cambio de administración no tengan claridad en lo que concierne a esta acción popular, máxime cuando los términos judiciales sólo estuvieron suspendidos por disposición expresa del Consejo Superior de la Judicatura[1] desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 en atención a la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia que generó el COVID-19.

[1] Que concluyeron con la suspensión de los términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de hogaño mediante los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567.

Dicho lo anterior, y para que se tenga conocimiento nuevamente de la orden a la cual se debe dar cumplimiento se pone de presente que mediante sentencia No. 85 de 13 de junio de 2016, el Despacho amparó los derechos colectivos al goce del espacio público y al goce de un ambiente sano ordenando:

> *«(…)*
>
> ***SEGUNDO: ORDÉNASE A LA EMPRESA GLEKAL INVERSIONES S. en C.,*** *que en el término no superior a los tres (3) meses, siguientes a la ejecutoria de este fallo, inicie la construcción de las obras necesarias para llevar a cabo las correspondientes adecuaciones, equipamientos, aprovechamientos y dotaciones para la entrega de la cesión TIPO A de la franja de terreno, constituida por el camino, sendero, carretera y/o vía veredal en controversia, a favor del Municipio de Silvania, dando continuidad al trazo del mismo fuera del área de la estación de servicios para la venta de gasolina; toda vez que, este camino, sendero carretera y/o vía veredal colindaba con el predio llamado el MIRADOR, individualizado de la siguiente manera, escritura pública No. 487 de fecha 19 de mayo de 2014, Matricula Inmobiliaria No. 157-515 y código catastral No. 00-01-0001-0726-000.*
>
> ***TERCERO: ORDÉNASE AL MUNICIPIO DE SILVANIA****, que en el término de tres (3) meses, siguientes a la ejecutoria de este fallo realice el respectivo seguimiento y determine las especificaciones, parámetros, directrices y procedimientos, para la entrega de la cesión TIPO A, del camino sendero, carretera y/o vía veredal en controversia, por parte de* ***LA EMPRESA GLEKAL INVERSIONES S. en C.***
>
> *(…)».*

No obstante, la anterior decisión fue modificada por la subsección "A" de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en proveído del 21 de junio de 2018, en la cual se dispuso:

> *«(…)*
>
> ***PRIMERO: CONCÉDASE*** *el amparo al derecho colectivo del goce del espacio público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y NIÉGUESE la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias y al detrimento del patrimonio público por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.*
>
> ***SEGUNDO: ORDÉNASE A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILVANIA*** *que en el término no superior a los tres (3) meses siguientes a*

> *la ejecutoria de esta sentencia inicie la recuperación del espacio público ocupado por la construcción de la estación de servicio EL MIRADOR, individualizado de la siguiente manera, escritura pública No.487 de fecha 19 de mayo de 2014, Matricula inmobiliaria No 157-515 y el código catastral No 00-01-0001-0726-000.*
>
> ***TERCERO: ORDÉNASE AL MUNICIPIO DE SILVANIA**, que en el término de tres (3) meses, siguientes a la ejecutoria de este fallo, inicie el proceso sancionatorio contra **LA EMPRESA GLEKAL INVERSIONES S. en C**. por haber adelantado la construcción de la estación de servicio sin licencia de construcción.*
>
> *(…)»*

Así las cosas, el MUNICIPIO DE SILVANIA debe iniciar «*la recuperación del espacio público ocupado por la construcción de la estación de servicio EL MIRADOR, individualizado de la siguiente manera, escritura pública No.487 de fecha 19 de mayo de 2014, Matricula inmobiliaria No 157-515 y el código catastral No 00-01-0001-0726-000*», situación diferente al proceso urbanístico adelantado por la INSPECCIÓN DE POLICÍA DE SUBIA.

Por lo anterior, como quiera que desde el 30 de julio de 2020 se requirió al MUNICIPIO DE SILVANIA para que allegara un informe del cumplimiento del fallo, sin que obre documento alguno al respecto, se requerirá para el efecto. **SO PENA DE DAR APERTURA A INCIDENTE POR DESACATO.**

Así también se ha de requerir al PERSONERO MUNICIPAL DE SILVANIA para que allegue las actas de los comités de conciliación adelantados después del 10 de diciembre de 2020, como quiera que este es el último que obra dentro del expediente.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÉRASE a la Alcaldesa del Municipio de Silvania, NOHORA ELIZABET SÁNCHEZ, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído informe y acredite las gestiones desplegadas para el cumplimiento de lo ordenado por el ad-quem, en proveído de 21 de junio de 2018, consistente en «*la recuperación del espacio público ocupado por la*

construcción de la estación de servicio EL MIRADOR, individualizado de la siguiente manera, escritura pública No.487 de fecha 19 de mayo de 2014, Matricula inmobiliaria No 157-515 y el código catastral No 00-01-0001-0726-000». **SO PENA DE DAR APERTURA A INCIDENTE POR DESACATO.**

SEGUNDO: REQUÉRASE al Personero Municipal de Silvania, doctor RODRIGO ALEJANDRO CARVAJAL, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente proveído, allegue las actas del comité de verificación de fallo realizadas con posterioridad al 10 de diciembre de 2020.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f12ebe07b0fb0da115bd5470b4183a8e78e21a71b1a5b8db42b80bcf4c258136
Documento generado en 03/06/2021 11:52:56 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2015-00103-00**
Demandante:	**GUILLERMO ERNESTO LEAL ABADÍA y BEATRIZ HELENA DUQUE MEJÍA**
Demandado:	**NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.- SAE SAS-**
Medio de Control:	**REPARACIÓN DIRECTA**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Mediante memorial radicado el 29 de abril hogaño *(«091ApelacionDemandado»),* el apoderado judicial de la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE SAS interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida por este Despacho el 22 de abril de 2021, en la que se declaró ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.-SAE S.A.S.-de los perjuicios causados a los señores GUILLERMO ERNESTO LEAL ABADÍA y BEATRIZ HELENA DUQUE MEJÍA con ocasión de la devaluación del inmueble ubicado en el Lote 102 del Condominio RESERVAS DEL PAGUEY, en virtud de la invasión y deterioro del inmueble de mayor extensión en el que se encuentra. *(«041Sentencia»).*

El 10 de mayo de 2021 el expediente ingresó al Despacho *(«092ConstanciaDespacho»).*

En ese orden, se encuentra que el recurso de alzada fue presentado y sustentado dentro del término establecido en el numeral 1º del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 67 de la ley 2080 del 25 de enero de 2021), habida consideración de que la sentencia se notificó el 23 de abril de 2021 *(«090NotificacionSentencia»)*.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: Para ante la SECCIÓN TERCERA del H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA **CONCÉDESE** en el efecto suspensivo el recurso de apelación incoado por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida por este Juzgado el 22 de abril de 2021.

SEGUNDO: Por secretaría **ENVÍESE Y/O PERMÍTASE EL ACCESO** al expediente digitalizado al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f1fffefae1f468918555377757358b60d72c1c4346a126099439e1ea744ffdeff

Documento generado en 03/06/2021 12:04:51 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2015-00212-00**
Demandante:	**JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA URBANIZACIÓN CAMPESTRE VILLA NATALIA**
Demandado:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
Medio de Control:	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS-ACCIÓN POPULAR-VERIFICACIÓN DE FALLO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante sentencia No. 252 de 16 de diciembre de 2016 este Despacho declaró no probadas la**s** excepciones propuestas por la empresa INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA. y por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ y, en consecuencia, amparó los derechos colectivos al goce del espacio público y a la utilización y a la defensa de los bienes de uso público; a la defensa del patrimonio público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes de la CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, incoadas en la demanda, como consecuencia de lo anterior dispuso (archivo «*001SentenciaPrimeraInstancia*» de la carpeta «*001Fallos*»):

> «*(…)**TERCERO: ORDÉNASE AL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**, que en el término de dos (2) meses, siguiente a la ejecutoria de esta*

*sentencia, inicie las actuaciones tendientes, al control, vigilancia y acompañamiento a la empresa **INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA**, con el fin de exigir la entrega de las cesiones a favor del ente territorial por el desarrollo urbanístico CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, consideradas como espacio público para disfrute y goce de la comunidad; si es el caso iniciar la respectiva contravención urbanística.*

***CUARTO: ORDÉNASE** a la representante legal y/o quien haga sus veces de **INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA,** que en un término no superior a seis (6) meses, siguientes a la ejecutoria de este fallo, realice y termine las obras de las áreas comunes y zonas verdes de la CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, correspondiente a la iglesia, parqueaderos comunales, el área para guardería, el salón comunal, piscina, vías principales, secundarias, peatonales, zonas verdes determinadas y sardineles.*

*Así mismo, que en un término no superior a dos (2) meses, siguientes a la ejecutoria de este fallo el Representante Legal y/o quien haga sus veces de **INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA**, debe realizar el respectivo adecuamiento, equipamiento y arreglos de la cancha múltiple de la CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, para ser entregada a favor del Municipio de Fusagasugá, como cesión de espacio público, para el disfrute y goce de la comunidad.*

***QUINTO: FÍJASE** el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, para realizar las obras de las áreas comunes y zonas verdes de la CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, correspondiente a la iglesia, parqueaderos comunales, el área para guardería, el salón comunal, piscina, vías principales, secundarias, peatonales, zonas verdes determinadas y sardineles; y, el término de dos (2) meses para realizar el respectivo adecuamiento, equipamiento y arreglos de la cancha múltiple de la CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, para ser entregada a favor del Municipio de Fusagasugá, como cesión de espacio público, para el disfrute y goce de la comunidad.*

***SEXTO: REMÍTASE** copia de la presente providencia a los respectivos entes investigativos y de control, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la Republica, para que realicen lo pertinente en cuanto a la conducta desplegada tanto por el Municipio de Fusagasugá, como por parte de Inversiones Getro y Cia Ltda.*

***SÉPTIMO: CONFÓRMESE** para la verificación del cumplimiento de la sentencia, Comité integrado por las partes, comprendiendo dentro de estas, EL DEFENSOR (A) DEL PUEBLO y el/la PERSONERO (A) MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ, quien le presidirá y deberá rendir informe a este Despacho, cada quince (15) días, detallando sobre el avance en la ejecución de las medidas ordenadas».*

1.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección "A", en proveído de 31 de agosto de 2017, confirmó en su totalidad

la anterior decisión en los siguientes términos (archivo «*002SentenciaSegundaInstancia*» de la carpeta «*001Fallos*»):

> «***PRIMERO. - CONFÍRMASE*** *la sentencia de 16 de diciembre de 2016, proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Girardot. (…)*».

1.3. El apoderado judicial de INVERSIONES GETRO Y CÍA. LTDA., solicitó la revisión eventual de la sentencia de segunda instancia al señalar confusos algunos argumentos, por lo que el H. Consejo de Estado en proveído de 12 de septiembre de 2019 no seleccionó para revisión la providencia de 31 de agosto de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección "A".

1.4. El 7 de noviembre de 2019 este Despacho requirió ***i)*** al Personero Municipal de Fusagasugá para que acreditara la conformación del comité de verificación de fallo, ***ii)*** al alcalde del Municipio de Fusagasugá para que acreditara las gestiones desplegadas en cumplimiento del fallo y ***iii)*** al representante legal de Inversiones Getro y CIA LTDA para que acreditara la realización y terminación de las obras ordenadas en la sentrencia y demas órdenes impartidas, librandose por secretaría los oficios correspondientes (archivos «*002AutoOrdenaRequerir*» y «*003Oficios2019,2020,2021*» de la carpeta «*002CuadernoVerificacionFallos*»).

1.4.1. En virtud del anterior requerimiento, el 3 de diciembre de 2019 la Dirección de Defensa Judicial y Asuntos Jurídicos del Municipio de Fusagasugá allegó el oficio No. 1120.10.1047 de 28 de noviembre de 2019 en donde informó las acciones adelantadas para el cumplimiento del fallo, señalando que (archivo «*004RespuestaRequerimientoAuto7Noviembre2019*» de la carpeta «*002CuadernoVerificacionFallos*»):

- Mediante la Resolución No. 0059 de 23 de abril de 2019 la Secretaría de Planeación estableció el procedimiento para la titulación y entrega de las zonas de cesión gratuita en la urbanización Villa Natalia Etapa I.

- El 11 de julio de 2019 hubo una reunión con la asistencia de los representantes de la junta de acción comunal de la urbanización Villa Natalia, el representante legal de Inversiones Getro y CIA LTDA, la directora de defensa judicial y asuntos jurídicos del Municipio de Fusagasugá, la abogada de apoyo de la entidad territoial, el ingeniero de la Secretaría de Planeación Municipal y el abogado dela Secretaría Administrativa, con el objeto de verificar el avance del cronograma de actividades presentado por la Secretaría dePlaneación Municipal para dar cumplimiento al fallo dentrto del proceso de la referencia, ademas, refiere que se aclararon varias dudas ala comunidad respecto a las zonas de cesion tipo A, de entregar al Municipio de Fusagasugá.

- El 17 de junio de 2019 la Secretaría de Hacienda del Municipio de Fusagasugá expidió la Resolución No. 1300-11-3530, por medio de la cualse excluyeron del pago delimpuesto predial los bienes inmuebles determinados en la Resolución No. 0059 de 2019.

- El 20 de agosto de 2019 en una nueva reunión se verificó el cumplimiento de los compromisos acordados en la reunión de 11 de julio de 2019, señalando el incumplimiento por parte de la empresa Inversiones Getro y CIA LTDA, al no presentar el radicado de la solicitud de licenciamiento bajo la modalidad de modificación de la licencia de urbanismo.

- En una nueva reunión el 17 de septiembre de 2019, con el objeto de verificar los compromisos adquiridos en reuniones de 11 de julio y 20 de agosto de 2019, se señaló que la empresa Inversiones Getro y CIA LTDA, cumplió con presentar la solicitud de licenciamiento determinada, por su parte, las Secretarías de Planeación y Administrativa señaló haber recibido por la empresa Inversiones Getro y CIA LTDA, los documentos como certificados de libertad de lospredios objeto de cesión y la escritura pública No. 407 correspondiente al reloteo. Para de ese modo, determinar la proyeccion

de la minuta de 16 predios que se incorporaran como primer bloque de zonas públicas cedidas efectivamente.

- En reunión de 12 de noviembre de 2019, para verificar los compromisos adquiridos en reunión de 17 de septiembre del mismo año, señalando que la empresa Inversiones Getro y CIA LTDA, el 18 de septiembre de 2019 allegó la boleta de radicado No. 1900960 de solicitud de licenciamiento y que respecto a la escritura pública del primer grupo de bienese o zonas cedidas al Municipio de Fusagasugá se señaló por parte del abogado de la Secretaría Admionistrativa refirió que se encontraba en la Notaría Primera de Fusagasugá, faltando la suscripción de la escritura por parte del representante legal de Inversiones Getro y CIA LTDA, manifestación ante la cual el representante legal señaló que la escritura sería suscrita en los tres dias siguientes.

Señalando finalmente, que conforme a las reuniones realizadas el 11 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre y 12 de noviembre de 2019 los representantes de la empresa Inversiones Getro y CIA LTDA y el presidente de la junta de acción comunal de Villa Natalia presentan disposición para continuar trabajando en un ambiente sano, respetuoso y responsable para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo.

1.4.2. El 17 de enero de 2020 el PERSONERO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ por medio del oficio No. 4393 adujo allegar en 6 folios el acta del comité de verificación de fallo realizada el 6 de noviembre de 2019, sin embargo dicha acta no fue adjuntada. El mismo día allegó el oficio No. 4394, mediante el cual adjuntó el acta de comité de verificación de fallo realizada el 23 de octubre de 2019, en dicha acta se dio lectura al fallo, se concedió la palabra a los asistentes los cuales informaron al Personero sobre la realización de las reuniones de 11 de julio, 20 de agosto y 17 de septiembre de 2020 (archivos *«005Oficio4393PersoneriaFusagasuga»* y *«006Oficio4392PersoneriaFusagasuga»* de la carpeta *«002CuadernoVerificacionFallos»*).

1.5. El 28 de enero de 2020 se recibió el oficio No. CGQ-0083 de 23 de enero del mismo año, donde el H. Consejo de Estado remitió la solicitud realizada por el doctor HERBERTH GIOVANNI HENAO HURTADO en su calidad de defensor público, consistente en la expedición de copia del fallo de primera instancia (archivo «*007SolicitudApoderadoDefensoriaPueblo*» de la carpeta «*002CuadernoVerificacionFallos*»).

1.6. En virtud de la anterior solicitud, el 29 de enero de 2020 por secretaría de este Despacho se envió defensor público doctor HERBERTH GIOVANNI HENÁO HURTADO copia de la sentencia dentro del proceso de la referencia (archivo «*008RespuestaSolicitudApoderadoDefensoria*» de la carpeta «*002CuadernoVerificacionFallos*»).

1.7. El 31 de enero de 2020 se recibió por parte del presidente de la junta de acción comunal del barrio villa Natalia, señor FRANCISCO ANTONIO ZEA ARAQUE solicitud sobre el estado del cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia (archivo «*009SolicitudInformacionDemandante*» de la carpeta «*002CuadernoVerificacionFallos*»).

1.8. Mediante oficio No. 00192 de 17 de febrero de 2020 se envió el expediente de la referencia en préstamo a la Subsección "C" de la Sección Tercera del H. Consejo de Estado (archivo «*012Oficio192RemiteProcesoPrestamoConsejoEstado*» de la carpeta «*002CuadernoVerificacionFallos*»).

1.9. El proceso fue devuelto mediante oficio No. LCV.1170 de 19 de febrero de 2020 y recibido en el Despacho el 25 de febrero de 2021, es decir, un poco más de un año después (archivo «*013OficioRegresaExpedienteConsejoEstado*» de la carpeta «*002CuadernoVerificacionFallos*»).

1.10. El 14 de septiembre de 2020 la PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ allegó el oficio No. 863 de 16 de marzo de 2020 mediante el cual remitió las actas de los comités de verificación del cumplimiento del fallo realizadas el 21 de enero y 27 de febrero de 2020 (archivo «*001EscritoPersoneriaFusagasugá*» de la carpeta «*003ActuacionesElectronicas*»).

1.10.1. Del acta del comité de verificación del cumplimiento del fallo de 21 de enero de 2020 se tiene que se informó por parte del Director de Obras de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá una visita técnica con el fin de determinar las áreas de cesión a entregar y que se encontraban bajo la titularidad de Inversiones Getro CIA LTDA., concluyendo que eran 19 áreas, incluidas «*vías, zonas deportivas, dos parqueaderos, una cancha múltiple, un salón comunal, una guardería*», seguidamente se debatieron temas consistente en la entrega de las áreas de cesión.

1.10.2. Del acta del comité de verificación del cumplimiento del fallo de 27 de febrero de 2020 se tiene que no se hizo presente Inversiones Getro CIA LTDA., en dicha acta se señaló entre otras cosas que ya se había realizado la escrituración de un primer tramo quedando pendiente el segundo tramo por ausencia de paz y salvos de Tesorería, en cuanto a procesos por contravención urbanísticas señalaron 6, pero adelantados contra propietarios por realizar construcciones fuera de lo permitido en la licencia de construcción y un proceso de restitución de espacio público desde el año 2014 para la etapa I, finalmente se plasmó con preocupación por parte de la Entidad el hecho de que Inversiones Getro CIA LTDA. cuente con cámara y comercio hasta junio de 2020 y que se ha negado a la entrega de algunas áreas comunes y zonas verdes.

1.11. El 12 de octubre de 2020 el defensor público HERBERTH GIOVANNI HENAO HURTADO allegó correo en el que dejó constancia sobre las solicitudes realizadas ante la PERSONERÍA DE FUSAGASUGÁ tendientes a que las audiencias de verificación de fallo se realizaran de manera virtual (archivo «*002EscritoDefensoriaPueblo*» de la carpeta «*003ActuacionesElectronicas*»).

1.12. El 30 de octubre de 2020 la PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ allegó el acta del comité de verificación de fallo de 8 de octubre de 2020, una visita de seguimiento de 21 de octubre de 2020, un informe de la Secretaría Jurídica y un informe del Secretario de Gobierno, en el acta de audiencia de verificación se dejó constancia que no asistió Inversiones Getro

CIA LTDA, sin embargo se allegó la correspondiente excusa, con la intervención del Municipio de Fusagasugá, se indicó que existen 19 etapas de cesión que cuentan con acta de entrega expidiéndose la Resolución No. 0059 de 23 de abril de 2019 estableciéndose un procedimiento para la titularización y entregas de la zona común, posteriormente, se generó la exoneración del pago del impuesto de esos predios mediante la Resolución No. 1300-11-3350 de la Secretaría de Hacienda, se señaló además que la demora de la cesión de los bienes es responsabilidad de Inversiones Getro CIA LTDA., y no del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, por su parte los representantes de la comunidad manifestaron su inconformismo ante el incumplimiento del fallo. Se solicitó a la Entidad territorial para que se realizara la verificación y el estudio jurídico sobre la procedencia de alguna figura para exigir a Inversiones Getro CIA LTDA. el cumplimiento del fallo (archivo «*003EscritoPersoneriaFusagasuga*» de la carpeta «*003ActuacionesElectronicas*»).

1.13. el 16 de diciembre de 2020 se allegó por parte de la PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ el acta del comité de verificación de fallo de 29 de octubre de 2020 en donde el apoderado judicial de Inversiones Getro CIA LTDA. señaló que ha ido dando cumplimiento, indicando que se radicó ante el Municipio el informe de 39 bienes de uso público, siendo recibidos y entregados 20, quedando 19 pendientes de estudio por la Entidad territorial, sin embargo se señaló que el día anterior se recibió comunicación por parte del Municipio en donde se indicó que quedaron aprobados 15 y pendientes 4 con reparos. Por su parte, el doctor Juan Carlos de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá señaló que algunas áreas tienen diferencias e inconsistencias con relación a lo determinado en la licencia de urbanismo, las cuales corresponden a la zona de la piscina, la zona del salón comunal, la zona de la guardería y la zona de parqueadero, al no contar con las características arquitectónicas y urbanísticas de diseño que fueron presentadas dentro del plan urbanístico (archivo «*004EscritoPersoneria*» de la carpeta «*003ActuacionesElectronicas*»).

1.14. El 8 de marzo de 2021 la PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ allegó el acta del comité de verificación de fallo de 23 de diciembre de 2020, en

la misma se indicó que de las 19 zonas faltantes, 15 se suscribieron a nombre del Municipio y se encuentran en proceso de escrituración quedando faltando 4 para ser recibidas por presentar inconvenientes, por su parte el representante de la comunidad manifestó la inconformidad por el no cumplimiento del fallo, señalando con preocupación el atraso en cuanto a la entrega del salón comunal, la guardería infantil y los parqueaderos, seguidamente el doctor CARLOS NOVOA director de información y planificación municipal señaló que Inversiones Getro CIA LTDA debe mejorar cuatro temas para que el Municipio reciba en óptimas condiciones las zonas de cesion faltantes como lo establece el Decreto 401 de 2011 (archivo *«005EscritoPersoneria»* de la carpeta *«003ActuacionesElectronicas»*).

1.15. El 15 de abril de 2021 la PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ indicó adjuntar el acta del comité de verificación de fallo de 11 de febrero de 2021, sin embargo no se allegó (archivo *«006EscritoPersoneria»* de la carpeta *«003ActuacionesElectronicas»*).

1.16. El 10 de mayo de 2021 la secretaria del Despacho dejó constancia que el que el presente proceso se encontraba al Despacho desde el 4 de febrero de 2020, y que se remitió en préstamo al H. Consejo de Estado, siendo devuelta por parte de dicha Corporación sólo hasta el 25 de febrero de 2021 (archivo *«007ConstanciaDespacho»* de la carpeta *«003ActuacionesElectronicas»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Expuesto lo anterior, en primer lugar se recuerda que en la sentencia No. 252 de 16 de diciembre de 2016, la cual fue confirmada en su totalidad mediante proveído de 31 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se ampararon los derechos colectivos al goce del espacio público y a la utilización y a la defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los

habitantes de la CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA y se ordenó que ***i)*** el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ dentro de los dos meses siguientes a la ejecutoria del fallo debería iniciar «*las actuaciones tendientes, al control, vigilancia y acompañamiento a la empresa* ***INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.****, con el fin de exigir la entrega de las cesiones a favor del ente territorial por el desarrollo urbanístico CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, consideradas como espacio público para disfrute y goce de la comunidad; si es el caso iniciar la respectiva contravención urbanística.* Y ***ii)*** a INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA. que dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria del fallo realizara y terminara «*las obras de las áreas comunes y zonas verdes de la CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, correspondiente a la iglesia, parqueaderos comunales, el área para guardería, el salón comunal, piscina, vías principales, secundarias, peatonales, zonas verdes determinadas y sardineles*» e igualmente dentro del término de dos meses siguientes a la ejecutoria del fallo realizara el «*respectivo adecuamiento, equipamiento y arreglos de la cancha múltiple de la CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, para ser entregada a favor del Municipio de Fusagasugá, como cesión de espacio público, para el disfrute y goce de la comunidad*».

En cumplimiento de lo anterior, el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ expidió la Resolución No. 0059 de 23 de abril de 2019 en la que certificó que las siguientes zonas de cesión cuentan con acta de entrega y que al existir la misma, en su momento se estableció el cumplimiento de función pública de dichas zonas, disponiendo comunicar a la Secretaría Administrativa Municipal para la toma de posesión y suscripción de las escrituras correspondientes:

DIRECCIÓN	***CÉDULA CATASTRAL***	***MATRÍCULA INMOBILIARIA***
Vial principal C1 y C2	*01-00-1136-0076-000*	*157-72946*
Vial principal C1 y C2	*01-00-1136-0072-000*	*157-72947*
Vial secundaria A1 y A2	*01-00-1136-0077-000*	*157-72948*
Vial secundaria A1 y A2	*01-00-1136-0090-000*	*157-72949*
Vial secundaria A1 y B2	*01-00-1136-0078-000*	*157-72950*
Vial secundaria A1 y B2	*01-00-1136-0096-000*	*157-72951*
Vial peatonal B	*01-00-1136-0092-000*	*157-72959*
Vial peatonal C	*01-00-1136-0093-000*	*157-72960*
Vial peatonal D	*01-00-1136-0094-000*	*157-72961*

Vial peatonal E	*01-00-1136-0095-000*	*157-72962*
Vial peatonal F	*01-00-1136-0097-000*	*157-72963*
Zona verde 8	*01-00-0837-0020-000*	*157-72975*
Zona verde 9	*01-00-0837-0022-000*	*157-72976*
Zona verde 10	*01-00-0836-0011-000*	*157-72977*
Zona verde 11	*01-00-0836-0012-000*	*157-72978*
Zona verde 12	*01-00-0829-0021-000*	*157-72979*
Zona verde 13	*01-00-0830-0034-000*	*157-72980*
Cesión zona verde 14	*01-00-0830-0070-000*	*157-72981*
Cesión zona verde 15	*01-00-0834-0019-000*	*157-72982*

Las anteriores zonas de cesión, ademas, fueron excluidas del pago del impuesto predial mediante la Resolución No. 1300-11-3530 de 17 de junio de 2019, sin embargo, aún no se encuentra acreditado ya se haya suscrito la correspopndiente escritura pública de cesion.

De otro lado, en cuanto a la orden impartida a INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA., consistente en la realización y terminación de las obras en las áreas comunes y zonas verdes de la CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA ETAPA I correspondientes a la iglesia, los parqueaderos comunales, área de guardería, salón comunal, piscina, sardineles y la adecuacion, equipamento y arreglos de la cancha multiple para ser entregados al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ como cesión de espacio publico para el disfrute y goce de la comunidad, se advierte que no ha sido cumplida ni se ha avanzado al respecto, pese a la orden fue clara en señalar que debía realizarse dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, orden frente a la cual se pone de presente que la Entidad territorial tampoco ha desplegado las actuaciones tendientes para su cumplimiento.

Ahora, pese a que medianye auto de 7 de noviembre de 2019 se requirió tanto al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ como a INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA., para que acreditaran el cumplimiento de las actuaciones desplegadas en cumplimiento del fallo, se encuentra que sólo la Entidad territorial para el 3 de diciembre siguiente rindió el informe correspondiente, sin que a la fecha se encuentre rendido algún otro informe, pues sólo obran las actas de los comités de verificación de fallo que acuciosamente ha aportado la PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ, frente a las cuales ha de requerirse las actas

realizadas el 6 de noviembre de 2019 y de 11 de febrero de 2021, pues pese a que en los oficios se señaló aportarlas, las mismas no fueron adjuntadas.

Finalmente, en atención al escrito allegado el 31 de enero de 2020 por parte del presidente de la junta de acción comunal del barrio villa Natalia, señor FRANCISCO ANTONIO ZEA ARAQUE se le pone de presente que el Despacho actúa en verificación de cumplimiento del fallo y que si desea tener conocimiento de lo actuado puede solicitar el link de acceso al expediente.

En consecuencia se **DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a alcalde del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ para que dentro del término de los quince (15) días siguientes a la comunicación del presente proveído:

- Presente un informe detallado y conciso con la documental que acredite las acciones desplegadas en cumplimiento del fallo consistente en iniciar *«las actuaciones tendientes, al control, vigilancia y acompañamiento a la empresa **INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA.**, con el fin de exigir la entrega de las cesiones a favor del ente territorial por el desarrollo urbanístico CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, consideradas como espacio público para disfrute y goce de la comunidad; si es el caso iniciar la respectiva contravención urbanística.*

- Allegue la suscripción de las escrituras de las zonas de cesión señaladas en la Resolución No. 0059 de 23 de abril de 2019, en caso de no contar con ella deberá indicar las razones por las cuales no se han suscrito.

- Indique qué acciones ha desplegado en cuanto a la realización y terminación de las obras por parte de INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA. en las áreas comunes y zonas verdes de la CIUDADELA

CAMPESTRE VILLA NATALIA ETAPA I correspondientes a la iglesia, los parqueaderos comunales, área de guardería, salón comunal, piscina, sardineles y la adecuacion, equipamento y arreglos de la cancha multiple para ser entregados al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ como cesión de espacio publico para el disfrute y goce de la comunidad.

SEGUNDO: REQUIÉRESE al representante legal de INVERSIONES GETRO Y CIA LTDA. para que dentro del término de los quince (15) días siguientes a la comunicación del presente proveído:

- Presente un informe detallado y conciso con la documental que acredite las acciones desplegadas en cumplimiento del fallo consistente en la realización y terminación de «*las obras de las áreas comunes y zonas verdes de la CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, correspondiente a la iglesia, parqueaderos comunales, el área para guardería, el salón comunal, piscina, vías principales, secundarias, peatonales, zonas verdes determinadas y sardineles*» e igualmente sobre la realización del «*respectivo adecuamiento, equipamiento y arreglos de la cancha múltiple de la CIUDADELA CAMPESTRE VILLA NATALIA I ETAPA, para ser entregada a favor del Municipio de Fusagasugá, como cesión de espacio público, para el disfrute y goce de la comunidad*».

TERCERO: REQUIÉRESE al PERSONERO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ para que dentro del término de los quince (15) días siguientes a la comunicación del presente proveído allegue las actas de los comités de verificación de fallo realizados el 6 de noviembre de 2019 y el 11 de febrero de 2021, así como los demás realizados después del 11 de febrero hogaño.

CUARTO: INFORMASE al presidente de la junta de acción comunal del barrio villa Natalia, señor FRANCISCO ANTONIO ZEA ARAQUE que si desea tener conocimiento de lo actuado dentro del proceso de la referencia

puede solicitar el link de acceso al expediente, sin necesidad de solicitar al Despacho responder cuestionario al respecto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f4a53c3b5c85bd2948ac9bfaa723535d136bf05c1e5e8c71d0164f56ea862f80
Documento generado en 03/06/2021 11:52:57 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00231-00**
Demandante:	**LEIDY PAOLA DELGADO PERDOMO**
Demandado:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Mediante memorial radicado el 28 de abril hogaño *(«033ApelacionDemandante»),* el apoderado judicial de la parte demandante interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida por este Despacho el 15 de abril de 2021, en la que se declararon probadas las excepciones denominadas «*LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO*» y «*COBRO DE LO NO DEBIDO*», invocadas por la Entidad Demandada y, se negaron las pretensiones de la demanda *(«031Sentencia»).*

El 10 de mayo de 2021 el expediente ingresó al Despacho *(«034ConstanciaDespacho»).*

En ese orden, se encuentra que el recurso de alzada fue presentado y sustentado dentro del término establecido en el numeral 1º del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 67 de la ley 2080 del 25 de enero de 2021), habida consideración de que la sentencia se notificó el 16 de abril de 2021 *(«032NotificacionSentencia»).*

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: Para ante la SECCIÓN SEGUNDA del H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA **CONCÉDESE** en el efecto suspensivo el recurso de apelación incoado por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia proferida por este Juzgado el 15 de abril de 2021.

SEGUNDO: Por secretaría **ENVÍESE Y/O PERMÍTASE EL ACCESO** al expediente digitalizado al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
ed8db5e504dbc9d1e10b39662a408eca64b0a85d2f7ebeb1ecf19c536c8a37c4
Documento generado en 03/06/2021 12:04:52 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2015-00690-00**
Demandante:	**ROSARIO BOHÓRQUEZ DE CANTOR**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. El 27 de noviembre de 2015 la señora ROSARIO BOHÓRQUEZ DE CANTOR, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, con el fin de obtener la nulidad parcial de la Resolución No. 1820 de 6 de diciembre de 2004 «*Por la cual se reconoce y ordena el pago de una PENSIÓN VITALICIA DE JUBILACIÓN*» y en consecuencia se le reliquide su pensión con la inclusión de todos los factores salariales que devengó durante el año anterior al status de pensionada (*«002PoderDemandaAnexos»* y *«003HojaReparto»*).

1.2. Por auto de 11 de diciembre de 2015 se admitió la demanda y se ordenó notificar personalmente a la demandada (*«004AutoAdmiteDemanda»*).

1.3. Previo pago de los gastos procesales, el 12 de abril de 2016 se notificó la demanda (*«005PagoGastosProcesales»* y *«006NotificacionPersonalAutoAdmiteDemanda»*).

1.4. Por auto de 21 de noviembre de 2016 se tuvo por no contestada la demanda de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG y se fijó fecha para realizar la audiencia inicial (*«008AutoCitaAudienciaInicial»*).

1.5. El 22 de marzo de 2017 se llevó a cabo la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en la cual, de oficio se declaró probada la excepción de inepta demanda por no agotarse el requisito de procedibilidad consistente en la reclamación administrativa a la entidad demandada tendiente a obtener la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la adquisición del status de pensionada, decisión que fue recurrida y se concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación para ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA (*«010ActaAudienciaInicial»*).

1.6. Una vez repartido el proceso el 24 de abril de 2017, le correspondió el conocimiento a la Subsección "B", Sección Segunda del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, quien mediante auto de 14 de septiembre siguiente confirmó la decisión adoptada por este Despacho el 22 de marzo de 2017 en donde se declaró de oficio la excepción de inepta demanda (*«012ActaRepartoTAC», «013InformeDespachoTAC» y «014AutoConfirmaDecisionApelada»*).

1.7. Regresado el expediente y recibido el 25 de julio de 2018, el Despacho, mediante auto de 2 de agosto de 2018 obedeció y cumplió lo resuelto por el superior y dispuso archivar el expediente (*«015OficioRegresaExpedienteGirardot» y «016AutoObedezcaseyCumplase»*).

1.8. El 11 de diciembre de 2018 se allegó solicitud de préstamo del expediente de la referencia por parte del Despacho del magistrado JOSÉ RODRIGO

ROMERO ROMERO, siendo remitido por este Despacho al día siguiente mediante el oficio No. 1861 (*«018SolicitudExpedientePrestamo»*, *«019Oficio1861RemiteProcesoTAC»*, *«020OficioRecibeProcesoTAC»*, *«021AutoOrdenaSolicitarProceso»* y *«022SolicitudEnvioProcesoTAC»*).

1.9. El 14 de diciembre de 2018 el proceso de la referencia ingresó al Despacho del magistrado JOSÉ RODRIGO ROMERO ROMERO, en virtud de la solicitud de préstamo, quien mediante proveído de 7 de febrero de 2019 en cumplimiento del fallo de tutela de 28 de noviembre de 2018[1] proferido por el H. CONSEJO DE ESTADO ordenó (*«024AutoRevocayOrdenaAdmitir*):

> *«**Primero:** Revócase la providencia proferida el 14 de septiembre de 2017 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot, y, en su lugar, el a quo deberá admitir la demanda de la referencia.*
>
> ***Segundo:** Copiése, notifiquese y una vez ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al a quo».*

1.10. El proceso fue devuelto a este Despacho mediante oficio de 17 de marzo de 2021 y recibido el 25 de marzo siguiente (*«025OficioRegresaProcesoGirardot»*).

1.11. El proceso ingresó al Despacho el 10 de mayo de 2021 (*«027ConstanciaDespacho»*).

---

[1] *«**1. Amparar** los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la señora ROSARIO BOHÓRQUEZ DE CANTOR.*

***2. Dejar sin efectos** el auto del 14 de septiembre de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora ROSARIO BOHÓRQUEZ DE CANTOR, tramitada bajo el radicado 25307-3333001-2015-00690.*

***3. Ordenar** al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera auto de reemplazo dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho tramitada bajo el radicado 25307-3333001-2015-00690, resolviendo la apelación interpuesta en contra de la decisión que declaró probada la excepción previa de inepta demanda, atendiendo lo dispuesto en esta providencia.*

***4. Notificar** a la partes por el medio más expedito y eficaz.*

(...)».

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, sería del caso obedecer y cumplir lo resuelto por la Subsección "B", de la Sección Segunda del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en proveído de 7 de febrero de 2019, consistente en «*Revócase la providencia proferida el 14 de septiembre de 2017 por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot, y, en su lugar, el a quo deberá admitir la demanda de la referencia*», de no ser porque dentro del presente proceso, este Despacho no ha proferido auto de fecha 14 de septiembre de 2017 y la demanda ya se encuentra admitida, siendo imposible dar cumplimiento a la orden impartida por el Superior en los términos indicados.

Así las cosas resulta procedente, de manera respetuosa solicitar al ad quem que aclare la orden impartida a este Juzgado, con el objeto de dar cumplimiento a la misma.

En consecuencia se **DISPONE:**

PRIMERO: OFÍCIESE a la Subsección "B", de la Sección Segunda del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, para que le aclare a este Despacho la orden impartida en su proveído de 7 de febrero de 2019 conforme a lo expuesto en precedencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
0030c0fbabff9ae0827a560e6ff1b58ea16ca38ebe9df7c12ff192c4f23ac973
Documento generado en 03/06/2021 12:04:07 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2016-00195-00**
Demandante:	**REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL**
Demandado:	**NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

Juez: **Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 11 de agosto de 2017 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, con el propósito de obtener la nulidad parcial del acta No. 025-APROP-GRURE-3-22 y total de la resolución 10442 de 18 de noviembre de 2015 (*«009AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. Previo pago de los gastos procesales el 29 de agosto de 2017, se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«016PagoGastos»* y *«012NotificacionAdmiteDemanda»*).

1.3. El 27 de febrero de 2018 el apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, estando dentro del término legal presentó escrito de contestación de la demanda *(«018ContestacionDemanda»)*.

1.4. Mediante auto de 10 de abril de 2018 se fijó como fecha para la celebración de la audiencia inicial que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el 29 de agosto de 2018 *(«020AutoCitaAudienciaInicial»)*.

1.5. En la audiencia inicial celebrada el 29 de agosto de 2018 se ordenó requerir a LA INSPECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que informaran si se adelantó investigación disciplinaria por el supuesto acoso laboral del cual fue víctima el señor teniente coronel REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL, BERNAL por parte del entonces director general de la Policía Nacional, señor RODOLFO PALOMINO LÓPEZ; por el Coronel FERNANDO AUGUSTO TORRES GUZMÁN; y por el Teniente Coronel ENGELBERT GRIJALBA SUÁREZ, además fijo fecha para la celebración de la audiencia de pruebas para el 7 de marzo de 2019 *(«029ActaAudienciaInicial»)*.

1.6. Mediante memorial de 15 de noviembre de 2018, el Inspector General de la Policía Nacional, Mayor General OSCAR ATEHORTÚA DUQUE, en razón a los requerimientos efectuados por la secretaria de este Despacho en los oficios 1339 y 1340, informó al interior de la institución no se adelantó investigación disciplinaria por el supuesto acoso laboral del cual fue víctima el señor teniente coronel REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL por parte del entonces director general de la Policía Nacional, señor RODOLFO PALOMINO LÓPEZ; por el Coronel FERNANDO AUGUSTO TORRES GUZMÁN; y por el Teniente Coronel ENGELBERT GRIJALBA SUÁREZ, en tanto la competencia disciplinaria radica en única instancia en la Procuraduría General de la Nación *(«031Oficios1339y1340yRespuesta»)*.

1.7. Por auto de 17 de enero de 2019, nuevamente este Despacho ordenó requerir a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN para que informará si adelantó investigación disciplinaria por el supuesto acoso laboral del cual fue víctima el señor teniente coronel REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL, por parte del entonces director general de la Policía Nacional, señor RODOLFO PALOMINO LÓPEZ; por el Coronel FERNANDO AUGUSTO TORRES GUZMÁN; y por el Teniente Coronel ENGELBERT GRIJALBA SUÁREZ *(«033AutoOrdenaRequerir»).*

1.8. En la audiencia de pruebas de 7 de marzo de 2019, pese de haberse oficiado el 12 de septiembre de 2018 y el 28 de enero de 2019, se avizoró la falta de cumplimiento del requerimiento efectuado a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por lo que nuevamente se ordena requerir al ente de control para que informará si adelantó investigación disciplinaria por el supuesto acoso laboral del cual fue víctima el señor teniente coronel REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL por parte del entonces director general de la Policía Nacional, señor RODOLFO PALOMINO LÓPEZ; por el Coronel FERNANDO AUGUSTO TORRES GUZMÁN; y por el Teniente Coronel ENGELBERT GRIJALBA SUÁREZ *(«035ActaAudienciaPruebas»).*

1.9. Mediante memorial de 11 de abril de 2019, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en razón a los reiterados requerimientos efectuados por la secretaria de este Despacho, informó que una vez revisados los sistemas de información GEDIS y SIM arrojó que cursó la acción disciplinaria IUS 2016-176325, con IUC D-2016-139-857282 tramitada por la PROCURADURÍA AUXILIAR ASUNTOS DISCIPLINARIOS *(«042Oficios1717,2141,179,180yRespuesta»).*

1.10. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de 2020** en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias

prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

1.11. El 20 de noviembre de 2021 por auto se requirió al PROCURADOR AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS, para que remitiera de manera íntegra la copia del expediente que conforma la investigación disciplinaria IUS 2016-176325, con IUC D-2016-139-857282 que se adelantó por el presunto acoso laboral del que aduce fue víctima el señor REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL por parte del entonces director general de la POLICÍA NACIONAL, señor RODOLFO PALOMINO LÓPEZ; por el Coronel FERNANDO AUGUSTO TORRES GUZMÁN; y por el Teniente Coronel ENGELBERT GRIJALBA SUÁREZ; así como también para allegará un informe acerca de los nombres, apellidos, número de identificación, dirección física y electrónica del responsable para dar solución a estas peticiones ante la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS *(«049AutoRequiere»).*

1.12. El 5 de abril de 2021 la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS remitió el expediente de la investigación disciplinaria IUS 2016-176325, con IUC D-2016-139-857282, cumpliendo, en parte, el requerimiento efectuado por auto de 20 de noviembre de 2021, en tanto el Despacho no avizora el informe acerca de los nombres, apellidos, número de identificación, dirección física y electrónica del responsable para dar solución a estas peticiones ante la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS *(Carpeta «053EscritoProcuraduria»).*

1.13. Mediante proveído de 15 abril de 2021 se puso en conocimiento a las partes la documental allegada por la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS el 5 de abril de 2021 visible en la Carpeta «053EscritoProcuraduria» del expediente digitalizado *(«055AutoPoneConocimiento»).*

1.14. El 21 de abril de 2021, vía correo electrónico, el Doctor DEVISON YERALDO ORTIZ GUASCA, apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, allegó sustitución de poder a la doctora NANCY STELLA CARDOSO ESPITIA *(«057EscritoPolicia»).*

1.15. Mediante memorial aportado vía correo electrónico el 21 de abril de 2021, el apoderado de la parte demandante se pronunció sobre la documental puesta en conocimiento en los siguientes términos *(«058EscritoDemandante»):*

1.15.1. Destaca en su escrito 5 apartes específicos de la documental aportada por la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS, que considera relevantes para el estudio del presente medio de control.

1.15.2. En el numeral 6° de su comunicación aduce que

> *«(…)*
>
> *6. Pese a lo anterior la Procuraduría no envié copia integra del expediente. ya que dentro del traslado con destino a su Señoría no se aportó copia de las decisiones proferidas con ocasión a lo ordenado dentro del auto obrante a folios 80 al 91, razón por la cual me permito allegar el Fallo de Única Instancia proferido el día 13 de enero de 2021 dentro del proceso No. IUS•2015-372165 IUC-D-2015-139809793 donde se decidió destituir e inhabilitar a los señores GR RODOLFO PALOMINO LÓPEZ, CORONEL ORO CARVAJAL CARVAJAL, CORONEL FLAVIO HERIBERTO MESA CASTRO Y MAYOR JOHN SANTOS QUINTERO LANDINEZ, por siguientes hechos:*
>
> *El 8 de mayo de 2015, se adelantó una reunión en la Secretaria General de la Policía Nacional, en horas de la tarde, a la que asistieron el coronel CIRO CARVAJAL CARVAJAL, el coronel FLAVIO HERIBERTO MESA CASTRO el mayor JOHN SANTOS QUINTERO LANDINEZ y, el teniente coronel REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL, donde los oficiales mencionados habrían mediado ante el teniente coronel, para que este se retractara de lo consignado en un documento del 5 de mayo de 2015,4 dirigido al general RODOLFO PALOMINO LÓPEZ, con la promesa de que se le absolvería de responsabilidad disciplinaria en el evento que fuera sancionado en primera instancia.*
>
> *La actuación adelantada bajo el radicado INSGE-2014-103 culminó en primera instancia con fallo sancionatorio y, posteriormente, revocado por el director de la Policía Nacional, el general RODOLFO PALOMINO LÓPEZ, en el ejercicio de su función como juez disciplinario de segunda instancia". (Tornado del Fallo de Única Instancia de fecha 13 de enero de 2021).*

> *Es de señalar que este proceso tuvo su génesis en el oficio del 5 de mayo de 2015, mediante el cual el teniente coronel REINALDO ALFONSO GÓMEZ BERNAL, le solicita al Director General de la Policía RODOLFO PALOMINO LÓPEZ, que cese la persecución laboral en su contra la cual deriva de varias situaciones como las siguientes: a) pretensiones amorosas y sexuales del señor Director de la Policía hacia el coronel GÓMEZ BERNAL, b) preferencias sexuales del general PALOMINO hacia personas del sexo masculino, c) ejercicio indebido del control disciplinario dando órdenes para sancionarlo, movido por pasiones sentimentales y d) situaciones administrativas presuntamente irregulares relacionadas con el ascenso de patrulleros y uniformados en la institución.»*

1.15.3. Por lo anterior solicitó requerir nuevamente a la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS, para que allegue todos los soportes de la actuación disciplinaria, además de las copias íntegras de los folios que componen la investigación seguida en contra del General RODOLFO PALOMINO LÓPEZ que se adelantaron en radicados diferentes.

1.15.4. Por último, anexó el fallo de única instancia de 13 de enero de 2021, proferido por el Procurador General de la Nación dentro del radico IUS 2016-176 con IUC D-2016-139857282.

1.16. El 24 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho *(«059ConstanciaDespacho»).*

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, previo a resolver sobre la procedencia de dar traslado para alegar de conclusión, se advierte que el apoderado judicial de la parte demandante solicitó a través del escrito allegado vía correo electrónico, requerir nuevamente a la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS, con el fin que aportara de manera íntegra copia de todos los soportes de toda la actuación disciplinaria, además de los anexos de los folios que hacen referencia a la investigación adelantada en contra del GENERAL RODOLFO PALOMINO LÓPEZ y que fueron relevantes para la investigación disciplinaria IUS 2016-176325, con IUC D-2016-139-857282, por

lo que es del caso, requerir en este sentido a la PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS en dicho sentido.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE Y OFICIÉSE a la PROCURADOR AUXILIAR PARA ASUNTOS DISCIPLINARIOS, para que, en el término máximo e improrrogable de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, allegue copia íntegra de los soportes de toda la actuación disciplinaria, además de los anexos de los folios que hacen referencia a la investigación adelantada en contra del GENERAL RODOLFO PALOMINO LÓPEZ y que fueron relevantes para la investigación disciplinaria IUS 2016-176325, con IUC D-2016-139-857282.

SEGUNDO: **RECONÓCESE** personería adjetiva para actuar como apoderado judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL a la Doctora NANCY STELLA CARDOSO ESPITIA en los términos de la sustitución a ella conferido y que obra en el folio 3 del archivo denominado «057EscritoPolicia».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
a058222289db3f722f9fe5c12a2a4a687b0044c90a094b8d7931640a8fd07b53
Documento generado en 03/06/2021 12:04:32 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2016-00205-00**
Demandante:	**HERNANDO MARCELO FUEL MENESES y OTROS**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**REPARACIÓN DIRECTA.**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. En providencia de 21 de febrero de 2017 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentó HERNANDO MARCELO FUEL MENESES y OTROS contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, con el propósito de obtener de declarar patrimonialmente responsable a la Entidad demandada por los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de las actuaciones del Cabo Segundo ROMEL ALEXANDER GÓMEZ VELANDIA el 9 de julio de 2016, por el presunto delito de acto sexual abusivo y acceso carnal violento en menor de 14 años, a los que fueron sometidas las menores demandantes dentro de la presente actuación (*«010AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. En la audiencia de pruebas de 12 de noviembre de 2019 este Despacho dispuso, entre otras, (folios 6 y 7 *«063ActaAudienciaPruebas»* de la carpeta *«063AudienciaPruebas»*):

> *«1. REQUERIR al CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE LOS JUZGADOS PENALES DE GIRARDOT-CUNDINAMARCA para que en*

> *el término de los 10 días siguientes contados a partir del día siguiente al recibo del oficio de solicitud remita copia autentica, integra y legible de los expedientes penales No. 253076000694201600350 y No. 253076000400201700255.*
>
> *2. REQUERIR al Comandante del BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1 para que, en el término de los 10 días contados a partir del día siguiente al recibo del oficio de solicitud, remita copia de la acción disciplinaria seguida contra el CABO SEGUNDO ROMEL ALEXANDER GÓMEZ VELANDIA por los hechos acaecidos el 9 de julio de 2016 y que posiblemente corresponda con la Acción disciplinaria No. 001-2017 BAMAAV4.*
>
> *(…)*».

1.3. El 20 de noviembre de 2019 la Coordinadora del CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE GIRARDOT remitió con destino a este Juzgado la copia de las investigaciones adelantadas contra el señor ROMEL ALEXANDER GÓMEZ VELANDIA con radicado No. 25307-6000694-2016-00350 y No. 25307-6000400-2017-00255 (*«066EscritoCentroServiciosJudicialesOficio2033»* y *«067AnexosEscritoCentroServiciosJudicialesOficio2033»*).

1.4. En atención a lo anterior, mediante proveído de 20 de febrero de 2020 este Juzgado puso en conocimiento de las partes la documental allegada por el CENTRO DE SERVICIOS JUDICIALES DE GIRARDOT el 20 de noviembre de 2019 y, requirió por segunda vez al BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1 para que remitiera copia de la acción disciplinaria seguida contra el CABO SEGUNDO ROMEL ALEXANDER GÓMEZ VELANDIA por los hechos acaecidos el 9 de julio de 2016 y que posiblemente corresponden a la Acción disciplinaria No. 001-2017 BAMAAV4 (*«069AutoRequierePoneConocimiento»*).

1.5. El 18 de diciembre de 2020 la Secretaría de este Despacho libró oficio al BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1 para que remitiera la copia de la acción disciplinaria seguida contra el CABO SEGUNDO ROMEL ALEXANDER GÓMEZ VELANDIA por los hechos acaecidos el 9 de julio de 2016 (*«073OficioRequiere»*).

1.6. El 27 de febrero de 2021 la Secretaría de este Juzgado nuevamente libró oficio requiriendo al BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1 para que enviara con destino a esta Instancia Judicial la documental requerida en la audiencia de pruebas de 12 de noviembre de 2019 (*«076OficioRequiere»*).

1.7. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho sin pronunciamiento alguno de la autoridad requerida (*«078ConstanciaDespacho»*).

I. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, advierte este Despacho que el BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1, a pesar de haberse requerido en múltiples oportunidades, ha sido renuente en remitir la copia de la acción disciplinaria seguida contra el CABO SEGUNDO ROMEL ALEXANDER GÓMEZ VELANDIA por los hechos acaecidos el 9 de julio de 2016 y que posiblemente corresponden a la Acción disciplinaria No. 001-2017 BAMAAV4.

En atención de lo anterior, y como quiera que es la única prueba documental que hace falta por recabar, impide a esta Instancia Judicial proseguir con el curso normal del proceso, esto es, de declarar cerrado el debate probatorio y, al tenor de lo dispuesto en el último inciso del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, correr traslado para que las partes aleguen de conclusión, por lo que se requerirá a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, por intermedio de su apoderado judicial, en atención al deber de colaboración de las partes para con el Juez, para que en el término improrrogable de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente providencia gestione ante el BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1 y remita a este Despacho la copia de la acción disciplinaria seguida contra el CABO SEGUNDO ROMEL ALEXANDER GÓMEZ VELANDIA por los hechos acaecidos el 9 de julio de 2016 y que posiblemente corresponden a la Acción

disciplinaria No. 001-2017 BAMAAV4. Lo anterior, previo a dar curso al incidente de desacato.

Así también, se requerirá a la mencionada apoderada judicial del EJÉRCITO NACIONAL para que en el mismo término informe a este Despacho el nombre completo, documento de identidad y dirección de notificación del comandante del BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1 o de quien haga sus veces.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que en el término máximo e improrrogable de los diez (10) días contados a partir de la notificación del presente proveído **GESTIONE** ante el BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1 y, en el mismo término **REMITA** a este Despacho la copia de la acción disciplinaria seguida contra el CABO SEGUNDO ROMEL ALEXANDER GÓMEZ VELANDIA por los hechos acaecidos el 9 de julio de 2016 y que posiblemente corresponden a la Acción disciplinaria No. 001-2017 BAMAAV4. Lo anterior, previo a dar curso al correspondiente incidente de desacato.

SEGUNDO: REQUIÉRESE a la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que en el término máximo e improrrogable de los diez (10) días contados a partir de la notificación del presente proveído **INFORME** a este Despacho el nombre completo, documento de identidad y dirección de notificación del comandante del BATALLÓN DE MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN No. 4 UH-1 o de quien haga sus veces.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
8F3F98ED1DB6556A1DEF8FBA74FB5824FC0A3D3C2DF1AD4676BDB78637CB4A82
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:30 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2017-00171-00**
Demandante:	**PABLO EMILIO CUBILLOS MAYORGA**
Demandado:	**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**
Medio de Control:	**REPARACIÓN DIRECTA-ACTIO IN REM VERSO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

El 23 de abril de 2021 el apoderado judicial de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA radicó escrito al que adjuntó comprobante de pago de consignación de depósito judicial por la suma de $7.419.857,00, señalando que con éste se efectuaba el pago de la sentencia y las costas procesales del proceso de la referencia[1].

El 11 de mayo de 2021 el demandante solicitó el pago de la sentencia, adjuntando escrito signado por el apoderado judicial de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA en el que explica que el valor consignado corresponde al pago de la sentencia proferida por este Juzgado y confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA en el que se condenó al Ente Universitario a favor del demandante[2].

La Secretaría del Despacho creó una la carpeta de depósitos judiciales en el expediente en el que se observa certificación de que en la cuenta correspondiente de este Despacho se encuentra consignado el siguiente[3]:

---

[1] «029EscritoUniversidad» C01Principal
[2] «030SolicitudDemandante» C01Principal
[3] «Titulo431220000021650» C02DepositosJudiciales

N° Proceso	**N° Depósito Judicial**	**Fecha**	**Valor**
25307333300120170017100	431220000021650	20/04/2021	$7.419.857.oo

Habiendo ingresado el expediente el 31 de mayo de 2021, observa el Despacho que el dinero que fue consignado en la cuenta de Depósitos Judiciales de este Juzgado para el presente proceso corresponde al pago de la sentencia proferida, hecho que fue aceptado por el mismo apoderado judicial de la parte demandada, circunstancia en virtud de al cual habiéndose proferido sentencia en la que se condenó a la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA a favor del señor PABLO EMILIO CUBILLOS MAYORGA, es procedente ordenar el pago de título judicial constituido a favor de este último.

En virtud de lo expuesto, se **DISPONE:**

PRIMERO: AUTORÍZASE el pago del depósito judicial No. 431220000021650 por valor de **$7.419.857.oo** a favor del señor **PABLO EMILIO CUBILLOS MAYORGA** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.499.640. Por Secretaría, **REALÍCENSE** las gestiones correspondientes en el portal web de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
402e6048105cc93677b9c1deed310c039ecb8d0fdb76c607876383597848b2fa
Documento generado en 03/06/2021 12:04:27 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2017-00199-00**
Demandante:	**LYDIA GLORIA ROMERO CABALLERO**
Demandado:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

El 21 de mayo de 2021 el apoderado judicial de la señora LIDYA GLORIA ROMERO CABALLERO, allegó escrito con el que solicitó «*la elaboración y/o expedición de los títulos judiciales a que haya lugar, teniendo en cuenta que a la fecha hay dineros recaudados o retenidos a órdenes del despacho judicial, dentro del asunto de la referencia es procedente, la elaboración y/o expedición de los títulos judiciales a que haya lugar a nombre de mi representado en calidad de demandante*»[1].

El 31 de mayo de ingresó el expediente al Despacho.

Para resolver la solicitud elevada se encuentra con relevancia en el plenario que:

El 20 de agosto de 2020 se profirió auto en el que se decidió «*MODIFICAR la liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante y, en su lugar, se APRUEBA por la suma de CIENTO CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y*

[1] «061SolicituDemandante» C01Principal

OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON SEIS CENTAVOS ($105.858.264,06)»[2].

Contra la anterior decisión fue interpuesto el recurso de apelación[3] que se concedió en el efecto diferido el 8 de octubre de 2020[4].

En ese orden, atendiendo lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 323 del Código General del Proceso[5] sería del caso negar la solicitud elevada, como quiera que el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte ejecutante atacó de manera directa la liquidación que había sido realizada por el Despacho y en la misma línea, el saldo de la obligación que allí se estipuló.

No obstante, una vez efectuada consulta del presente proceso en el aplicativo de «*Consulta de procesos nacional unificada*», se encontró que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, profirió decisión el 25 de febrero de 2021 en la que CONFIRMÓ la decisión adoptada, hecho que reafirma que el valor de la ejecución fue el señalado por este Juzgado el 20 de agosto de 2020.



[2] «052AutoModifica» Co1Principal
[3] «053RecursoApelacion» Co1Principal
[4] «056AutoConcedeApelacion» Co1Principal
[5] **Artículo 323. *EFECTOS EN QUE SE CONCEDE LA APELACIÓN*.** Podrá concederse la apelación:
(...).
3. En el efecto diferido. En este caso se suspenderá el cumplimiento de la providencia apelada, pero continuará el curso del proceso ante el juez de primera instancia en lo que no dependa necesariamente de ella.
Se otorgará en el efecto suspensivo la apelación de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las que sean simplemente declarativas. Las apelaciones de las demás sentencias se concederán en el efecto devolutivo, pero no podrá hacerse entrega de dineros u otros bienes, hasta tanto sea resuelta la apelación. Sin embargo, la apelación no impedirá el pago de las prestaciones alimentarias impuestas en la providencia apelada, para lo cual el juez de primera instancia conservará competencia.
(...).

En esa secuencia, adquiere especial contundencia que la Secretaria agregó al expediente, carpeta en la que se evidencia consignado el siguiente depósito judicial[6]:

N° Proceso	**N° Depósito Judicial**	**Fecha**	**Valor**
25307333300120170019900	431220000019331	18/12/2020	$9.467.184,52

En orden de las valoraciones efectuadas, emerge procedente ordenar el pago del título judicial consignado en el presente proceso a favor de la demandante y tener en cuenta dicho pago para ser abonado a la obligación.

En virtud de lo expuesto, se **DISPONE:**

PRIMERO: AUTORÍZASE el pago del depósito judicial No. 431220000019331 por valor de **$9.467.184,52** a favor de la señora **LIDYA GLORIA ROMERO CABALLERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 39.558.884. Por Secretaría, **REALÍCENSE** las gestiones correspondientes en el portal web de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia.

SEGUNDO: La anterior suma será tenida en cuenta como abono al saldo de la obligación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

[6] «TITULO 2017-00199» Co3DepositoJudicial

Código de verificación:
5d79082d03961c55f2b092510c8b5d44c496fd62c7b9066d4bdbf1caae87deb9
Documento generado en 03/06/2021 12:04:28 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2017-00337-00**
Demandante:	**ENRIQUE MOLINA PAJA**
Demandado:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. El 22 de abril de 2021, fue allegado al Despacho, mensaje de correo electrónico al que se adjuntó[1]:

1.1.1. Copia de la Escritura Pública No. 604 de 12 de febrero de 2020 de la Notaría 73 de Bogotá D.C., con la que el DIRECTOR JURÍDICO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- otorgó poder general a la firma VITERI ABOGADOS SAS representada legalmente por el doctor OMAR ANDRÉS VITERI DUARTE para representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad que representa[2].

[1] «049SolicitudUGPP» C01Principal
[2] Folio 7 a 20 «049SolicitudUGPP» C01Principal

1.1.2. Escrito de sustitución realizada por el doctor OMAR ANDRÉS VITERI DUARTE la doctora LAURA NATALÍ FEO PELÁEZ[3].

1.1.3. Memorando en el que la Tesorera de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- informa al Subdirector Jurídico Pensional de la Entidad sobre la Constitución de Depósitos Judiciales a favor del señor ENRIQUE MOLINA PAJA, acompañado de un cuadro titulado «*INFORME DETALLADO DE DEPÓSITOS JUDIICALES DONDE FIGURA COMO DEMANDADO UGPP CON NIT. 900.373.913-4 CON FECHA DE CORTE DICIEMBRE 09 DE 2020*»[4].

1.2. El 24 de mayo de 2021 ingresó el expediente al Despacho.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1. El artículo 461 del Código General del Proceso, señala:

> «**Artículo 461.** ***TERMINACIÓN DEL PROCESO POR PAGO*****.** Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.
>
> Si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta la liquidación adicional a que hubiere lugar, acompañada del título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez sea aprobada aquella, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.
>
> Cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del crédito y de las costas, podrá el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompañadas del título de su consignación a órdenes del juzgado, con especificación de la tasa de interés o de cambio, según el caso. Sin que se suspenda el trámite del proceso, se dará traslado de ella al ejecutante por tres (3) días como

[3] Folio 2 y 3 «049SolicitudUGPP» C01Principal
[4] Folio 4 a 6 «049SolicitudUGPP» C01Principal

> dispone el artículo 110; objetada o no, el juez la aprobará cuando la encuentre ajustada a la ley.
>
> Cuando haya lugar a aumentar el valor de las liquidaciones, si dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del auto que las apruebe no se hubiere presentado el título de consignación adicional a órdenes del juzgado, el juez dispondrá por auto que no tiene recursos, continuar la ejecución por el saldo y entregar al ejecutante las sumas depositadas como abono a su crédito y las costas. Si la consignación se hace oportunamente el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.
>
> Con todo, continuará tramitándose la rendición de cuentas por el secuestre si estuviere pendiente, o se ordenará rendirlas si no hubieren sido presentadas.»

En ese orden, aunque en el presente asunto no se aportó solicitud expresa de terminación del proceso por pago total de la obligación, no puede el Despacho obviar los documentos que dan cuenta de la consignación de dos títulos judiciales al presente proceso, por lo que debe analizarse si con ellos se cubre el valor de la obligación ejecutada.

Así pues, en el plenario se encuentra con relevancia que el 25 de julio de 2019[5] se profirió auto en el que, luego de realizar la liquidación del crédito en la forma y por el lapso que señaló el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA al desatar recurso de apelación contra la sentencia, y precisar que dicha Corporación indicó puntualmente que **sobre dicha liquidación no habría actualización o indexación** al tratarse de ejecución de intereses moratorios, fijó el valor del crédito de la presente obligación en la suma de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($5.208.033.67)**. En virtud de ello, el valor de la ejecución se mantiene inmutable a la fecha.

De igual forma, se encuentra en el proceso que la secretaria cargó las certificaciones de depósitos judiciales constituidos por la UNIDAD

[5] «044AutoModificayApruebaLiquidacionCredito» C01Principal

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-, así:

No. Título Judicial	**Fecha**	**Valor**
431220000018931	01/12/2020	$3.544.297.21[6]
431220000018930	01/12/2020	$1.663.736.46[7]
Total		**$5.208.033.67**

Se observa entonces, que el valor de los dos depósitos judiciales consignados por la Entidad Ejecutada guarda identidad con la que se fijó como adeudada en la última liquidación del crédito aprobada por el Despacho, que, se reitera, como quiera que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA señaló que no era susceptible de actualización o indexación, se mantiene inmutable.

En consecuencia, habiéndose acreditado el pago total de la obligación en el presente asunto se impone para el Despacho ordenar la terminación del proceso por tal concepto, la entrega al demandante de los depósitos judiciales consignados y el archivo del proceso, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

2.2. Como quiera que el poder fue otorgado en debida forma, se reconocerá personería adjetiva al doctor OMAR ANDRÉS VITERI DUARTE en calidad de representante legal de la firma VITERI ABOGADOS ASOCIADOS SAS para actuar como apoderado judicial de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-, al tenor de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 75 del Código General del Proceso.

[6] «Título431220000018931» Co2DepositosJudiciales
[7] «Título431220000018930» Co2DepositosJudiciales

2.3. Así mismo, al haber sido realizada la sustitución por quien se reconocerá como apoderado judicial principal de la Entidad Demandada, se tendrá como apoderada sustituta de esta, a la doctora LAURA NATALÍ FEO PELÁEZ, de conformidad con lo estipulado en el inciso sexto ibídem.

En virtud de lo expuesto, el Juzgado **DISPONE:**

PRIMERO: DECLÁRASE TERMINADO EL PROCESO por pago total de la obligación, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: ORDÉNASE la entrega de los títulos judiciales que a continuación se relacionan, los cuales deberán ser expedidos teniendo como beneficiario al señor ENRIQUE MOLINA PAJA, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.767.114:

No. Título Judicial	**Fecha**	**Valor**
431220000018931	01/12/2020	$3.544.297.21[8]
431220000018930	01/12/2020	$1.663.736.46[9]
Total		**$5.208.033.67**

En caso de que se lleguen a consignar depósitos judiciales adicionales deberán ser expedidos teniendo como beneficiaria a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-.

TERCERO: DECRÉTASE EL LEVANTAMIENTO de las medidas cautelares que se hubieren determinado. Por secretaría **OFÍCIESE** de ser el caso.

CUARTO: TÉNGASE Y RECONÓZCASE al doctor OMAR ANDRÉS VITERI DUARTE identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.803.031 y Tarjeta

[8] «Título431220000018931» Co2DepositosJudiciales
[9] «Título431220000018930» Co2DepositosJudiciales

Profesional No. 111.852 como apoderado judicial de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- en los términos y para los fines del poder conferido visible en los Folios 7 a 20 del archivo denominado «049SolicitudUGPP» del cuaderno principal del expediente digitalizado.

QUINTO: TÉNGASE a la doctora LAURA NATALÍ FEO PELÁEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.018.451.137 y Tarjeta Profesional No. 318.520 como apoderada sustituta de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP- en virtud de la sustitución realizada por el apoderado judicial principal visible en los Folios 2 y 3 del archivo denominado «049SolicitudUGPP» del cuaderno principal del expediente digitalizado.

SEXTO: En firme esta providencia, de ser el caso **LIQUÍDENSE** los gastos del proceso, de existir remanentes, **ENTRÉGUENSE** al apoderado judicial de la parte demandante y **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
2c338319acdadfca83f64059d265908afb1a3347b280a673fdb3604e865de9dc
Documento generado en 03/06/2021 12:04:29 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2017-00365-00**
Demandante:	**NANCY TOVAR DANIEL**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL y OTRO**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

El 13 de febrero de 2020 se profirió auto en el que, en virtud de la facultad conferida en el inciso 2º del artículo 213 de la Ley 1437 de 2011, se ordenó oficiar al DIRECTOR DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA Y ORDENADOR DEL GASTO para que remitiera la totalidad del expediente administrativo contractual de selección abreviada por subasta inversa presencial 138 CENAL TOLEMAIDA 2017, cumpliendo con las reglas de archivo, es decir, enviar la documental foliada, legajada y organizada de manera consecutiva, con el fin de efectuar su revisión.

En atención a lo solicitado, el 28 de abril de 2021, luego de múltiples requerimientos, la DIRECTORA DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA Y ORDENADORA DEL GASTO allegó el oficio con radicado No. 2021189005145143 de 27 de abril de 2021[1] al que adjuntó la relación de archivos que se encuentra en la carpeta denominada 048EscritoEjercitoAnexos del expediente digitalizado.

[1] Archivo denominado 049OficioEjercito del expediente digitalizado.

Así las cosas, encontrándose el proceso a Despacho para dictar sentencia, sería del caso proferir la decisión con la que se desate la controversia que se adelanta, no obstante, con el fin de garantizar los derechos de contradicción y defensa de las partes, encuentra prudente este Despacho poner en conocimiento la documental allegada, para, posteriormente, proferir la correspondiente sentencia.

En consecuencia se **DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE en conocimiento de las partes por el término de tres (3) días el oficio con radicado No. 2021189005145143 de 27 de abril de 2021[2] y la relación de archivos que se encuentra en la carpeta denominada 048EscritoEjercitoAnexos del expediente digitalizado, allegados por la Subdirectora de Defensa Judicial de la DIRECTORA DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL TOLEMAIDA Y ORDENADORA DEL GASTO el 28 de abril de 2021.

SEGUNDO: En firme esta providencia, **INGRESE** el expediente de forma inmediata al Despacho, sin que por ello pierda el turno que tiene actualmente en la lista de procesos a Despacho para sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

[2] Archivo denominado 049OficioEjercito del expediente digitalizado.

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
b17a1140250df188a5d7092973a36634e838d2ebf211d45f8946cbf2a862d2ba
Documento generado en 03/06/2021 12:04:30 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2017-00366-00**
Demandante:	**MARÍA EUGENIA CASTILLO BAQUERO Y OTROS**
Demandado:	**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGÁ**
Medio de Control:	**REPARACIÓN DIRECTA**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

1. Mediante proveído de 24 de noviembre de 2017 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de reparación directa presentó los señores MARÍA EUGENIA CASTILLO BAQUERO, HEIDY YOJHANNA MORA CASTILLO, ANGIE JASBLEIDY CASTILLO BAQUERO, PARMENIO CASTILLO TORRES, SUSANA BAQUERO, PARMENIO CASTILLO BAQUERO, ANA PATRICIA CASTILLO BAQUERO, JHON FREY CASTILLO BAQUERO, MARÍA DEL PILAR CASTILLO BAQUERO, YADIRA CONSTANZA CASTILLO BAQUERO, INÉS ASTRID ACUÑA HERRERA, por conducto de apoderado judicial, contra el HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGÁ E.S.E. (*«005AutoAdmiteDemanda»*).

2. Previo pago de los gastos procesales, el 7 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«007PagoGastos»* y *«008NotificacionPersonal»*).

3. El 15 de marzo de 2018 el apoderado judicial del HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGÁ E.S.E., dentro del término legal contestó la demanda *(«016ContestacionDemanda»)*.

4. Mediante auto de 15 de junio de 2018 se admitió el llamamiento en garantía que realizó el HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGÁ E.S.E, respecto de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ENTIDADES DEL SECTOR SALUD COOMESALUD *(«016AutoAdmiteLlamamiento»)*.

5. Por auto de 27 de julio de 2018 se admitió el llamamiento en garantía que realizó el HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGÁ E.S.E, respecto de la COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. *(«020AutoAdmiteLlamamiento»)*.

6. En la audiencia inicial de 19 de junio de 2019, entre otras se decretó la siguiente prueba *(«026ActaAudienciaInicial»):*

> *«5.2.3 ORDENASE al INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES para que proceda determinar si las atenciones en salud brindadas por el equipo médico de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ a la usuaria fallecida (NICHOLLE GABRIELA RIVEROS CASTILLO) tuvieron observancia de la lex artes. Para lo a-te -icr, se le concede el término de veinte (20) días a la parte accionada para que demuestre las diligencias adelantadas; los gastos y honorarios que demande dicha experticia están a cargo de la parte demandada. ».*

7. A su vez en audiencia de pruebas de 13 de noviembre de 2019 se ordenó requerir INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, para que procediera a determinar si las atenciones en salud brindadas a la niña NICHOLLE GABRIELA RIVEROS CASTILLO tuvieron observancia de la *lex artis* *(«039AudienciaPruebas»)*.

8. En memorial de 27 de febrero de 2020, el INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES informó al despacho que *«el caso correspondiente a NICHOLLE GABRIELA RIVEROS CASTILLO, se encuentra en etapa de conclusión, revisión y aprobación»* *(«041EscritoMedicina Legal»)*.

9. Por auto de 20 de noviembre de 2020, nuevamente se requirió al INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES para que rindiera el informe decretado *(«047AutoRequiere»)*.

13. Dando cumplimiento a los requerimientos, mediante correo electrónico de 19 de mayo de 2021, el señor GIOVANNY HILARIO GALINDO VILLERMO, profesional universitario Forense del INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS rindió el informe solicitado *(«051EscritoMedicinaLegal»).*

14. El 24 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho *(«052ConstanciaDespacho»).*

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de las partes por el término de tres (3) días, la documental allegada por el INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS el 19 de mayo de 2021 visible en el archivo «052ConstanciaDespacho» del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
b1f38a1b30977105cad26b0e21a249ee2a49c2bc9d093d98f8c5f57c1545b6a5

Documento generado en 03/06/2021 12:04:33 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-33-33-001-2017-00369-00**
Demandante:	**NOHORA MORENO DELGADO**
Demandado:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP-**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE la decisión adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN "D" el 5 de abril de 2021, en la que REVOCÓ el auto proferido por este Despacho el 29 de octubre de 2020 y en su lugar MODIFICÓ la liquidación del crédito presentada por el apoderado judicial de la parte ejecutante y la APROBÓ por la suma de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS ($215.484.953.13).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO

JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
54576d93b58f6373eea091f9af6956a2020bf00baed2b479c2add7813524394e
Documento generado en 03/06/2021 12:04:31 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2017-00444-00**
Demandante:	**AUDREY HERLINDA TORRES PARDO**
Demandado:	**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -SECCIÓN SEGUNDA-, en la providencia de 6 de agosto de 2020 (*«053SentenciaSegundaInstancia»*), por medio de la cual **CONFIRMÓ** la decisión proferida por este Despacho el 15 de noviembre de 2019[1], en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

Téngase en cuenta que el proceso regresó del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de abril de2021[2] y sólo ingresó al Despacho hasta el 24 de mayo de 2021, como constan en el archivo denominado *«057ConstanciaDespacho»*.

En firme la presente providencia, **ARCHÍVESE** el presente proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

---

[1] Archivo denominado «*041SentenciaPrimeraInstancia*»
[2] Archivo denominado «*018OficioRegresaProcesoGdot*»

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
5a946b36701d7326eb20aabd2e97b6def07f6ce11591f8ec1c4ab5dca30e3c66
Documento generado en 03/06/2021 12:04:34 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2018-00052-00**
Demandante:	**MACO S.A.S.**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante auto proferido el 8 de agosto de 2019 este Despacho decretó el embargo y retención de las sumas de dinero que se encontraban consignadas en algunas Entidades Financieras, de las que era titular la Entidad Ejecutada[1].

1.2. Tal decisión fue comunicada al BANCO POPULAR mediante el oficio 01842 de 26 de septiembre de 2019[2].

1.3. El 20 de noviembre de 2019, el director de Casa Matriz de la Entidad Financiera solicitó confirmar si debe registrarse la medida, advertido el carácter de inembargabilidad que ostentan las cuentas de la Demandada[3].

---

[1] Archivo denominado 004AutoDecretaMedidaCautelar.pdf del CuadernoMedidaCautelar del expediente digitalizado.
[2] Archivo denominado 011OficiosSecretariaMedidaCautelar del CuadernoMedidaCautelar del expediente digitalizado.
[3] Archivo denominado 020RespuestaOficio del CuadernoMedidaCautelar del expediente digitalizado.

1.4. Mediante auto de 5 de diciembre de 2019 se ordenó informar al BANCO POPULAR que debía registrarse la medida puesto que el presente asunto se encontraba dentro de las excepciones al principio de inembargabilidad[4].

1.5. La anterior decisión fue informada con el oficio 00037 de 22 de enero de 2020[5].

1.6. Por auto de 29 de octubre de 2020 se ordenó oficiar al BANCO POPULAR para que se sirviera informar si la medida cautelar decretada fue efectivamente registrada y aplicada[6].

1.7. Tal acto se cumplió con el oficio No. 00454 de 2 de diciembre de 2020[7], e ingresó en silencio del Banco en comento.

1.8. El 15 de abril de 2021[8] se ordenó oficiar al doctor MAURILIO ROJAS AGUILAR en su calidad de GERENTE GENERAL DEL BANCO POPULAR, para que en el término improrrogable de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la correspondiente comunicación, se sirviera informar si procedió a registrar la medida cautelar decretada el 8 de agosto de 2019, reiterada el 5 de diciembre de 2019, sobre los productos de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL.

1.9. Lo ordenado fue cumplido con oficio No. 00922 de 6 de mayo de 2021[9], remitido al correo electrónico notificacionesjudicialesvjuridica@bancopopular.com.co.

---

[4] «021AutoOrdenaOficiar Co2MedidaCautelar
[5] «022OficiosMedidaCautelar Co2MedidaCautelar.
[6] «034AutoRequiere Co2MedidaCautelar.
[7] «033OficioRequiereBancoPopular Co2MedidaCautelar.
[8] «001AutoOrdenaOficiarPrevioIncidente»Co4IncidenteDesacato
[9] «003Oficiorequiere» Co4Incidentedesacato

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Como se señaló en auto anterior, observado el cuaderno de medida cautelar del expediente digitalizado, encuentra el Despacho que el BANCO POPULAR no ha indicado de manera certera y puntual si la medida cautelar de embargo que fue decretada por este Despacho, fue efectivamente aplicada.

Por lo anterior, en aplicación de la facultad otorgada por el numeral 3° del artículo 44 del Código General del Proceso, se adelantará el trámite incidental de desacato contra el Gerente General de la Entidad Financiera.

En esa secuencia, habiendo agotado la actuación de oficiar al incidentado previo a la apertura del incidente sin que se atendiera el requerimiento[10], se dará inicio al trámite incidental de desacato en contra del doctor MAURILIO ROJAS AGUILAR en su calidad de GERENTE GENERAL DEL BANCO POPULAR.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado **DISPONE**:

PRIMERO: DÉSE APERTURA AL TRÁMITE INCIDENTAL DE DESACATO contra el doctor MAURILIO ROJAS AGUILAR en su calidad de GERENTE GENERAL DEL BANCO POPULAR, por las razones expuestas en esta motiva.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al doctor MAURILIO ROJAS AGUILAR de la presente decisión. Para tal fin, por Secretaría remítase mensaje de datos al **correo personal institucional** del incidentado, de no contar con él, deberá solicitarlo a la Entidad, advirtiendo de manera puntual que se requiere con el fin de cumplir la notificación del trámite incidental por desacato que se adelanta.

---

[10] «004ConstanciaDespacho» C04IncidenteDesacato

TERCERO: CÓRRASE TRASLADO al doctor MAURILIO ROJAS AGUILAR en su calidad de GERENTE GENERAL DEL BANCO POPULAR, por el término de tres (3) días para que se sirva ejercer su derecho de contradicción y defensa.

CUARTO: REQUIÉRASE al doctor MAURILIO ROJAS AGUILAR en su calidad de GERENTE GENERAL DEL BANCO POPULAR, para que dentro del término de traslado, se sirva informar si procedió a registrar la medida cautelar decretada el 8 de agosto de 2019, reiterada el 5 de diciembre de 2019, sobre los productos de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, en caso contrario, informe la razón por la que no lo ha hecho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
c120e9a2edd6375cd929b7c5bacaa7c8761cb3b0f2e9b61caa4f47b48d84c463
Documento generado en 03/06/2021 12:04:09 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2018-00052-00**
Demandante:	**MACO S.A.S.**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto por la apoderada judicial de la parte ejecutada contra el auto de 15 de abril de 2021 por medio del cual se ordenó iniciar trámite incidental contra el Gerente General del BANCO POPULAR en auto separado.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. LA PROVIDENCIA RECURRIDA.

El 15 de abril de 2021[1] se profirió auto en el que se ordenó abrir trámite incidental de desacato contra el Gerente General del BANCO POPULAR en auto separado y se negó una solicitud elevada por el apoderado de la parte demandante.

---

[1] «037AutoResuelveSolicitud» Cuaderno Medida Cautelar.

2.2. DE LOS RECURSOS INCOADOS.

Mediante memorial allegado el 23 de abril de 2021[2], la apoderada judicial de la parte demandada interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra el auto proferido el 15 de abril de 2021, aduciendo que acogiendo el atributo de inembargabilidad del que goza la Entidad que representa, debe dejarse sin efectos el auto proferido el 8 de agosto de 2019 en el que se decretó medida cautelar de embargo sobre algunos productos financieros de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

3.1. Del recurso de reposición.

Señala el artículo 318 del Código General del Proceso:

> **«Artículo 318. *PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES*.** Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.
>
> El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.
>
> El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.
>
> El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

[2] «039RecursoReposicion» CuadernoMedidaCautelar.

> Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.
>
> **Parágrafo.** Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente»

3.1.2. Se evidencia entonces, la procedencia del recurso de reposición, el cual fue presentado en tiempo, como quiera que la notificación del auto recurrido se surtió por estado de 16 de abril de 2021[3] y el recurso fue radicado el 23 de abril de 2021.

3.1.3. Ahora bien, observa el Despacho que los argumentos expuestos por la recurrente se encuentran encaminados a que se reponga una decisión que fue adoptada hace más de un año, a saber, el auto proferido el 8 de agosto de 2019[4], en el que se efectuó decreto de medidas cautelares sobre los productos financieros de la Entidad Demandada, decisión que se encuentra ejecutoriada al haberse declarado desierto el recurso de apelación que fuera interpuesto en su contra[5].

En ese orden, el recurso no sólo emerge improcedente e impone su rechazo de plano, como en efecto se hará, sino que evidencia la falta de lealtad procesal de la apoderada judicial quien a través de su actuar demuestra una actitud dilatoria con el presente trámite, pues pretende revivir términos fenecidos en la anualidad 2019, posición que da al traste con los deberes del abogado y raya con la incursión en una eventual conducta sancionable disciplinariamente, por lo que se le requerirá para que se abstenga de interponer escritos dilatorios y sin fundamento legal, so pena de efectuar compulsa de copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

---

[3] «038NotificacionEstado16deAbril» CuadernoMedidaCautelar.
[4] «004AutoDecretaMedidasCautelares» CuadernoMedidaCautelar.
[5] «010AutoDeclaraDesiertoRecurso» CuadernoMedidaCautelar.

3.2. Del recurso de apelación.

Respecto del recurso de apelación interpuesto como subsidiario del de reposición, debe señalarse que, en el auto proferido el 15 de abril de 2021 no se adoptó decisión alguna susceptible de ser discutida mediante el recurso de apelación al tenor de lo dispuesto en el artículo 321 del Código General del Proceso, por lo que será negado por improcedente.

Por todo lo anterior y en consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: RECHÁCESE DE PLANO el recurso de reposición interpuesto por la apoderada judicial de la Entidad Demandada contra el auto proferido el 15 de abril de 2021, por las razones expuestas en esta motiva.

SEGUNDO: REQUIÉRASE a la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA para que se abstenga de interponer escritos dilatorios y sin fundamento legal, so pena de efectuar compulsa de copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que investigue su actuación.

TERCERO: NIÉGASE la concesión del recurso de apelación, conforme a lo expuesto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
4fffa915c3673635da17200c5df2c1cafdee099cae1367cd1ab4f23f10061e24
Documento generado en 03/06/2021 12:04:10 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00066-00**
Demandante:	**CLÍMACO PINILLA POVEDA**
Demandado:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ**
Vinculado:	**CONJUNTO RESIDENCIAL BARILOCHE**
Medio de Control:	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS (Acción Popular)**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante sentencia de 3 de julio de 2019 este Despacho declaró probadas las excepciones de «*predio fuera del área de cobertura y cumplimiento de la norma por parte de la prestadora de servicios públicos*», «*exigencia de requisitos formales al usuario para la prestación del servicio*» y «*Responsabilidad exclusiva de la propiedad*» y amparó los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna de los habitantes y/o propietarios de las viviendas del conjunto residencial Bariloche del Municipio de Fusagasugá, en consecuencia ordenó (folios 2 a 27 del archivo «*0.1 Cuaderno de Verificación de Fallo*»):

> «***TERCERO.- ORDENAR*** *al representante legal de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá "EMSERFUS S.A. E.S.P." autorizar la solución de vertimientos de aguas residuales del Conjunto Residencial Bariloche a la red hidrosanitaria del Barrio ben – Ezer, estableciendo las*

condiciones técnicas para la conexión y suministro del servicio y ejercer la supervisión de las obras de infraestructura de la red secundaria o red local de alcantarillado de dicho conjunto, de conformidad con el inciso 5 del artículo 4 del Decreto 3050 de 2013.

***CUARTO: ORDENAR** al señor JOSÉ CALINO NASSAR CABEZAS, en calidad de propietario y urbanizador del bien inmueble donde se desarrolla el proyecto urbanístico denominado Bariloche realizar las obras de infraestructura de la red secundaria o red local de alcantarillado de dicho conjunto conectándose al pozo denominado V 81 según catastro de redes de la empresa "EMSERFUSA", ubicado en la última cuadra lindante al perímetro urbano de Eben Ezer y proyección de la carrera 64, tubería que se encuentra en 14 pulgadas novafort y que cuenta con una capacidad de 399.43 litros por segundo, asumiendo la totalidad de los costos que genere dicha obra.*

Las anteriores órdenes deberán ser cumplidas dentro de los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria de la presente decisión.

***QUINTO:** Sin condena en costas.*

***SEXTO: CONFÓRMESE** para la verificación del cumplimiento de la sentencia, Comité integrado por las partes, comprendiendo dentro de estas, EL DEFENSOR (A) DEL PUEBLO y el/la PERSONERO (A) MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ, quien le presidirá y deberá rendir informe a este Despacho cada quince (15) días, detallando sobre el avance en la ejecución de las medidas ordenadas.*

***SÉPTIMO:** Para los fines previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, remítase al Defensor del Pueblo copia de la presente decisión.*

***OCTAVO:** Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría iníciese cuaderno de verificación de cumplimiento del fallo, con copia de la sentencia».*

2.2. Por auto de 12 de marzo de 2020 se aceptó la renuncia al poder presentada por el apoderado judicial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA (folios 37 y 38 del archivo «*0.1 Cuaderno de Verificación de Fallo*»).

2.3. Los términos estuvieron suspendidos del 16 de marzo al 1° de julio de 2020 en virtud de la emergencia de salubridad Pública generada por el Covid -19 («*001ConstanciaSuspensionTerminos*»).

2.4. El 26[1] de febrero de 2021 se allegó poder conferido a la doctora LEIDY YOHANA NIETO BANOY por parte del doctor RENÉ BALLEN

[1] Día hábil siguiente a la fecha en que fue radicado

VILLAMARIN en calidad de Gerente de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA, para actuar como apoderada judicial de dicha Entidad dentro del proceso de la referencia (*«002Poder»*).

2.5. El proceso ingresó al Despacho el 24 de mayo de 2021 (*«003ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, como quiera que la sentencia de 3 de julio de 2019 no fue objeto de recursos y además, feneció el término concedido para el cumplimiento de la decisión adoptada por éste Despacho en la mencionada sentencia, resulta pertinente requerir a las partes con el fin de que acrediten el cumplimiento de lo allí ordenado, así como al personero del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ para que aporte los documentos que den cuenta de la conformación del comité de verificación de fallo dentro de la presente actuación.

De otra lado se reconocerá personería adjetiva para actuar a la doctora LEIDY YOHANA NIETO BANOY como apoderada judicial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en el archivo «002Poder».

En consecuencia se **DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRASE al personero del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, para que dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación del presente proveído acredite la conformación del comité de verificación del cumplimiento de la sentencia dentro del presente proceso, así como las acciones desplegadas en aras de su cumplimiento.

SEGUNDO: REQUIÉRASE a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA y al señor JOSÉ CALINO NASSAR CABEZAS

para que dentro del término de cinco (5) días siguientes a la notificación del presente proveído acrediten el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de 3 de julio de 2019 y/o las gestiones desplegadas para su cumplimiento.

TERCERO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar a la doctora LEIDY YOHANA NIETO BANOY como apoderada judicial de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ EMSERFUSA en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en el archivo «002Poder».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
952f7b8ef0e2c7be3b37a2c480e768deb8554b43475b6dea2705705bda0b7ffb
Documento generado en 03/06/2021 12:04:08 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00162-00**
Demandante:	**CLÍMACO PINILLA POVEDA**
Demandado:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
Medio de Control:	**PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS-ACCIÓN POPULAR**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Encontrándose el proceso pendiente de proferir sentencia, mediante auto de mejor proveer de 20 de agosto de 2020 se dispuso oficiar a la Inspección Especializada de Policía del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ para que certificara el estado actual del proceso de contravención urbanística No.353 de 7 de marzo de 2018 «*DIFERENTE A LO CONCEPTUADO EN LA LICENCIA*», adelantado contra el señor JORGE PEÑA PIÑEROS en calidad de Representante Legal de la SOCIEDAD MAKRO VIVIENDA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.S., respecto al CONJUNTO RESIDENCIAL SAN NICOLÁS RESERVADO ETAPA II, ubicado en la calle 23 No. 13-37 del barrio San Mateo, y, allegara la copia íntegra y legible de dicho proceso («*053AutoMejorProveer*»).

1.2. En virtud de los informes allegados por la Inspección Especializada de Policía del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ por auto de de 4 de diciembre de

2020 notificado personalmente ese mismo día a la Inspecció Tercera de Policía y por estado a las partes el 4 de diciembre de 2020, se dispuso (*«063AutoRequiere»*, *«064Notificacion»* y *«065NotificacionEstado»*):

> «***PRIMERO: REQUIÉRESE*** *a la Inspección Tercera de Policía del Municipio de Fusagasugá para que dentro del término de los diez (10) días siguientes a la comunicación del presente proveído i)informe si ya desplegó las acciones necesarias para realizar el "reconocimiento estructural que certifique la integridad estructural y la seguridad del edificio", en la Etapa II del Conjunto Residencial San Nicolás Reservado, ubicado en la calle 23 No.13-37 del barrio San Mateo del Municipio de Fusagasugá, en caso de no contar con el mismo, deberá proceder a realizarlo dentro de los quince (15) días siguientes a la comunicación del presente proveído así también para que ii) allegue el acta correspondiente de la audiencia pública realizada el 23 de septiembre de 2020, dentro del proceso policivo de contravención urbanística No.353 de 7 de marzo de 2018, o en su lugar emita un pronunciamiento de fondo respecto a la orden impartida por este Despacho mediante proveído de 29 de octubre de 2020 y iii) para que allegue la copia del acta de la audiencia realizada el 2 de diciembre de la presente anualidad dentro del proceso de contravención urbanística que nos ocupa».*

1.3. la decision anterior fue objeto de recurso de reposicion y en subsidio el de apelación por parte de la apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, siendo resuelto por el Despachjo en proveído de 5 de febrero de 2021, en donde se mantuvo la decision adoptada en auto de 4 de diciembre de 2020 y se rechazó por improcedednte el recuraso de apelación (*«069AutoResuelveRecurso»*).

1.4. El 4[1] de mayo de 2021 la Inspección Especializada de Policía del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ allegó el oficio No. 126 de 30 de abril de 2021, en donde informó las gestiones adelantadas dentro del proceso policivo No. 353-2018 a saber (*«073EscritoInspeccionTerceraPolicia»*):

> *«• Que el día 31 de agosto, se realizó citación a las partes de audiencia pública la cual se llevaría a cabo el día 23 de septiembre del 2020.*
> *• El día 01 de septiembre de 2020, se realizó visita de inspección ocular al predio ubicado en la calle 23N° 13 – 37 conjunto residencial san Nicolás reservado barrio san mateo de Fusagasugá, con el personal de control urbano adscrito a la secretaria de gobierno.*
> *• Que el día 04 de septiembre de 2020, se da contestación a la solicitud hecha por parte de la dirección de defensa judicial del municipio.*

[1] Si bien fue radicado el 3 de mayo, lo cierto es que se hizo por fuera del horario laboral, por lo que se tiene por radicada al día hábil siguiente.

· Que en el día 07 de septiembre de 2020, fue allegado al despacho de la inspección Tercera de Policía informe técnico del personal de control urbano adscrito a la secretaria de gobierno.

• Que el día 16 de septiembre de 2020, se da contestación Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot.

• Que el día 21 de septiembre fue enviado oficio de aplazamiento de la audiencia pública citada para el día 23 de septiembre de 2020 a las partes, por motivo de que la inspectora MELISSA CASTELLANOS MORENO se encontraba en delicado estado de salud, que desencadeno en cirugía laparoscópica por colicistectomia el día 30 de septiembre de 2020.

• Que el día 29 de octubre de 2020, fue allegado requerimiento del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot.

• El día 09 de noviembre de 2020, se realizó citación a las partes de audiencia pública la cual se llevaría a cabo el día 18 de noviembre del 2020.

• Que el día 11 de noviembre de 2020, se realiza solicitud a la directora de cámara y comercio de Bogotá sede Fusagasugá, para que expida el certificado de existencia y representación legal y certificado de la matricula mercantil de la razón social Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S.

• Que el día 18 de noviembre de 2020, se llevó continuidad de la audiencia pública, la cual fue suspendida para practica de pruebas, y se informa que se dará continuidad el día 02 de diciembre de 2020.

• Que el día 23 de noviembre de 2020, es allegado respuesta por parte del comité de control urbano a la solicitud realizada por este despacho, para dar respuesta al requerimiento Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot.

• Que el día 23 de noviembre de 2020, se da respuesta al requerimiento del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot.

• Que el día 28 de noviembre de 2020, se deja constancia secretarial por parte del técnico jurídico de la inspección de policía, donde se informa que el informe presentado por parte del personal del comité de control urbano no cuenta con metros cuadrados, siendo esto fundamental para el desarrollo del proceso.

• Que el día 30 de noviembre de 2020, se informa a las partes sobre el aplazamiento de la audiencia que se llevaría a cabo el día 02 de diciembre de 2020, por motivo de completar el informe técnico realizado por el personal de control urbano.

• Que el día 04 de diciembre de 2020, es allegado al despacho de la inspección tercera de policía auto que requiere por parte del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot.

• Que el día 05 de febrero de 2021, es allegado respuesta donde se niega recurso interpuesto por la dirección de defensa judicial a través de abogada externa del municipio o asesora del municipio.

• Que el día 30 de marzo del 2021, fue allegado informe técnico por parte del comité de control urbano.

• Que el día 15 de abril de 2021, fue allegado requerimiento por parte del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Girardot.

• Que el día 19 de abril de 2021, se realizó citación a las partes de audiencia pública la cual se llevaría a cabo el día 23 de abril del 2021.

• Que el día 15 de abril de 2021 es allegado requerimiento del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT con numero de OFICIO Nº 00680.

• Que el día 15 de abril de 2021, se pone en conocimiento el requerimiento del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

GIRARDOT al despacho del señor Alcalde del Municipio de Fusagasugá, a través de correo electrónico y ControlDoc con el ID 89328 por parte de la Inspección Tercera de Policía.

- *Que el día 15 de abril de 2021, se pone en conocimiento el requerimiento del JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE GIRARDOT a la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá, a través de correo electrónico y ControlDoc con el ID 89506 por parte de la Inspección Tercera de Policía, de la cual se está a la espera por parte de la Secretaria de Planeación.*
- *Que el día 16 de abril de 2021, el Secretario de Infraestructura del Municipio de Fusagasugá da respuesta informando que dio traslado a la Secretaria de Planeación debido a que esta no cuenta con un ingeniero civil especialista en estructuras.*
- *Que el 23 de abril de 2021, se llevó a cabo la continuidad de la audiencia pública con respecto al proceso 353-2018, en la cual se ofició por parte de este despacho a quien tiene la carga de la prueba, el señor JORGE PEÑA PIÑEROS, representante legal de la empresa Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S. la realización del "reconocimiento estructural que certifique la integridad estructural y la seguridad del edificio".*
- *Que el día 28 de abril de 2021, la Dirección de gestión Humana da respuesta a la solicitud realizada por la Secretaria Jurídica del Municipio de Fusagasugá en la cual informa que 5 personas adscritas a la Alcaldía de Fusagasugá pueden desarrollar estos empleos».*

1.4.1. Por otro lado señaló que en este Despacho se adelanta proceso diferente al proceso policivo No. 353-2018 surgido por comportamientos contrarios a la integridad urbanística tramitado en la Inspección Tercera de Policía, pues refiere que en el proceso policivo según la luz de la normatividad vigente es un proceso autónomo e independiente como lo establece el artículo 4 de la precitada norma, siendo el objetivo principal del proceso, el estipulado en el artículo 135 de la Ley 1801 de 2016, «*Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada, ibídem 2 Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia y su correspondiente, parágrafo 7, Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas numeral 2 Multa especial por infracción urbanística; Demolición de obra; Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble; Remoción de bienes*», cuya finalidad refiere que es determinar si existe la conducta en mención y realizar la imposición de la sanción, pues si bien señala que no desconoce que el personal de control urbano adscrito a la Secretaria de

Gobierno recomendó la «*realización del reconocimiento estructural que certifique la integridad estructural y la seguridad del edificio*», ésta sólo es una recomendación y la Inspección Tercera de Policía se encuentra en la libertad de solicitar las pruebas que considere conducentes, pertinentes y útiles para el proceso policivo en mención, destacando que la mencionada prueba no contribuye con el fin último del proceso policivo.

1.4.2. Sin embargo menciona que por orden directa de este Despacho, sin entender los motivos, pues considera que en el proceso administrativo ya se superó la etapa probatoria, y que la Inspección Tercera de Policía no es parte dentro del proceso, y que si en uso de las facultades se decretaren pruebas de oficio, le corresponde a las partes practicarlas, teniendo en cuenta que la Inspección Tercera de Policía del municipio de Fusagasugá no cuenta con el personal idóneo ni el presupuesto para la realización de la prueba de «*reconocimiento estructural que certifique la integridad estructural y la seguridad del edificio*», más aún cuando la precitada prueba no se requiere que obre dentro del proceso policivo por no ser conducente, sí ha desplegado todas las acciones a su alcance para el cumplimiento del auto emanado por este juzgado para el efecto señala que en virtud del primer requerimiento se corrió traslado al comité de control urbano y ante su incapacidad de practicarla se comunicó al juzgado, posteriormente, se realizó reunión con la secretaria jurídica dando como resultado la decisión de interponer recurso de reposición en subsidio el de apelación, pero que ante la improcedencia del mencionado recurso y la insistencia de este Despacho, se realizó la gestión ante otras dependencias con mayor capacidad institucional, comunicándose al Despacho de alcalde y a la Secretaría de Infraestructura, y en la audiencia realizada el 23 de abril de 2021, se decretó de oficio la práctica de la mencionada prueba, para ser cumplida por la parte querellada, señor JORGE PEÑA PIÑEROS representante legal de la empresa Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S., señalando que de este modo agotó todas las gestiones posibles por su parte.

1.5. El proceso ingresó al Despacho el 10 de mayo de 2021 («*074ConstanciaDespacho*»).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En virtud de lo anterior, encuentra el Despacho que la doctora MELISSA MARILLAC LORENA CASTELLANOS MORENO, en calidad de Inspectora Tercera de Policía del Municipio de Fusagasugá, con el fin de obtener el «*reconocimiento estructural que certifique la integridad estructural y la seguridad del edificio*», en la Etapa II del Conjunto Residencial San Nicolás Reservado, ubicado en la calle 23 No. 13-37 del barrio San Mateo del Municipio de Fusagasugá, realizó las siguientes actuaciones:

- En audiencia pública de 23 de abril de 2021 decretó de oficio a instancia del señor JORGE PEÑA PIÑEROS el «*reconocimiento estructural que certifique la integridad estructural y la seguridad del edificio, ubicado en la calle 23N° 13-37 conjunto residencial san Nicolás reservado, barrio san mateo de Fusagasugá*», decisión que fue objetada por el apoderado judicial del querellado. Se programó como nueva fecha para practica de pruebas el 19 de mayo de 2021 (folio 129 a 132 «*073EscritoInspeccionTerceraPolicia*»).

- Requerimiento No. 00089328 de 15 de abril de 2021 dirigido al alcalde Municipal de Fusagasugá, doctor JOHN JAIRO HORTUA VILLALBA poniendo en conocimiento la solicitud realizada por el Despacho consistente en el «*reconocimiento estructural que certifique la integridad estructural y la seguridad del edificio en la Etapa II del Conjunto Residencial San Nicolás Reservado, ubicado en la calle 23 No. 13-37 del barrio San Mateo del Municipio de Fusagasugá*» (folio 141 a 143 «*073EscritoInspeccionTerceraPolicia*»).

- Requerimiento No. 00089506 de 15 de abril de 2021 dirigido al secretario de infraestructura del Municipio de Fusagasugá, ingeniero ALEJANDRO PATARROYO MORALES poniendo en conocimiento la solicitud realizada por el Despacho para darle cumplimiento consistente en el «*reconocimiento estructural que certifique la integridad estructural y la seguridad del edificio en la Etapa II del Conjunto Residencial San Nicolás Reservado, ubicado en la calle 23 No. 13-37 del barrio San Mateo del Municipio*

de Fusagasugá», petición que se advierte fue trasladada a la Secretaría de Planeación Municipal (folio 144 a 146 *«073EscritoInspeccionTerceraPolicia»*).

Así también, se advierte que mediante el oficio No. 00091826 de 28 de abril de 2021 el director de Gestión Humana del Municipio de Fusagasugá, doctor HUGO GÓMEZ MORALES, indicó que en atención al requerimiento vía whatssap consistente en «*…Revisar en el manual de funciones… hay algún funcionario de planta que pueda atender el requerimiento al juzgado…*" "*…acciones necesarias para realizar el "reconocimiento estructural que certifique la integridad estructural y la seguridad del edificio", en la Etapa II del Conjunto Residencial San Nicolás Reservado, ubicado en la calle 23 No. 13-37 del barrio San Mateo del Municipio de Fusagasugá»*, encontró que en el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ la autoridad competente para dirigir y orientar las labores de control urbano de su competencia es la Secretaría de Planeación, igualmente, la DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL tiene establecida dentro de sus funciones la de coordinar las labores de control urbano en el Municipio de competencia de la Secretaría, dirección que, aduce, cuenta con dos profesionales universitarios 219-05 que tienen labores relacionadas dentro de sus funciones y dos profesionales universitarios 219-03 últimos que tienen como función la de realizar visitas para expedir conceptos técnicos sobre obras ejecutadas en contravención de la norma (folio 147 y 148 *«073EscritoInspeccionTerceraPolicia»*).

En ese orden, teniendo en cuenta que no ha sido posible obtener el «*reconocimiento estructural que certifique la integridad estructural y la seguridad del edificio*», en la Etapa II del Conjunto Residencial San Nicolás Reservado, ubicado en la calle 23 No. 13-37 del barrio San Mateo del Municipio de Fusagasugá, la cual fue recomendada en el informe No. 20200167-063 de 4 de septiembre de 2020 en virtud de la visita de inspección ocular No. 063 realizada el 1° de septiembre de 2020 dentro del proceso de contravención urbanística, resulta procedente requerir a la INSPECCIÓN TERCERA DE POLICÍA DE FUSAGASUGÁ para que informe sobre la prueba decretada de oficio a instancia del señor PEÑA PIÑEROS, en la audiencia pública realizada el 23 de

abril de 2021, asimismo deberá allegar el acta de la audiencia programada para el 19 de mayo hogaño.

Igualmente, deberá indicar y aportar las respuestas y/o pronunciamientos emitidos por el alcalde y el secretario de infraestructura del Municipio de Fusagasugá en atención a los oficios No. 00089328 y No. 00089506 de 15 de abril de 2021.

En consecuencia se **DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a la Inspección Tercera de Policía del Municipio de Fusagasugá para que dentro del término de los quince (15) días siguientes a la comunicación del presente proveído:

- Informe sobre el estado del recaudo de la prueba decretada de oficio a instancia del señor PEÑA PIÑEROS, en la audiencia pública realizada el 23 de abril de 2021, consistente en el «*reconocimiento estructural que certifique la integridad estructural y la seguridad del edificio*», en la Etapa II del Conjunto Residencial San Nicolás Reservado, ubicado en la calle 23 No. 13-37 del barrio San Mateo del Municipio de Fusagasugá.

- Allegue el acta de la audiencia programada para el 19 de mayo de 2021.

- Indique y aporte las respuestas y/o pronunciamientos emitidos por el alcalde y el secretario de infraestructura del Municipio de Fusagasugá en atención a los oficios No. 00089328 y No. 00089506 de 15 de abril de 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO

JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
d7797945b0d3dad1eaead2154ca18c904eafbbc1ec5a6571c304cdfa94f0b701
Documento generado en 03/06/2021 11:52:59 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00188-00**
Demandante:	**LUZ MARINA MOYA DE ESPINOSA**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

El 26 de marzo de 2021 se profirió auto requiriendo a la apoderada judicial de la parte demandante para que allegara la liquidación del crédito, pues al tenor de lo estipulado en el artículo 446 del Código General del Proceso, ésta debe ser aportada por las partes[1].

El 31 de mayo de 2021 ingresó el expediente a Despacho informando que la apoderada judicial no allegó lo requerido[2].

En ese orden, encuentra el Despacho que, como quiera que, se reitera, la liquidación del crédito es una actuación que debe ser realizada por la parte interesada, no hay actuación alguna que deba ser adelantada por la directora del proceso, por lo que por se **ORDENA** que el expediente **PERMANEZCA EN SECRETARÍA** hasta que se allegue actuación adicional de cualquiera de las partes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

---

[1] «032AutoRequiere» Co1Principal
[2] «034ConstanciaDespacho» Co1Principal

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
c78af9b0d7b191baeab6e632869f561305422dad0bf47460b8cacf098cd18812
Documento generado en 03/06/2021 12:04:11 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00189-00**
Demandante:	**PAULINA HELENA LOZANO DE LOZANO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

El 26 de marzo de 2021 se profirió auto requiriendo a la apoderada judicial de la parte demandante para que allegara la liquidación del crédito, pues al tenor de lo estipulado en el artículo 446 del Código General del Proceso, ésta debe ser aportada por las partes[1].

El 31 de mayo de 2021 ingresó el expediente a Despacho informando que la apoderada judicial no allegó lo requerido[2].

En ese orden, encuentra el Despacho que, como quiera que, se reitera, la liquidación del crédito es una actuación que debe ser realizada por la parte interesada, no hay actuación alguna que deba ser adelantada por la directora del proceso, por lo que por se **ORDENA** que el expediente **PERMANEZCA EN SECRETARÍA** hasta que se allegue actuación adicional de cualquiera de las partes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

---

[1] «031AutoRequiere» Co1Principal
[2] «033ConstanciaDespacho» Co1Principal

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3e34d14a1670b394ec161c0d35427ae527d4b1e6859415e7a5d346cfca91439b
Documento generado en 03/06/2021 12:04:12 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00190-00**
Demandante:	**CLAUDIA EPIFANIA MORA GARZÓN**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

El 9 de abril de 2021 se radicó la Escritura Pública No. 522 de 28 de marzo de 2019 de la NOTARÍA 34 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C., en la que el doctor LUIS GUSTAVO FIERRO MAYA a quien se facultó por la MINISTRA DE EDUCACIÓN mediante Resolución No. 002029 de 4 de marzo de 2019 para otorgar poder general para la defensa de los intereses de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, otorga poder al doctor LUIS ALFREDO SANABRIA RÍOS para que represente a la Entidad en calidad de apoderado judicial. En ese orden, **TÉNGASE y RECONÓZCASE** al doctor LUIS ALFREDO SANABRIA RÍOS identificado con cédula de ciudadanía No. 80.211.391 y Tarjeta Profesional No. 250.292 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO en los términos y para los fines del poder conferido visible en los folios 9 a 33 del archivo «005SolicitudDemandada» del Cuaderno de Medidas Cautelares.

En el mismo escrito se aportó escrito de sustitución realizado por el doctor LUIS ALFREDO SANABRIA RÍOS a la doctora JEIMMY ALEJANDRA OVIEDO CRISTANCHO. En consecuencia, **TÉNGASE** a la doctora JEIMMY ALEJANDRA OVIEDO CRISTANCHO identificada con cédula de ciudadanía

No. 1.057.596.018 y Tarjeta Profesional No. 299.477 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada sustituta de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO en los términos y para los fines del escrito de sustitución visible en el folio 8 del archivo reseñado.

Finalmente, se observa que la mencionada apoderada judicial radicó solicitud de levantamiento de embargo, pretendiendo que el Despacho declare la inembargabilidad de los recursos de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISGTERIO, advirtiendo que por mandato de la ley debe procederse en tal sentido.

Al respecto se encuentra con relevancia que si bien en el auto proferido el 26 de marzo de 2021[1] se decretó el embargo de los dineros que por cualquier concepto tenga la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓNFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO en las Entidades Bancarias que allí se relacionaron, también se aclaró que *«Se exceptúan de la medida de embargo, las cuentas que tengan el carácter de inembargables, teniendo en cuenta la destinación de los dineros»*, motivo por el cual la solicitud elevada deviene improcedente, como quiera que el Despacho ha tenido en cuenta el carácter especial que ostentan los recursos de la Entidad Demandada, por lo que se **NIEGA**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

[1] «003AutoDecretaMedida» C02MedidaCautelar

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
30fdc594094b449a1a43b598aff67539b714a5422f77a6d67337ab5180967009
Documento generado en 03/06/2021 12:04:13 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00190-00**
Demandante:	**CLAUDIA EPIFANIA MORA GARZÓN**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

El 26 de marzo de 2021 se profirió auto requiriendo a la apoderada judicial de la parte demandante para que allegara la liquidación del crédito, pues al tenor de lo estipulado en el artículo 446 del Código General del Proceso, ésta debe ser aportada por las partes[1].

El 31 de mayo de 2021 ingresó el expediente a Despacho informando que la apoderada judicial no allegó lo requerido[2].

En ese orden, encuentra el Despacho que, como quiera que, se reitera, la liquidación del crédito es una actuación que debe ser realizada por la parte interesada, no hay actuación alguna que deba ser adelantada por la directora del proceso, por lo que por se **ORDENA** que el expediente **PERMANEZCA EN SECRETARÍA** hasta que se allegue actuación adicional de cualquiera de las partes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

---

[1] «030AutoRequiere» Co1Principal
[2] «032ConstanciaDespacho» Co1Principal

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
e0aad21af76ee0afc8567a16ec22f5057a27ce0f1ba7ef8f7100e290f321bdc6
Documento generado en 03/06/2021 12:04:14 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-33-33-001-2018-00191-00**
Demandante:	**JULIA ASTRID SILVA MONTOYA**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Habiéndose requerido a la apoderada judicial de la parte demandante en el auto de 22 de abril de 2021[1] para que aclarara el proceso para el cual radicó la solicitud de medidas cautelares el 19 de febrero de 2021 al haberse evidenciado que el radicado enunciado no correspondía a las partes del proceso, fue radicado escrito con el que este Despacho colige que la togada pretende subsanar su error, pues no mencionó al respecto. En ese orden se tiene:

El 26 de abril de 2021[2], la apoderada judicial de la parte demandante solicitó el embargo y retención de las sumas de dinero depositadas a nombre de la Demandada a cualquier título en las siguientes Entidades Bancarias:

Banco Agrario de Colombia
Banco Davivienda
Banco de Bogotá
Bancolombia
Banco BBVA

[1] «006AutoRequiere» Co2MedidaCautelar
[2] «008EscritoDemandante» Co2MedidaCautelar

Banco AV Villas
Banco Colpatria
Banco Caja Social
Banco Popular
Banco de Occidente
Banco Citibank
Banco GNB Sudameris
Banco Pichincha
Banco Scotiabank

El 31 de mayo de 2021 ingresó el proceso a Despacho para emitir pronunciamiento al respecto.

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 599 del Código General del Proceso[3], es procedente la anterior solicitud y por lo tanto se decretará la medida cautelar, quedando limitada a la suma de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($21.375.297.54).

---

[3] *ARTÍCULO 599. EMBARGO Y SECUESTRO. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.*
Cuando se ejecute por obligaciones de una persona fallecida, antes de liquidarse la sucesión, sólo podrán embargarse y secuestrarse bienes del causante.
El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.*
En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente del límite mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia.
En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito.
La caución a que se refiere el artículo anterior, no procede cuando el ejecutante sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad de derecho público.
Cuando se trate de caución expedida por compañía de seguros, su efectividad podrá reclamarse también por el asegurado o beneficiario directamente ante la aseguradora, de acuerdo con las normas del Código de Comercio.
Parágrafo. El ejecutado podrá solicitar que de la relación de bienes de su propiedad e ingresos, el juez ordene el embargo y secuestro de los que señale con el fin de evitar que se embarguen otros, salvo cuando el embargo se funde en garantía real. El juez, previo traslado al ejecutante por dos (2) días, accederá a la solicitud siempre que sean suficientes, con sujeción a los criterios establecidos en los dos incisos anteriores.

Ahora bien, resulta necesario advertir que se exceptúan de la medida de embargo, las cuentas que tengan el carácter de inembargables, teniendo en cuenta la destinación de los dineros.

Así mismo, como quiera que en el presente asunto se cuenta con auto ejecutoriado que ordenó seguir adelante con la ejecución, las mencionadas entidades deberán poner los dineros retenidos a disposición del Juzgado; para lo anterior, infórmesele a las entidades bancarias que las sumas embargadas deberán ser consignadas mediante título judicial en la cuenta del Banco Agrario No. 253072045001, precisando los nombres e identificación de los sujetos procesales.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado **DISPONE:**

PRIMERO: DECRÉTESE EL EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que por cualquier concepto tenga la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en las siguientes Entidades Bancarias:

Banco Agrario de Colombia
Banco Davivienda
Banco de Bogotá
Bancolombia
Banco BBVA
Banco AV Villas
Banco Colpatria
Banco Caja Social
Banco Popular
Banco de Occidente
Banco Citibank
Banco GNB Sudameris
Banco Pichincha
Banco Scotiabank

Por Secretaría, **OFÍCIESE. Se exceptúan de la medida de embargo, las cuentas que tengan el carácter de inembargables, teniendo en cuenta la destinación de los dineros.**

SEGUNDO: LIMÍTESE la medida en la suma de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($21.375.297.54), para ello, infórmese a las entidades que deberán constituir el título judicial a la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario Nº 253072045001, precisando los nombres e identificación de los sujetos procesales. Para lo anterior remítase copia de la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
2dcd310659ba787e31faf37f4fda1e97cf0c1cbd599ed6f8264015df85985b4a
Documento generado en 03/06/2021 12:04:14 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00191-00**
Demandante:	**JULIA ASTRID SILVA MONTOYA**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

El 26 de marzo de 2021 se profirió auto requiriendo a la apoderada judicial de la parte demandante para que allegara la liquidación del crédito, pues al tenor de lo estipulado en el artículo 446 del Código General del Proceso, ésta debe ser aportada por las partes[1].

El 31 de mayo de 2021 ingresó el expediente a Despacho informando que la apoderada judicial no allegó lo requerido[2].

En ese orden, encuentra el Despacho que, como quiera que, se reitera, la liquidación del crédito es una actuación que debe ser realizada por la parte interesada, hecho en virtud del cual no puede tenerse como tal la enunciación de la causación de dos mesadas adicionales realizada en la solicitud elevada el 26 de abril de 2021 que obra en el cuaderno de medidas cautelares[3], no hay actuación alguna que deba ser adelantada por la directora del proceso, por lo

[1] «032AutoRequiere» Co1Principal
[2] «034ConstanciaDespacho» Co1Principal
[3] «008EscritoDemandante» Co2MedidaCautelar

que por se **ORDENA** que el expediente **PERMANEZCA EN SECRETARÍA** hasta que se allegue actuación adicional de cualquiera de las partes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
e77ad3065fdbdf1360a1d4a04853f1cf8376b54ac797d4c14865ebc603d60666
Documento generado en 03/06/2021 11:53:00 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-33-33-001-2018-00193-00**
Demandante:	**GLORIA JEANET BARRAGÁN MORENO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

El 26 de abril de 2021[1], la apoderada judicial de la parte demandante solicitó el embargo y retención de las sumas de dinero depositadas a nombre de la Demandada a cualquier título en las siguientes Entidades Bancarias:

Banco Agrario de Colombia
Banco Davivienda
Banco de Bogotá
Bancolombia
Banco BBVA
Banco AV Villas
Banco Colpatria
Banco Caja Social
Banco Popular
Banco de Occidente
Banco Citibank
Banco GNB Sudameris
Banco Pichincha
Banco Scotiabank

[1] «001SolicitudMedidaCautelar» Co2MedidaCautelar.

El 24 de mayo de 2021 ingresó el proceso a Despacho para emitir pronunciamiento al respecto.

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 599 del Código General del Proceso[2], es procedente la anterior solicitud y por lo tanto se decretará la medida cautelar, quedando limitada a la suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATROS PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($18.940.364.9).

Ahora bien, resulta necesario advertir que se exceptúan de la medida de embargo, las cuentas que tengan el carácter de inembargables, teniendo en cuenta la destinación de los dineros.

Así mismo, como quiera que en el presente asunto se cuenta con auto ejecutoriado que ordenó seguir adelante con la ejecución, las mencionadas entidades deberán poner los dineros retenidos a disposición del Juzgado; para lo anterior, infórmesele a las entidades bancarias que las sumas embargadas

---

[2] *ARTÍCULO 599. EMBARGO Y SECUESTRO. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.*
Cuando se ejecute por obligaciones de una persona fallecida, antes de liquidarse la sucesión, sólo podrán embargarse y secuestrarse bienes del causante.
El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.*
En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente del límite mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia.
En los procesos ejecutivos, el ejecutado que proponga excepciones de mérito o el tercer afectado con la medida cautelar, podrán solicitarle al juez que ordene al ejecutante prestar caución hasta por el diez por ciento (10%) del valor actual de la ejecución para responder por los perjuicios que se causen con su práctica, so pena de levantamiento. La caución deberá prestarse dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del auto que la ordene. Contra la providencia anterior, no procede recurso de apelación. Para establecer el monto de la caución, el juez deberá tener en cuenta la clase de bienes sobre los que recae la medida cautelar practicada y la apariencia de buen derecho de las excepciones de mérito.
La caución a que se refiere el artículo anterior, no procede cuando el ejecutante sea una entidad financiera o vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o una entidad de derecho público.
Cuando se trate de caución expedida por compañía de seguros, su efectividad podrá reclamarse también por el asegurado o beneficiario directamente ante la aseguradora, de acuerdo con las normas del Código de Comercio.
Parágrafo. El ejecutado podrá solicitar que de la relación de bienes de su propiedad e ingresos, el juez ordene el embargo y secuestro de los que señale con el fin de evitar que se embarguen otros, salvo cuando el embargo se funde en garantía real. El juez, previo traslado al ejecutante por dos (2) días, accederá a la solicitud siempre que sean suficientes, con sujeción a los criterios establecidos en los dos incisos anteriores.

deberán ser consignadas mediante título judicial en la cuenta del Banco Agrario No. 253072045001, precisando los nombres e identificación de los sujetos procesales.

Por lo expuesto, el Juzgado **DISPONE:**

PRIMERO: DECRÉTESE EL EMBARGO Y RETENCIÓN de los dineros que por cualquier concepto tenga la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en las siguientes Entidades Bancarias:

Banco Agrario de Colombia
Banco Davivienda
Banco de Bogotá
Bancolombia
Banco BBVA
Banco AV Villas
Banco Colpatria
Banco Caja Social
Banco Popular
Banco de Occidente
Banco Citibank
Banco GNB Sudameris
Banco Pichincha
Banco Scotiabank

Por Secretaría, **OFÍCIESE.** Se exceptúan de la medida de embargo, las cuentas que tengan el carácter de inembargables, teniendo en cuenta la destinación de los dineros.

SEGUNDO: LIMÍTESE la medida en la suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATROS PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($18.940.364.9), para ello, infórmese a las entidades que deberán constituir el título judicial a la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario Nº 253072045001, precisando los nombres e

identificación de los sujetos procesales. Para lo anterior remítase copia de la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7626da80c48e8e1e03bd2658b7bddec43bcf44f47ed6fcfdb6fea3329174ff0a
Documento generado en 03/06/2021 12:04:16 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2018-00196-00**
Demandante:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
Demandado:	**JOSÉ NILSON TAPIERO ALAPE**
Medio de Control:	**CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**

Juez: **Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. El 30 de agosto de 2017 el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ radicó demanda de restitución de inmueble ante el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ, contra el señor JOSÉ NILSON TAPIERO ALAPE con el fin de que se declare terminado el contrato de arrendamiento sobre el local No. 198 ubicado en el segundo piso de la Plaza de Mercado por la mora en el pago de las rentas y en consecuencia se orden la entrega del local (archivo «*002DemandaPoderAnexos*» del cuaderno principal y «*001ActaReparto*» del cuaderno «*003ActuacionJuzgado2CivilMunicipalFusagasuga*»).

1.2. El JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ mediante auto de 5 de septiembre de 2017 admitió la demanda de restitución de inmueble arrendado instaurada por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ contra el señor JOSÉ NILSON TAPIERO ALAPE (archivo «*003AutoAdmite*» del cuaderno «*003ActuacionJuzgado2CivilMunicipalFusagasuga*»).

1.3. Mediante auto de 6 de febrero de 2018 el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ tuvo por notificado por conducta concluyente al señor JOSÉ NILSON TAPIERO ALAPE el 19 de diciembre de 2017 en virtud al escrito allegado por éste en donde manifestó que desde el año 2009 realizó la entrega del inmueble frente al cual se pretende la restitución, motivo por el cual al existir incertidumbre, dicho Despacho convocó a audiencia para escuchar al demandado (archivos *«004OficioDemandado»*, *«005AutoTieneNotifConducConcluyente»* del cuaderno *«003ActuacionJuzgado2CivilMunicipalFusagasuga»*).

1.4. El 7 de junio de 2018 fecha fijada por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ para escuchar al demandado, se puso de presente que el mismo no había comparecido, así también, se declaró la falta de jurisdicción y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Girardot (Reparto) para su conocimiento (archivo *«006AudienciaInicialJdo2CivilMpalFusa»* del cuaderno *«003ActuacionJuzgado2CivilMunicipalFusagasuga»*).

1.5. El proceso fue recibido ante los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE GIRARDOT el 26 de junio de 2018 correspondiendo su conocimiento a este Despacho, avocándose conocimiento mediante proveído de 27 de julio siguiente, en donde además se fijó fecha para realizar la audiencia inicial y se requirió al señor JOSÉ NILSON TAPIERO ALAPE para que constituyera apoderado judicial, dicha fecha fue modificada mediante auto de 6 de diciembre de 2018 (archivos *«004ActaReparto»*, *«006AutoAvoca»* y *«012AutoCitaAudienciaInicial»*).

1.6. El 5 de junio de 2019 se realizó la audiencia bajo los apremios del artículo 384 del Código General del Proceso y demás normas concordantes que remiten al artículo 372 ibídem con la comparecencia del apoderado judicial del demandante, el Ministerio Público, el demandado señor José Nilson Tapiero Alape, en donde se recaudó el interrogatorio de parte del demandado, y se decretaron como pruebas de oficio *i)* la de oficiar a la Administradora de la Plaza de Mercado con el fin de que indique quién ha utilizado el local No. 198

del segundo piso de la plaza de mercado desde el año 2005 hasta la fecha, *ii)* la de oficiar al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ para que allegara copia de la carpeta con los antecedentes y ejecuciones del contrato de arrendamiento No. 420-2005 firmado por dicha entidad y el señor JOSÉ NILSON TAPIERO y *iii)* a la SECRETARÍA DE HACIENDA MUNICIPAL para que certificara los montos adeudados por el señor JOSÉ NILSON TAPIERO especificando los conceptos y valores, así también a instancia de la parte demandante decretó el testimonio de la señora Alexandra Bustos (archivo «*013AudienciaInicial*»).

1.6.1. En virtud de lo anterior el 12 de julio de 2019 el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ allegó certificación de los valores adeudados por el señor JOSÉ NILSON TAPIERO ALAPE por concepto de canon de arrendamiento a fecha de corte 5 de julio de 2019, sobre el bien inmueble objeto de restitución (archivo «*014OficioMunicipioFusagasuga*»).

1.6.2. El 18 de julio de 2019 se allegó certificación por parte de la Profesional Universitario de la Plaza de Mercado, doctora FLOR MARINA PINZÓN HERRERA en donde indicó que «*desde el año 2005 figura como arrendatario del local No. 198 ubicado en el Segundo Piso de la Plaza de Mercado Central de Fusagasugá. En la actualidad, verificada la ocupación quien viene explotando económicamente y utilizando el local en mención es la señora Luz Marina Tapiero, hermana del arrendatario*» (archivo «*015OficioAdministradoraPlaza*»).

1.7. Por auto de 5 de septiembre de 2019 se requirió nuevamente al MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ para que allegara la copia de la carpeta con los antecedentes y ejecuciones del contrato de arrendamiento No. 420-2005 (archivo «*016AutoRequierePrueba*»).

1.8. El 13 de septiembre de 2019 se allegó por el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ la documental requerida (archivo «*018OficioMpioFusagasuga*»).

1.9. Por auto de 13 de diciembre de 2019 el Despacho adecúo la demanda al medio de control de controversias contractuales y requirió al señor JOSÉ

NILSON TAPIERIO ALAPA para que constituyera apoderado judicial o en su lugar, solicitar el amparo de pobreza (archivo «*020AutoRequiere*»).

1.10. Mediante auto de 12 de noviembre de 2020 se ordenó que por Secretaría se organizara el expediente, seguidamente, mediante auto de 4 de marzo de 2021 se dispuso requerir al señor JOSÉ NILSON TAPIERO ALAPE para que constituyera apoderado judicial o, en su defecto solicitara el amparo de pobreza (archivos «*026AutoCumplase*» y «*028AutoRequiere*»).

1.10.1. En cumplimiento de lo anterior, por Secretaría se remitió el oficio No. 00355 de 16 de marzo de 2021 dirigido al señor JOSÉ NILSON TAPIERO a la carrera 1 No. 15B-38 B/Los Robles de Fusagasugá, el cual fue enviado a través de la empresa de correo certificado 4/72 quien realizó la devolución del mismo con anotación «*No reside*» (archivos «*030OficioRequiere*», «*031PlanillaEnvioFisico*», «*032GuiaOficio*», «*033TrazabilidadWeb*» y «*034DevolucionOficio*»).

2.11. El 24 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer («*035ConstanciaDespacho*»).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En virtud de lo anterior, se encuentra que dentro del proceso de la referencia se está a la espera de la constitución de apoderado judicial por parte del demandado señor JOSÉ NILSON TAPIERO ALAPE en aras de no transgredir el derecho de defensa y contradicción que le asiste, por lo que en efecto se ha requerido por parte del Despacho a la carrera 1° No. 15B-38 del Barrio los Robles en el Municipio de Fusagasugá siendo infructuosa su entrega. No obstante, pese que dicha dirección fue suministrada por el mismo demandado en escrito allegado al Juzgado Segundo Civil Municipal de Fusagasugá, lo cierto es que en la audiencia realizada el 5 de junio de 2019 bajo los apremios del artículo 384 del Código General del Proceso y demás normas concordantes que remiten al artículo 372 ibídem, el señor JOSÉ NILSON TAPIERO ALAPE suministró los siguientes datos de contacto celular 3203258328 y en la finca

carrera 12-495 norte de Fusagasugá, direcciones a las cuales no se advierte se haya comunicado los autos en donde se le requirió para que constituyera apoderado judicial, por lo que deberá procederse a conformidad.

En consecuencia, se **DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE Y OFICIÉSE al señor JOSÉ NILSON TAPIERO a la finca carrera 12-495 norte de Fusagasugá, e **INTÉNTESE** comunicación al abonado telefónico 3203258328 para que, en el término máximo e improrrogable de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a constituir apoderado judicial o en su defecto, solicite el amparo de pobreza.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
02edc5dadaa42bcd5ad8ad51d4ab75686b89f1200e7074ba161f469f6bcacde7
Documento generado en 03/06/2021 12:03:35 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2018-00197-00**
DEMANDANTE:	**HÉCTOR IVÁN TORRES RAMÍREZ**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Advierte el Despacho que el presente proceso se encuentra en la etapa probatoria, pendiente de recaudar las pruebas decretadas en la audiencia inicial[1] realizada el 10 de diciembre de 2019, consistentes en:

> «***7.1.2. OFÍCIESE*** *al* ***COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL*** *para que en el término de 10 días contados a partir del día siguiente al recibo del oficio de solicitud: 1) Informe a que curso pertenencia el señor* ***HÉCTOR IVÁN TORRES RAMÍREZ,*** *2) copia del escalafón de suboficiales correspondiente al curso al cual perteneció el sargento* ***HÉCTOR IVÁN TORRES RAMÍREZ,*** *en el último año de Sargento Segundo y la totalidad de años en el grado de Sargento Viceprimero, 3) copia de las resoluciones de ascenso del curso 61 al grado de Sargento Viceprimero o al que corresponda»*

En ese orden, con el fin de obtener las pruebas decretadas el Despacho ha desplegado las siguientes actuaciones:

---

[1] «*031AudienciaInicial*»

- Por oficio No. 00061 de 27 de enero de 2020 se ofició en tal sentido a al COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL (*«032OficioSecretariaRequierePrueba27Ener2019»*).

- Mediante auto de 9 de julio de 2020 por segunda vez se requirió al COMANDO DEL EJÉRCITO NACIONAL para que allegara las pruebas decretadas en la audiencia inicial (*«035AutoRequiere»*).

- El 13 de octubre de 2020 por secretaría se libró en tal sentido, el oficio No. 0159 dirigido al COMANDO del EJERCITO NACIONAL (*«040OficioRequiere»*).

- Nuevamente, mediante el oficio No. 0105 de 24 de febrero de 2021 se requirió al COMANDO del EJERCITO NACIONAL para que allegara las pruebas decretadas en la audiencia inicial (*«042OficioRequiere»*).

En este punto, debe tenerse en cuenta que los términos judiciales estuvieron suspendidos por disposición expresa del Consejo Superior de la Judicatura[2] desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 en atención a la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia que generó el COVID-19.

En virtud de los anteriores requerimientos, sólo hasta el 24 de mayo de 2021 se allegó por parte de la apoderada judicial de la demandada el oficio No. 2020305002343581 de 30 de diciembre de 2020 suscrito por la MAYOR BERTHA PERDOMO ÁVILES en calidad de Oficial de la Sección Jurídica donde indicó:

> *«**Enunciado 1** Me permito informar que una vez consultado el sistema de Administración del Talento Humano (SIATH) en la Dirección de Personal y verificando la información del señor SV® HÉCTOR IVÁN TORRES RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.314.507, ingresó al escalafón con el grado de CABO SEGUNDO de acuerdo a disposición*

[2] Que concluyeron con la suspensión de los términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de hogaño mediante los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567.

> *No. 113 del 10 de agosto de 1997 perteneciendo al curso No. 61 de Suboficiales del Ejército Nacional.*
>
> ***Enunciado 2*** *Me permito informar una vez revisado el archivo físico y digital, no se encontró registro alguno referente a la documentación relacionada con el escalafón del curso No. 61, así mismo anexo copia del certificado de tiempo, donde consta las novedades, disposiciones y el total de tiempo que el señor SV® HÉCTOR IVÁN TORRES RAMÍREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 7.314.507 desde que ingreso a la Institución.*
>
> ***Enunciado 3*** *Anexo copia tomadas de la original de la Orden Administrativa de Personal No. 1663 de fecha 01 de septiembre de 2011, por la cual se asciende al Grado de Sargento Viceprimero a un personal de Suboficiales del Ejército Nacional»*

En ese orden, resulta procedente poner en conocimiento de las partes el oficio No. 2020305002343581 de 30 de diciembre de 2020 suscrito por la MAYOR BERTHA PERDOMO ÁVILES en calidad de Oficial de la Sección Jurídica, junto con la documental anexa, allegado el 24 de mayo de 2021 y obrante en el archivo «*045EscritoEjercito*».

En consecuencia **SE DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de las partes por el término de tres (3) días, el oficio No. 2020305002343581 de 30 de diciembre de 2020 suscrito por la MAYOR BERTHA PERDOMO ÁVILES en calidad de Oficial de la Sección Jurídica, junto con la documental anexa, allegado el 24 de mayo de 2021 y obrante en el archivo «*045EscritoEjercito*».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
2e744ff61fb43622840b5a5be3e457a6506c33b31ee7d96d5e2590aeb7c3e3ef
Documento generado en 03/06/2021 12:03:36 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2018-00199-00**
DEMANDANTE:	**MUNICIPIO DE RICAURTE**
DEMANDADO:	**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARÍA DE HACIENDA**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 15 de abril de 2021 notificado por Estado No. 15 al día siguiente el Despacho requirió *i)* a los apoderados judiciales de las partes para que manifestaran si el MUNICIPIO DE RICAURTE ha pagado suma alguna por concepto del impuesto sobre el vehículo motocicleta con placa PRP89A para la vigencia 2012, y *ii)* al apoderado judicial del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA para que allegara copia de la Ordenanza No. 074 de 2018 y en el caso de ser procedente la constancia de cierre y/o de archivo del expediente de determinación del impuesto sobre el vehículo automotor oficial identificado con placa PRP89A para la vigencia 2012 (*«041AutoRequiere»* y *«042NotificacionEstado16Abril»*).

1.2. En virtud del anterior requerimiento, el 16 de abril de 2021 el apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE allegó el oficio de 19 de marzo de 2021 suscrito por la Secretaría de Hacienda Municipal, en donde se señaló lo siguiente (*«043EscritoMunicipio»*):

> «*El municipio de Ricaurte, no ha cancelado suma alguna por concepto de impuesto sobre el vehículo automotor oficial identificado con placa PRP89A por la vigencia 2012*»

1.3. El 22 de abril de 2021 el apoderado judicial del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA allegó la Ordenanza No. 074 de 2018 «*POR LA CUAL SE MODIFICA EL PARÁGRAFO CUARTO (4°) DEL ARTÍCULO 207 DE LA ORDENANZA 216 DE 2014, "POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*» con su constancia de publicación (*«044EscritoDepartamentoCundinamarca»*).

1.4. El 24 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«045ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, se advierte que si bien por parte del MUNICIPIO DE RICAURTE se dio cumplimiento a lo requerido en el auto anterior, pues se certificó que no ha pagado suma alguna por concepto del impuesto sobre el vehículo automotor oficial identificado con placa PRP89A por la vigencia 2012, lo cierto es que no ocurrió lo mismo por parte del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, toda vez que se limitó a aportar la Ordenanza No. 074 de 2018 «*POR LA CUAL SE MODIFICA EL PARÁGRAFO CUARTO (4°) DEL ARTÍCULO 207 DE LA ORDENANZA 216 DE 2014, "POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES*» con su constancia de publicación, desacatando las demás disposiciones consistentes en aportar, de ser procedente, la constancia de cierre y/o de archivo del expediente de determinación del impuesto sobre el vehículo automotor oficial identificado con placa PRP89A para la vigencia 2012 y la certificación sobre si el MUNICIPIO DE RICAURTE ha pagado suma alguna por concepto del

impuesto sobre el vehículo motocicleta con placa PRP89A para la vigencia 2012.

En virtud de lo anterior, se torna procedente requerir al apoderado judicial del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA para que dé cumplimiento al auto de 15 de abril de 2021 y en ese orden, aporte la constancia de cierre y/o de archivo del expediente de determinación del impuesto sobre el vehículo automotor oficial identificado con placa PRP89A para la vigencia 2012 y la certificación sobre si el MUNICIPIO DE RICAURTE ha pagado suma alguna por concepto del impuesto sobre el vehículo motocicleta con placa PRP89A para la vigencia 2012, documentos que se tornan necesarios con el fin de realizar un análisis respecto de la posibilidad de terminar el presente proceso por presentarse una carencia actual del objeto o seguir con el curso del mismo.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRASE al apoderado judicial del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA para que, de igual modo, en el término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de este auto, ***i)*** manifieste si el MUNICIPIO DE RICAURTE ha pagado suma alguna por concepto del impuesto sobre el vehículo motocicleta con placa PRP89A para la vigencia 2012 y ***ii)*** allegue la constancia de cierre y/o de archivo del expediente de determinación del impuesto sobre el vehículo automotor oficial identificado con placa PRP89A para la vigencia 2012, o manifieste sobre su improcedencia. **So pena de imponer las sanciones de que trata el artículo 44 del Código General del Proceso, por desacato a orden judicial.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
6421A0AAF82F734104992A2CF8D15C2961F4E9D69570E99A37C28F0B751358D6
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:37 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00224-00**
Demandante:	**DIEGO FERNANDO VANEGAS**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Encontrándose el proceso pendiente de proferir sentencia, mediante auto de mejor proveer de 18 de marzo de 2021 se dispuso oficiar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca para que realizaran la valoración al señor DIEGO FERNANDO VANEGAS con el fin de determinar el porcentaje de su pérdida de capacidad laboral y el origen de la misma, indicándose que los gastos que se generaran para la realización de la prueba decretada deberían ser asumidos por la parte demandante (*«059AutoMejor Proveer»*).

1.2. Una vez librado el oficio de 8 de abril de 2021 por parte de la secretaría del Despacho, la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE BOGOTÁ D.C. Y CUNDINAMARCA allegó el oficio No. VP-1286 de 18 de abril hogaño, suscrito por el doctor RUBÉN DARÍO MEJÍA ALFARO en calidad de SECRETARIO PRINCIPAL SALA 1, indicó que la solicitud fue remitida sin los anexos requeridos en su totalidad para iniciar trámite de

calificación como peritos designados e informó que para adelantar dicha calificación se debería allegar lo siguiente (*«062EscritoJuntaCalificacionInvalidez»*):

> *«1. Comprobante de consignación del **pago** de honorarios correspondiente a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, en el Banco Colpatria Cuenta de Ahorros No 482202288-5 a nombre de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, sobre lo cual el Artículo 2.2.5.1.16 del Decreto 1072 de 2015, establece que: "En caso que la Junta Regional de Calificación de Invalidez actúe como perito, por solicitud de autoridad judicial, los honorarios deberán ser cancelados por quien decrete dicha autoridad … Los honorarios de las juntas corresponderán a un (1) salario mínimo mensual legal vigente por cada dictamen solicitado".*
>
> *2. Datos **actualizados de dirección, teléfono y correo electrónico** de la persona a calificar donde se pueda contactar para la práctica de valoración médica y psicológica.*
>
> *3. Copia del documento de **identificación al 150%** de la persona calificar».*

1.3. El proceso ingresó al Despacho el 10 de mayo de 2021 (*«063ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En virtud de lo anterior, resulta procedente poner en conocimiento del apoderado judicial de la parte actora, el oficio No. VP-1286 de 18 de abril hogaño, suscrito por el doctor RUBÉN DARÍO MEJÍA ALFARO en calidad de SECRETARIO PRINCIPAL SALA 1, de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE BOGOTÁ D.C. Y CUNDINAMARCA, donde informó los requisitos para la realización del dictamen pericial el cual obra en el archivo *«062EscritoJuntaCalificacionInvalidez»*.

En consecuencia se **DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del apoderado judicial del demandante por el término de tres (3) días, el oficio No. VP-1286 de 18 de abril hogaño, suscrito por el doctor RUBÉN DARÍO MEJÍA ALFARO en calidad de SECRETARIO PRINCIPAL SALA 1, de la JUNTA REGIONAL DE

CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE BOGOTÁ D.C. Y CUNDINAMARCA, donde informó los requisitos para la realización del dictamen pericial el cual obra en el archivo «*062EscritoJuntaCalificacionInvalidez*».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
ac81cac8a5f6e7f8ded2979bf47b016708def7bee2b960901ce3bbd419b876be
Documento generado en 03/06/2021 12:03:38 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2018-00329-00**
Demandante:	**GLADYS NUBIA DURÁN DE MARADEY**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Ingresa el expediente a Despacho el 31 de mayo de 2021[1] con escrito radicado el 9 de abril de 2021[2], reiterado el 21 de mayo de 2021[3] en el que la apoderada judicial de la parte demandante solicita «*ordenar el pago del crédito por la suma de $23'587.766.27 aprobada por el Juzgado en auto anterior a órdenes de la demandante*».

No obstante, no encuentra el Despacho el objeto de su petitum, como quiera que, de conformidad con lo certificado por la secretaria en la constancia de ingreso del expediente, en la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado no se observa consignado alguno a favor de la demandante, circunstancia en virtud de la cual, teniendo en cuenta que en el presente asunto se libró mandamiento de pago a su favor, se ordenó seguir adelante con la ejecución que adelanta y se aprobó la liquidación del crédito, la única actuación adicional procedente a ordenar el pago sería la entrega de un título judicial, en el caso de que se encontrara consignado, motivo por el cual **NO SE IMPARTE TRÁMITE A LA PETICIÓN ELEVADA**, por encontrarla abiertamente improcedente.

---

[1] «073ConstanciaDespacho» C01Principal
[2] «071SolicitudDemandante» C01Principal
[3] «072SolicitudDemandante» C01Principal

De ser otro el sentido de la petición de la apoderada judicial de la parte demandante, **DEBERÁ ACLARARLO.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
3ca978ac03628ec476fc6dd5904579f74a79b1d35c11a4e60f467314ac4002e9
Documento generado en 03/06/2021 12:04:17 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2018-00332-00**
DEMANDANTE:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
DEMANDADO:	**CARLOS ANDRÉS DAZA BELTRÁN y GRISELA MONROY HERNÁNDEZ**
MEDIO DE CONTROL:	**REPETICIÓN**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 15 de abril de 2021, en la que se resolvió el recurso de reposición incoado contra el proveído de 4 de marzo de 2021, por medio del cual se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (*«014AutoFijaLitigio»*) y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes presentaran objeción alguna, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
C73F8C5E587458A4059F8A275C8A233AA88777D19E7658938E312BE1511081A1
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:31 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación: **25307-3333-001-2018-00380-00**
Demandante: **JESSICA NATALY URREGO MORALES**
Demandado: **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL**
Medio de Control: **NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

Juez: **Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 22 de abril de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (*«026AutoFijaLitigio»*) y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes hicieran manifestación al respecto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
F8EE110BA28A32089B12F655F30F4B00ADF8C406AC71E37BA1559CFBB8B523CD
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:35 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00368-00**
DEMANDANTE:	**HERNÁN ARANGO SOTO Y NOHELIA RÍOS**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Trabada la relación jurídico procesal y cumplido lo dispuesto en el auto admisorio de la demanda, y en especial el requerimiento efectuado a la parte demandante en auto de 15 de abril de 2021, **FÍJASE** como fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **el día jueves diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) a partir de las 2:30 p.m.,** la cual se celebrará de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, para lo cual, previo a dicha fecha, por parte de un servidor del Despacho se remitirá a los apoderados, por intermedio de los correos electrónicos reportados en el plenario, la correspondiente invitación en la que se compartirá el link de acceso y las instrucciones correspondientes, así como los protocolos del caso.

Téngase en cuenta que los términos judiciales estuvieron suspendidos por disposición expresa del Consejo Superior de la Judicatura[1] desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 en atención a la emergencia económica, social y ecológica declarada por el Gobierno Nacional con ocasión de la pandemia que generó el COVID-19.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
C4C2E219B91CE3CFCC6A5E3626CF140619004C4B17E003CEA43D2D0332E2144F
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:36 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

[1] Que concluyeron con la suspensión de los términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de hogaño mediante los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567.

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00046-00**
Demandante:	**JOSÉ LUIS MORA BERNAL**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. En la providencia de 28 de marzo de 2019 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor JOSÉ LUIS MORA BERNAL contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, con el propósito de obtener la nulidad del Oficio No. 20183171855281 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 de 27 de septiembre de 2018, por medio del cual la entidad demandada negó el reajuste de la asignación mensual y de las prestaciones sociales del demandante en un 20% (*«009AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. En la audiencia inicial celebrada el 11 de diciembre de 2019 este Despacho ordenó oficiar a la DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL para que allegara la copia autentica del expediente prestacional del señor JOSÉ LUIS MORA BERNAL (folio 10 *«018ActaAudienciaInicial»* de la carpeta *«018AudienciaInicial»*).

1.3. Solo hasta el 5 de abril de 2021, la apoderada judicial de la Entidad demandada, vía correo electrónico, remitió el expediente prestacional del señor MORA BERNAL (*«024EsccritoEjercito»*).

1.4. Mediante proveído de 15 de abril de 2021 esta Instancia Judicial puso en conocimiento de las partes la documental allegada por la apoderada de la Entidad demandada el 5 de abril de 2021 (*«026AutoPoneConocimiento»*).

1.5. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«013ConstanciaDespacho»*).

I. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, sería del caso correr traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus alegatos de conclusión, en virtud de lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de lo dispuesto en la audiencia inicial realizada dentro del asunto de la referencia el 11 de diciembre de 2019 (folio 11 «*018ActaAudienciaInicial*» de la carpeta «*018AudienciaInicial*»), en atención a que mediante proveído de 15 de abril de 2021 este Juzgado puso en conocimiento de las partes la documental allegada por la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL el 5 de abril de 2021, sin que los apoderados judiciales realizaran objeción alguna.

No obstante, este Despacho habiendo realizado una revisión minuciosa y detallada de la referida documental observa que los folios 15, 16, 18 y 19 del archivo «*024EscritoEjercito*» resultan parcialmente ilegibles, por lo que es del caso requerir a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que allegue de manera **íntegra y legible** bien sea los folios en mención, la liquidación de «*CESANTÍAS DEFINITIVAS con fundamento en el expediente No. 4134185 de 2020*» efectuada por el «*liquidador expedientes prestacionales*» de 20 de mayo de 2020 (folios 15 y 17 «*024EscritoEjercito*»), la Resolución No. 280397 de 12 de junio de 2020 (folios 17 a 20 «*024EscritoEjercito*») o,

para que en su defecto, nuevamente remita de manera íntegra y efectivamente legible la totalidad del expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, del expediente prestacional del señor JOSÉ LUIS MORA BERNAL. Lo anterior con la finalidad de seguir con el curso del proceso.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRESE a la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL-, para que en el término máximo e improrrogable de los cinco (5) días contados a partir de la notificación del presente proveído, allegue de manera íntegra y **legible** el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, del expediente prestacional del señor JOSÉ LUIS MORA BERNAL, especialmente la liquidación de *«CESANTÍAS DEFINITIVAS con fundamento en el expediente No. 4134185 de 2020»* efectuada por el *«liquidador expedientes prestacionales»* de 20 de mayo de 2020 (folios 15 y 17 *«024EscritoEjercito»*) y la Resolución No. 280397 de 12 de junio de 2020 (folios 17 a 20 *«024EscritoEjercito»*).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
0FBEAD1A1B016B370B33DDC4A14E6DBF11D3EAAA967A46A88F7F79699EB811DD
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:32 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00067-00**
DEMANDANTE:	**MARÍA MILGEL BARACALDO RODRÍGUEZ**
DEMANDADO:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ**
LLAMADO EN GARANTÍA:	**ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**
MEDIO DE CONTROL:	**REPARACIÓN DIRECTA**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante auto de 14 de marzo de 2019 se admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de reparación directa promovió la señora MARÍA MILGEL BARACALDO RODRÍGUEZ contra la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ, con el objeto de que se declare administrativamente responsable por la presunta falla en la prestación del servicio de salud como consecuencia de la presunta

administración errónea de un medicamento, generándole una afección en su estado de salud (*«006AutoAdmite»).*

2.2. Previo pago de los gastos procesales, el 17 de septiembre de 2019 se surtió la notificación personal del auto admisorio de la demanda (*«010NotificacionPersonal»*).

2.3. El 2 de diciembre de 2019, el apoderado judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas y allegó escrito llamando en garantía a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA (*«011ContestacionDemanda»* del cuaderno principal y *«001EscritoLlamamiento»* del cuaderno de llamamiento en garantía).

2.4. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir de **16 de marzo de 2020** en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020** *(«013ConstanciaSuspensionTerminos»).*

2.5. El 24 de noviembre de 2020 se fijó en lista las excepciones propuestas por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ (*«016FijaciónLista»* del cuaderno principal).

2.6. Por auto de 4 de febrero de 2021 se admitió el llamamiento en garantía presentado por el apoderado judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ, contra la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y se ordenó su notificación *(«003AdmiteLlamamiento»).*

2.7. El 11 de marzo de 2021 la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas *(«017ContestacionDemandaLlamado»)*.

2.8. El 12 de abril de 2021 se fijó en lista las excepciones propuestas por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA (*«008EnvioCorreoTraslado»* del cuaderno de llamamiento en garantía).

2.9. El proceso ingresó al Despacho el 26 de abril de 2021 (*«018ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021) ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
>
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;
>
> c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
>
> d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
>
> **El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia**.
>
> Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

> No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.
>
> **2.** En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.
>
> Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.
>
> **3.** En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.
>
> **4.** En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.
>
> **Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.
>
> Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.
>
> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno a la responsabilidad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ por la presunta falla en la prestación del servicio de salud, por la presunta administración errónea de un medicamento a la señora MARÍA MILGEL BARACALDO RODRÍGUEZ generándole una afección en su estado de salud, es decir, si bien, no se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que no fueron propuestas; tampoco hay pruebas por practicar, en virtud a que la solicitada por el apoderado judicial de la llamada en garantía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA en el sentido de escuchar el testimonio del señor CAMILO ANDRÉS MENDOZA GAITÁN como asesor externo de dicha entidad para que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda, así como de los fundamentos de derecho y de la Póliza de Seguro, se torna inconducente, impertinente e inútil, en lo demás, las partes únicamente solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas respectivamente, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho procede a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas

y aportadas por las partes según los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

- PARTE DEMANDANTE:

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visible en los folios 15 a 100 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

- PARTE DEMANDADA:

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visible en los folios 18 a 28 del archivo denominado «*011ContestacionDemandayAnexos*» del expediente digitalizado y la carpeta «*CdAnexo*».

- LLAMADA EN GARANTÍA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA:

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visible en los folios 52 a 68 del archivo denominado «*017ContestacionDemandaLlamado*» del cuaderno principal y «*006ContestacionDemanda*» del cuaderno de llamamiento.

NIÉGASE la prueba testimonial del doctor CAMILO ANDRÉS MENDOZA GAITÁN, asesor externo de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA para que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda, así como de los fundamentos de derecho y de la Póliza de Seguro, por ser inconducente, impertinente e inútil, pues no tiene relación directa con el objeto del proceso, en primer lugar porque no fue testigo presencial de los hechos y en segundo

lugar porque no se debaten las características, condiciones, vigencia y coberturas del Contrato de Seguro.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

Seguidamente, se realizará la fijación del litigio.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

La suscrita Juez señala que de la lectura de la demanda se extrae que lo pretendido por la parte demandante es que:

Se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ por los perjuicios morales y materiales causados a la demandante señora MARÍA MILGEL BARACALDO RODRÍGUEZ con ocasión de la presunta falla en la prestación del servicio médico como consecuencia de la presunta administración errónea de un medicamento, generándole una afección en su estado de salud.

Del mismo modo, este Despacho en virtud del líbelo introductorio, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El 3 de agosto de 2017 la señora MARÍA MILGEL BARACALDO RODRÍGUEZ ingresó al servicio de urgencia de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ con síntomas de fiebre y dolor de cabeza, quedando en observación con el suministro de medicamentos (folio 1 a 3 archivo «*2. Historia Clinica Maria Milgen BaracaldoRodriguez*» de la carpeta «*CdAnexo*» del archivo «*011ContestacionDemandaAnexos*»).

2. El 4 de agosto de siguiente, fue hospitalizada, suministrándole tratamiento de antibiótico por diagnóstico de «*diarrea y gastroenteritis de presunto origen*

infeccioso» (folio 19 archivo «*2. Historia Clinica Maria Milgen BaracaldoRodriguez*» de la carpeta «*CdAnexo*» del archivo «*011ContestacionDemandaAnexos*»).

3. La doctora MARISOL SARAIBA ESTRADA ordenó el suministro de medicamentos, entre ellos, la «*ENTEROGERMINA 1 AMPOLLA VÍA ORAL CADA 8 HORAS*» (folio 19 archivo «*2. Historia Clinica Maria Milgen BaracaldoRodriguez*» de la carpeta «*CdAnexo*» del archivo «*011ContestacionDemandaAnexos*»).

4. Que el 4 de agosto de 2017 la señora MARÍA MILGEL BARACALDO RODRÍGUEZ presentó reacción adversa («*temblor distal, escalofríos*») al suministro de la enterogermina vía intravenosa, motivo por el cual se inicia el manejo («*ABCD*») se emitió la orden de remisión para el Hospital de mayor nivel (folios 31 a 33, 63 archivo «*2. Historia Clinica Maria Milgen BaracaldoRodriguez*» de la carpeta «*CdAnexo*» del archivo «*011ContestacionDemandaAnexos*»).

5. La señora MARÍA MILGEL BARACALDO RODRÍGUEZ ingresó el 6 de agosto de 2017 a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ «*POR PRESENTAR REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD ALA ENTEROGERMINA POSTERIOR A LA ADMINISTRACIÓN IV, POR LO QUE PRESENTÓ DETERIORO DE PATRÓN RESPIRATORIO DIAFORESIS, CIANOSIS PERIBUCAL…*», a quien se le dio salida el 16 de agosto de 2017 (folios 77 y 90 archivo «*002DemandaPoderAnexos*).

6. El 11 de agosto de 2017 la señora CLAUDIA RODRÍGUEZ presentó queja por lo acontecido respecto a la demandante, señora MARÍA MILGEL BARACALDO RODRÍGUEZ ante la PERSONERÍA MUNICIPAL DE ARBELÁEZ y la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ (folios 15 a 18 archivo «*002DemandaPoderAnexos*).

7. Mediante comunicado de 31 de agosto de 2017 la doctora SONIA ROSA FLÓREZ BELLO, emitió respuesta a la solicitud elevada el 11 de agosto (folio 20 archivo «*002DemandaPoderAnexos*).

8. El 1° de septiembre de 2017 la directora de INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL de la SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA informó sobre el acuse de recibido e inicio de averiguación preliminar a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ (folio 19 archivo «*002DemandaPoderAnexos*).

Bajo ese contexto, se encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) la configuración del daño ocasionado a la señora MARÍA MILGEL BARACALDO RODRÍGUEZ y la responsabilidad de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ por la presunta falla en la prestación del servicio médico como consecuencia de la administración errónea del medicamento enterogermina.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en establecer el siguiente **problema jurídico**: ¿Es responsable la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ** por la presunta afectación en la salud sufridas por la señora MARÍA MILGEL BARACALDO RODRÍGUEZ por la administración errónea del medicamento enterogermina?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

---

[1] «**Artículo 207. *CONTROL DE LEGALIDAD*.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] 27 de septiembre de 2018: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá, correspondiendo su conocimiento al JUZGADO 32 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ la SECCIÓN TERCERA, quien mediante auto de 1° de febrero de 2019 remitió por competencia a los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE GIRARDOT, siendo recibida el 20 de febrero de 2019,

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la Ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 15 a 100 del archivo denominado *«002DemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

TERCERO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visibles en los folios 18 a 28 del archivo denominado *«011ContestacionDemandayAnexos»* y la carpeta *«CdAnexo»* del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

CUARTO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA con la contestación de la demanda visible en los folios 52 a 68 del

---

correspondiendo su conocimiento a este Despacho («002DemandaPoderAnexos», «002DemandaPoderAnexos», «003ActuacionJuzgado32AdtivoBogota» y «004ActaReparto»).
- 14 de marzo de 2019 auto admite demanda. («006AutoAdmite»).
- 22 de agosto de 2019 se requirió el pago de los gastos procesales, los cuales fueron allegados el 6 de septiembre siguiente («008AutoRequiere» y «009PagoGastos»).
- 17 de septiembre de 2019 Notificación personal del libelo a la demandada («010NotificacionPersonal).
- 2 de diciembre de 2019 la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas y solicitó se llamara en garantía a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA («011ContestacionDemandaAnexos»).
- 24 de noviembre de 2020: Fijación en lista («016FijacionLista»).
- 4 de febrero de 2021 auto admite llamamiento en garantía y ordena notificar («003AdmiteLlamamiento»)
- 11 de marzo de 2021 la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas *(«017ContestacionDemandaLlamado»)*.
- 12 de abril de 2021: Fijación en lista («016FijacionLista»).

archivo denominado «*017ContestacionDemandaLlamado*» del cuaderno principal y «*006ContestacionDemanda*» del cuaderno de llamamiento del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

QUINTO: NIÉGASE la prueba testimonial solicitada por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, conforme a lo señalado en parte motiva.

SEXTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SÉPTIMO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

NOVENO: RECONÓCESE PERSONERÍA adjetiva para actuar como apoderado judicial de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA al doctor GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, de conformidad con el poder visible en el folio 48 del archivo «*006ContestacionDemanda*» del cuaderno «*C02LlamamientoGrantia*» del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7dd8df4e09b67abedea1aa3ce0bc68918229052048f3e90637c7d62f75a2645a
Documento generado en 03/06/2021 12:03:39 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00097-00**
Demandante:	**JULIO CÉSAR MICOLTA CUERO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. En la audiencia inicial realizada el 19 de marzo de 2021 se decretaron las siguientes pruebas (*«026ActaAudiencia»*):

> «**7.1. PARTE DEMANDANTE**
>
> *(…)*
>
> ***7.1.3. OFÍCIESE** a la **NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL,** para que allegue en el término máximo e improrrogable de los diez (10) días siguientes contados a partir de la celebración de la presente diligencia allegue la copia íntegra de la hoja de vida del señor MICOLTA CUERO. El deber de allegar la carga de la prueba recae en la parte demandada.*
>
> ***7.1.4. DICTAMEN PERICIAL: OFÍCIESE** a la **JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ DE VALLE DEL CAUCA** (teniendo en cuenta el lugar de residencia del señor MICOLTA CUERO) con el fin de que en el término de los 60 días, contados a partir de la fecha en que reciban el correspondiente oficio, valore al señor **JULIO CÉSAR MICOLTA CUERO,** con el fin de que se realice i) un diagnóstico de las enfermedades que padece, ii) el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral y iii) el origen de las lesiones y afecciones diagnosticadas. El deber de dar trámite*

> *al presente oficio estará a cargo de la apoderada judicial de la parte demandante, así como del pago de las correspondientes expensas ante la mencionada Autoridad. Por lo que de requerirlo, la apoderada judicial deberá solicitar el oficio a la Secretaría de este Despacho.*
>
> *(…)*
>
> ***7.3. DE OFICIO REQUIÉRASE** a la **NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL,** a través de su apoderada judicial para que sin más dilaciones y en el término máximo e improrrogable de los diez (10) días siguientes contados a partir de la celebración de la presente diligencia allegue, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso, de manera íntegra y legible la hoja de vida del señor JULIO CÉSAR MICOLTA CUERO, así como el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente asunto, esto es, de las Resoluciones No. 3818 de 18 de septiembre de 2018 «Por la cual se resuelve una solicitud de pensión mensual de invalidez, con fundamento en la carpeta No.218485, y los expediente MDN No.0573 de 1999 y 3321 de 2018», y No. 5577 de 20 de noviembre de 2018 «Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el Acto Administrativo No. 3818 del 18 de septiembre de 2018, con fundamento en la Carpeta No.218485, y los Expedientes MDN No.573 de 1999 y 3321 de 2018», suscritas por la DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) y la COORDINADORA DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL. Obligación que consagra el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se advierte que el presente requerimiento se realiza por segunda vez, como quiera que el primero se efectúo en el auto admisorio de la demanda».*

1.2. El 5 de abril de 2021, la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL allegó el oficio No. 00390 de 25 de marzo de 2021 mediante el cual solicitó a la DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL los documentos decretados en audiencia inicial correspondientes al señor JULIO CÉSAR MICOLTA CUERO (*«027EscritoEjercito»*).

1.3. El 9 de abril de 2021 por secretaría se libró el oficio No. 0600 solicitando a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL los documentos decretados en audiencia inicial correspondientes a la hoja de vida del señor JULIO CESAR MICOLTA CUERO así como el expediente administrativo contentivo de los antecedentes de la actuación objeto del presente asunto, esto es, de las Resoluciones No. 3818 de 18 de septiembre de 2018 *«Por la cual se resuelve una solicitud de pensión mensual de invalidez, con fundamento en la carpeta No.218485, y los expediente MDN No.0573 de 1999 y 3321*

de 2018», y No. 5577 de 20 de noviembre de 2018 «*Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el Acto Administrativo No. 3818 del 18 de septiembre de 2018, con fundamento en la Carpeta No.218485, y los Expedientes MDN No.573 de 1999 y 3321 de 2018*», suscritas por la DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) y la COORDINADORA DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL (*«028OficioRequiere»*).

1.4. Mediante oficio No. 0601 de 9 de abril de 2021, la secretaria solicitó a la JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA la valoración del señor JULIO CÉSAR MICOLTA CUERO, con el fin de que se realice i) un diagnóstico de las enfermedades que padece, ii) el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral y iii) el origen de las lesiones y afecciones diagnosticadas (*«029OficioSolicitudValoracion»*).

1.5. El 12 de abril de 2021 la doctora MARÍA CRISTINA TABARES OLIVEROS en calidad de Directora Administrativa y Financiera sala uno (1) y representante legal de la JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, allegó el oficio No. CO-21-0095 en donde informó que para la realización del dictamen solicitado se debía allegar (*«030EscritoJuntaCalificacion»*):

> *«• Formulario Debidamente Diligenciado (anexo formulario).*
> *• Fotocopia de Documento de Identidad.*
> *• Copia de la demanda.*
> *• Historia Clínica Actualizada.*
> *• Exámenes, Conceptos Médicos de Especialistas Tratantes Actualizados o de Fin de Tratamiento.*
> *• Recibo de consignación, realizada en el Banco Davivienda, en la cuenta de ahorros número 0 – 17300102021, a nombre de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, por valor de $908.526.oo*
> *• Los documentos deberán ser aportados de forma completa; dentro de los quince (15) días calendarios siguientes, contados a partir del recibido de este escrito.*
> *• Recibidos los documentos requeridos en el presente escrito e ingresados a reparto; el médico laboral que se le asigne el caso, podrá solicitar los exámenes que considere pertinentes al peticionario».*

1.6. El proceso ingresó al Despacho el 10 de mayo de 2021 (*«031ConstanciaDespacho»*).

1.7. El 27 de mayo de 2021 el COMANDO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL allegó el oficio No. 2021313000930611 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-JUR-1.9., de 6 de mayo de 2021 mediante el cual informó que en relación con la solicitud de la copia de la hoja de vida y el expediente administrativo, se remitieron por competencia funcional al Batallón de Fuerzas Especiales Rurales No. 2 Francisco Almeida y al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional (*«032EscritoAnexosEjercito»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En virtud de lo anterior, sería del caso requerir nuevamente a la DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL EJERCITO NACIONAL con el fin de que dé respuesta a los oficios No. 00390 de 25 de marzo de 2021 suscrito por la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA y No. 0600 de 9 de abril del mismo año y allegue de manera íntegra y legible la hoja de vida del señor JULIO CESAR MICOLTA CUERO así como el expediente administrativo contentivo de los antecedentes de la actuación objeto del presente asunto, esto es, de las Resoluciones No. 3818 de 18 de septiembre de 2018 *«Por la cual se resuelve una solicitud de pensión mensual de invalidez, con fundamento en la carpeta No.218485, y los expediente MDN No.0573 de 1999 y 3321 de 2018»,* y No. 5577 de 20 de noviembre de 2018 *«Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el Acto Administrativo No. 3818 del 18 de septiembre de 2018, con fundamento en la Carpeta No.218485, y los Expedientes MDN No.573 de 1999 y 3321 de 2018»*, suscritas por la DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) y la COORDINADORA DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL.

No obstante, comoquiera que el COMANDO DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL allegó el oficio No. 2021313000930611 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-JUR-

1.9., de 6 de mayo de 2021 mediante el cual informó que en relación con la solicitud de la copia de la hoja de vida y el expediente administrativo, se remitieron por competencia funcional al Batallón de Fuerzas Especiales Rurales No. 2 Francisco Almeida y al Grupo de Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa Nacional, por lo que se requerirá dicha documental a las mencionadas

Aunado a lo anterior, se pondrá en conocimiento del apoderado judicial de la parte actora, el oficio No. CO-21-0095 de 12 de abril de 2021 suscrito por la doctora MARÍA CRISTINA TABARES OLIVEROS en calidad de Directora Administrativa y Financiera sala uno (1) y representante legal de la JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, donde informó los requisitos para la realización del dictamen pericial el cual obra en el archivo «030EscritoJuntaCalificacion», prueba que fue solicitada y decretada a instancia del demandante, con el fin de que envié lo requerido a la mencionada Junta con copia a este Despacho.

En consecuencia se **DISPONE:**

PRIMERO: REQUIÉRASE al director del BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES RURALES No. 2 FRANCISCO Almeida para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del presente proveído allegue de manera íntegra y legible la hoja de vida del señor JULIO CÉSAR MICOLTA CUERO.

SEGUNDO: REQUIÉRASE al director del GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL para que dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación del presente proveído allegue de manera íntegra y legible el expediente administrativo contentivo de los antecedentes de la actuación objeto del presente asunto, esto es, de las Resoluciones No. 3818 de 18 de septiembre de 2018 «*Por la cual se resuelve una solicitud de pensión mensual de invalidez, con fundamento en la carpeta No.218485, y los expediente MDN No.0573 de 1999 y 3321 de 2018*», y No. 5577 de 20 de

noviembre de 2018 «*Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el Acto Administrativo No. 3818 del 18 de septiembre de 2018, con fundamento en la Carpeta No.218485, y los Expedientes MDN No.573 de 1999 y 3321 de 2018*», suscritas por la DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E) y la COORDINADORA DEL GRUPO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL.

TERCERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO del apoderado judicial del demandante por el término de tres (3) días, el oficio No. CO-21-0095 de 12 de abril de 2021 suscrito por la doctora MARÍA CRISTINA TABARES OLIVEROS en calidad de Directora Administrativa y Financiera sala uno (1) y representante legal de la JUNTA DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DEL VALLE DEL CAUCA, obrante en el archivo «030EscritoJuntaCalificacion», con el fin de que envié lo requerido a la mencionada junta con copia a este Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
795e34001da3113cad3b417b0df2c9ff3ce85c739e1b6c527bf11922cf2c44da
Documento generado en 03/06/2021 12:03:40 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00156-00**
DEMANDANTE:	**CODENSA S.A. E.S.P.**
DEMANDADO:	**MUNICIPIO DE GIRARDOT**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT contra el auto de 15 de abril de 2021 por medio del cual se requirió una prueba.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. En la audiencia inicial realizada el 25 de septiembre de 2020[1], se decretaron las siguientes pruebas (*«032AudienciaInicial»*):

> «***7.3. DE OFICIO***
>
> ***7.3.1. REQUIÉRESE*** *al MUNICIPIO DE GIRARDOT, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la realización de la presente audiencia allegue el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso. Se advierte, que dicha documental fue requerida en el auto admisorio de 6° de junio de 20196 y, que además,*

[1] Archivo denominado *«032AudienciaInicial»*

> *en los términos del parágrafo 1° del artículo 176 de la Ley 1437 de 20117 , es deber de la demandada allegarlo. El deber de comunicar la presente decisión y de dar cumplimiento a esta orden radica en cabeza del apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT.*
>
> ***7.3.2. REQUIÉRESE** al MUNICIPIO DE GIRARDOT, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la realización de la presente audiencia allegue el Copia del Acuerdo Municipal No. 014 de 2015. El deber de comunicar la presente decisión y dar cumplimiento a esta orden radica en cabeza del apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT».*

2.2. En auto de 27 de noviembre de 2020 en atención a que sólo fue allegado el Acuerdo No. 014 de 2015, se requirió nuevamente el expediente administrativo contentivo de los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso. Advirtiéndose que el deber de comunicación y de dar cumplimiento a la decisión estaría a cargo del apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT, tal y como se le puso de presente en la audiencia inicial realizada el 25 de septiembre de 2020 (*«039AutoRequiere»*).

2.3. En proveído de 15 de abril de 2021, ante la imposibilidad del recaudo de la única prueba faltante, se requirió al doctor JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ZOTA, en calidad de apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT, para que sin más dilaciones allegara de forma organizada, íntegra y legible el expediente administrativo contentivo de los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, de los recibos universales No. 2018014364 y No. 2018016291 (*«048AutoRequiere»*).

2.4. El 21 de abril de 2021 fue interpuesto el recurso de reposición contra el auto que requirió la prueba faltante argumentando que debería requerirse al MUNICIPIO DE GIRARDOT y no al apoderado judicial como quiera que es la Entidad territorial quien tiene la custodia de los documentos solicitados y que por su parte el apoderado ha demostrado adelantar las gestiones pertinentes para su recaudo (*«050RecursoReposicionMunicipio»*).

2.5. El 10 de mayo de 2021 se fijó en lista el recurso interpuesto para correr traslado del mismo. En silencio (*«054FijacionLista»*).

2.6. El 28 de abril de 2021 se allegó por parte del apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT «*la prueba ordenada en el expediente de que trata la referencia según lo solicitado por el despacho, remitiendo la información enviada por la oficina jurídica según el mensaje de datos que antecede*», la misma documental fue allegada el 30 del mismo mes y año por la Oficina Jurídica del Municipio («*051EscritoMunicipio*» y «*052EscritoMunicipio*»).

2.7. El 24 de mayo de 2021 el proceso ingresa al Despacho («*056ConstanciaDespacho*»).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de la procedencia y oportunidad del recurso incoado, para determinar si hay lugar a confirmar o revocar la decisión atacada.

Frente al recurso de reposición el artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) prevé:

> «**Artículo 242:** ***REPOSICIÓN.*** El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso»

En virtud de ello, resulta imperioso acudir a lo señalado en el artículo 318 del Código General del Proceso[2], en cuanto a la oportunidad para presentar el

[2] «**Artículo 318.** ***PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES.*** Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

recurso, en donde se prevé que cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia, el recurso debe interponerse por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación del auto.

Para el caso en comento, el auto recurrido de 15 de abril de 2021, fue notificado por estado al día siguiente, es decir, en principio los tres días para presentar el recurso vencían el 21 de abril siguiente, no obstante atendiendo el contenido del numeral segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021), el término de la notificación del auto notificado, sólo empezará a contabilizarse a los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, por lo que finalmente la parte interesada tenía como término máximo para recurrir la decisión hasta el **23 de abril de 2021,** y como quiera que lo hizo el 21 de abril hogaño, se advierte presentado en término.

En ese orden, el Despacho puntualiza que el motivo de la interposición del recurso de reposición obedece únicamente a que, en tesis del apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT, la prueba debió requerirse a dicha Entidad territorial y no al apoderado, por ser ésta quien tiene la custodia de los documentos solicitados, esto es, del expediente administrativo contentivo de los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, es decir, de los recibos universales No. 2018014364 y No. 2018016291, máxime cuando aduce, ha desplegado las acciones correspondientes para el recaudo de dicha prueba.

En ese orden, debe señalarse que en la audiencia inicial el 25 de septiembre de 2020, al decretar la prueba se manifestó claramente que «*El deber de comunicar la presente decisión y de dar cumplimiento a esta orden radica en cabeza del apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT*», decisión que fue notificada y frente a

---

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

Parágrafo. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente».

la cual las partes no interpusieron recurso, razón por la cual, pese a que el Despacho no desconoce las gestiones desplegadas por el apoderado judicial de la Entidad territorial las mismas se habían tornado infructuosas, por lo que en virtud a que el doctor GONZÁLEZ ZOTA, es quien representa judicialmente al Municipio debía efectuarse a éste el requerimiento, atendiendo el deber de colaboración que deben prestar las partes y sus apoderados en la aducción de las pruebas.

Por lo anterior, el Despacho no repondrá la decisión censurada, máxime cuando la documental requerida fue aportada el 28 de abril por el mismo apoderado judicial del Municipio y el 30 por la Oficina Jurídica, pruebas frente a la cual se pone de presente que sólo corresponden al objeto de este proceso las obrantes del folio 117 a 229 del archivo *«051EscritoMunicipio»* y folio 118 a 230 del archivo *«053EscritoMunicipio»*, las cuales se pondrán en conocimiento de las partes así como la allegada el 13 de octubre de 2020 obrante en el archivo *«034DocumentalRequeridaMunicipioGirardot»*.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NO REPONER la decisión adoptada mediante auto de 15 de abril de 2021 mediante el cual este Despacho requirió una prueba, conforme a lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de las partes por el término de tres (3) días, la documental obrante del folio 117 a 229 del archivo «051EscritoMunicipio» y folio 118 a 230 del archivo «053EscritoMunicipio», las así como la allegada el 13 de octubre de 2020 obrante en el archivo *«034DocumentalRequeridaMunicipioGirardot»*.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
c0d413f1ad57374bd6057267b77562f9cc8c6c787171b788a3c545d12266f7e e
Documento generado en 03/06/2021 12:03:41 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00176-00**
DEMANDANTE:	**HÉCTOR HERISINDO GÓMEZ MORALES**
DEMANDADO:	**EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁEMSERFUSA- y EICE TERMINAL DE TRASPORTES DE FUSAGASUGÁ**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Trabada la relación jurídico procesal, cumplido lo dispuesto en el auto admisorio de la demanda y teniendo en cuenta que no existen excepciones con el carácter de previas por resolver habida cuenta que las mismas fueron resueltas en proveído de 4 de marzo de 2021, **FÍJASE** como fecha para llevar a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el día **jueves diecisiete (17) de junio de dos mil veintiuno (2021) a partir de las 3:30 p.m.**, la cual se celebrará de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, para lo cual, previo a dicha fecha, por parte de un servidor del Despacho se remitirá a los apoderados, por intermedio de los correos electrónicos reportados en el plenario, la correspondiente invitación en la que se compartirá el link de acceso y las instrucciones correspondientes, así como los protocolos del caso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
ed0d98cc8ef1d0caaccc6c0cfe6029881da29442e618a36d18e27e790a31a356
Documento generado en 03/06/2021 12:03:43 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00203-00**
DEMANDANTE:	**ALEXANDER SOTO LOZADA**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 19 de junio de 2019 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor ALEXANDER SOTO LOZADA, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, con el propósito de obtener la nulidad del oficio No. 20193110501431 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10., de 18 de marzo de 2019, por medio del cual la demandada negó el reconocimiento del subsidio familiar conforme a lo previsto en el Decreto 1794 de 2000 («*005AutoAdmiteDemanda*»).

1.2. Mediante proveído de 22 de agosto de 2019 se requirió a la parte actora para que allegara el pago de los gastos procesales so pena de dar aplicación a los dispuesto en el artículo 178 de la Ley 1437 de 2011, requerimiento que no

fue atendido, por lo que el 26 de septiembre siguiente se declaró el desistimiento tácito (*«007AutoRequierePagoGastos»* y *«009AutoDecretaDesistimientoTacito»*).

1.3. El 30 de septiembre de 2019 se allegó el pago de los gastos procesales, por lo que mediante auto de 10 de octubre siguiente se ordenó su notificación (*«010PagoGastos»* y *«013AutoOrdenaNotificar»*).

1.4. El 13 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«014NotificacionPersonal»*).

1.5. El 10 de marzo de 2021 la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«015ContestacionDemanda»*).

1.6. El 9 de noviembre de 2020 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 27 de julio de 2020 (*«018ConstanciaTerminos»*).

1.7. El 10 de noviembre de 2020 la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones planteadas (*«019FijacionLista»*).

1.8. Por auto de 20 de noviembre de 2020 se ordenó que por secretaría se organizara el expediente híbrido digitalizado en los términos consignados en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 6 de junio de 2020 y en la Circular PCSJC20-27 de 21 de julio de 2020 proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura. (*«021AutoCumplase»*).

1.9. El 10 de mayo de 2021 ingresó el proceso al Despacho (*«022ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, previo a resolver sobre dar aplicación a la institución de la sentencia anticipada bajo la luz de lo dispuesto en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o de fijar fecha y hora para la realización de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, ante la ausencia del expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso[1] y, que[2] es deber de la demandada allegar dicha documental, es del caso requerir al extremo pasivo para que allegue el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, del oficio No. 20193110501431 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10., de 18 de marzo de 2019, proferido por el OFICIAL SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, en virtud del cual negó el reconocimiento del subsidio familiar conforme a lo previsto en el Decreto 1794 de 2000. Además deberá aportar la Orden Administrativa de Personal No. 2024 de 30 de septiembre de 2014 mediante la cual se le reconoció el subsidio familiar al señor ALEXANDER SOTO LOZADA o, en todo caso, la documental que acredite la fecha en la que fue solicitado por él, el citado beneficio.

En consecuencia **SE DISPONE:**

---

[1] Requerido mediante auto de 29 de octubre de 2020, archivo denominado «*010AutoAdmite*»

[2] «**Artículo 175. *CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA*.** Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito, que contendrá:

(...)

Parágrafo 1°. Durante el término para dar respuesta a la demanda, la entidad pública demandada o el particular que ejerza funciones administrativas demandado deberá allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder.

Cuando se trate de demandas por responsabilidad médica, con la contestación de la demanda se deberá adjuntar copia íntegra y auténtica de la historia clínica pertinente, a la cual se agregará la transcripción completa y clara de la misma, debidamente certificada y firmada por el médico que haga la transcripción.

La inobservancia de estos deberes constituye falta disciplinaria gravísima del funcionario encargado del asunto.

(...)»

PRIMERO: REQUIÉRESE a la apoderada judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, para que en el término máximo e improrrogable de los diez (10) días contados a partir de la notificación del presente proveído allegue, so pena de hacerse acreedora a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[3], el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, del No. 20193110501431: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10., de 18 de marzo de 2019, proferido por el OFICIAL SECCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL EJÉRCITO NACIONAL, en virtud del cual negó el reconocimiento del subsidio familiar conforme a lo previsto en el Decreto 1794 de 2000. Además deberá aportar la Orden Administrativa de Personal No. 2024 de 30 de septiembre de 2014 mediante la cual se le reconoció el subsidio familiar al señor ALEXANDER SOTO LOZADA o, en todo caso, la documental que acredite la fecha en la que fue solicitado por él, el citado beneficio.

SEGUNDO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderada de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL a la doctora LUZ FRANCY BOYACÁ TAPIA, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en el folio 7 del archivo *«015ContestacionDemanda»*.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

---

[3] «**Artículo 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)

2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.

3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

(...)» (Destaca el Despacho).

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
6f35fbee6ddda13d70776bdcacc545d358cdd350c48da24f8613f83e2100385d
Documento generado en 03/06/2021 12:03:44 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2019-00266-00**
Demandante:	**E.S.E. CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE RICAURTE**
Demandado:	**ELVIA FLORANCY ROJAS SÁNCHEZ**
Medio de Control:	**ACCIÓN DE REPETICIÓN**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 15 de abril de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (*«013AutoFijaLitigio»*) y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes hicieran manifestación al respecto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
DE7AD2F7ACBE8FE64B523314C2368DA9F61892C24E630D385B1690DBFF3F3B3E
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:37 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00283-00**
Demandante:	**MARTHA ELENA MORALES ORJUELA**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 12 de septiembre de 2019 este Despacho, admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora MARTHA ELENA MORALES ORJUELA, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-. con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo ficto configurado en virtud de la ocurrencia del silencio

administrativo acaecido por la falta de respuesta de la Administración a la petición radicada el 19 de marzo de 2019, por medio del cual se negó el pago de la sanción por mora, establecida en la ley 244 de 1995 y la ley 1071 de 2006, en el pago de las cesantías reconocidas por medio de la Resolución 001226 de 21 de junio de 2016 (*«005AutoAdmiteDemanda»*).

2.2. Previo pago de los gastos procesales, el 24 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«006PagoGastosPrcoesales»* y *«007NotificacionPersonal»*).

2.3. Fenecido el termino de traslado del medio de control, esto es el 11 de febrero de 2020, se observa en el expediente que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG, guardó silencio (*«008ConstanciaControlTerminos»*).

2.4. Por auto de 12 de marzo de 2020 se ordenó a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG, para que en el término de 10 días contados a partir de la notificación se sirviera constituir apoderado judicial (*«010AutoRequiere»*).

2.5 El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de 2020** en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

2.6. Mediante auto de cúmplase de 24 de septiembre de 2020, se ordenó a la secretaria del Juzgado dar estricto cumplimiento a lo ordenado en ordinal segundo del auto de 12 de marzo de 2020 (*«014AutoCumplase»*).

2.7. Mediante el oficio No. 00191 de 13 de octubre de 2020 la secretaria del Despacho requirió a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, para que diera cumplimiento a los ordenado en auto de 12 de marzo de 2020 (*«015OficioRequiere»*).

2.8. El 3 de noviembre de 2020, el MINISTERIO DE EDUCACIÓN aporta memorial en el que indicó que carece de competencia, por cuanto la misma la detenta FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por lo que manifiesta que mediante el oficio No. 2020-EE-218973 remitió la orden del Despacho del auto de 12 de marzo de 2020 (*«016EscritoFomag»*)

1.5. El 24 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021)
> ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
>
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;
>
> c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
>
> d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.

Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.

> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno al pago de la sanción por mora, establecida en la ley 244 de 1995 y la ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de reconocimiento de las cesantías, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que no fue contestada la demanda; tampoco hay pruebas por practicar y, únicamente, el demandante solicito tener como pruebas las documentales allegadas con el líbelo inicial, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento, debido a la falta de pronunciamiento de la demandada; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por la parte demandante que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visible en los folios 20 a 30 «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

Seguidamente, se realizará la fijación del litigio.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda se tiene que el **acto demandado** en la presente acción, este es:

- El acto ficto o presunto configurado en virtud de la ocurrencia del silencio administrativo acaecido por la falta de respuesta de la Administración a la petición radicada el 19 de marzo de 2019, por medio del cual se negó el pago de la sanción por mora, establecida en la ley 244 de 1995 y la ley 1071 de 2006, en el pago de las cesantías reconocidas por medio de la resolución 001226 de 21 de junio de 2016.

En consecuencia, y a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (folio 4 «002DemandaPoderAnexos»):

- Se ordene a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- reconocer y pagar la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la reconocimiento y pago de las cesantías ante la entidad y hasta cuando se haga efectivo el pago.

Del mismo modo, este Despacho en virtud del líbelo introductorio, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. Que la señora MARTHA ELENA MORALES ORJUELA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.760.723, estuvo vinculada como docente en el sector oficial desde el 8 de agosto de 1973 hasta el 30 de enero de 2016 (Folio 20 «002DemandaPoderAnexos»).

2. Que la señora MARTHA ELENA MORALES ORJUELA, solicitó el pago de las cesantías el 15 de abril de 2016, con escrito de petición con radicado 2016-CES-323772 (Folio 20 «002DemandaPoderAnexos»).

3. Que la Secretaría de Educación de Cundinamarca en nombre y representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG- mediante la Resolución 001226 de 21 de junio de 2016 reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas a la señora MARTHA ELENA MORALES ORJUELA por valor neto de SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($73.760.723) (Folio 21 «002DemandaPoderAnexos»).

4. Que el monto reconocido en la Resolución 001226 de 21 de junio de 2016 estuvo disponible para pago solo hasta el 26 de agosto de 2016 (Folio 23 «002DemandaPoderAnexos»).

5. Que mediante escrito de petición de 19 de marzo de 2019, con radicado No 2019050366, por intermedio de apoderado judicial, la señora MARTHA ELENA MORALES ORJUELA solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, en el pago de las cesantías reconocidas por medio de la resolución 001226 de 21 de junio de 2016 (Folios 26 a 28 «002DemandaPoderAnexos»).

6. Que a la fecha de presentación de esta demanda, la Entidad no ha dado respuesta al aludido escrito de petición.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en los siguientes **problemas jurídicos**:

1) ¿Debe declararse la existencia del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo respecto a la petición elevada por la señora MARTHA ELENA MORALES ORJUELA el 19 de marzo de 2019 ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-?, **2)** ¿Debe la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- pagar a la señora MARTHA ELENA MORALES ORJUELA la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías parciales reclamadas, contando a partir del día siguiente al que venció el término legal establecido, al no haberse expedido el acto administrativo y pagado la misma dentro de los términos señalados en la Ley 1071 de 2006 que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 20 a 30 del archivo denominado *«002DemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

---

[1] «**Artículo 207. *CONTROL DE LEGALIDAD.*** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -19 de febrero de 2020: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole de su conocimiento a este Despacho («003ActaReparto»).
-12 de marzo de 2020: Auto que admite demanda y ordena notificar a la demandada («005AutoAdmiteDemanda»).
- 23 de julio de 2020 pago de gastos procesales («008PagoGastos»).
-19 de agosto de 2020 Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («009NotificacionPersonal»).
-6 de octubre de 2020: Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones previas («010ContestacionDemanda»).
-11 de diciembre: Fijación en lista («012FijacionLista»).

TERCERO: DECLÁRASE cerrado el periodo probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

CUARTO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

QUINTO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

SEXTO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- al doctor JUAN CAMILO OTÁLORA ALDANA en los términos de la sustitución a él conferido y que obra en el folio 3 del archivo denominado «021PoderFomag».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

144b2628d70338012a369a799202d3e0064cccb2fcc094b684c6b0b4ccb755b5

Documento generado en 03/06/2021 12:04:38 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2019-00295-00**
Demandante:	**ÁNGEL DARÍO BAQUERO BEJARANO**
Demandado:	**MUNICIPIO DE SAN BERNARDO**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Ingresa el proceso a Despacho con constancia secretarial que da cuenta de la existencia de depósitos judiciales consignados, circunstancia frente a la cual, aunque la elaboración de la liquidación del crédito es una actuación de parte, se encuentra necesario realizarla de oficio, como quiera que, de encontrarse saldada la obligación, emerge la necesidad imperiosa de realizar levantamiento de las medidas cautelares decretadas, contrastado que la demandada es una Entidad Pública, a lo que se procede.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 10 de octubre de 2019 se profirió mandamiento de pago en el presente asunto, así:

> «***PRIMERO.-*** *LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor del señor* ***ÁNGEL DARÍO BAQUERO BEJARANO*** *y en contra del* ***MUNICIPIO DE SAN BERNARDO****, así:*

*1.1. Por la suma de **NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($94.527.485)** por concepto de los valores adeudados en virtud de la condena impuesta por este Juzgado dentro del medio de control de reparación directa radicado bajo el Nº 25307-33-33-001-2013-00561.*

Por los intereses moratorios causados sobre la anterior suma de dinero liquidados a la tasa equivalente al DTF desde el 11 de abril de 2018 y hasta el 11 de febrero de 2019 y, a la tasa comercial desde el 12 de febrero de 2019 y hasta que se materialice el pago.

***SEGUNDO.-** Por la suma de **SETECIENTOS MIL PESOS ($700.000)**, a cargo del MUNICIPIO DE SAN BERNARDO y a favor del señor ÁNGEL DARÍO BAQUERO BEJARANO por concepto de las costas a las que fue condenado en el medio de control ya referenciado.*

(…)»[1]

2.2. El 4 de febrero de 2021 se ordenó seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago de 10 de octubre de 2019[2].

2.3. El 31 de mayo de 2021 ingresó el proceso a Despacho informando de la existencia de títulos judiciales consignados en el presente proceso.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

3.1. De conformidad con lo señalado en el auto en el que se libró el mandamiento de pago, en el presente asunto se cuenta con dos sumas de capital, así:

$94.527.485 sobre la cual deben liquidarse intereses al DTF entre el 11 de abril de 2018 y el 11 de febrero de 2019 y a la tasa comercial desde el 12 de febrero de 2019 hasta que se cuente con el pago total de la obligación.

$700.000 correspondiente al valor de las costas procesales del proceso ordinario.

---

[1] «005AutoLibraMandamientodePago» C01Principal
[2] «036AutoOrdenaSeguirAdelanteEjecucion» C01Principal

3.2. Por otra parte, se cuenta con los siguientes valores que deben ser tenidos como abonos:

No. Depósito Judicial	*Fecha*	*Valor*
431220000011091[3]	10/12/2019	$25.000.000
431220000020963[4]	09/03/2021	$94.578.667.05
431220000020964[5]	09/03/2021	$47.212.559.95

3.3. En ese orden, la liquidación del crédito es la siguiente:

<u>Sobre el capital de $94.527.485</u>

Liquidación interés a la tasa del DTF entre el 11 de abril de 2018 y el 11 de febrero de 2019.

TOTAL ADEUDADO CAPITAL	*INICIO DD/MM/AA*			*CORTE DD/MM/AA*			*DTF ANUAL*	*MAX POR LA SUPERFINANCIERA ((1+Ie%)^(1/365))-1 donde Ie= Tasa efectiva anual por mora.*	*DÍAS MORA*	*capital * Interés diario * días mora = TOTAL MORA*
$ 94,527,485.00	11	4	2018	30	4	2018	4.90	0.00013107	20	$ 247,793.91
$ 94,527,485.00	1	5	2018	31	5	2018	4.70	0.00012584	30	$ 356,861.88
$ 94,527,485.00	1	6	2018	30	6	2018	4.60	0.00012322	30	$ 349,436.80
$ 94,527,485.00	1	7	2018	31	7	2018	4.57	0.00012244	30	$ 347,207.89
$ 94,527,485.00	1	8	2018	31	8	2018	4.53	0.00012139	30	$ 344,235.03
$ 94,527,485.00	1	9	2018	30	9	2018	4.53	0.00012139	30	$ 344,235.03
$ 94,527,485.00	1	10	2018	31	10	2018	4.43	0.00011877	30	$ 336,797.90
$ 94,527,485.00	1	11	2018	30	11	2018	4.42	0.00011850	30	$ 336,053.79
$ 94,527,485.00	1	12	2018	31	12	2018	4.54	0.00012165	30	$ 344,978.35
$ 94,527,485.00	1	1	2019	31	1	2019	4.56	0.00012217	30	$ 346,464.78
$ 94,527,485.00	1	2	2019	11	2	2019	4.57	0.00012244	11	$ 127,309.56
										$ 3,481,374.92

Liquidación de interés a tasa comercial desde el 12 de febrero de 2019 hasta la fecha del primer abono.

[3] «01DepositoJudicial110191Asociado20210224» C03DepositosJudiciales
[4] «02DepositoJudicial431220000020963» C03DepositosJudiciales
[5] «03DepositoJudicial431220000020964» C03DepositosJudiciales

TOTAL ADEUDADO CAPITAL	*INICIO DD/MM/AA*			*CORTE DD/MM/AA*			*CORRIENTE BANCARIO*	*MORA*	*MAX POR LA SUPERFINANCIERA ((1+Ie%)^(1/365))-1 donde Ie= Tasa efectiva anual por mora.*	*DÍAS MORA*	*capital * Interes diario * días mora = TOTAL MORA*
$ 94,527,485.00	12	2	2019	28	2	2019	19.70	29.55	0.00070956	19	$ 1,274,381.40
$ 94,527,485.00	1	3	2019	31	3	2019	19.37	29.06	0.00069906	30	$ 1,982,417.17
$ 94,527,485.00	1	4	2019	30	4	2019	19.32	28.98	0.00069747	30	$ 1,977,897.54
$ 94,527,485.00	1	5	2019	31	5	2019	19.34	29.01	0.00069811	30	$ 1,979,705.71
$ 94,527,485.00	1	6	2019	30	6	2019	19.30	28.95	0.00069683	30	$ 1,976,088.96
$ 94,527,485.00	1	7	2019	31	7	2019	19.28	28.92	0.00069619	30	$ 1,974,279.96
$ 94,527,485.00	1	8	2019	31	8	2019	19.32	28.98	0.00069747	30	$ 1,977,897.54
$ 94,527,485.00	1	9	2019	30	9	2019	19.32	28.98	0.00069747	30	$ 1,977,897.54
$ 94,527,485.00	1	10	2019	31	10	2019	19.10	28.65	0.00069044	30	$ 1,957,980.01
$ 94,527,485.00	1	11	2019	30	11	2019	19.03	28.55	0.00068821	30	$ 1,951,631.93
$ 94,527,485.00	1	12	2019	10	12	2019	18.91	28.37	0.00068436	10	$ 646,912.49
											$ 19,677,090.24

Así pues, hasta el 10 de diciembre de 2019, la obligación se encontraba así:

Capital 1	$94.527.485
Intereses DTF	$3.481.374.92
Intereses Comercial	$19.677.090.24
Capital 2	$700.000

Debiendo aplicar el abono efectuado el 10 de diciembre de 2019 por $25.000.000, ha sido criterio de este Despacho realizar imputación a intereses y luego a capital conforme señala el artículo 1653 del Código Civil, por lo que se tiene así:

Abono	$25.000.000
Menos Intereses (DTF+Comercial)	$23.158.465.16
Saldo a Favor	**$1.841.534.84**

Quedando un saldo a favor debe aplicarse a capital así:

Capital	$94.527.485
Menos Saldo a Favor	$1.841.534.84
Saldo Insoluto	**$92.685.950.16**

En ese orden, la liquidación debe continuarse respecto de **$92.685.950.16** como Capital 1.

TOTAL ADEUDADO CAPITAL	*INICIO DD/MM/AA*			*CORTE DD/MM/AA*			*CORRIENTE BANCARIO*	*MORA*	*MAX POR LA SUPERFINANCIERA ((1+Ie%)^(1/365))-1 donde Ie= Tasa efectiva anual por mora.*	*DÍAS MORA*	*capital * Interes diario * días mora = TOTAL MORA*
$ 92,685,950.16	11	12	2019	31	12	2019	18.91	28.37	0.00068436	20	$ 1,268,619.36
$ 92,685,950.16	1	1	2020	31	1	2020	18.77	28.16	0.00067988	30	$ 1,890,447.54
$ 92,685,950.16	1	2	2020	28	2	2020	19.06	28.59	0.00068917	30	$ 1,916,279.49
$ 92,685,950.16	1	3	2020	31	3	2020	18.95	28.43	0.00068565	30	$ 1,906,491.43
$ 92,685,950.16	1	4	2020	30	4	2020	18.69	28.04	0.00067731	30	$ 1,883,306.09
$ 92,685,950.16	1	5	2020	31	5	2020	18.19	27.29	0.00066120	30	$ 1,838,520.28
$ 92,685,950.16	1	6	2020	30	6	2020	18.12	27.18	0.00065894	30	$ 1,832,229.27
$ 92,685,950.16	1	7	2020	31	7	2020	18.12	27.18	0.00065894	30	$ 1,832,229.27
$ 92,685,950.16	1	8	2020	31	8	2020	18.29	27.44	0.00066443	30	$ 1,847,498.46
$ 92,685,950.16	1	9	2020	30	9	2020	18.35	27.53	0.00066637	30	$ 1,852,880.31
$ 92,685,950.16	1	10	2020	31	10	2020	18.09	27.14	0.00065797	30	$ 1,829,531.54
$ 92,685,950.16	1	11	2020	30	11	2020	17.84	26.76	0.00064987	30	$ 1,807,013.34
$ 92,685,950.16	1	12	2020	31	12	2020	17.46	26.19	0.00063751	30	$ 1,772,658.13
$ 92,685,950.16	1	1	2021	31	1	2021	17.32	25.98	0.00063295	30	$ 1,759,961.92
$ 92,685,950.16	1	2	2021	28	2	2021	17.54	26.31	0.00064012	30	$ 1,779,903.65
$ 92,685,950.16	1	3	2021	9	3	2021	17.41	26.12	0.00063588	9	$ 530,437.86
											$ 27,548,007.90

Así las cosas, a 9 de marzo de 2021 la liquidación del crédito era la siguiente:

Capital 1	$92.685.950.16
Intereses	$27.548.007.90
Capital 2	$700.000

Correspondiendo realizar los abonos, se tiene así:

Valor abono 1	$94.578.667.05
Menos Intereses	$26.366.235.82
Saldo a Favor Abono 1	**$68.212.431.23**

Se procede a aplicar el saldo a favor al capital insoluto:

Capital 1	$92.685.950.16
Menos Saldo a favor Abono 1	$68.212.431.23
Saldo Insoluto	**$24.473.518.93**

Pero como quiera que en la misma fecha se realizó otro abono, debe imputarse así:

Abono 2	$47.212.559.95
Menos Saldo Insoluto	$24.473.518.93
Saldo a favor	**$22.739.041.02**

Del saldo a favor, entonces se resta, el valor indicado como **Capital 2:**

Saldo a favor	$22.739.041.02
Menos Capital 2	$700.000
	$22.039.041.02

Se evidencia entonces que con las sumas consignadas al proceso, no sólo se cubre la obligación ejecutada en su totalidad, sino que además resulta un valor a favor del MUNICIPIO DE SAN BERNARDO equivalente a **$22.039.041.02**.

3.4. En ese orden, debe darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 461 del Código General del Proceso que señala:

> «**Artículo 461.** ***TERMINACIÓN DEL PROCESO POR PAGO*****.** Si antes de iniciada la audiencia de remate, se presentare escrito proveniente del ejecutante o de su apoderado con facultad para recibir, que acredite el pago de la obligación demandada y las costas, el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.
>
> Si existieren liquidaciones en firme del crédito y de las costas, y el ejecutado presenta la liquidación adicional a que hubiere lugar, acompañada del título de consignación de dichos valores a órdenes del juzgado, el juez declarará terminado el proceso una vez sea aprobada aquella, y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.
>
> Cuando se trate de ejecuciones por sumas de dinero, y no existan liquidaciones del crédito y de las costas, podrá el ejecutado presentarlas con el objeto de pagar su importe, acompañadas del título de su consignación a órdenes del juzgado, con especificación de la tasa de interés o de cambio, según el caso. Sin que se suspenda el trámite del proceso, se dará traslado de ella al ejecutante por tres (3) días como dispone el artículo 110; objetada o no, el juez la aprobará cuando la encuentre ajustada a la ley.
>
> Cuando haya lugar a aumentar el valor de las liquidaciones, si dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del auto que las apruebe no se hubiere presentado el título de consignación adicional a órdenes del juzgado, el juez dispondrá por auto que no tiene recursos, continuar la ejecución por el saldo y entregar al ejecutante las sumas

> depositadas como abono a su crédito y las costas. Si la consignación se hace oportunamente el juez declarará terminado el proceso y dispondrá la cancelación de los embargos y secuestros, si no estuviere embargado el remanente.
>
> Con todo, continuará tramitándose la rendición de cuentas por el secuestre si estuviere pendiente, o se ordenará rendirlas si no hubieren sido presentadas.»

Así las cosas, al haberse efectuado consignaciones a la cuenta de depósitos judiciales del Juzgado que cubren el valor total de la obligación se declarará terminado el proceso por pago total, se dispondrá el levantamiento de medidas cautelares y la entrega de los títulos judiciales a quien corresponda.

En virtud de lo expuesto, el Juzgado **DISPONE:**

PRIMERO: DECLÁRASE TERMINADO EL PROCESO por pago total de la obligación, de conformidad con lo señalado.

SEGUNDO: ORDÉNASE la entrega de los títulos judiciales obrantes en el plenario así:

No. Depósito Judicial	***Fecha***	***Valor***	***Beneficiario***
431220000011091[6]	10/12/2019	$25.000.000	ÁNGEL DARÍO BAQUERO BEJARANO
431220000020963[7]	09/03/2021	$94.578.667.05	ÁNGEL DARÍO BAQUERO BEJARANO

[6] «01DepositoJudicial110191Asociado20210224» C03DepositosJudiciales
[7] «02DepositoJudicial431220000020963» C03DepositosJudiciales

TERCERO: FRACCIÓNESE el título judicial No. 431220000020964 consignado el 9 de marzo de 2021 por valor de $47.212.559.95 en dos títulos judiciales y hágase entrega, así:

Título Judicial	***Valor***	***Beneficiario***
Título 1	$25.173.518.93	ÁNGEL DARÍO BAQUERO BEJARANO
Título 2	$22.039.041.02	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO

CUARTO: HÁGASE ENTREGA al MUNICIPIO DE SAN BERNARDO de los títulos judiciales que puedan llegar a constituirse en el futuro.

QUINTO: DECRÉTASE EL LEVANTAMIENTO de las medidas cautelares que se hubieren determinado. Por secretaría **OFÍCIESE** de manera inmediata.

SEXTO: En firme esta providencia, de ser el caso **LIQUÍDENSE** los gastos del proceso, de existir remanentes, **ENTRÉGUENSE** al apoderado judicial de la parte demandante y **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
6f5754d0e37dea345769e2b36cd238ddab07107970b6c92db5dfac43880f5760
Documento generado en 03/06/2021 12:04:17 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00313-00**
DEMANDANTE:	**JAMES ORLANDO VALENCIA VALDÉS**
DEMANDADO:	**CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL-**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 15 de abril de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (*«014AutoFijaLitigio»*) y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes presentaran objeción alguna, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
7F70BDCFF9D403F26EFF29598829688BAF900D1C55E96FF6A1FB4C5987A4CBC4
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:33 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00318-00**
DEMANDANTE:	**JULIANA JAQUELINE BARRERA GÓMEZ**
DEMANDADO:	**MUNICIPIO DE GIRARDOT**
VINCULADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Encontrándose el presente asunto pendiente para fijar fecha y hora con el fin de realizar la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 o en su lugar, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011 (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021) para dictar sentencia anticipada, advierte este Despacho que la vinculada NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, pese a que fue debidamente notificada del auto admisorio de la demanda y del auto de su vinculación, no ha constituido apoderado judicial en ejercicio de su derecho de postulación.

En ese orden, en virtud del principio de contradicción y defensa, resulta imperioso requerir a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, para que constituya apoderado judicial dentro del asunto de la referencia.

En consecuencia, **SE DISPONE**:

PRIMERO: REQUIÉRASE a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, para que dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación de este proveído constituyan apoderado judicial en ejercicio del derecho de postulación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
2A2DD1AF79DB7AA292CD303EE9D6E7273680430CCD1F7116E5978FE73503F661
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:45 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2019-00333-00**
Demandante:	**NOHORA ELSA ROMERO ARÉVALO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 15 de abril de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo («*017AutoFijaLitigio*») y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes hicieran manifestación al respecto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO

JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
C044C06FF09441CB21484CEC8E094C11592B5EC7D18C3042EC307186CD56B5E0
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:39 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2019-00337-00**
Demandante:	**LUCY MARTÍNEZ PERDOMO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 15 de abril de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo («*017AutoFijaLitigio*») y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes hicieran manifestación al respecto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO

JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
06EAEE8085A934517B5F2F6D43554BC0F51D7736C6A0597AC274E1E7032CDF54
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:40 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2019-00338-00**
DEMANDANTE:	**MEDARDO RUÍZ y HERCILIA SALAZAR DE RUÍZ**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 13 de diciembre de 2019 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentaron los señores MEDARDO RUIZ y HERCILIA SALAZAR DE RUIZ, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO NACIONAL-, con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución No. 4473 de 16 de septiembre de 2019, por medio de la cual la Entidad demandada les negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes (*«006AutoAdmiteDemanda»*).

2.2. El 19 de febrero de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«009NotificacionDemanda»*).

2.3. El 26 de agosto de 2020 la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, por conducto de apoderada judicial, contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«013ContestacionDemanda»*).

2.4. El 27 de agosto de 2020, el apoderado judicial de la parte actora descorrió traslado de las excepciones de mérito esbozadas en el escrito de contestación de la demanda (*«014EscritoDemandante»*).

2.5. El 23 de noviembre de 2020 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 26 de agosto de 2020 (*«015ConstanciaTerminos»*).

2.6. Motivo por el cual, el 24 de noviembre de 2020, la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones de mérito planteadas (*«016FijacionLista»*).

2.7. Mediante proveído de 25 de febrero de 2021 este Despacho, previo a emitir pronunciamiento frente a la procedencia de la aplicación del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, requirió a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que allegara el expediente administrativo que contuviese los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso (*«019AutoRequiere»*).

2.8. El 30 de abril 2021 la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL allegó el expediente administrativo del asunto de la referencia y el expediente prestacional del señor LEONARIO RUIZ SALAZAR (q.e.p.d.) (*«022EscritoEjercito»*). Documental que fue remitida una vez más el 6 de mayo siguiente (*«024EscritoEjercito»*).

2.9. El 10 de mayo de 2021 el proceso al Despacho (*«025ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021) ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
>
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;
>
> c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
>
> d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
>
> **El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia**.
>
> Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.
>
> No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.
>
> **2.** En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.
>
> Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

> **3.** En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.
>
> **4.** En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.
>
> **Parágrafo**. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.
>
> Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.
> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver habida cuenta que no fueron propuestas; tampoco hay pruebas por practicar y, únicamente, las partes solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas con la demanda y con su contestación, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a realizar la fijación del litigio y a pronunciarse sobre las pruebas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda y de su contestación se tiene que las partes coinciden en la existencia de los **actos demandados** en la presente acción, estos son:

- La Resolución No. 4473 de 16 de septiembre de 2019 *«por la cual se resuelve una solicitud de pensión de sobrevivientes, con fundamento en los Expedientes EJC No. 5546 de 1996 y MDN No. 4058 de 2019»*, mediante la cual la Entidad demandada negó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes a favor de los demandantes con ocasión de la muerte de su hijo, el señor LEONAIRO RUIZ SALAZAR (q.e.p.d.) (folios 23 a 25 «*002DemandaPoderAnexos*» y 89 a 91 «*022EscritoEjercito*»).

En consecuencia, a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (folio 3 «*002DemandaPoderAnexos*»):

- Se ordene a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor de los señores HERCILIA SALAZAR DE RUÍZ y MEDARDO RUIZ en calidad de padres del causante LEONAIRO RUIZ SALAZAR, con retroactividad al día siguiente de su muerte, esto es, el 6 de noviembre de 1995.

En virtud del líbelo introductorio y de su contestación, este Despacho señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El señor LEONAIRO RUÍZ SALAZAR (q.e.p.d.) identificado con la cédula de ciudadanía No. 4.668.257 en su carrera militar; fue incorporado a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL como soldado regular el 2 de mayo de 1991, después fue nombrado soldado voluntario el 18 de noviembre de 1992 hasta el 5 de noviembre de 1995, fecha de su muerte con calificación «*en combate por acción directa del enemigo*» (Folios 29 y 30 «*002DemandaPoderAnexos*»).

2. El 14 de febrero de 1996 la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, mediante la Resolución No. 1587, dio cumplimiento al artículo 8º del Decreto 2728 de 1968 y ascendió de manera póstuma al señor LEONAIRO RUÍZ SALAZAR al grado de Cabo Segundo (Folio 35 «*002DemandaPoderAnexos*»).

3. El señor LEONAIRO RUÍZ SALAZAR al momento de su muerte tenía el estado civil soltero y no tenía hijos, razón por la cual por medio de la Resolución No. 0331 de 15 de enero de 1997 a sus padres, los señores HERCILIA SALAZAR DE RUÍZ y MEDARDO RUÍZ le fue reconocido el pago de sus prestaciones sociales (Folios 32 y 33 «*002DemandaPoderAnexos*»).

4. El 23 de agosto de 20219 los señores HERCILIA SALAZAR DE RUÍZ y MEDARDO RUÍZ solicitaron ante la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del deceso del señor LEONAIRO RUÍZ SALAZAR (Folios 21 y 22 «*002DemandaPoderAnexos*»).

5. El 16 de septiembre de 2019 la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por medio de la Resolución No. 4473 negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada (Folios 23 a 25 «002DemandaPoderAnexos» y 89 a 91 «*022EscritoEjercito*»).

Bajo ese contexto, se encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) la procedencia del reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes a favor de los señores HERCILIA SALAZAR DE RUÍZ y MEDARDO RUÍZ con ocasión del fallecimiento de su hijo, el señor LEONAIRO RUÍZ SALAZAR, quien perdió la vida en combate por acción directa del enemigo.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en establecer la legalidad del acto administrativos acusado resolviendo los siguientes **problemas jurídicos**: **1)** ¿Vulnera el derecho a la igualdad y a la favorabilidad el acto administrativo demandando?, **2)** ¿Debe la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes a los señores HERCILIA SALAZAR RUÍZ y MEDARDO RUÍZ con ocasión del fallecimiento de su hijo, el señor LEONAIRO RUÍZ SALAZAR, quien pereció en combate por acción directa del enemigo? y, en el evento en que la respuesta a los anteriores interrogantes sea positiva, **3)** ¿Deben reintegrar los señores HERCILIA SALAZAR RUÍZ y MEDARDO RUÍZ el valor pagado por concepto de la compensación por muerte?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios

16 a 41 «*002DemandaPoderAnexos*» y 2 a 3 «*008EscritoAnexos*» del expediente digitalizado.

PARTE DEMANDADA

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con el escrito de contestación de la demanda visibles en los archivos «*022EscritoEjercito*» y «*024EscritoEjercito*» del expediente digitalizado.

Por otra parte, se negará la solicitud de oficiar a la Entidad demanda para que allegue el cuaderno prestacional del señor RUIZ SALAZAR (q.e.p.d.) en atención a que esta documental fue allegada por la Dirección de Prestaciones Sociales del EJÉRCITO NACIONAL el 30 de abril de 2021 (*«022EscritoEjercito»* y *«024EscritoEjercito»*).

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

---

[1] «**Artículo 207. *CONTROL DE LEGALIDAD*.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -31 de octubre de 2019: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole de su conocimiento a este Despacho («003ActaReparto»).
-13 de diciembre de 2019: Auto que admite demanda y ordena notificar a la demandada («006AutoAdmiteDemanda»).
-16 de diciembre de 2019: Pago gastos procesales («007PagoGastos»).
-19 de febrero de 2020: Notificación personal de la demanda («009NotificacionDemanda»).
-26 de agosto de 2020: Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones previas («013ContestacionDemanda»).

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÁSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

TERCERA: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 16 a 41 «*002DemandaPoderAnexos*» y 2 a 3 «*008EscritoAnexos*» del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

CUARTO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con el escrito de contestación de la demanda visibles en los archivos «*022EscritoEjercito*» y «*024EscritoEjercito*» del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

QUINTO: NIÉGUESE la solicitud de oficiar a la DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que «*allegue copia autentica del cuaderno*

-27 de agosto de 2020: Parte demandante descorre excepciones de fondo planteadas por la demandada («014EscritoDemandante»).
-24 de noviembre de 2020: Fijación en lista («016FijacionLista»).
-25 de febrero de 2021: Auto requiere antecedentes administrativos («019AutoRequiere»).
-30 de abril de 2021: Entidad demandada allega expediente administrativo («022EscritoEjercito»).
.

prestacional del soldado voluntario LEONARIO RUIZ SALAZAR», por lo expuesto en precedencia.

SEXTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SÉPTIMO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
A17A006DD65DEDE28E46601EC4E96ED7B475ECBE6567CF041DBA8E07EE845854
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:34 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00340-00**
Demandante:	**LUIS FERNANDO AGUIRRE VELÁSQUEZ**
Demandado:	**CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Encontrándose el proceso para proferir la correspondiente sentencia, se encuentra necesario contar con la certificación de las partidas computables de la asignación de retiro del señor LUIS FERNANDO AGUIRRE VELÁSQUEZ.

Por lo anterior, y en virtud de la facultad conferida en el inciso 2º del artículo 213 de la Ley 1437 de 2011[1], la **CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL-**, deberá aportar la certificación de las partidas computables de la asignación de retiro del señor LUIS FERNANDO AGUIRRE VELÁSQUEZ. Lo anterior deberá ser aportado dentro de los diez (10) días

[1] «**Artículo 213. *PRUEBAS DE OFICIO*.** En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.

Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.

En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete».

siguientes a la notificación de la presente providencia **por el apoderado judicial de la Entidad**, sin que se requiera librar oficio por la Secretaría del Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
e1c546aefefc47f856da5873c2f530c49f6af7f26d891c45a99fa3f9a243bd0f
Documento generado en 03/06/2021 12:04:19 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2019-00342-00**
Demandante:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**
Demandado:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DE GIRARDOT**
Medio de Control:	**CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar presentada por la apoderada judicial de la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Encontrándose el presente proceso pendiente de resolver las excepciones con el carácter de previas, encuentra el Despacho que el apoderado judicial del demandante solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los siguientes Actos Administrativos: (*«014SolicitudMedidaCautelar»* del cuaderno *«C02MedidaCautelar»*):

> *«• La **Resolución No. 002 de 08 de enero de 2019**, por medio de la cual la Gerente (E) de la E.S.E. Hospital de Girardot, liquidó unilateralmente el Convenio Interadministrativo de Operación de 21 de julio de 2013, suscrito entre la E.S.E Hospital Universitario de La Samaritana y la E.S.E. Hospital de Girardot, estableciendo un saldo pendiente de pago a su favor y a cargo de*

la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana, por la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($393.431.577).

*• La **Resolución No. 006 de 28 de enero de 2019**, mediante la cual la Gerente (E) de la E.S.E. Hospital de Girardot, resolvió un Recurso de Reposición presentado contra la Resolución No. 002 de 2019».*

2.1.2. Como fundamento de su solicitud, luego de reiterar los hechos señalados en el libelo introductorio indicó que la Resolución No. 002 de 8 de enero de 2019, está viciada de nulidad por haber sido expedida con falta de competencia, la cual aduce, constituye la forma más grave de ilegalidad en la que puede incurrir un acto administrativo, cobijando además la Resolución que confirmó la decisión de liquidación.

2.1.3. Además señaló que el 11 de diciembre de 2020, la E.S.E. Hospital de Girardot, presentó demanda ejecutiva acompañada de solicitud de medida cautelar contra la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana y que como soporte de la ejecución se aportó las Resoluciones Nos. 002 y 006 de 8 y 28 de enero de 2019, acción ejecutiva que fue conocida en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Girardot, bajo el radicado No. 25307-33-33-002-2020-00228-00; quien mediante auto de 23 de marzo de 2021, libró mandamiento ejecutivo de pago contra la E.S.E. Hospital Universitario de La Samaritana y que a la fecha el proceso se encuentra para decidir la medida cautelar de embargo y secuestro deprecada por la entidad ejecutante.

2.1.4. Refiere que una vez decretada la medida cautelar solicitada por la E.S.E. Hospital de Girardot, se afectarían los recursos esenciales con que cuenta la Institución para prestar los servicios de salud que le asisten respecto de sus usuarios, pues aduce que la solicitud cautelar elevada en el proceso ejecutivo generaría de forma directa e inminente una lesión irreversible a los derechos fundamentales a la salud, vida e integridad personal no solo de la población usuaria de los servicios especializados que presta dicha Empresa Social del Estado, en razón de su objeto misional, sino también de aquellas personas que

son atendidas con ocasión de la pandemia generada por la enfermedad del Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

2.2. El 13 de mayo de 2021 se fijó en lista para correr traslado de la solicitud de medida cautelar (*«015FijacionLista»* del cuaderno *«C02MedidaCautelar»*).

2.3. El 19 de mayo de 2021 el doctor YEISON ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL DE GIRIADOT descorrió el traslado de la medida cautelar solicitada por el demandante. Para el efecto, en síntesis, expuso (*«017EscritoHospitalGirardot»* del cuaderno *«C02MedidaCautelar»*):

2.3.1. En primer lugar se refirió a la procedencia de la medida cautelar en materia de suspensión de actos administrativos, para señalar que para la procedencia de la misma surge *i)* del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores que se alegan como violadas o *ii)* del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Señala que la suspensión provisional delos efectos del acto administrativo se encuentra atada a un examen de legalidad o de constitucionalidad que el Juez debe hacer para anticipar de alguna manera un caso de violación de norma superior por parte del acto acusado.

2.3.2. Refiere que revisada la solicitud de suspensión provisional de los actos no encuentra sustento constitucional o legal que motive la suspensión provisional, es decir no advierte violación de norma de dicho rango para proceder a decretar la medida cautelar, pues la demandante insiste en la falta de competencia para liquidar el convenio interadministrativo de operación 2013, desconociendo además la cláusula del contrato que se pactó para su liquidación, pues ahora conforme a la interpretación subjetiva acude a la disposición legal para determinar que la liquidación se encuentre por fuera del término.

2.3.3. Corolario de lo anterior indica que la liquidación unilateral del convenio interadministrativo suscrito entre las partes surgió en virtud del clausulado allí descrito, el cual se encuentra incólume, ejecutándose, terminándose y liquidándose conforme a lo allí descrito. Por lo que en virtud de ello, alegar la suspensión de los actos basados en la falta de competencia para su expedición no son motivos suficientes para que se materialice la media cautelar, más aun cuando es un hecho que debe controvertirse al momento de proferirse la correspondiente sentencia.

2.3.4. Además señala que el Acto Administrativo que establece la liquidación unilateral del Convenio Interadministrativo de Operación señala la liquidación del mismo en forma unilateral procede cuando transcurridos seis meses de su terminación las partes no han llegado a un acuerdo para realizarla bilateralmente, sustentada en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

2.3.5. Indica que el Acto Administrativo de liquidación señala que vencido el plazo para la liquidación de común acuerdo, la misma podrá ser efectuada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refiere los incisos 1° y 2° del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011.

2.3.6. En virtud de lo anterior, menciona que el vencimiento de ejecución del Convenio Interadministrativo de Operación fue el 12 de febrero de 2016, por lo que la E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT contaba con 6 meses para liquidarlo bilateralmente, es decir hasta el 11 de agosto de 2016, unilateralmente otros 6 meses y en cualquier tiempo dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del término para liquidar unilateralmente en vía contractual, iniciando desde el 12 de febrero de 2017 al 11 de febrero de 2019, por lo que habiéndose expedido la Resolución No. 002 el 8 de enero de 2019, refiere que la misma se encuentra dentro de los términos legales ya referidos para producirse la liquidación unilateral.

2.3.7. En lo correspondiente a la necesidad de proteger y garantizar provisionalemente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia a prevencion de un perjuicio irremediable indica que la parte demandante argumenta que los actos administrativos fueron expedidos de forma irregular y que pueden afectar la disponibilidad de sus recursos públicos en virtud a que la E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT radicó demanda ejecutiva acompañada de solicitud de medida cautelar y que es de conocimiento del Juzgado Segundo Administrativo de Girardot, el cual mediante auto de 23 de marzo de 2021 libró mandamiento de pago contra la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, argumentos en virtud de los cuales refiere que la E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT no inició proceso administrativo de cobro coactivo porque dentro de su estructura no cuenta con dicho proceso y procedimiento, razón por la cual acudió ante lo Contencioso Administrativo para obtener el pago de las sumas liquidadas y que son adeudadas por la E.S.E. HOPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA, obligaciones claras expresas y actualmente exigibles, contenidas en los actos administrativos que para la Juez de conocimiento gozan de fuerza de ejecutoria y dentro del cual el apoderado de la E.S.E. HOPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ha ejercido su derecho a la defensa, presentando los recursos y las excepciones correspondientes frente al mandamiento de pago emitido.

2.3.8. En cuanto al presunto detrimento patrimonial a la Institución con afectación a los recursos provenientes del sector salud con que se dispone para prestar los servicios de salud que le asisten respecto de sus usuarios, así también para aquellas personas que son atendidas con ocasión del Covid-19, menciona que no es cierta dicha afirmación toda vez que la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA no es una Entidad Promotora de Salud, pues por el contrario es una Institución que Presta Servicios de Salud y los recursos que le ingresan son de libre destinación para garantizar el funcionamiento de la Entidad en gastos de personal e inversiones de la misma, por lo que al momento de distribuir los ingresos por venta de servicios de salud algunos de ellos se distribuyen y asignan para el pago de sentencias y conciliaciones.

2.3.9. Finalmente expone los actos administrativos demandados gozan de presunción de legalidad y que la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA es una Entidad pública de carácter descentralizada, del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, representada legalmente por su gerente y que por ente se encuentra facultada para celebrar contratos y convenios.

2.4. El 24 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho («*018ConstanciaDespacho*» del cuaderno «*C02MedidaCautelar*»).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

3.1. GENERALIDADES:

3.1.1. MEDIDAS CAUTELARES EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

3.1.1.1. Las medidas cautelares en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se encuentran contempladas en los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 y son aplicables en aquellos casos en que se consideren «*necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia*» según señala el mismo artículo 229.

Al tenor del artículo 230, que enlista aquellas que pueden ser decretadas, pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. Al respecto, ha señalado el Consejo de Estado:

> «*Avanzando en la tipología desarrollada por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se diferencia entre medidas cautelares preventivas, tendientes a operar como una suerte de acción impeditiva para que no se pueda consolidar una afectación a un derecho; conservativas que buscan mantener o salvaguardar un statu quo ante; anticipativas, en donde se pretende satisfacer por adelantado la pretensión perseguida por el demandante, mediante una decisión que propiamente correspondería al fallo que ponga fin al proceso y que se justifica en tanto que de no adoptarse se incurriría en un perjuicio irremediable para el actor, y de suspensión que corresponde a la medida*

tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa.»[1] (Subraya el Despacho)

3.1.1.2. Sobre los criterios para su procedencia, ha señalado el Alto Tribunal:

«…en cuanto a los criterios que debe seguir el juez contencioso administrativo para determinar la procedencia de una medida cautelar, es preciso reconocer que éste cuenta con un espacio de discrecionalidad para adoptarla así como para modular sus efectos en el caso concreto. En este contexto, debe el Juez tener en cuenta el principio de proporcionalidad como, de hecho, se desprende, además de las exigencias constitucionales y convencionales, de la normativa sobre las medidas cautelares al establecer como uno de los requisitos para el decreto de la cautela que "el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla" (artículo 231 CPAyCA) (Destaca el Despacho).

3.10.- Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleja la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que en el escenario de las medidas cautelares, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora[2]*, debe proceder a un estudio de ponderación y sus subprincipios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad*[3]*.»*[4]

3.1.2. REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES

El artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto a los requisitos que deben tenerse en cuenta al momento del decreto de la medida cautelar dispone:

---

[1] CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil quince (2015). Radicación número: 11001-03-26-000-2015-00022-00(53057).

[2] Cita de cita: *Como ya se ha sostenido, estos principios del periculum in mora y el fumus boni iuris significan que "siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio.". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 27 de febrero de 2013, exp. 45316 (entre otras decisiones similares).*

[3] Cita de cita: *En cualquier clase de decisiones jurídicas debe considerarse la razonabilidad de esta, que no solo se agota con la simple aplicación lógico-formal de la norma, sino que supone velar porque la decisión en el caso concreto consulte criterios de justicia material y no devenga en irrazonable, desproporcionada o, en suma, contraria a la constitución; se trata, entonces, de adoptar una decisión que satisfaga el criterio de aceptabilidad; y para lograr ello en buena medida contribuye la valoración de los principios constitucionales.*

[4] Ibídem.

«**Artículo 231.** ***REQUISITOS PARA DECRETAR LAS MEDIDAS CAUTELARES.***

"Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:

a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios»

De lo anterior deviene que la procedencia de la suspensión provisional se presenta cuando la violación de las normas invocadas surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o de las pruebas que el accionante haya aportado para que sea decretada la medida cautelar.

3.2. CASO CONCRETO

Descendiendo al caso concreto, se observa que la solicitud de suspensión provisional recae en los efectos de los actos administrativos Resoluciones Nos. 002 de 8 de enero de 2019 «*POR LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE OPERACIÓN DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL DE*

GIRARDOT" Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA"» y, 006 de 28 de enero de 2019 «*POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN*», al considerar que fueron expedidas con falta de competencia aunado a que refiere que la E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT radicó demanda ejecutiva correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Segundo Administrativo de Girardot bajo el radicado No. 25307-33-33-002-2020-00228-00, quien mediante auto de 23 de marzo de 2021, libró mandamiento ejecutivo de pago contra la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA y que a la fecha el proceso se encuentra para decidir la medida cautelar de embargo y secuestro deprecada por la Entidad ejecutante.

Por lo anterior, refiere que una vez decretada la medida cautelar solicitada por la E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT, se afectarían los recursos esenciales con que cuenta la Institución para prestar los servicios de salud que le asisten respecto de sus usuarios, generándose de forma directa e inminente una lesión irreversible a los derechos fundamentales a la salud, vida e integridad personal no solo de la población usuaria de los servicios especializados que presta dicha Empresa Social del Estado, en razón de su objeto misional, sino también de aquellas personas que son atendidas con ocasión del Covid-19.

Por su parte, la E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT al descorrer el traslado de la solicitud de medida cautelar señaló que la liquidación Unilateral del Convenio Interadministrativo de Operación 2013 sí se hizo dentro del término de competencia para el efecto pues, el vencimiento de ejecución del Convenio Interadministrativo de Operación fue el 12 de febrero de 2016, por lo que la E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT contaba con 6 meses para liquidarlo bilateralmente, es decir hasta el 11 de agosto de 2016, para liquidación unilateral otros 6 meses y en cualquier tiempo dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del término para liquidar unilateralmente en vía contractual, iniciando desde el 12 de febrero de 2017 al 11 de febrero de 2019, por lo que al expedirse la Resolución No. 002 el 8 de enero de 2019, se hizo dentro del término legal para producirse la liquidación unilateral.

De otro lado, señaló que el apoderado de la E.S.E. HOPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ha ejercido su derecho a la defensa, presentando los recursos y las excepciones correspondientes frente al mandamiento de pago emitido por el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot bajo el radicado No. 25307-33-33-002-2020-00228-00.

En este punto, como quiera que el principal argumento esbozado por el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA para la suspensión de los actos administrativos demandados consiste en el presunto decreto de la medida cautelar de embargo y secuestro solicitada por la E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT dentro de la demanda ejecutiva tramitada en el Juzgado Segundo Administrativo de Girardot bajo el radicado No. 25307-33-33-002-2020-00228-00, este Despacho encuentra procedente referirse a la figura de la prejudicialidad en procesos ejecutivos al respecto, el Honorable Consejo de Estado en proveído de 16 de julio de 2008 señaló:

> *«El proceso de ejecución parte de la certeza real y material del derecho cuya ejecución se pretende, de tal suerte que si la obligación contenida en el título carece de alguna de las características esenciales de los títulos ejecutivos (art. 488 C.P.C.), es probable que el proceso ejecutivo pierda su principal sustento.*
>
> *En ese contexto, el numeral 2 del artículo 509 ibídem precisa que es posible que cuando el título ejecutivo consista en una sentencia o en un laudo de condena, o en otra "providencia" que conlleve ejecución, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia.*
>
> *Así las cosas, es claro que la Ley no contempló la posibilidad de excepcionar en sede del proceso ejecutivo, la ilegalidad de los actos administrativos o contratos que contienen la obligación clara, expresa y exigible.*
>
> *En efecto, no resulta jurídicamente viable que el juez del proceso ejecutivo, el cual parte de la certeza y validez del derecho cuya ejecución se pretende, pueda arrogarse competencias propias del juez ordinario asignado para estudiar y determinar la validez de los actos administrativos o contractuales en los cuales se fundamenta la ejecución. Lo anterior por las siguientes razones:*
>
> *a) Primero, porque podría prestarse para que se desconozcan los términos de caducidad de las acciones ordinarias establecidos para controvertir la legalidad y validez de los actos administrativos en los cuales se encuentran contenidas las obligaciones cuya ejecución se persigue.*

b) Segundo, porque la ley procesal no autoriza al juez de ejecución para que, por la vía de la proposición de la excepción de ilegalidad, realice un análisis que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, corresponde a otra acción, a otro juez y a otro procedimiento (acciones de los artículos 84 a 87 C.C.A.).

c) Tercero, porque si bien podría argumentarse que el juez de la ejecución puede llegar a ser el mismo juez que el del contrato, lo cierto es que el procedimiento ejecutivo, dada su estructura, no está diseñado para que el fallador pueda realizar una valoración jurídica y probatoria lo suficientemente profunda dirigida exclusivamente a establecer la legalidad o ilegalidad de los actos sobre los cuales se fundamenta el título ejecutivo.

d) Cuarto, porque el juez de la ejecución, como máximo, podría decretar, de oficio o a solicitud de parte, la suspensión del proceso a términos de lo dispuesto en el artículo 170 del C. de P.C., disposición que puntualiza:

> ***"Art. 170.- Suspensión del proceso. El juez decretará la suspensión del proceso:***
>
> *"(...) 2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o en un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley.*
>
> ***"No obstante, el proceso ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso ordinario iniciado antes o después de aquél, que verse sobre la validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en éste es procedente alegar los mismos hechos como excepción…"*** *(negrillas adicionales).*
>
> *Si bien el inciso segundo del numeral 2 del citado artículo 170 ibídem, establece que no será procedente la suspensión del proceso ejecutivo por el sólo hecho de que exista otro proceso que verse sobre la validez del título en los eventos en los cuales resulte posible que en el ejecutivo se aleguen los mismos hechos como excepción, lo cierto es que, como se puso de presente anteriormente, la excepción de ilegalidad o invalidez de los actos administrativos no se puede proponer en el proceso ejecutivo, tal y como lo preceptúa el artículo 509 del C. de P. C.*

En ese orden de ideas, ante la acreditación efectiva de la existencia de un proceso ordinario en el cual se discutan la legalidad o la validez de los actos sobre los cuales se soporta el mandamiento ejecutivo de pago, lo procedente será que el juez, de oficio o a solicitud de parte, decrete la suspensión del proceso hasta por tres años.

Al respecto, el artículo 172 del C. de P. C. establece:

> *"La suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el juez decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio*

> *origen;* ***con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de los tres años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el juez de oficio o a petición de parte decretará la reanudación del proceso****, por auto que se notificará por estado y mediante telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales…" (negrillas adicionales).*

Como corolario de lo anterior, la Sala enfatiza la capacidad que le asiste al juez del proceso ejecutivo contencioso administrativo para decretar la suspensión del proceso en aquellos eventos de prejudicialidad cuando el acto administrativo sobre el cual se soporta la ejecución se encuentra demandado en su legalidad, suspensión que se extenderá hasta que se decrete su reanudación, la cual deberá ordenarse cuando pasados los tres años no se hubiere dictado la respectiva sentencia.

La norma en comento fue declarada exequible por la Corte Constitucional al indicar ***que*** *la preclusión de las distintas etapas procesales representa el único paliativo capaz de restringir al máximo la carga que para los sujetos vinculados, directa o indirectamente a los trámites judiciales, representa el tiempo que se toman las distintas autoridades para resolver de fondo los asuntos que les son propuestos (Preámbulo, artículos 1º, 2º, 6º, 228 a 230 C.P.). Por ello, señaló que el legislador se encuentra constitucionalmente obligado a establecer el lapso que puede transcurrir entre una y otra etapa procesal, siendo improcedente suspender de manera indefinida los asuntos civiles por razón de la prejudicialidad administrativa, porque tal hipótesis, además de quebrantar las disposiciones arriba mencionadas, propiciaría actuaciones dilatorias y dolosas de las partes, contradiciendo así claros dictados constitucionales que las obligan a proceder de conformidad con los postulados de la buena fe, amén de que haría nugatorio el deber de colaborar para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, de ser solidario ante la necesidad ajena y de respetar los derechos de los demás. (artículos 83 y 95 C.P.*

En relación con la misma disposición, la doctrina ha señalado:

*"****Si el juez civil****, una vez agotada toda la tramitación propia de la primera instancia, de la que tan solo resta proferir sentencia,* ***estima que debe suspender por prejudicialidad el proceso, así lo debe declarar mediante auto y será a partir de la notificación del mismo que va a operar el plazo máximo de paralización que permite la ley, tres años, debido a que tampoco acogió el legislador colombiano una parálisis indefinida hasta tanto se decida el proceso que determinó la suspensión, de modo que si transcurre dicho término y no se ha producido la decisión definitiva ejecutoriada, dentro del proceso que originó la prejuidicalidad "el juez de oficio o a petición de parte decretará la reanudación" indica el art. 172 del C. de P. C., lo cual significa con claridad que agotado el plazo en mención o cuando debe reactivarse la actuación debido a que se produjo la decisión esperada dentro del otro proceso, no se reinicia ipso jure el trámite, por cuanto será siempre necesario que el juez mediante providencia lo ordene****, la que se notificará por estado y mediante el envío de telegrama dirigido a las direcciones denunciadas para recibir notificaciones personales, medida sana, pues luego de un amplio lapso de no actuación se quiere evitar que las partes puedan ser sorprendidas con la reanudación de plano, la que implicaría que se dictara la sentencia de primera instancia*

dentro del proceso civil y, eventualmente, no se pudiera emplear el recurso de apelación contra ella.

"Por eso, antes de la decisión de fondo que estaba suspendida, es menester que el juez, de oficio o a petición de una de las partes dicte un auto donde señale que decreta la reanudación del proceso. ***En firme el mismo procede que entre a decidir lo que estime pertinente****…*

*"****De otra parte, el término de tres años es más que suficiente para que en el otro juicio se pueda llegar a una decisión final ejecutoriada; de suerte que si ella no se logra en tal lapso, no puede obligarse a las partes en el proceso civil suspendido a que esperen indefinidamente la reanudación de su proceso****…*

"¿Qué ocurre cuando dictado el fallo de primera instancia se profiere la sentencia que había originado la suspensión, y con base en ella la determinación debe ser otra?

"Para responder el mismo estimo que si la sentencia estaba ejecutoriada, nada hay que hacer, salvo si se puede encuadrar el hecho dentro de alguna de las causales de revisión y buscar quebrar el fallo a través de dicho recurso. Si la ejecutoría no se había dado por cuanto cursaba apelación, el superior podrá considerar el fallo y determinar qué corresponde a derecho, porque el art. 172 menciona la posibilidad de reanudar la actuación en el proceso civil si en el otro juicio no se ha proferido decisión sin que prohíba considerar su influencia si se allega cuando aún no se ha dictado sentencia de segunda instancia.

"A no dudarlo en esta hipótesis se está frente a un hecho nuevo que le permitiría a la parte interesada hacer valer la copia de la sentencia ejecutoriada para que el ad quem determine los alcances que ella tiene frente al caso y, si es pertinente, revoque la sentencia de primera instancia".

Como se observa, la posibilidad de suspender un proceso ejecutivo por razón del proceso ordinario que se tramita para obtener la nulidad de los actos o contratos que conforman el título ejecutivo es procedente, por una sola vez, hasta por el término máximo de 3 años». (Destaca el Despacho).

Robustece lo anterior, el reciente proveído de 2 de octubre de 2020 en donde la Sección Tercera del H. Consejo de Estado indico:

«El artículo 170 – numeral 2 del CPC desarrolla la prejudicialidad como uno de los motivos para suspender un proceso judicial en estos términos:

"2. Cuando la sentencia que deba dictarse en un proceso, dependa de lo que deba decidirse en otro proceso civil que verse sobre cuestión que no sea procedente resolver en el primero, o de un acto administrativo de alcance particular cuya nulidad esté pendiente del resultado de un proceso contencioso administrativo, salvo lo dispuesto en los Códigos Civil y de Comercio y en cualquiera otra ley.

No obstante, el proceso ejecutivo no se suspenderá por que exista un proceso ordinario iniciado antes o después de aquél, que verse sobre la

validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en éste es procedente alegar los mismos hechos como excepción." (Se subraya).

Para la jurisprudencia, la prejudicialidad se produce cuando "la decisión que ha de dictarse en un proceso queda en suspenso mientras en el otro se resuelve el punto que tiene directa incidencia sobre el fallo que se debe proferir". También ha expresado que la repercusión de una providencia sobre otra debe ser de tal magnitud que prácticamente "condicione total o parcialmente el sentido del fallo que deba proferirse", ***y que ello puede ocurrir en los procesos ejecutivos tramitados ante esta jurisdicción, particularmente en los casos en "que en un proceso contencioso administrativo distinto, se demande la legalidad del acto administrativo constitutivo del título de recaudo con base en el cual se promueve el respectivo proceso ejecutivo.***"

Como, tratándose de procesos ejecutivos, la medida de suspensión estaba condicionada a que el ejecutado pudiera defenderse con base en los hechos alegados en el proceso ordinario, la Sección venía sosteniendo que ella resultaba procedente si el extremo pasivo podía oponerse a la ejecución arguyendo la invalidez del acto administrativo. Sin embargo, la Sección rectificó dicho entendimiento, de modo que la posición hoy vigente expresa que:

"Al permitirse el cuestionamiento de legalidad del acto administrativo presentado como recaudo ejecutivo, a través de la proposición de excepciones dentro del proceso ejecutivo, fundadas en hechos sucedidos con anterioridad a la expedición del acto administrativo, se está desconociendo de un lado la naturaleza de providencia que conlleva ejecución que el artículo 64 del C. C. Administrativo, le otorga al acto administrativo, y de otro, se vulnera el debido proceso, como quiera que se surte la revisión de legalidad del acto administrativo ante un juez diferente a aquel establecido por el Legislador para el efecto, esto es ante el juez de la ejecución y no ante el ordinario que fue al que se atribuyó competencia por el Legislador para realizar tal enjuiciamiento, además de que se le da a la revisión de legalidad un trámite diferente al señalado para el efecto por el legislador, y se desconocen los términos que también el legislador previó para la formulación del juicio de legalidad.

Igualmente el trámite de excepciones que discutan la legalidad del título de recaudo ejecutivo, desnaturaliza el proceso ejecutivo que sólo busca obtener coercitivamente del deudor, el pago a favor del acreedor, de una obligación sobre cuya claridad, expresión y exigibilidad, no existe duda alguna. El trámite de excepciones en el proceso ejecutivo no permite convertirlo en un proceso ordinario, en el cual se discuta la legalidad del título." (Se subraya)». (Destaca el Despacho).

En igual sentido se pronunció la Sección Tercera del H. Consejo de Estado en proveído de 7 de septiembre de 2018 al indicar:

«En el contexto normativo descrito, la jurisprudencia ha considerado que la suspensión del proceso por prejudicialidad implica "la suspensión temporal de la competencia del juez en un caso concreto, hasta tanto se decida otro proceso cuya resolución tenga incidencia en el que se suspende,

> *de tal manera que se eviten decisiones contradictorias en procesos que tengan estrecha relación. De ahí que el propósito de esta figura sea la uniformidad en la aplicación concreta del derecho, de tal modo que, si el juez la encuentra procedente, tiene la obligación de suspender el proceso, pues la decisión que deba tomar se supeditará a la que dicte el juez del otro proceso"».*

En ese orden, como bien lo indicó el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL DE GIRARDOT, dentro del proceso ejecutivo el apoderado judicial de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA ejerció su derecho de contradicción y defensa e interpuso recurso de reposición contra el auto que libró mandamiento ejecutivo y al contestar la demanda hizo referencia a la figura jurídica de la prejudicialidad y solicitó la suspensión del proceso, hecho en virtud del cual emerge de importancia para el Despacho toda vez que es en el proceso ejecutivo en el que se debe decidir sobre la suspensión o no del proceso mas no dentro del proceso judicial de la referencia pues, para que sea procedente la suspensión de un acto administrativo, éste debe vulnerar la normativa en que debe fundarse y, en el presente caso no es ostensible la transgresión y sólo se podrá determinar después de haberse surtido el procedimiento correspondiente y el análisis que se haga en la correspondiente sentencia.

Lo anterior, basta para que el Despacho deniegue la solicitud de medida de suspensión provisional.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: NIÉGASE la solicitud del decreto de la medida cautelar elevada por la apoderada judicial de la parte demandada consistente en la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos administrativos Resoluciones Nos. 002 de 8 de enero de 2019 «*POR LA CUAL SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE OPERACIÓN DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL DE GIRARDOT" Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO "HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA"*» y, 006 de 28 de enero de 2019 «*POR*

LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN», por las razones expuestas en precedencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
176e315b96a8e45fae5dd2dc23b0bc946f19fe7f0a663cb8dd9793620f22afb7
Documento generado en 03/06/2021 12:03:45 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2019-00369-00**
Demandante:	**ARMANDO DE JESÚS NIÑO BELLO**
Demandado:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 15 de abril de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1° del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (*«023AutoFijaLitigio»*) y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes hicieran manifestación al respecto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2° del artículo 182 ibídem), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f6e46dc4e4f1e8a58e760a121d19d730aa5a37f45271dae79726275767fa773e
Documento generado en 03/06/2021 12:03:47 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00377-00**
Demandante:	**LUIS ÁNGEL TOVAR RIVERA**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 06 de febrero de 2020 este Despacho, admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor LUIS ÁNGEL TOVAR RIVERA, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-. con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo ficto

configurado en virtud de la ocurrencia del silencio administrativo acaecido por la falta de respuesta de la Administración a la petición radicada el 28 de junio de 2017, por medio del cual se negó el pago de la sanción por mora, establecida en la ley 244 de 1995 y la ley 1071 de 2006, en el pago de las cesantías reconocidas por medio de la resolución 00031 de 27 de marzo de 2019. (*«006AutoAdmiteDemanda»*).

2.2. Previo pago de los gastos procesales, el 12 de febrero de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«007PagoGastosPrcoesales»* y *«008NotificacionPersonal»*).

2.3. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de 2020** en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

2.4. Fenecido el termino de traslado del medio de control, esto es el 07 de diciembre de 2020, se observa en el expediente que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG, guardo absoluto silencio (*«009ControlTerminosDespacho»*).

2.5. Por auto de 11 de marzo de 2019 se requirió a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG para que procediera a constituir apoderado judicial (*«010AutoRequiere»*).

2.6. En cumplimiento de lo ordenado en providencia de 11 de marzo de 2021 la Entidad demandada allegó vía correo electrónico, sustitución de poder al Doctor JUAN CAMILO OTALORA ALDANA, para representar los intereses

de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG en el presente asunto (*«013PoderFomag»*)

2.7. El 24 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«014ConstanciaDespacho»*)

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021) ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
>
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;
>
> c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;
>
> d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.
>
> **El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia**.
>
> Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.
>
> No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente

considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.

Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.

No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas son inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez

pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno al pago de la sanción por la mora en el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995 y en la Ley 1071 de 2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud de reconocimiento de las cesantías, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que la Entidad demandada no contestó la demanda; tampoco hay pruebas por practicar y, únicamente se solicitó tener como pruebas las documentales allegadas con el líbelo inicial, así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a pronunciarse sobre las pruebas y se realizará la fijación del litigio, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

FIJACIÓN DEL LITIGIO

De la lectura de la demanda se tiene que el **acto demandado** en la presente acción, este es:

- El acto ficto o presunto configurado en virtud de la ocurrencia del silencio administrativo acaecido por la falta de respuesta de la Administración a la petición radicada el 28 de junio de 2017, por medio del cual se negó el pago de la sanción por mora, establecida en la ley 244

de 1995 y la ley 1071 de 2006, en el pago de las cesantías reconocidas por medio de la resolución 00331 de 27 de marzo de 2019.

En consecuencia, y a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (folio 2 «002DemandaPoderAnexos»):

- Se ordene a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- reconocer y pagar la sanción por mora establecida en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo, contados desde los setenta (70) días hábiles después de haber radicado la solicitud de la reconocimiento y pago de las cesantías ante la entidad y hasta cuando se haga efectivo el pago

Del mismo modo, este Despacho en virtud del líbelo introductorio, señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. Que el señor LUIS ÁNGEL TOVAR RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 2.965.259, estuvo vinculado como docente en el sector oficial desde el 24 de agosto de 2015 hasta el 30 de abril de 2018 (Folio 25 «002DemandaPoderAnexos»).

2. Que el señor LUIS ÁNGEL TOVAR RIVERA, solicitó el pago de las cesantías el 28 de agosto de 2018, con escrito de petición con radicado 2018-CES-628861 (Folio 25 «002DemandaPoderAnexos»).

3. Que la Secretaria de Educación de Cundinamarca en nombre y representación de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG- mediante la resolución 00331 de 27 de marzo de 2019 reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas al señor LUIS ÁNGEL TOVAR RIVERA por valor neto de CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL

TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($5'357.345) (Folio 26 «002DemandaPoderAnexos»).

4. Que el monto reconocido en la resolución 00331 de 27 de marzo de 2019 estuvo disponible para pago solo hasta el 15 de mayo de 2019 (Folio 29 «002DemandaPoderAnexos»).

5. Que mediante escrito de petición de 28 de junio de 2019, con radicado No 2019126396, por intermedio de apoderado judicial, el señor LUIS ÁNGEL TOVAR RIVERA solicitó el reconocimiento y pago de la sanción por mora, establecida en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, en el pago de las cesantías reconocidas por medio de la resolución 00331 de 27 de marzo de 2019 (Folio 22 «002DemandaPoderAnexos»).

6. Que a la fecha de presentación de esta demanda, la Entidad no dio respuesta al escrito de petición comentado en el numeral anterior.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en los siguientes **problemas jurídicos**:

1) ¿Debe declararse la existencia del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo respecto a la petición elevada por el demandante el 28 de junio de 2019 ante la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-? **2)** ¿La accionada debe pagar al señor LUIS ÁNGEL TOVAR RIVERA la sanción moratoria de un día de salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías definitivas reclamadas, contando a partir del día siguiente al que venció el término legal establecido, al no haberse expedido el acto administrativo y pagado la misma dentro de los términos señalados en la Ley 1071 de 2006 que adicionó y modificó la Ley 244 de 1995?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por la parte demandante que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visible en los folios 21 a 31 *«002DemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

---

[1] «**Artículo 207. CONTROL DE LEGALIDAD.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -19 de febrero de 2020: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole de su conocimiento a este Despacho («003ActaReparto»).
-12 de marzo de 2020: Auto que admite demanda y ordena notificar a la demandada («005AutoAdmiteDemanda»).
- 23 de julio de 2020 pago de gastos procesales («008PagoGastos»).
-19 de agosto de 2020 Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («009NotificacionPersonal»).
-6 de octubre de 2020: Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones previas («010ContestacionDemanda»).
-11 de diciembre: Fijación en lista («012FijacionLista»).

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los 21 a 31 «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado, los cuales serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

TERCERO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

CUARTO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

QUINTO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

SEXTO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- al Doctor JUAN CAMILO OTÁLORA ALDANA en los términos de la sustitución

a él conferido y que obra en el folio 3 del archivo denominado «013PoderFomag».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
5dd765868bef1442434018804bd039754bcf9d4aef46352d14017e9de236ad60
Documento generado en 03/06/2021 12:04:41 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00380-00**
Demandante:	**JENNIFER CAROLAIN HERRERA LEÓN**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 6 de febrero de 2020 este Despacho, admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora JENNIFER CAROLAIN HERRERA LEÓN, por conducto de apoderada judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-. (*«005AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. Previo pago de los gastos procesales, el 13 de febrero de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«006PagoGastosPrcoesales»* y *«007NotificacionPersonal»*).

1.3 El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de**

2020 en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

1.4. Fenecido el termino de traslado del medio de control, esto es el 7 de diciembre de 2020, se observa en el expediente que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG, guardo silencio (*«008ConstanciaControlTerminos»*).

1.5. Mediante proveído de 11 de marzo de 2021 se requirió a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG para que procediera a constituir apoderado judicial que representara sus intereses en este medio de control (*«009AutoRequiere»*).

1.6. En cumplimiento de lo ordenado en auto de 11 de marzo de 2021 la Entidad demandada allegó el 22 de abril hogaño, vía correo electrónico, sustitución de poder al doctor JUAN CAMILO OTÁLORA ALDANA, para representar los intereses de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG en el presente asunto (*«012PoderFomag»*)

1.7. En memorial de 30 de abril de 2021, la apoderada judicial de la parte actora, mediante escrito allegado vía correo electrónico, manifiesta que desiste de la demanda, en los siguientes términos (*«013Desistimiento»*):

> *«(…) por medio del presente escrito, me permito manifestar al despacho que desisto de las pretensiones instauradas dentro del proceso de la referencia, debido a que el 19 de abril de 2021, se recibido por parte de mi representado (a), el pago de la sanción moratoria por parte de la FIDUPREVISORA S.A por un valor de $3.554.681, por lo que fundamento mi solicitud en el artículo 314 de la Ley 1564 de 2002, aplicable ante esta jurisdicción por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.*

> *De igual manera solicito al despacho tener en cuenta el artículo 188 de la Ley 1437 del 2011 que indica que se dispondrá de la condena en costas SOLO en el caso de proferirse sentencia que ponga fin al proceso, esto es concordancia con el artículo 365 de la Ley 1564 de 2012 numeral octavo, donde se indica que para imponer costas es necesario que aparezca probado en el expediente su causación y que por ello sea probable »*

1.7. El 24 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«014ConstanciaDespacho»*).

I. C O N S I D E R A C I O N E S

Así las cosas, el Despacho evidencia que a la parte actora le asiste ánimo que se declare la terminación del proceso.

Bajo ese contexto, esta sede judicial recuerda que, en relación con el desistimiento, los artículos 314 a 316 del Código General del Proceso disponen:

> «**Artículo 314.** ***DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES.*** El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso.
>
> El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia.
>
> Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él.
>
> (…)
>
> **El desistimiento debe ser incondicional**, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes.
> (…)
>
> Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo».

«**Artículo 315.** ***QUIÉNES NO PUEDEN DESISTIR DE LAS PRETENSIONES.*** No pueden desistir de las pretensiones:

1. Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial.

En este caso la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso, y el juez podrá concederla en el auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas; en caso contrario fijará fecha y hora para audiencia con tal fin.

2. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello.
3. Los curadores ad lítem».

«**Artículo 316.** ***DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES.*** Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:

1. Cuando las partes así lo convengan.

2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.

3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares.

4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas».

De lo anterior se infiere que; ***i)*** se puede desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso, ***ii)*** el desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda con efectos de cosa

juzgada, ***iii)*** el desistimiento puede ser total o parcial, ***iv)*** pueden presentar la solicitud de desistimiento los apoderados judiciales que tengan facultad expresa para ello, ***v)*** de la solicitud se correrá traslado al demandado por el término de tres (3) días.

Puestas en ese estadio las cosas y, descendiendo al sub examine se tiene que; el 30 de abril de 2021 la señora JENNIFER CAROLAIN HERRERA LEÓN, por conducto de su apoderada judicial, doctor RUBÉN DARÍO GIRALDO MONTOYA, presentó escrito con manifestación de desistimiento de la demanda, esto, previo a dar aplicación lo dispuesto en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, además, se observa que la apoderada judicial de la demandante cuenta con la facultad expresa para desistir, de conformidad con las facultades conferidas en el poder visible en folios 14 a 17 del archivo «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

En ese orden, previo a emitir pronunciamiento sobre la solicitud de desistimiento total de la demanda, es del caso, en aplicación del numeral 4º del artículo 316 del Código General del Proceso, poner en conocimiento de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- y del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho dicha solicitud, para que se manifiesten al respecto.

En consecuencia, se **DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho, por el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, la solicitud de desistimiento total de la demanda presentada por la apoderada judicial de la señora JENNIFER CAROLAIN HERRERA LEÓN para que se manifiesten al respecto.

SEGUNDO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar al doctor JUAN CAMILO OTÁLORA ALDANA, como apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG en los términos y para los efectos del poder a él conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
7F7CEB412C4ECD86929C975439ACD3BE4ACAADB997FCE4461A20FD53F2D421EB
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:42 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2019-00381-00**
Demandante:	**SONIA BARRETO HERRERA**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. En la providencia de 6 de febrero de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora SONIA BARRETO HERRERA, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, con el propósito de obtener la nulidad del acto ficto o presunto negativo configurado a partir de la falta de respuesta de la Entidad demandada a la petición elevada por la actora el 22 de mayo de 2019 en la que solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria en el pago de sus cesantías. («*005AutoAdmiteDemanda*»).

1.2. El 15 de marzo de 2020 el H. CONSEJO SUPERIO DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del 16 de marzo de

2020 en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del 1º de julio de 2020.

1.3. Previo pago de los gastos procesales, el 16 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«006PagoGastosProcesales»* y *«007NotificacionPersonalDemanda»*).

1.4. El 22 de febrero de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que; ***(i)*** el término de traslado de la demanda feneció el 7 de diciembre de 2020 y ***(ii)*** la Entidad demandada guardó silencio (*«008ControlTerminosDespacho»*).

1.5. El 25 de febrero de 2021, encontrándose el proceso pendiente para emitir pronunciamiento alguno frente a la procedencia de la aplicación a lo establecido en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho le ordenó a la Secretaría organizar el expediente hibrido digitalizado atendiendo las instrucciones impartidas por la Suscrita Juez en los términos consignados en el Acuerdo PCSJA20-11567 de 6 de junio de 2020 y en la Circular PCSJC-27 de 21 de julio de 2020 proferidos por el H. Consejo Superior de la Judicatura (*«009AutoCumplase»*).

1.6. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«010ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Bajo el contexto relatado en el acápite anterior, y una vez organizado el expediente hibrido digitalizado atendiendo los acuerdos y circulares emanadas por el Consejo Superior de la Judicatura, sería del caso emitir

pronunciamiento frente a la procedencia de la aplicación del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el asunto de la referencia. No obstante, este Despacho observa que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- no ha constituido apoderado judicial para que represente a dicha Entidad en el presente medio de control, por lo que es del caso, en aras de salvaguardar el derecho de contradicción y defensa de la demandada, requerirla por única vez para que constituya apoderado judicial en el asunto de la referencia.

Del mismo modo, y con el fin de imprimirle celeridad al proceso en curso, al tenor de la exigencia prevista en el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se requerirá a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- para que allegue las documentales que tenga en su poder respecto del presente medio de control, a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, en virtud de la desconcentración administrativa, para que remita el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso, especialmente el certificado de salarios de la actora desde el año 2018 y, a la FIDUPREVISORA, como entidad vocera y administradora de los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- para que remita la certificación de pago de cesantía reconocida mediante la Resolución No. 1814 de 12 de octubre de 2018.

Así mismo, este Juzgado habiendo realizado una revisión minuciosa tanto al expediente hibrido digitalizado como al expediente físico advierte que el «*recibo de pago de cesantía*» visible a folio 20 del archivo «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado (folio 19 físico del expediente) fue allegado físicamente por la demandante de manera ilegible, razón por la cual se requerirá a la apoderada judicial de la señora SONIA

BARRETO HERRERA para que arrime de manera legible el «*recibo de pago de cesantía*».

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: Por Secretaría, **OFÍCIESE** a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, para que en el término máximo e improrrogable de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a constituir apoderado judicial para que represente sus intereses en el presente medio de control y allegue la documental que tenga en su poder respecto del asunto de la referencia, **so pena de hacerse acreedora a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[1].**

SEGUNDO: Por Secretaría, **OFÍCIESE** a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, para que en el término máximo de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a remitir la totalidad del expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, el expediente prestacional de la señora SONIA BARRETO HERRERA, especialmente el certificado de salarios de la actora desde el año 2018, **so pena de hacerse acreedora a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso.**

---

[1] «**Artículo 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)

2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.

3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

(...)» (Destaca el Despacho).

TERCERO: Por Secretaría, **OFÍCIESE** a la FIDUPREVISORA, para que en el término máximo de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda arrimar la certificación de pago de cesantía reconocida mediante la Resolución No. 1814 de 12 de octubre de 2018.

CUARTO: REQUIÉRESE a la apoderada judicial de la señora SONIA BARRETO HERRERA para que en el término máximo e improrrogable de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, allegue el «*recibo de pago de cesantía*» visible a folio 20 del archivo «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado (folio 19 físico del expediente), de conformidad con lo expuesto en precedencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
9AAE0B18862F070C7DAAB36A2F197EC44D706A9D600365E64D22B478CFC916CF
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:04 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2019-00389-00**
Demandante:	**LOBSANG LASHANG SOSSA SANDOVAL Y OTROS**
Demandado:	**MUNICIPIO DE CABRERA** **MUNICIPIO DE VENECIA**
Llamado en Garantía:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
Medio de Control:	**REPARACIÓN DIRECTA**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) procede el Despacho a resolver sobre las excepciones con el carácter de previas que fueron propuestas por la parte demandada.

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. El 19 de diciembre de 2020, los señores LOBSANG LHASANG SOSSA SANDOVAL, JENITH JOANA IBÁÑEZ HERNÁNDEZ, KEYNOR ANDRÉS REY IBÁÑEZ, PAULA JOHANA FRANCO IBÁÑEZ, JASMEN RENE SOSSA BSILICK, MARÍA ELENA SANDOVAL MARTÍNEZ, SARAY MILAGROS SOSSA SANDOVAL, JASMEN ALBERTO SOSSA SANDOVAL, YAJADYS PAOLA SOSSA MARTÍNEZ, JASMEN RENE SOSSA MARTÍNEZ, SANDRA PAOLA SOSSA MALDONADO y YEIS SOSSA DÍAZ, por conducto de apoderado judicial incoaron ante los Juzgados Administrativos del Circuito de

Girardot (Reparto), demanda de reparación directa contra los MUNICIPIOS DE CABRERA y VENECIA CUNDINAMARCA, con el propósito de que se declaren solidaria y patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados al señor LOBSANG LASHANG SOSSA SANDOVAL con ocasión del suceso acontecido el 13 de noviembre de 2017, correspondiendo su conocimiento a este Despacho conforme al acta de reparto de 13 de enero de 2020 (*«002DemandaPoderAnexos»* y *«003ActaReparto»*).

1.2. Mediante auto de 20 de febrero de 2020 se inadmitió la demanda de la referencia, una vez subsanada, el 9 de julio siguiente se admitió (*«005AutoInadmite»*, *«006EscritoSubsanacion»* y *«007AutoAdmiteDemanda»*).

1.3. El 12 de agosto de 2020, previo pago de los gastos procesales, se notificó la demanda (*«008PagoGastos»* y *«010NotificacionPersonal»*).

1.4. El 22 de septiembre de 2020 el MUNICIPIO DE CABRERA estando dentro del término legal para el efecto presentó escrito de contestación de la demanda, solicitó llamar en garantía a SEGUROS DEL ESTADO S.A., y propuso las excepciones de *«COSA JUZGADA»*, *«LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRANSACCIÓN QUE OBLIGA A UNA PARTE A RECONOCER Y PAGAR LA INDEMNIZACIÓN INTEGRAL AL RECLAMANTE Y POR LA OTRA A DESISTIR Y RENUNCIAR EXPRESA E IRREVOCABLEMENTE A CUALQUIER ACCIÓN ADMINISTRATIVA Y PRETENSIONES DERIVADAS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO Y DECLARA A PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO INDEMNIZATORIO AL MUNICIPIO DE CABRERA»*, *«PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN»*, *«FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA»*, *«FALTA DE PODER PARA ACTUAR»*. (*«012ContestacionDemanda»* y *«016ConstanciaTerminos»* del cuaderno principal y *«002SolicitudLlamamiento»* del cuaderno *«C02LlamamientoGarantia»*).

1.5. El 23 de octubre de 2020 el MUNICIPIO DE VENECIA estando dentro del término legal para el efecto presentó escrito de contestación de la demanda y propuso excepciones de *«CADUCIDAD»*, *«FALTA DE LEGITIMACIÓN POR PASIVA»*, *«HECHO EXCLUSIVO Y DETERMINANTE DE UN TERCERO»* e

«INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD» (*«014ContestacionDemandaMunicipioVenecia»*, *«016ConstanciaTerminos»*).

1.6. El 20 de enero de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 17 de noviembre de 2020 (*«016ConstanciaTerminos»*).

1.7. Mediante proveído de 4 de febrero de 2021 se admitió el llamamiento en garantía que hiciere el MUNICIPIO DE CABRERA a SEGUROS DEL ESTADO S.A., frente a la póliza de seguros tipo colectiva de automóviles y contra todo riesgo, SUC. 12 RAMO. 49 póliza No. 101000159, con fecha de expedición 22 de mayo de 2017 y vigencia desde el 12/05/2017 hasta el 12/12/2017. (*«004AutoAdmiteLlamamiento»* del cuaderno *«C02LlamamientoGarantia»*).

1.8. El 18 de febrero de 2021 se llevó a cabo la notificación al llamado en garantía, quien el 11 de marzo de 2021 allegó contestación y propuso las excepciones de *«TRANSACCIÓN Y COSA JUZGADA»*, *«INEXISTENCIA DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES, POR CONFIGURACIÓN DE CAUSAL DE ÍNDOLE CONTRACTUAL»*, *«REDUCCIÓN DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TRANSACCIÓN EXTRAPROCESAL»*, *«LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES N° 101000159»*, *«EL PERJUICIO MORAL COMO RIESGO NO ASUMIDO POR LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES N° 101000159»*, *«EL DAÑO A LA SALUD COMO RIESGO NO ASUMIDO POR LA PÓLIZA DE AUTOMÓVILES No. 101000159»*, *«**INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN SOLIDARIA DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.**»* e *«INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN»* (*«007ContestacionLlamamiento»*).

1.9. El 12 de abril de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda para el llamado en garantía feneció el 15 de marzo de 2021 (*«009ConstanciaTerminos»* del cuaderno *«C02LlamamientoGarantia»*).

1.10. El 12 de abril de 2021 se fijó en lista las excepciones propuestas («*018FijaciónLista*» del cuaderno principal y «*010FijaciónLista*» del cuaderno «*C02LlamamientoGarantia*»).

1.11. El 15 de abril de 2021 el apoderado judicial de la parte actora se pronunció en cuanto a las excepciones propuestas por el MUNICIPIO DE CABRERA señalando que al ser presentadas como excepciones de mérito o de fondo, deben ser absueltas en la sentencia (*«020PronunciamientoExcepcionesMunicipioCabrera»*).

1.12. El 15 de abril de 2021 el apoderado judicial de la parte actora se pronunció en cuanto a las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por el MUNICIPIO DE VENECIA, en cuanto a la primera mencionó haberse presentado la demanda dentro del término atendiendo la suspensión de 9 meses por la presentación de la solicitud de conciliación pre judicial y la expedición del acta correspondiente, respecto a la falta de legitimación por pasiva indicó que la responsabilidad del MUNICIPIO DE VENECIA se encuentra determinada, enfática y específicamente, en el hecho de no contar con los controles de tránsito efectivos, que hubiesen permitido la no ocurrencia del hecho, en cuanto a las demás excepciones mencionó que al ser de fondo no hará pronunciamiento por no ser la etapa procesal para el efecto (*«022PronunciamientoExcepcionesMunicipioVenecia»*).

1.13. El 15 de abril de 2021 el apoderado judicial de la parte actora se pronunció en cuanto a las excepción de transacción y cosa juzgada propuesta por el llamado en garantía SEGUROS DEL ESTADO S.A., señalando que como, desde el libelo introductorio, mencionó que efectivamente se llevó a cabo una negociación con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., en la que se concilió por los perjuicios de índole patrimonial que fueron ocasionados en la humanidad del señor LOBSANG LASHANG SOSSA SANDOVAL, destacando que las pretensiones que buscan ser satisfechas en el presente asunto «*NO son de índole patrimonial*», pues buscan la reparación de los perjuicios morales y daño a la salud, hecho frente al cual manifiesta que la póliza que tomó el MUNICIPIO DE CABRERA, por ningún motivo cubría

perjuicios que no fueran catalogados de índole patrimonial («*021PronunciamientoExcepcionesSegurosEstado*» del cuaderno principal y «*011PronunciamientoExcepcionesSegurosEstado*» del cuaderno «*C02LlamamientoGarantia*»).

1.14. El proceso ingresó al Despacho el 26 de abril de 2021 («*012ConstanciaDespacho*» del cuaderno principal y «*023ConstanciaDespacho*» del cuaderno «*C02LlamamientoGarantia*»).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, sería del caso fijar fecha para la realización de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 o en su lugar, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 182 A de la Ley 1437 de 2011 (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021) para dictar sentencia anticipada. No obstante, atendiendo el contenido del parágrafo 2° del artículo 175 Ibidem (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021) es del caso resolver sobre las excepciones previas propuestas por la parte demandada en el escrito de contestación a la demanda, según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso.

A ese respecto, el parágrafo 2° del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, establece:

> «**Parágrafo 2°.** De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.
>
> **Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 Y 102 del Código General del Proceso.** Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.

> Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.
>
> Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.» (En subrayado y negrilla destaca el Despacho)

De conformidad la referida norma debe darse aplicación al trámite previsto en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso, los cuales prevén:

> «**Artículo 100.** ***EXCEPCIONES PREVIAS*****.** Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:
>
> 1. Falta de jurisdicción o de competencia.
>
> 2. Compromiso o cláusula compromisoria.
>
> 3. Inexistencia del demandante o del demandado.
>
> **4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.**
>
> 5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.
>
> 6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.
>
> 7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.
>
> 8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.
>
> 9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.
>
> 10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.
>
> 11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada». (Destaca el Despacho).

> «**Artículo 101.** ***OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS*****.** Las excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado que deberá expresar las

razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado.

El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde ocurrieron hechos, o la falta de integración del litisconsorcio necesario, casos en los cuales se podrán practicar hasta dos testimonios.

Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera:

1. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de tres (3) días conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el caso, subsane los defectos anotados.

2. **El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial**, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.

Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella las practicará y resolverá las excepciones.

Si prospera la de falta de jurisdicción o competencia, se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez.

Si prospera la de compromiso o cláusula compromisoria, se decretará la terminación del proceso y se devolverá al demandante la demanda con sus anexos.

Si prospera la de trámite inadecuado, el juez ordenará darle el trámite que legalmente le corresponda.

Cuando prospere alguna de las excepciones previstas en los numerales 9, 10 y 11 del artículo 100, el juez ordenará la respectiva citación.

3. Si se hubiere corregido, aclarado o reformado la demanda, solo se tramitarán una vez vencido el traslado. Si con aquella se subsanan los defectos alegados en las excepciones, así se declarará.

Dentro del traslado de la reforma el demandado podrá proponer nuevas excepciones previas siempre que se originen en dicha reforma. Estas y las anteriores que no hubieren quedado subsanadas se tramitarán conjuntamente una vez vencido dicho traslado.

4. Cuando como consecuencia de prosperar una excepción sea devuelta la demanda inicial o la de reconvención, el proceso continuará respecto de la otra». (Destaca el Despacho).

> «**Artículo 102. *INOPONIBILIDAD POSTERIOR DE LOS MISMOS HECHOS.*** Los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones».

Bajo ese contexto, el Despacho advierte que el apoderado judicial del **MUNICIPIO DE CABRERA** en el escrito de contestación de la demanda propuso la excepción previa denominada «*INDEBIDA REPRESENTACIÓN DEL DEMANDANTE*», la cual se marca dentro de la enlistada en el numeral 4 del artículo 100 del Código General del Proceso.

Debe precisarse que si bien tanto el apoderado judicial del MUNICIPIO DE CABRERA, como el del MUNICIPIO DE VENECIA y el de SEGUROS DEL ESTADO S.A., presentaron otras excepciones, las mismas al no tener la connotación de previas no serán resueltas en esta instancia procesal, así también, el Despacho se relevará de resolver las excepciones de caducidad, falta de legitimación en la causa y cosa juzgada, habida consideración que hasta esta etapa procesal no se advierten probadas por lo que el estudio respectivo se hará en la correspondiente sentencia.

En ese orden, revisados minuciosamente el escrito por medio del cual se propone la excepción, el Despacho advierte que la excepcionante no solicitaron la práctica de pruebas para el efecto, así como el Despacho no encuentra la procedencia de decretar medio probatorio alguno, por lo que se hace necesaria la resolución de estas, previo a celebrarse la Audiencia Inicial o dictar sentencia anticipada, en los términos de la normativa en comento.

Claro lo anterior, el Despacho recuerda que en ejercicio del derecho de defensa la parte demandada dentro del término de traslado de la demanda puede formular excepciones **previas** y **de mérito.** Las primeras apuntan a ponerle término al proceso en cuanto impiden continuarlo, o buscan subsanar las irregularidades existentes; por su parte, las segundas están destinadas a atacar el derecho sustancial reclamado por el accionante, refieren a argumentos propios del demandado, basados en hechos diferentes a los invocados en la

demanda y que constituyen la oposición a las pretensiones las cuales serán resueltas en la sentencia según lo previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así las cosas, el Despacho abordará el estudio de la excepción previa propuestas por el apoderado judicial del **MUNICIPIO DE CABRERA** de «*INDEBIDA REPRESENTACIÓN DE DEMANDANTE*», como fundamento de su excepción señala que revisado el registro civil de nacimiento de la joven PAULA JOHANA FRANCO IBÁÑEZ, con NUIP 10003752385 e indicativo serial 42609136 se tiene que nació el 10 de marzo de 2000, significando que para el 10 de marzo de 2018 cumplió la mayoría de edad y por ministerio de la ley, adquirió capacidad de obligaciones y de acción, sin embargo, el poder obrante frente a ella fue otorgado por la señora JENITH JOANA IBÁÑEZ HERNÁNDEZ, en su propia representación y la de su hija PAULA JOHANA FRANCO IBÁÑEZ. Razón por la cual indica que a la fecha de presentación de la demanda el 19 de diciembre de 2019 la demandante PAULA JOHANA FRANCO IBÁÑEZ ya contaba con la mayoría de edad por lo que debió otorgar poder a su apoderado como instrumento habilitante de comparecer al proceso.

Puestas en ese estadio las cosas, resulta procedente hacer referencia en cuanto a la capacidad para ser parte, al respecto, el artículo 159 de la Ley 1437 de 2011 señala:

> «**Artículo 159.** ***CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN:*** Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.
>
> La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho.

> El Presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación.
>
> En los procesos sobre impuestos, tasas o contribuciones, la representación de las entidades públicas la tendrán el Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales en lo de su competencia, o el funcionario que expidió el acto.
>
> En materia contractual, la representación la ejercerá el servidor público de mayor jerarquía de las dependencias a que se refiere el literal b), del numeral 1 del artículo 2o de la Ley 80 de 1993, o la ley que la modifique o sustituya. Cuando el contrato o acto haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de esta se ejercerá por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
>
> Las entidades y órganos que conforman el sector central de las administraciones del nivel territorial están representadas por el respectivo gobernador o alcalde distrital o municipal. En los procesos originados en la actividad de los órganos de control del nivel territorial, la representación judicial corresponderá al respectivo personero o contralor».

Corolario de lo anterior, el H. Consejo de Estado, en proveído de 25 de septiembre de 2013 dentro del proceso con radicado No. 25000-23-26-000-1997-05033-01(20420), señaló:

> *«Por un lado, la capacidad para ser parte hace referencia a la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídico-procesal, esto es, constituir uno de los dos extremos de la litis, a saber, demandante o demandado. Esta condición proviene de la capacidad jurídica que se le atribuye a la personalidad, en otras palabras, la que tienen las personas, naturales, jurídicas o las ficciones habilitadas por la ley (v.gr. art. 2º ley 80 de 1993), para ser parte de cualquier relación jurídica. Así pues, la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, llamada capacidad de goce, es el género de la capacidad para ser parte en el proceso, que no es más que una especie de aquélla. Así las cosas, es claro que la categoría que subyace al concepto de capacidad para ser parte es la de la personalidad jurídica o de una habilitación legal expresa, por cuanto a partir de ella se erige la capacidad como uno de sus atributos principales, por ende, en principio, son las personas las únicas que pueden ser parte del proceso.*
>
> *(…)*
>
> *La capacidad para comparecer al proceso es el equivalente procesal de la capacidad de ejercicio del derecho sustancial. Se refiere a la aptitud de la persona para actuar, válidamente, en el proceso, y esto implica, acudir a él por sí mismo y ejecutar los actos procesales propios de aquél. Por regla general,*

> *quien tiene capacidad para ser parte, por ser persona, la tiene para comparecer al proceso por sí mismo, por tanto, lo que interesa para este presupuesto procesal son los eventos de su ausencia, que coinciden con los casos en los que no se tiene la capacidad para celebrar actos jurídicos, ejemplo de ellos son los menores de edad, los interdictos y las demás personas que se tipifican en los supuestos fácticos de los artículos 1503 y 1504 del Código Civil Colombiano. En efecto, en estos eventos no se cuenta con la legitimatio ad processum, como también es conocida esta clase de capacidad procesal, por cuanto la persona no puede acudir al proceso directamente, pues es necesario que lo haga a través de su representante legal».*

Expuesto lo anterior, se tiene que la demandante PAULA JOHANA FRANCO IBÁÑEZ, actúa en el proceso como demandante a través del poder conferido por su representante legal, la señora JENITH JOANA IBÁÑEZ HERNÁNDEZ (folio 4 «*006EscritoSubsanacion*»), sin embrago, se advierte en el registro civil de nacimiento No. 42609136, nuip No. 1003752385 (folio 82 «*002DemandaPoderAnexos*») que la joven FRANCO IBÁÑEZ nació el 10 de marzo de 2000, adquiriendo de este modo la mayoría de edad para el 10 de marzo de 2018, y por consiguiente la capacidad para actuar directamente al proceso.

En ese orden, como quiera que dicha excepción puede ser saneada, con el fin de precaver futuras nulidades procesales, en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la administración de justicia, garantizar el debido proceso, lo correcto es declarar probada la excepción previa de «*Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado*» únicamente respecto a la señora PAULA JOHANA FRANCO IBÁÑEZ, y, en consecuencia requerir al apoderado judicial para que allegue un nuevo poder conferido directamente por la mencionada demandante.

En consecuencia, **SE DISPONE**:

PRIMERO: DECLÁRASE PROBADA la excepción de «*Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado*» incoada por el apoderado judicial del MUNICIPIO DE CABRERA, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: REQUIÉRASE al apoderado judicial de los demandantes, para que dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación

de este proveído allegue el poder debidamente conferido por la señora PAULA JOHANA FRANCO IBÁÑEZ, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: RECONÓCESE como apoderada judicial del **MUNICIPIO DE CABRERA**, al doctor ORACIO BETANCOUR BERGAÑO, en los términos y para los efectos del poder a él conferido obrante en el folio 21 del archivo denominado *«012ContestacionDemanda»* y archivo *«015AllegaDocumentalMunicipio»*.

CUARTO: RECONÓCESE como apoderada judicial del **MUNICIPIO DE VENECIA**, a la doctora ANA MARÍA ROMERO RINCÓN, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante del folio 13 a 17 del archivo denominado *«014ContestacionDemandaMunicipioVenecia»* y archivo *«017PoderMunicipio»*.

QUINTO: RECONÓCESE como apoderada judicial de la **COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, a la doctora LUISA FERNANDA LAVERDE GÓNGORA, en los términos y para los efectos del poder a ella conferido obrante en el archivo denominado *«008Poder»* del cuaderno *«C02LlamamientoGarantia»*.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A

LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
1E2DF694AFBC668C35C70228C2F4CFE8DEFA2A498A086FF63A07C3BE50986093
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:48 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2020-00011-00**
Demandante:	**GABRIEL HUMBERTO RODRIGUEZ BAQUERO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 20 de febrero de 2020 este Despacho, admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor GABRIEL HUMBERTO RODRIGUEZ BAQUERO, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG-. con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo ficto configurado en virtud de la ocurrencia del silencio administrativo acaecido por la falta de respuesta de la Administración a la petición radicada el 5 de agosto de 2019, por medio del cual se negó el pago de la sanción por mora, establecida en la ley 244 de 1995 y la ley 1071 de 2006, en el pago de las cesantías reconocidas por medio de la resolución 001868 de 22 de octubre de 2018. (*«006AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. Previo pago de los gastos procesales, el 27 de febrero de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«006PagoGastosPrcoesales»* y *«007NotificacionPersonal»*).

1.3. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA profirió el Acuerdo No. PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el territorio nacional a partir del **16 de marzo de 2020** en virtud del estado de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nación con ocasión del COVID-19 y, luego de varias prórrogas ordenadas por el mismo Consejo, el 27 de junio de 2020 mediante el Acuerdo No. PCSJA20-11581 ordenó el levantamiento de la suspensión de términos a partir del **1º de julio de 2020**.

1.4. Fenecido el termino de traslado del medio de control, esto es el 07 de diciembre de 2020, se observa en el expediente que la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG, guardo absoluto silencio (*«008ConstanciaControlTerminos»*).

1.5. Mediante proveído de 11 de marzo de 2021 se requirió a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG para que procediera a constituir apoderado judicial que representara sus intereses en este medio de control (*«009AutoRequiere»*).

1.6. En cumplimiento de lo ordenado en auto de 11 de marzo de 2021 la Entidad demandada allegó vía correo electrónico, sustitución de poder al doctor JUAN CAMILO OTALORA ALDANA, para representar los intereses de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG en el presente asunto (*«012PoderFomag»*)

1.7. En memorial de 24 de abril de 2021, el apoderado judicial de la parte actora, mediante escrito allegado vía correo electrónico, desiste de la demanda, en los siguientes términos (*«013EscritoDesistimiento»*):

> *«(…) por medio de este escrito me permito **DESISTIR** de las pretensiones formuladas en la demanda, solicito no se disponga condena en costas, teniendo en cuenta que la parte demandada, por intermedio de su apoderado, coadyuva esta petición en señal de aceptación (artículo 316 numeral 2 del Código General del Proceso, aplicable ante la jurisdicción administrativa, en virtud de la remisión efectuada por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011).*
>
> ***El apoderado coadyuvante, en caso de no suscribir este documento, arrimará al despacho escrito validando esta petición, sin el cual, solicito no se resuelva esta solicitud***» (Destaca el Despacho).

1.7. El 24 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«014ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Así las cosas, el Despacho evidencia que a la parte actora le asiste ánimo que se declare la terminación del proceso.

Bajo ese contexto, esta sede judicial recuerda que, en relación con el desistimiento, los artículos 314 a 316 del Código General del Proceso disponen:

> «**Artículo 314.** ***DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES.*** El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso.
>
> El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia.
>
> Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él.
>
> (…)

El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes.
(…)

Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo».

«**Artículo 315.** ***QUIÉNES NO PUEDEN DESISTIR DE LAS PRETENSIONES.*** No pueden desistir de las pretensiones:

1. Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial.

En este caso la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso, y el juez podrá concederla en el auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas; en caso contrario fijará fecha y hora para audiencia con tal fin.

2. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello.
3. Los curadores ad lítem».

«**Artículo 316.** ***DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES.*** Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:

1. Cuando las partes así lo convengan.

2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.

3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares.

4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en

> caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas».

De lo anterior se infiere que; ***i)*** se puede desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso, ***ii)*** el desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda con efectos de cosa juzgada, ***iii)*** el desistimiento puede ser total o parcial, ***iv)*** pueden presentar la solicitud de desistimiento los apoderados judiciales que tengan facultad expresa para ello, ***v)*** de la solicitud se correrá traslado al demandado por el término de tres (3) días.

Puestas en ese estadio las cosas y, descendiendo al sub examine se tiene que; el 24 de abril de 2021 el señor GABRIEL HUMBERTO RODRIGUEZ BAQUERO, por conducto de su apoderado judicial, doctor RUBÉN DARÍO GIRALDO MONTOYA, presentó escrito con manifestación de desistimiento de la demanda, esto, previo a dar aplicación lo dispuesto en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, además, se observa que el apoderado judicial de la demandante cuenta con la facultad expresa para desistir, de conformidad con las facultades conferidas en el poder visible en folios 18 a 20 del archivo «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

En ese orden, previo a emitir pronunciamiento sobre la solicitud de desistimiento total de la demanda, es del caso, en aplicación del numeral 4º del artículo 316 del Código General del Proceso, poner en conocimiento de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- y del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho dicha solicitud, para que se manifiesten al respecto.

En consecuencia, se **DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho, por el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, la solicitud de desistimiento total de la demanda presentada por el apoderado judicial del señor GABRIEL HUMBERTO RODRIGUEZ BAQUERO para que se manifiesten al respecto.

SEGUNDO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar al doctor JUAN CAMILO OTÁLORA ALDANA, como apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO -FOMAG en los términos y para los efectos del poder a él conferido.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
5F4BC496ECFF31B41290C981EA6B38A211B3450C67AF19DA64CE8C7A6307EC64
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:43 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00012-00**
Demandante:	**LUZ ANGÉLICA GUEVARA JIMÉNEZ**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 15 de abril de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo («*010AutoFijaLitigio*») y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes hicieran manifestación al respecto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO

JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
AC71818A96D54E837793B888401336989D64A3695B82DC6D51C8D70B9F6E70A4
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:44 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2020-00020-00**
Demandante:	**ALBA GRACIELA RODRÍGUEZ ÁRIAS**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Por auto de 20 de febrero de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora ALBA GRACIELA RODRÍGUEZ ARIAS, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, con el propósito de obtener la nulidad del acto ficto o presunto negativo configurado a partir de la falta de respuesta de la entidad demandada a la petición elevada por la actora el 15 de abril de 2019 en la que solicitó el reconocimiento y pago de la reliquidación de las cesantías parciales dando aplicación el régimen retroactivo (*«005AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. El 16 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«009NotificacionPersonalDemanda»*).

1.3. El 22 de febrero de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que; ***(i)*** el término de traslado de la demanda feneció el 7 de diciembre de 2020 y ***(ii)*** la entidad demandada guardó silencio (*«010ControlTerminosDespacho»*).

1.4. Mediante proveído de 11 de marzo de 2021 este Despacho, previo a emitir pronunciamiento frente a la procedencia de la aplicación del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción de la entidad demandada, requirió a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- para que constituyera representante judicial en el asunto de la referencia y a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ para que allegara el expediente administrativo que contuviese los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso (*«011AutoRequiere»*).

1.5. El 16 de abril 2021 la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ allegó de manera parcial el expediente administrativo del asunto de la referencia (*«014EscritoSecretariaEducación»*).

1.6. El 10 de mayo de 2021 el proceso al Despacho para proveer (*«015ConstanciaDespacho»*).

I. C O N S I D E R A C I O N E S

Bajo el contexto relatado en el acápite anterior, seria del caso emitir pronunciamiento frente a la procedencia de la aplicación del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el asunto de la referencia. No obstante, este Despacho advierte que la providencia de 11 de marzo de 2021 no se puso en conocimiento de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, razón por la cual, en aras de garantizar y efectivizar el derecho de defensa y contradicción de la

entidad demandada, este Despacho ordenara que por Secretaría se requiera a la Demandada para que constituya apoderado judicial en el presente asunto a fin de seguir con el curso del proceso.

Del mismo modo, observa esta Instancia Judicial que la documental allegada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ el 16 de abril de 2021 resulta incompleta como quiera que no allegó la totalidad del «*expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se encuentren en su poder*», pues, la Entidad territorial se limitó a remitir únicamente los documentos concernientes a la Resolución No. 0905 de 13 de noviembre de 2018, cuando el objeto del presente asunto se circunscribe a la nulidad del acto ficto o presunto negativo configurado a partir de la falta de respuesta de la Entidad demandada a la petición elevada por la actora el 15 de abril de 2019 en la que solicitó el reconocimiento y pago de la reliquidación de las cesantías parciales dando aplicación el régimen retroactivo, motivo por el cual se requerirá para que allegue, de manera íntegra y legible, la totalidad del expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, el expediente prestacional de la señora ALBA GRACIELA RODRÍGUEZ ARIAS, especialmente lo referente a las Resoluciones Nos. 0230 de 3 de marzo de 2015, 0905 de 13 de noviembre de 2018 y de la solicitud elevada por la actora el 15 de abril de 2019. Lo anterior también con la finalidad de seguir con el curso del proceso.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: Por Secretaría, **OFÍCIESE** a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-, para que en el término máximo e improrrogable de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a constituir apoderado judicial para que represente sus intereses en el presente medio de control, **so pena de hacerse acreedora a las sanciones**

establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso[1].

SEGUNDO: Por Secretaría, **OFÍCIESE** a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, para que en el término máximo de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, proceda a remitir la totalidad del expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del presente proceso, esto es, el expediente prestacional de la señora ALBA GRACIELA RODRÍGUEZ ARIAS, especialmente lo concerniente a las Resoluciones Nos. 0230 de 3 de marzo de 2015, 0905 de 13 de noviembre de 2018 y de la solicitud elevada por la actora el 15 de abril de 2019, **so pena de hacerse acreedora a las sanciones establecidas en los numerales 2º y 3º del artículo 44 del Código General del Proceso.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A

[1] «**Artículo 44.** ***PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*****.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

(...)

2. **Sancionar con arresto** inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.

3. **Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)** a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

(...)» (Destaca el Despacho).

LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
5BAB269B89916D3B0D8A91AFE7BD47D15EA118F5F4F5BC7892B9AF04B2807D7A
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:05 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00032-00**
Demandante:	**JULIA ROSA JARAMILLO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 15 de abril de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo («*020AutoFijaLitigio*») y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes hicieran manifestación al respecto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO

JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
1349F7CAB99F0962B2D46CEF7AD53B378DAAB0597F9960C2F473430C030E1C8F
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:45 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00080-00**
Demandante:	**DUVÁN AUGUSTO QUIROGA BELTRÁN**
Demandados:	**INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN–ICFES-** **NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a decidir sobre la concesión del recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-ICFES- contra el auto de 26 de marzo de 2021 por medio del cual se declararon no probadas las excepciones propuestas.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante auto de 16 de julio de 2020 se admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor DUVÁN AUGUSTO QUIROGA BELTRÁN contra el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN–ICFES- y la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, con el objeto de

obtener la nulidad parcial del reporte de resultados docentes de 26 de agosto de 2019 con el que se le asignó el puntaje obtenido en la evaluación de carácter Diagnóstico Formativo (ECDF) Cohorte III y la nulidad del Oficio sin numero de 6 de noviembre de 2019, por medio del cual dio respuesta negativa a la reclamación realizada por el accionante frente a los resultados de la evaluación de carácter Diagnóstico Formativo (ECDF) Cohorte III, expedidos por el INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN-ICFES- (archivo «*006AutoAdmiteDemanda*» del expediente digitalizado).

2.2. El 21 de octubre de 2020 se surtió la notificación personal del auto admisorio de la demanda al INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN–ICFES- y a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (archivo denominado «*008NotificacionPersonalDemanda*» del expediente digitalizado).

2.3. El 19 de noviembre de 2020, la apoderada judicial del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN–ICFES contestó la demanda y, propuso una excepción previa de «*INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA*» (archivos denominados «*009ContestacionDemanda*» y «*010EscritoExcepciones*» del expediente digitalizado).

2.4. El 18 de diciembre de 2020, el apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL contestó la demanda y, propuso una excepción previa de «*INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD POR EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA*» (archivo denominado «*011ContestacionMinisterioEducacion*» del expediente digitalizado).

2.5. El 1° de marzo de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 18 de febrero de 2021 (*«014ConstanciaTerminos»*).

2.6. El 2 de marzo de 2021 se fijó en lista la excepción propuesta (archivo denominado «*014FijaciónLista*» del expediente digitalizado).

2.7. Mediante auto de 26 de marzo de 2021, notificado por estado No. 13 de 5 de abril siguiente, se declararon no probadas las excepciones de «*INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA*» incoada por la apoderada judicial del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN–ICFES- y la de «*INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD POR EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA*» incoada por el apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (*«017AutoResuelveExcepciones»* y *«018NotificacionEstado5Abril»*).

2.8. El 8 de abril de 2021 la apoderada judicial del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN–ICFES- incoó el recurso de apelación contra el proveído de 26 de marzo hogaño en virtud de lo señalado en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020. Recurso que fue fijado en lista el 21 de abril siguiente (*«019ApelacionIcfes»* y *«020FijacionLista»*).

2.9. El proceso ingresó al Despacho el 10 de mayo de 2021 (*«022ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de la procedencia y oportunidad del recurso incoado, para determinar si hay lugar a concederlo.

En cuanto a la oportunidad para incoar el recurso de apelación resulta imperioso acudir a lo señalado en el numeral 3° del artículo 244 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021), en donde se prevé que si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a su notificación.

Para el caso en comento, el auto recurrido de 26 de marzo de 2021, fue notificado por estado el 5 de abril siguiente, es decir, en principio los tres días

para presentar el recurso vencían el 8 de abril siguiente, no obstante atendiendo el contenido del numeral segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021), el término de la notificación del auto notificado, sólo empezará a contabilizarse a los dos días hábiles siguientes al envío del mensaje, por lo que finalmente la parte interesada tenía como término máximo para recurrir la decisión hasta el **12 de abril de 2021,** y como quiera que lo hizo el 8 de abril hogaño, se advierte presentado en término.

En ese orden, como quiera que la recurrente, doctora LILIAN KARINA MARTÍNEZ, apoderada judicial del del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN–ICFES-, señaló presentar su recurso conforme a lo señalado en el artículo 12 del Decreto 806 de 2020, emerge oportuno realizar las siguientes consideraciones:

El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, (antes de ser reformado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021), señalaba en el numeral 6° del artículo 180 que las excepciones con el carácter de previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva se resolverían en audiencia inicial, y que «*El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso*».

No obstante, con la expedición del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 «*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica*», se introdujo una modificación al asunto en comento, según el cual las excepciones previas se resolverían conforme a lo dispuesto en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso, sin embargo, continúo igual en lo referente al recurso procedente contra el auto que decidiera sobre las excepciones tal y como lo regulaba el

artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dicha normativa señaló:

> «**Artículo 12.** ***RESOLUCIÓN DE EXCEPCIONES EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.*** De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en las excepciones previas.
>
> Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los articulas 100, 101 y 102 del Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.
>
> Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva. Se tramitarán y decidirán en los términos señalados anteriormente.
>
> La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se decidirá por el magistrado ponente y será suplicable».

En este punto, debe señalarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 ibídem, dicha norma estará vigente durante dos años siguientes a partir de su expedición, esto es, hasta el 4 de junio de 2022.

Posteriormente, esto es, el 25 de enero de 2021 fue expedida y publicada la Ley 2080 «*POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -LEY 1437 DE 2011- Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE LA JURISDICCIÓN*», norma que modificó el numeral 6 del artículo 180, eliminando lo concerniente a la procedencia del

recurso de apelación frente al auto que resuelva las excepciones previas, pues en su artículo 40 dispuso:

> «**Artículo 40.** ***Modifíquese los numerales 6, 8 Y 9 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 Y adiciónense dos parágrafos al mismo artículo, así:***
>
> 6. Decisión de excepciones previas pendientes de resolver. El juez o magistrado ponente practicará las pruebas decretadas en el auto de citación a audiencia y decidirá las excepciones previas pendientes de resolver.
>
> 8. Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento.
>
> No se suspenderá la audiencia en caso de no ser aportada la certificación o el acta del comité de conciliación.
>
> 9. Medidas cautelares. En esta audiencia el juez o magistrado ponente se pronunciará sobre la petición de medidas cautelares en el caso de que esta no hubiere sido decidida.
>
> En los procesos de nulidad electoral la competencia será del juez, sala, subsección o sección.
>
> **Parágrafo 1.** Las decisiones que se profieran en el curso de la audiencia inicial pueden ser recurridas conforme a lo previsto en los artículos 242, 243, 245 Y 246 de este código, según el caso.
>
> **Parágrafo 2.** Las audiencias relativas a procesos donde exista similar discusión jurídica podrán tramitarse de manera concomitante y concentrada».

Puntualizado lo anterior, debe señalarse que la norma en comento en su artículo 86 en cuanto a su vigencia y transición normativa señaló:

> «**Artículo 86.** ***RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA.*** La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias Uf: los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley.
>
> Las nuevas reglas del dictamen pericial contenidas en la reforma a los artículos 218 a 222 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplicarán a partir de la publicación de la presente ley para los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 en los cuales no se hayan decretado pruebas.

> **De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley 1437 de 2011.**
>
> En estos mismos procesos, **los recursos interpuestos**, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones **que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos,** se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones».

Expuesto lo anterior, y teniendo en cuenta que el recurso de apelación incoado contra el auto de 26 de marzo de 2021, mediante el cual se declararon no probadas las excepciones de «*INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA*» y de «*INEPTITUD DE LA DEMANDA POR FALTA DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD POR EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA*», fue radicado el **8 de abril de 2021,** esto es, en vigencia de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, resulta procedente resolver sobre la concesión del mismo conforme a lo allí consagrado, en atención a que la misma Ley señaló que las reformas introducidas prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación, lo cual resulta notoriamente aplicable pese a que la vigencia del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 sea hasta el 4 de junio de 2022, pues, se reitera la interposición del recurso fue en vigencia de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.

Así las cosas, se tiene que el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) prevé las providencias susceptibles del recurso de alzada, en los siguientes términos:

> «**Artículo 243.** ***APELACIÓN.*** Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:
>
> 1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.

> 2. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso.
>
> 3. El que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales.
>
> El auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público.
>
> 4. El que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o de los perjuicios.
>
> 5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.
>
> 6. El que niegue la intervención de terceros.
>
> 7. El que niegue el decreto o la práctica de pruebas.
>
> 8. Los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial.
>
> **Parágrafo 1°.** El recurso de apelación contra las sentencias y las providencias listadas en los numerales 1 a 4 de este artículo se concederá en el efecto suspensivo. La apelación de las demás providencias se surtirá en el efecto devolutivo, salvo norma expresa en contrario.
>
> **Parágrafo 2°.** En los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y en el proceso ejecutivo, la apelación procederá y se tramitará conforme a las normas especiales que lo regulan. En estos casos el recurso siempre deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término previsto para recurrir.
>
> **Parágrafo 3°.** La parte que no obre como apelante podrá adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes, en lo que la sentencia apelada le fuere desfavorable. El escrito de adhesión, debidamente sustentado, podrá presentarse ante el juez que la profirió mientras el expediente se encuentre en su despacho, o ante el superior, hasta el vencimiento del término de ejecutoria del auto que admite la apelación.
>
> La adhesión quedará sin efecto si se produce el desistimiento del apelante principal.
>
> **Parágrafo 4°.** Las anteriores reglas se aplicarán sin perjuicio de las normas especiales que regulan el trámite del medio de control de nulidad electoral».

Resultando evidente que el auto recurrido de 26 de marzo de 2021, por medio del cual se resuelven las excepciones, no se encuentra enlistado dentro de los apelables, imponiendo su rechazo por ser improcedente.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: RECHÁZASE por improcedente el recurso de apelación incoado por la apoderada judicial del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN–ICFES-, conforme a lo expuesto en parte motiva de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
681477b67fefe61b2d23e5a21d21303985759098de807f4936d010c4d1f2d5a1
Documento generado en 03/06/2021 12:03:54 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00081-00**
Demandante:	**COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.**
Demandado:	**MUNICIPIO DE RICAURTE**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 16 de julio de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.,** por conducto de apoderado judicial, contra el **MUNICIPIO DE RICAURTE**, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la Factura No. RIC-005-2019 de 23 de enero de 2019 y de la Resolución No. 004 de 27 de febrero de 2020, por medio de las cuales la

Secretaría de Hacienda del Municipio de Ricaurte le determinó a la actora el impuesto de alumbrado público para la vigencia fiscal del mes de diciembre de 2018 y desató el recurso de reconsideración, respectivamente (*«006AutoAdmiteDemanda»*).

2.2. El 19 de agosto de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«009NotificacionPersonalDemanda»*).

2.3. El 14 de octubre de 2020 el MUNICIPIO DE RICAURTE contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas, sin remitir los anexos correspondientes y sin adjuntar el mandado que acreditara el derecho de postulación de la profesional del derecho que adujo ser la apoderada judicial del Ente territorial demandado (*«010ContestacionDemanda»*).

2.4. El 10 de diciembre de 2020 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 9 de diciembre de 2020 (*«011ConstanciaTerminos»*).

2.5. El 11 de diciembre de 2020 la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones de mérito planteadas (*«012FijacionLista»*).

2.6. El 3 de febrero de 2021 el doctor ÁNGEL MAURICIO CORTÉS MARTÍNEZ allegó el poder a él conferido por la doctora GLORIA RICARDO DONCEL, en su calidad de Alcaldesa del Municipio de Ricaurte, para representar a dicho Ente territorial en el asunto de la referencia (*«013PoderMunicipio»*).

2.7. Mediante providencia de 25 de febrero de 2021 este Despacho, primero, reconoció personería adjetiva al doctor CORTÉS MARTÍNEZ para actuar como apoderado judicial del ente territorial demandado y, segundo, requirió al MUNICIPIO DE RICAURTE para que; ***i)*** allegara de manera íntegra y legible el expediente administrativo que contuviese los antecedentes de la actuación objeto del presente asunto y, ***ii)*** acreditara que la profesional del derecho que

contestó la demanda el 14 de octubre de 2020 era la representante judicial del Municipio (*«015AutoRequiere»*).

2.8. El 26 de febrero de 2021 el apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE remitió el mandado que acredita que la profesional del derecho que presentó el escrito de contestación de la demanda era la representante judicial del Ente territorial y adjuntó de manera parcial el expediente administrativo del asunto de la referencia (*«017EscritoPoderMunicipio»*).

2.9. En virtud de lo anterior, el 15 de abril de 2021 este Juzgado requirió a la demandada para que allegara la totalidad del expediente administrativo que contuviese los antecedentes de la actuación objeto del presente medio de control (*«019AutoRequiere»*).

2.10. El 20 de abril de 2021 el apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE atendió el anterior requerimiento y remitió la documental solicitada (*«021EscritoMunicipio»*).

2.11. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«022ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021)
> ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.

Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.

> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas sean inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno a la nulidad del acto administrativo contenido en la Factura No. RIC-005-2019 de 23 de enero de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ricaurte liquidó el impuesto de alumbrado público para la vigencia del mes de diciembre de 2018 y de la Resolución No. 04 de 2 de marzo de 2020, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración incoado contra la aludida factura, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que no fueron propuestas; tampoco hay pruebas por practicar, las partes solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas con la demanda y con su contestación, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; la solicitadas a instancia de las partes son impertinentes, inconducentes e inútiles.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a realizarse la fijación del litigio y a pronunciarse sobre las pruebas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

FIJACIÓN DEL LITIGIO.

De la lectura de la demanda y de su contestación se tiene que las partes coinciden en la existencia de los **actos demandados** en la presente acción, estos son:

- La factura No. RIC-005-2019 de 23 de enero de 2019 por medio de la cual la SECRETARÍA DE HACIENDA del MUNICIPIO DE RICAURTE liquidó el impuesto de alumbrado público para la vigencia del mes de diciembre de 2018 a la sociedad **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.,** por valor de $3.906.210 (Folios 34 «*002DemandaPoderAnexos*» y 8 «*017EscritoPoderMunicipio*»).

- La Resolución No. 004 de 27 de febrero de 2020 «*Por medio del cual se resuelve un Recurso de Reconsideración, interpuesto por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P./MOVISTAR, en contra de las facturas N° RIC.005 del 23 de enero de 2019, mediante la cual se liquida el impuesto de Alumbrado Público*» (Folios 53 a 66 «*002DemandaPoderAnexos*» y 27 a 40 «*017EscritoPoderMunicipio*»).

En consecuencia, y a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (Folios 2 y 3 «*002DemandaPoderAnexos*»):

- Que se declare que la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.; ***i)*** no es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el MUNICIPIO DE RICAURTE para la vigencia fiscal de diciembre de 2018, ***ii)*** no adeuda suma alguna por concepto de impuesto de alumbrado público por el mes de diciembre de 2018 y, ***iii)*** que, en caso de haberse producido algún pago con ocasión a los actos administrativos acusados, se reestablezcan sus valores.

En virtud del líbelo introductorio y de su contestación, este Despacho señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El 23 de enero de 2019 el MUNICIPIO DE RICAURTE expidió la factura No. RIC-005-2019, por valor de $3.906.210, por medio de la cual liquidó el impuesto de alumbrado público a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal de diciembre de 2018 (Folios 34 «*002DemandaPoderAnexos*» y 8 «*017EscritoPoderMunicipio*»).

2. El 5 de marzo de 2019 la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpuso recurso de reconsideración contra la factura No. RIC-005-2019 de 5 de marzo de 2019 (Folios 37 a 51 «*002DemandaPoderAnexos*» y 10 a 24 «*017EscritoPoderMunicipio*»).

3. El 27 de febrero de 2020 el MUNICIPIO DE RICAURTE, mediante la Resolución No. 004 «*Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reconsideración, interpuesto por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. / MOVISTAR, en contra de las facturas N° RIC.005 del 23 de enero de 2019, mediante la cual se liquida el impuesto de Alumbrado Público*», confirmó la liquidación del impuesto de alumbrado público para la vigencia fiscal de diciembre de 2018 (Folios 53 a 66 «*002DemandaPoderAnexos*» y 27 a 40 «*017EscritoPoderMunicipio*»).

A la vez, encuentra que existe discrepancia en relación con: i) la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público de la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. para el mes de diciembre de 2018 en el MUNICIPIO DE RICAURTE, ii) la violación al debido proceso por falta de emplazamiento previo a la expedición de la liquidación oficial del impuesto de alumbrado público.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en establecer la legalidad de los actos administrativos demandados resolviendo los siguientes **problemas jurídicos**: **1)** ¿Es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el MUNICIPIO DE RICAURTE la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. para el mes de diciembre de 2018?, **2)** ¿Debió el MUNICIPIO DE RICAURTE emplazar a la sociedad COLOMBIANA

TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. previo a la expedición de la liquidación oficial del impuesto de alumbrado público del mes de diciembre de 2018?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 19 a 67 «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

De otro lado, se negará la solicitud de oficiar al MUNICIPIO DE RICAURTE para que allegue la «*copia auténtica de todas las actuaciones que dieron origen a los actos administrativos objeto de la presente demanda*» en atención a que esta documental fue remitida el 26 de febrero y el 20 de abril de 2021 (folios 7 a 42 «*017EscritoPoderMunicipio*» y 3 a 47 «*021EscritoMunicipio*»), tal y como lo exige el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así también se negará la solicitud para que el aludido Municipio certifique «*las cuantías que la electrificadora de CUNDINAMARCA le transfirió para la época o periodos facturados de los actos administrativos demandados, recaudados vía factura del servicio de energía eléctrica*», por impertinente, inconducente e inútil dado que el objeto de la controversia se suscita entorno a si la Sociedad demandante es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el MUNICIPIO DE

RICAURTE para la vigencia fiscal de diciembre de 2018 y no respecto a los valores transferidos entre el ente territorial demandado y la electrificadora de Cundinamarca, máxime cuando esta prueba es innecesaria para determinar la aludida calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, de conformidad con la Sentencia de Unificación 2019-CE-SUJ-4-009 de 6 de noviembre de 2019, aunado a que, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 173 del Código General del Proceso, la parte actora la pudo haber obtenido mediante escrito de petición y ante la negativa solicitar a este Juzgado el decreto de la misma, situación que no se encuentra acreditada en el plenario y que, por demás, dicha carga no puede ser trasladada a esta Agencia Judicial.

PARTE DEMANDADA

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados el 26 de febrero y 20 de abril de 2021 visibles a folios 7 a 42 «*017EscritoPoderMunicipio*» y 3 a 47 «*021EscritoMunicipio*» del expediente digitalizado.

Así mismo, también se negará la solicitud de oficiar a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. para que «*aporte el inventario de las redes de telefónica con la que cuenta el Municipio de Ricaurte*» con el fin de demostrar que a la demandante «*se le cobra el servicio de alumbrado público por ser usuario potencial de dicho servicio*», por inconducente e inútil para resolver los problemas jurídicos planteados, aunado a que en la Sentencia de Unificación 2019-CE-SUJ-4-009 de 6 de noviembre de 2019 el H. Consejo de Estado adoptó subreglas precisas en relación con los elementos esenciales y su forma de demostración del impuesto de alumbrado dentro de las cuales no se encuentra la solicitada.

Sumado ello, se recuerda que el Decreto 1370 de 2018, «*Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos generados por estaciones de radiocomunicaciones y se subroga el capítulo 5 del título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*»,

establece en su artículo 2.2.2.5.12 el trámite que debe adelantarse ante las autoridades territoriales para el «*despliegue de infraestructura de redes de telecomunicaciones*», por lo que no puede pretender el Ente territorial demandado trasladar la carga de la prueba que le incumbe cuando tendría en sus propias dependencias la prueba solicitada.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

---

[1] «**Artículo 207. CONTROL DE LEGALIDAD.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -7 de julio de 2020: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiendo su conocimiento al este Despacho («004ActaReparto»).
-16 de julio de 2020: Se admitió la demanda y se ordenó notificar a la demandada. («006AutoAdmiteDemanda»).
-19 de agosto de 2020: Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («009NotificacionPersonalDemanda»).
-14 de octubre de 2020: Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones previas («010ContestacionDemanda»).
-11 de diciembre de 2020: Fijación en lista («012FijacionLista»).
-25 de febrero de 2021: Auto reconoce personería adjetiva y requiere a la demandada para que allegue expediente administrativo y poder de la profesional del derecho que contestó la demanda («015AutoRequiere»).
-26 de febrero de 2021: El ente territorial demandado allega de manera parcial la documental solicitada («017EscritoPoderMunicipio»).
-15 de abril de 2021: Auto requiere al ente territorial demandado allegue de manera completa antecedentes administrativos («019AutoRequiere»).
-20 de abril de 2021: la parte demandada atiende el anterior requerimiento y allega documental («021EscritoMunicipio»).

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 19 a 67 «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado, los cuáles serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

CUARTO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados el 26 de febrero y 20 de abril de 2021 visibles a folios 7 a 42 «*017EscritoPoderMunicipio*» y 3 a 47 «*021EscritoMunicipio*» del expediente digitalizado, los cuáles serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

QUINTO: NIÉGUESE por inconducente, impertinente e inútil la solicitud de oficiar al MUNICIPIO DE RICAURTE para que allegue la «*copia autentica de todas las actuaciones administrativas que dieron origen a los actos administrativos objeto de la presente demanda (…)*» y «*certifique las cuantías que la electrificadora de CUNDINAMARCA le transfirió para la época o periodos facturados de los actos administrativos demandados, recaudados vía factura del servicio de energía eléctrica*», de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEXTO: NIÉGUESE por inconducente e inútil la solicitud de oficiar a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. para que «*aporte*

el inventario de las redes de telefónica con la que cuenta el Municipio de Ricaurte» por lo reseñado en la motiva.

SÉPTIMO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

OCTAVO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7be5f277cbf2ea09ad5fe187b203786a0f919effb0b08ca74828991a5be46d49
Documento generado en 03/06/2021 12:03:06 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2020-00095-00**
Demandante:	**ESPERANZA AGUIRRE HERNÁNDEZ**
Demandado:	**NACIÓN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a decidir sobre la solicitud de desistimiento de la demanda presentada por la apoderada judicial de la señora ESPERANZA AGUIRRE HERNÁNDEZ en escrito de 6 de abril de 2021.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Encontrándose el proceso pendiente para que el Despacho de aplicación de lo dispuesto en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 6 de abril de 2021 la apoderada judicial de la parte actora, mediante escrito allegado vía correo electrónico, desiste de la demanda, en los siguientes términos (*«013Desistimiento»*):

> *« (…) por medio del presente escrito me permito manifestar al despacho, que con fundamento en el artículo 314 de la ley 1564 de 2012, aplicable ante la jurisdicción administrativa,* ***desisto de todas y cada una de las pretensiones que habían sido solicitadas en el libelo introductorio de la demanda****, en la cual se solicitaba*

> *el reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en la ley 1071 del 2006 al demandado, por el incumplimiento y la tardanza en el pago de las cesantías de mi representado,* ***toda vez que el día 15 DE MARZO DE 2021 fue notificado por parte de la FIDUPREVISORA S.A., el depósito de la sanción por mora por vía administrativa a nombre de mi poderdante, que luego de revisado cumple con el pago total de la obligación que se pretendía.***
>
> *Así las cosas y toda vez que con este pago se cumple el derecho que estaba siendo reclamado ante esta jurisdicción* ***solicito al despacho tener en cuenta el artículo 188 de la ley 1437 del 2011 que indica que se dispondrá de la condena en costas SOLO en el caso de proferirse sentencia que ponga fin al proceso, esto en concordancia con el artículo 365 de la ley 1564 de 2012 numeral octavo****, donde se indica que para imponer costas es necesario que aparezca probado en el expediente su causación y que ello sea comprobable, argumento que incluyo el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia en sentencia de segunda instancia del 13 de junio de 2016 proceso con radicado 2013-911 M.P: Jairo Jiménez Aristizábal, de igual manera se indicó algo similar en la sentencia 2013-1136 del 29 de junio de 2016 con ponencia de la Dra. Martha Cecilia Madrid Roldán.*» (Destaca el Despacho).

2.2. En virtud de lo anterior, este Despacho mediante proveído de 15 de abril de 2021 dio aplicación del numeral 4º del artículo 316 del Código General del Proceso y puso en conocimiento de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Juzgado la solicitud de desistimiento referenciado (*«015AutoCorreTraslado»*).

2.3. Vencido el término de los tres (3) días que otorga el numeral 4º del artículo 316 del Código General del Proceso, la parte demandada y el Agente del Ministerio Público guardaron silencio, según se desprende de la constancia secretarial de 10 de mayo de 2021 visible en el archivo *«017ConstanciaDespacho»*.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero determinar si es procedente el desistimiento de la demanda como consecuencia de la manifestación efectuada por la apoderada judicial de la parte demandante el 6 de abril de 2021 (*«013Desistimiento»*), para lo cual el Despacho se remite a lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que consagra:

> «**Artículo 306.** ***ASPECTOS NO REGULADOS.*** En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

Así las cosas, y advirtiendo que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no regula lo concerniente al desistimiento de la demanda[1], es imperioso remitirse a lo preceptuado en el artículo 314 y siguientes del Código General del Proceso, que disponen:

> «**Artículo 314.** ***DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES.*** **El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso.** Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso.
>
> **El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia.**
>
> Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él.
>
> (…)
>
> **El desistimiento debe ser incondicional**, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes.
>
> (…)
>
> Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo».

Por su parte, el artículo 315 ibidem prevé lo siguiente:

> «**Artículo 315.** ***QUIÉNES NO PUEDEN DESISTIR DE LAS PRETENSIONES.*** **No pueden desistir de las pretensiones**:

[1] Toda vez que, lo que regula es el retiro de la demanda antes de la notificación al demandado y al ministerio público (artículo 174), como también el desistimiento tácito por el incumplimiento de una carga procesal que da lugar a la declaratoria por el juez de la terminación del proceso (artículo 178).

1. Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial.

En este caso la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso, y el juez podrá concederla en el auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas; en caso contrario fijará fecha y hora para audiencia con tal fin.

2. **Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello.**

3. Los curadores ad lítem».

De la misma manera, el artículo 316 ibidem consagra que:

«**Artículo 316.** ***DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES.*** Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.

No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:

1. Cuando las partes así lo convengan.

2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.

3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares.

4. **Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas**».

Con esos preceptos normativos, procede esta Instancia Judicial a estudiar lo que en síntesis se establece:

- El desistimiento de la demanda es un aspecto no regulado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que, según su artículo 306, se debe remitir al Código General del Proceso.

- La parte demandante podrá desistir de la demanda mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso.

- El desistimiento de la demanda implica la renuncia de las pretensiones de la demanda.

- En caso de que el desistimiento de la demanda no se refiera a la totalidad de las pretensiones o no provenga de todos los demandantes, el proceso continuara respecto a lo no comprendido en el desistimiento.

- No puede desistir de las pretensiones los apoderados judiciales que no tengan facultad expresa para ello.

- El juez decretará el desistimiento cuando una vez descorrido el traslado, por el término de tres (3) días, la parte demandada no se opone.

- El juez no condenara en costas y perjuicios cuando el demandado no se oponga al desistimiento.

- El desistimiento debe ser incondicional.

Se advierte que la manifestación de desistimiento de la demanda cumple con los requisitos del precepto normativo aludido, así: ***(i)*** el 6 de abril de 2021, la apoderada judicial de la parte demandante presentó escrito (*«013Desistimiento»*), esto es, antes que el Despacho de aplicación de lo dispuesto en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que no se ha dictado sentencia, ***(ii)*** en el escrito aclara que la solicitud obedece al pago de la sanción por mora por parte de la

FIDUPREVISORA S.A. a favor de la demandante (circunscribiéndose así a la totalidad de las pretensiones por ser el objeto central del presente medio de control) (folio 2 «*013Desistimiento*»), ***(iii)*** la solicitud de desistimiento es incondicional, ***(iv)*** la apoderada judicial de la señora ESPERANZA AGUIRRE HERNÁNDEZ tiene facultad expresa para desistir (folio 14 «*002DemandaPoderAnexos*») y, ***(v)*** el 15 de abril hogaño, mediante proveído el Despacho sustanciador ordenó correr traslado de la petición de desistimiento de las pretensiones presentadas por la demandante a la parte demandada y al ministerio público, por el termino de tres (3) días para que se pronunciaran al respecto. Se advierte que una vez vencido el termino anterior, según informe secretarial de 10 de mayo de 2021 («*017ConstanciaDespacho*») la parte demandada y el ministerio público no se manifestaron al respecto.

Ahora bien, el Despacho Destaca que en los términos del numeral 4° del artículo 316 del Código General del Proceso no hay lugar a la condena en costas cuando frente a la petición del desistimiento de las pretensiones el demandado no se opone. En ese orden, se aceptará la solicitud de desistimiento presentado por la apoderada judicial de la parte demandante por reunir y cumplir todos y cada uno de los requisitos consagrados en el Código General del Proceso. Del mismo modo no se condenará en costas.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT,**

R E S U E L V E:

PRIMERO: ACÉPTASE la petición de desistimiento de las pretensiones presentada por la apoderada judicial de la señora ESPERANZA AGUIRRE HERNÁNDEZ, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada y cumplida esta providencia **ARCHÍVESE** el expediente previas las anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
AD126909539D7F1634182E2A10506B0779BB4F81D4E9669598255573CF206D75
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:46 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2020-00111-00**
Demandante:	**SONIA EMILCE ORDÓÑEZ VEGA**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. Mediante proveído de 6 de agosto de 2020 este Despacho, admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la señora SONIA EMILCE ORDOÑEZ VEGA, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- (*«006AutoAdmiteDemanda»*).

1.2. Previo pago de los gastos procesales, el 13 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«007PagoGastos»* y *«008NotificacionPersonalDemanda»*).

1.3 El 22 de enero de 2021 el apoderado judicial de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO-FOMAG-, estando dentro del término legal presentó escrito de contestación de la demanda *(«009ContestacionDemanda»)*.

1.4. Por auto de 26 de marzo de 2021, el Despacho en aplicación a lo previsto en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procedió a declarar cerrado el período probatorio, fijar el litigio y declara saneado el proceso («014AutoFijaLitigio»).

1.5. Mediante providencia 22 de abril de 2021 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión («017AutoCorreAlegatos»).

1.6. En memorial de 30 de abril de 2021, el apoderado judicial de la parte actora, mediante escrito allegado vía correo electrónico, desiste de la demanda, en los siguientes términos (*«021Desistimiento»*):

> *«(…) por medio de este escrito me permito **DESISTIR** de las pretensiones formuladas en la demanda, solicito no se disponga condena en costas, teniendo en cuenta que la parte demandada, por intermedio de su apoderado, coadyuva esta petición en señal de aceptación (artículo 316 numeral 2 del Código General del Proceso, aplicable ante la jurisdicción administrativa, en virtud de la remisión efectuada por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011).*
>
> ***El apoderado coadyuvante, en caso de no suscribir este documento, arrimará al despacho escrito validando esta petición, sin el cual, solicito no se resuelva esta solicitud***» (Destaca el Despacho).

1.7. El 24 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«020ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Así las cosas, el Despacho evidencia que a la parte actora le asiste ánimo que se declare la terminación del proceso.

Bajo ese contexto, esta sede judicial recuerda que, en relación con el desistimiento, los artículos 314 a 316 del Código General del Proceso disponen:

«**Artículo 314.** ***DESISTIMIENTO DE LAS PRETENSIONES.*** El demandante podrá desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso. Cuando el desistimiento se presente ante el superior por haberse interpuesto por el demandante apelación de la sentencia o casación, se entenderá que comprende el del recurso.

El desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda en todos aquellos casos en que la firmeza de la sentencia absolutoria habría producido efectos de cosa juzgada. El auto que acepte el desistimiento producirá los mismos efectos de aquella sentencia.

Si el desistimiento no se refiere a la totalidad de las pretensiones, o si sólo proviene de alguno de los demandantes, el proceso continuará respecto de las pretensiones y personas no comprendidas en él.

(…)

El desistimiento debe ser incondicional, salvo acuerdo de las partes, y sólo perjudica a la persona que lo hace y a sus causahabientes.
(…)

Cuando el demandante sea la Nación, un departamento o municipio, el desistimiento deberá estar suscrito por el apoderado judicial y por el representante del Gobierno Nacional, el gobernador o el alcalde respectivo».

«**Artículo 315.** ***QUIÉNES NO PUEDEN DESISTIR DE LAS PRETENSIONES.*** No pueden desistir de las pretensiones:

1. Los incapaces y sus representantes, a menos que previamente obtengan licencia judicial.

En este caso la licencia deberá solicitarse en el mismo proceso, y el juez podrá concederla en el auto que acepte el desistimiento si considera que no requiere la práctica de pruebas; en caso contrario fijará fecha y hora para audiencia con tal fin.

2. Los apoderados que no tengan facultad expresa para ello.
3. Los curadores ad lítem».

«**Artículo 316.** ***DESISTIMIENTO DE CIERTOS ACTOS PROCESALES.*** Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los incidentes, las excepciones y los demás actos procesales que hayan promovido. No podrán desistir de las pruebas practicadas.

El desistimiento de un recurso deja en firme la providencia materia del mismo, respecto de quien lo hace. Cuando se haga por fuera de audiencia, el escrito se presentará ante el secretario del juez de conocimiento si el expediente o las copias para dicho recurso no se han remitido al superior, o ante el secretario de este en el caso contrario.

> El auto que acepte un desistimiento condenará en costas a quien desistió, lo mismo que a perjuicios por el levantamiento de las medidas cautelares practicadas.
>
> No obstante, el juez podrá abstenerse de condenar en costas y perjuicios en los siguientes casos:
>
> 1. Cuando las partes así lo convengan.
>
> 2. Cuando se trate del desistimiento de un recurso ante el juez que lo haya concedido.
>
> 3. Cuando se desista de los efectos de la sentencia favorable ejecutoriada y no estén vigentes medidas cautelares.
>
> 4. Cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición, el juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el juez decretará el desistimiento sin condena en costas y expensas».

De lo anterior se infiere que; ***i)*** se puede desistir de las pretensiones mientras no se haya pronunciado sentencia que ponga fin al proceso, ***ii)*** el desistimiento implica la renuncia de las pretensiones de la demanda con efectos de cosa juzgada, ***iii)*** el desistimiento puede ser total o parcial, ***iv)*** pueden presentar la solicitud de desistimiento los apoderados judiciales que tengan facultad expresa para ello, ***v)*** de la solicitud se correrá traslado al demandado por el término de tres (3) días.

Puestas en ese estadio las cosas y, descendiendo al sub examine se tiene que; el 30 de abril de 2021 la señora SONIA EMILCE ORDOÑEZ VEGA, por conducto de su apoderado judicial, doctor RUBÉN DARÍO GIRALDO MONTOYA, presentó escrito con manifestación de desistimiento de la demanda, esto, una vez finalizado el término de ejecutoria del auto que corrió traslado para alegar de conclusión, además, se observa que el apoderado judicial de la demandante cuenta con la facultad expresa para desistir, de conformidad con las facultades conferidas en el poder visible en folios 18 a 20 del archivo «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

En ese orden, previo a emitir pronunciamiento sobre la solicitud de desistimiento total de la demanda, es del caso, en aplicación del numeral 4º del artículo 316 del Código General del Proceso, poner en conocimiento de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- y del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho dicha solicitud, para que se manifiesten al respecto.

En consecuencia, se **DISPONE:**

PRIMERO: PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y del señor Agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho, por el término de tres (3) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, la solicitud de desistimiento total de la demanda presentada por la apoderada judicial de la señora SONIA EMILCE ORDOÑEZ VEGA para que se manifiesten al respecto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
1E6D20416FDBBCCB1B4BA0896B55439890831E0BD59B23CF2E7C210D283A4928

DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:47 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00117-00**
Demandante:	**JULIÁN ALBERTO HERNÁNDEZ MONTOYA**
Demandado:	**CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES-CREMIL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

Juez: **Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 22 de abril de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (*«019AutoFijaLitigio»*) y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes hicieran manifestación al respecto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
8423E281EB3D698098B80FBD75E8D0CDE3EA5F1E628286259EE5A20164E3159A
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:48 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00129-00**
Demandante:	**PROMOTORA DE GASES DEL SUR-PROGASUR-S.A. E.S.P.**
Demandado:	**MUNICIPIO DE GIRARDOT**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 29 de octubre de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad **PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P.,** por conducto de apoderado judicial, contra el **MUNICIPIO DE GIRARDOT**, con el propósito de obtener la nulidad de la Liquidación Oficial No. 019 de 15 de febrero de 2019 por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del MUNICIPIO DE GIRARDOT determinó el impuesto de alumbrado público para la vigencia fiscal de los meses de enero de 2016 a diciembre de 2018 y de

la Resolución No. 0124 de 13 de abril de 2020, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración incoado contra la señalada factura (*«015AutoAdmite»*).

2.2. El 25 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«017NotificacionPersonal»*).

2.3. El 12 de enero de 2021 el MUNICIPIO DE GIRARDOT contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«018ContestacionDemanda»*).

2.4. El 19 de enero siguiente el apoderado judicial del ente territorial demandado remitió los antecedentes administrativos del asunto de la referencia (*«019EscritoMunicipioGirardot»*).

2.5. El 12 de abril de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 8 de marzo de 2021 (*«020ConstanciaTerminos»*).

2.6. El 12 de abril de 2021 la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones de mérito planteadas (*«021FijacionLista»* y *«022EnvioCorreoTraslado»*).

2.7. El 26 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«024ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021)
> ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.

Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.

No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas sean inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno a la nulidad de la Liquidación Oficial No. 019 de 15 de febrero de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del MUNICIPIO DE GIRARDOT liquidó el impuesto de alumbrado público para la vigencia fiscal de enero de 2016 a diciembre de 2018 y de la Resolución No. 0124 de 13 de abril de 2020, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración incoado contra la liquidación oficial, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que no fueron propuestas; tampoco hay pruebas por practicar, las partes solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas con la demanda y con su contestación, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; las solicitadas a instancia de la parte actora son impertinentes, inconducentes e inútiles; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a realizar la fijación del litigio y a pronunciarse sobre las pruebas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

FIJACIÓN DEL LITIGIO.

De la lectura de la demanda y de su contestación se tiene que las partes coinciden en la existencia de los **actos demandados** en la presente acción, estos son:

- La Resolución No. 019 de 15 de febrero de 2019, por medio de la cual la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT liquidó el impuesto de alumbrado público para la vigencia de enero de 2016 a diciembre de 2018 a la sociedad **PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P.** (Folios 93 a 96 «*002DemandaPoderAnexos*» y 167 a 171 «*019EscritoMunicipioGirardot*»).

- La Resolución No. 0124 de 13 de abril de 2020, «*Por medio del cual se resuelve un Recurso de Reconsideración, interpuesto por la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. -PROGASUR, en contra de la Resolución No. 019 de febrero 15 de 2019*» (Folios 100 a 117 «*002DemandaPoderAnexos*»).

En consecuencia, y a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (Folio 10 «*008EscritoSubsanacion*»):

- Que se declare que la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. no adeuda suma alguna por concepto de impuesto de alumbrado público para la vigencia fiscal de enero de 2016 a diciembre de 2018 y, en caso de que se haya efectuado algún pago con ocasión a los actos administrativos que se acusan, se ordene su devolución.

En virtud del líbelo introductorio y de su contestación, el Despacho señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El 15 de febrero de 2019 el MUNICIPIO DE GIRARDOT expidió la Resolución No. 019 por medio de la cual liquidó el impuesto de alumbrado público a la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. para la

vigencia fiscal de enero de 2016 a diciembre de 2018 (Folios 93 a 96 «*002DemandaPoderAnexos*» y 167 a 171 «*019EscritoMunicipioGirardot*»).

2. El 23 de mayo de 2019 la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. interpuso el recurso de reconsideración contra la Resolución No. 019 de 15 de febrero de 2019 (Folios 248 a 285 «*002DemandaPoderAnexos*»).

3. El 13 de abril de 2020 el MUNICIPIO DE GIRARDOT, mediante la Resolución No. 0124 «*Por medio del cual se resuelve un Recurso de Reconsideración, interpuesto por la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. - PROGASUR, en contra de la Resolución No. 019 de febrero 15 de 2019*», confirmó la liquidación del impuesto de alumbrado público (Folios 100 a 117 «*002DemandaPoderAnexos*»).

A la vez, encuentra que existe **discrepancia,** de manera principal, en relación con: **i)** la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público de la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. para el período comprendido entre enero de 2016 a diciembre de 2018, de manera subsidiaria, en relación con: **ii)** aplicación de una tarifa distinta a la que corresponde; **iii)** doble tributación; **iv)** vulneración a los principios de legalidad, equidad, igualdad y capacidad contributiva; **v)** violación al debido proceso y expedición irregular del acto por motivación insuficiente, liquidación del impuesto en exceso a la extensión del gasoducto y la falta de emplazamiento; **vi)** procedencia de gravar con impuestos municipales la actividad de transporte de gas natural y; **vii)** aplicación del impuesto distinto al autorizado por la ley.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en establecer la legalidad de los actos administrativos demandados resolviendo los siguientes **problemas jurídicos**: **1)** ¿Es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado en el MUNICIPIO DE GIRARDOT la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. para el período comprendido entre enero de 2016 a diciembre de 2018? En caso de ser positiva la respuesta a la anterior pregunta: **2)** ¿Se liquidó el impuesto de alumbrado público a la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. con una tarifa diferente a la que le corresponde?; **3)** ¿Incurre el

MUNICIPIO DE GIRARDOT en doble tributación sobre la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. al expedir los actos administrativos demandados?; **4)** ¿Fueron expedidos con violación a los principios de igualdad, equidad, legalidad y capacidad contributiva los actos administrativos demandados?; **5)** ¿Adolece de motivación insuficiente en la liquidación oficial?; **6)** ¿Se liquidó el impuesto de alumbrado púbico a la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. en exceso a la extensión del gasoducto para el período comprendido entre enero de 2016 a diciembre de 2018?; **7)** ¿Fueron expedidos con violación al debido proceso los actos administrativos demandados por haberse omitido el emplazamiento previo a la determinación del impuesto de alumbrado público?; **8)** ¿Es procedente gravar con impuestos municipales la actividad de transporte de gas natural? y; **9)** ¿Se liquidó en los actos administrativos demandados un impuesto diferente al impuesto de alumbrado público?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 77 a 285 «*002DemandaPoderAnexos*», 85 a 293 «*008EscritoSubsanación*», 4 a 14 «*013RespuestaRequerimiento*» y 4 «*023PronunciamientoExcepciones*» del expediente digitalizado.

Por otra parte, se negará la solicitud oficiar al MUNICIPIO DE GIRARDOT para que:

1. Allegue «*copia autentica, con constancia de sanción y de publicación, del Acuerdo 014 de 2015*», habida consideración que dicho Acuerdo está publicado en la página oficial del MUNICIPIO DE GIRARDOT, tal y como se aprecia en el siguiente enlace web: https://www.girardot-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Acuerdos/2015/Acuerdo%20No.%20014%20del%2030%20de%20diciembre%20del%202015.pdf.

2. Informe «*a) ¿qué acciones específicas ha tomado el municipio para determinar con certeza que el valor del impuesto a liquidar a los sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público acata el límite máximo establecido por el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016?, b) el estudio técnico de referencia a que se refiere dicho artículo 351, informando y explicando conforme a qué metodología se efectuó dicho estudio, c) que acciones específicas ha tomado el Municipio para que el régimen jurídico y económico del impuesto de alumbrado público vigente y aplicable desde enero de 2018 en este momento se ajuste a los lineamientos establecidos en los artículo 349 a 353 de la Ley 1819 de 2016*», por considerarlo impertinente, inconducente e inútil, por cuanto con las pruebas que obran dentro del expediente son suficientes para resolver los problemas jurídicos planteados. Aunado a que si la Sociedad demandante consideraba útil la mencionada información, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 173 del Código General del Proceso, pudo haberlas solicitado mediante escrito de petición (hecho que no acreditó) y no trasladar dicha carga al Despacho.

PARTE DEMANDADA

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visibles en los folios 3 a 221 del archivo «*019EscritoMunicipioGirardot*» del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

---

[1] «**Artículo 207. *CONTROL DE LEGALIDAD*.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -26 de agosto de 2020: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiendo su conocimiento al este Despacho («004ActaReparto»).
-29 de octubre de 2020: Se admitió la demanda y se ordenó notificar a la demandada. («015AutoAdmite»).
-25 de noviembre de 2020: Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («017NotificacionPersonal»).
-12 de enero de 2021: Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones previas («018ContestacionDemanda»).
-19 de enero de 2021: Entidad demandada allega el expediente administrativo («019EscritoMunicipioGirardot»)
-12 de abril de 2021: Fijación en lista («021FijacionLista» y «022EnvioCorreoTraslado»).
-15 de abril de 2021: Parte actora se pronuncia frente a las excepciones de mérito planteadas («023PronunciamientoExcepciones»).

TERCERO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 77 a 285 «*002DemandaPoderAnexos*», 85 a 293 «*008EscritoSubsanación*», 4 a 14 «*013RespuestaRequerimiento*» y 4 «*023PronunciamientoExcepciones*» del expediente digitalizado, los cuáles serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

CUARTO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visibles en los folios 3 a 221 del archivo «*019EscritoMunicipioGirardot*» del expediente digitalizado, los cuáles serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

QUINTO: NIÉGUESE por inconducentes, impertinentes e inútiles la solicitud de oficiar al MUNICIPIO DE GIRARDOT para que allegue ***i)*** «*copia autentica, con constancia de sanción y de publicación, del Acuerdo 014 de 2015*» y, ***ii)*** informe «*a) ¿qué acciones específicas ha tomado el municipio para determinar con certeza que el valor del impuesto a liquidar a los sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público acata el límite máximo establecido por el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016?, b) el estudio técnico de referencia a que se refiere dicho artículo 351, informando y explicando conforme a qué metodología se efectuó dicho estudio, c) que acciones específicas ha tomado el Municipio para que el régimen jurídico y económico del impuesto de alumbrado público vigente y aplicable desde enero de 2018 en este momento se ajuste a los lineamientos establecidos en los artículo 349 a 353 de la Ley 1819 de 2016*», de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEXTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SÉPTIMO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

OCTAVO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderado judicial del MUNICIPIO DE GIRARDOT al doctor JUAN GUILLERMO GONZÁLEZ ZOTA, en los términos y para el efecto del poder a él conferido visible en el folio 14 *«018ContestacionDemanda»* del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
6db3f6cf47688d5760d1727f1b8e1cf82bb53221b334e7863e670fb96846efa4
Documento generado en 03/06/2021 12:03:08 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00134-00**
Demandante:	**NUBIA ENITH CORTÉS SÁNCHEZ**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 15 de abril de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo («*014AutoFijaLitigio*») y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes hicieran manifestación al respecto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO

JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
14A8DE598917B08D8BBEAA9F16F8BE2B4218C970BB50E401C7783BC072C68134
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:49 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00136-00**
DEMANDANTE:	**YOBANY LÓPEZ QUINTERO**
DEMANDADO:	**MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ-SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021) procede el Despacho a resolver las excepciones con el carácter de previas que fueron propuestas por la apoderada judicial de la parte demandada.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El señor YOBANY LÓPEZ QUINTERO, a nombre propio, el 3 de septiembre de 2020, radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho, con el propósito de obtener la nulidad de la Circular No. 045 de 16 de marzo de 2020, mediante la cual la Entidad demandada modificó el

calendario académico estipulado en las Resoluciones Nos. 0890 de 31 de octubre de 2019 y 1084 de 12 de diciembre de 2019 (*«004ActaReparto»*).

2.2. Mediante auto de 10 de septiembre de 2020 se inadmitió la demanda de la referencia, una vez subsanada, el 29 de octubre siguiente se admitió (*«006AutoInadmite»*, *«008SubsanaciónDemanda»* y *«008AutoAdmite»*).

2.3. El 25 de noviembre de 2020 se notificó personalmente la demanda (*«012NotificacionPersonal»*).

2.4. El 27 de enero de 2021 la apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, dentro del término legal, contestó la demanda y propuso la excepción previa de «*inepta demanda*» (*«013ContestacionDemanda»*).

2.5. El 12 de abril de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 8 de marzo de 2020 (*«014ContanciaTerminos»*).

2.6. El 12 de abril de 2021 se corrió traslado de las excepciones planteadas en el escrito de contestación de la demanda (*«015FijacionLista»* y *«016EnvioCorreoTraslados»*).

2.7. El 13 de abril de 2021 la parte actora descorrió el traslado de las excepciones propuestas (*«017PronunciamientoExcepciones»*).

2.8. El 26 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«018ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, sería del caso fijar fecha para la realización de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o, en su lugar, dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 182A ibidem (adicionado por el artículo 42

de la Ley 2080 de 2021) para dictar sentencia anticipada. No obstante, atendiendo el contenido del parágrafo 2° del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 (modificada por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021) es del caso resolver las excepciones con el carácter de previas propuestas por la parte demandada en el escrito de contestación a la demanda, según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso.

A ese respecto, el parágrafo 2° del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, establece:

> «**Parágrafo 2°.** De las excepciones presentadas se correrá traslado en la forma prevista en el artículo 201A por el término de tres (3) días. En este término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre las excepciones previas y, si fuere el caso, subsanar los defectos anotados en ellas. En relación con las demás excepciones podrá también solicitar pruebas.
>
> **Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso.** Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso segundo del artículo 101 del citado código, el juez o magistrado ponente las decretará en el auto que cita a la audiencia inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron pruebas y estén pendientes de decisión.
>
> Antes de la audiencia inicial, en la misma oportunidad para decidir las excepciones previas, se declarará la terminación del proceso cuando se advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.
>
> Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada, en los términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A.» (En subrayado y negrilla destaca el Despacho).

De conformidad la referida norma debe darse aplicación al trámite previsto en los artículos 100, 101 y 102 del Código General del Proceso, los cuales prevén:

> «**Artículo 100. *EXCEPCIONES PREVIAS*.** Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:
>
> 1. Falta de jurisdicción o de competencia.

2. Compromiso o cláusula compromisoria.

3. Inexistencia del demandante o del demandado.

4. Incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado.

5. Ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones.

6. No haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cite al demandado, cuando a ello hubiere lugar.

7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde.

8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto.

9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios.

10. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar.

11. Haberse notificado el auto admisorio de la demanda a persona distinta de la que fue demandada» (Destaca el Despacho).

«**Artículo 101.** ***OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS*****.** Las excepciones previas se formularán en el término del traslado de la demanda en escrito separado que deberá expresar las razones y hechos en que se fundamentan. Al escrito deberán acompañarse todas las pruebas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandado.

El juez se abstendrá de decretar pruebas de otra clase, salvo cuando se alegue la falta de competencia por el domicilio de persona natural o por el lugar donde ocurrieron hechos, o la falta de integración del litisconsorcio necesario, casos en los cuales se podrán practicar hasta dos testimonios.

Las excepciones previas se tramitarán y decidirán de la siguiente manera:

1. Del escrito que las contenga se correrá traslado al demandante por el término de tres (3) días conforme al artículo 110, para que se pronuncie sobre ellas y, si fuere el caso, subsane los defectos anotados.

2. **El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial**, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser

> subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.
>
> Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella las practicará y resolverá las excepciones.
>
> Si prospera la de falta de jurisdicción o competencia, se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez.
>
> Si prospera la de compromiso o cláusula compromisoria, se decretará la terminación del proceso y se devolverá al demandante la demanda con sus anexos.
>
> Si prospera la de trámite inadecuado, el juez ordenará darle el trámite que legalmente le corresponda.
>
> Cuando prospere alguna de las excepciones previstas en los numerales 9, 10 y 11 del artículo 100, el juez ordenará la respectiva citación.
>
> 3. Si se hubiere corregido, aclarado o reformado la demanda, solo se tramitarán una vez vencido el traslado. Si con aquella se subsanan los defectos alegados en las excepciones, así se declarará.
>
> Dentro del traslado de la reforma el demandado podrá proponer nuevas excepciones previas siempre que se originen en dicha reforma. Estas y las anteriores que no hubieren quedado subsanadas se tramitarán conjuntamente una vez vencido dicho traslado.
>
> 4. Cuando como consecuencia de prosperar una excepción sea devuelta la demanda inicial o la de reconvención, el proceso continuará respecto de la otra» (Destaca el Despacho).
>
> «**Artículo 102. *INOPONIBILIDAD POSTERIOR DE LOS MISMOS HECHOS.*** Los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones».

Bajo ese contexto, el Despacho advierte que la apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, en el escrito de contestación de la demanda, propuso la excepción previa denominada «*Inepta demanda*».

Revisados minuciosamente el escrito por medio del cual se propone la excepción, el Despacho advierte que la excepcionante no solicitó la práctica de pruebas para el efecto, así como el Despacho no encuentra la procedencia de decretar medio probatorio alguno, por lo que se hace necesaria la resolución

de estas, previo a celebrarse la Audiencia Inicial o dictar sentencia anticipada, en los términos de la normativa en comento.

Claro lo anterior, el Despacho recuerda que en ejercicio del derecho de defensa la parte demandada dentro del término de traslado de la demanda puede formular excepciones **previas** y de **mérito**. Las primeras apuntan a ponerle término al proceso en cuanto impiden continuarlo, o buscan subsanar las irregularidades existentes; por su parte, las segundas están destinadas a atacar el derecho sustancial reclamado por el accionante, refieren a argumentos propios del demandado, basados en hechos diferentes a los invocados en la demanda y que constituyen la oposición a las pretensiones las cuales serán resueltas en la sentencia según lo previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Así las cosas, el Despacho abordará el estudio de la excepción previa propuesta por la apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

Expone que la excepción de «*Inepta demanda*» radica en que el líbelo introductorio no satisface las exigencias de los numerales 3º y 4º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; lo primero, por cuanto, señala, en el acápite de hechos de la demanda: «*se establece una serie de apreciaciones subjetivas, e invoca normas; los cuales a todas luces no pueden ser vistas ni apreciadas como hechos u omisiones*»; y lo segundo, debido a que, considera, «*el demandante no señala la presunta vulneración de las normas superiores en el acto administrativo atacado*».

Por su parte la parte demandante, al momento de descorrer traslado de las excepciones puntualizó que las normas violadas fueron enunciadas en el cuerpo de la demanda, del mismo modo, precisa, que se dieron a conocer los argumentos por los cuales considera que el actuar de la administración va en contravía de los presupuestos legales y constitucionales («*017PronuneciamientoExcepciones*»).

Ahora bien, para resolver la anterior excepción el Despacho hará las siguientes consideraciones:

El artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece los requisitos que debe contener una demanda que se presente ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así:

> «**Artículo 162.** ***CONTENIDO DE LA DEMANDA.*** Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:
>
> 1. La designación de las partes y de sus representantes.
>
> 2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.
>
> **3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.**
>
> **4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación**.
>
> (…)» (Destaca el Despacho).

En ese orden, resulta claro, al tenor de los establecido en la norma en cita, que en las demandadas que se radiquen ante este Jurisdicción deben, entre otras, enunciarse los hechos y omisiones que sirven de fundamento de las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y enumerados, así también precisarse los fundamentos de derecho de las pretensiones, es decir, indicar las normas violadas y explicar el concepto de violación).

De ese modo, revisado el texto de la demanda se tiene que el señor YOBANY LÓPEZ QUINTERO, en su escrito de la demanda relató los hechos de manera cronológica, pues, según se desprende de estos (los 14 dados a conocer), el demandante realiza un recuento histórico de las disposiciones normativas objeto de incidencia y/o estudio de la legalidad del acto administrativo que se acusa.

Al respecto, se recuerda que el término hecho, derivado del latín *factus*[1], **permite describir aquello que ocurre, la obra o la cuestión a la que se hace referencia**. Es por ello, que el numeral 3º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo impone que los hechos estén determinados, clasificados y enumerados con el propósito de responder la exigencia que se le hace al demandado, en su escrito de contestación a la demanda, de exponer de manera numerada su posición frente a los narrados por el demandante, **debiendo precisar con cuáles de ellos se encuentra de acuerdo y cuáles no** (numeral 2º del artículo 175 ibidem).

Lo anterior, con la finalidad de garantizar el derecho de contradicción y defensa de la parte demandada, de ese modo, y tal como lo ha expuesto el H. Tribunal Administrativo de Boyacá[2] «*en un debate judicial los hechos deben tener relación directa con las pretensiones y, ser eminentemente pertinentes a la controversia planteada, sin que haya lugar a confundirlos con fundamentos de derecho o con inferencias inductivas o deductivas del demandante*».

Bajo las anteriores apreciaciones, se advierte que los hechos indicados en la demanda por la parte actora cumplen las exigencias del numeral 3º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto que de esa cronología normativa ilustrada, de manera ordenada, la parte actora describió lo acontecido sobre la cuestión a la que se hace la referencia, traducido, en lo ocurrido para la expedición del acto administrativo enjuiciado.

Ahora bien, no puede desconocer el Despacho que los fundamentos fácticos descritos en el líbelo introductorio revisten a cabalidad de las exigencias contempladas en el citado numeral 3º del artículo 162 ibidem, a tal punto que la apoderada judicial de la parte demandada se pronunció respecto de estos, de manera íntegra, garantizándose de esa manera el derecho de contradicción y defensa de su representada (folios 3 a 6 «*013ContestacionDemanda*»), por lo que no

---

[1] https://dle.rae.es/hecho
[2] Providencia de 16 de abril de 2018, Despacho No. 5, Magistrada Ponente: Doctora CLARA ELISA CIFUENTES ORTÍZ, radicación número: 15001 2333 000 2018 00130 00.

se configura la falencia alegada que pueda llegar a considerarse que se deba finalizar el proceso.

Ahora, frente a que la demanda omitió indicar los fundamentos de derecho de las pretensiones, requisito contenido en el numeral 4º artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se trae a colación lo que, desde vieja data, ha estimado el H. Consejo de Estado:

> «*INEPTA DEMANDA – Concepto de violación / CONCEPTO DE VIOLACIÓN – No dependen de un modelo estricto de técnica jurídica / FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN – Rechazo de la demanda / SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA – Concepto de violación / Sea la oportunidad para manifestar, que, a juicio de la Sala,* ***la exigencia procesal contemplada en el numeral 4º del artículo 137 del C.C.A., se satisface cuando en el libelo demandatorio se consigne la invocación normativa y la sustentación de los cargos.*** *Naturalmente, la parte actora, por la significación sustantiva que puede tener un concepto de violación en el que se evidencie de forma manifiesta la ilegalidad del acto acusado, requiere empeñarse en su elaboración,* ***sin que los resultados del proceso dependan de un modelo estricto de técnica jurídica.*** ***Solamente en ausencia total de este requisito o cuando adolezca de la enunciación normativa sin la correspondiente sustentación****, a contrario sensu, se entenderá defectuosa la demanda por carencia de uno de sus presupuestos y necesaria la subsanación en el lapso contemplado en el artículo 143 del C.C.A., aserto que ratifica el carácter formal de la exigencia plasmada en el artículo 137 numeral 4º ibídem.* ***Se concluye que el demandante cumplió con la carga procesal que le asistía de precisar las razones por las cuáles debía accederse a la pretensión invocada; cosa distinta es que el aludido concepto de violación sea pertinente y suficiente para declarar la nulidad deprecada, situación que atañe a las consideraciones de la decisión final que deba tomarse dentro de la acción, ámbito en el cual se retomarán los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda y de la contestación con el objetivo de verificar la legalidad o ilegalidad del artículo acusado***»[3] (Destaca el Despacho).

Puntualizado lo anterior, y observado el líbelo introductorio, considera este Despacho que el demandante sí señaló las normas que considera violadas con motivo de la expedición de la Circular No. 045 de 16 de marzo de 2020 y, respecto de ellas explicó las razones por las cuales considera que se debe declarar la nulidad del citado acto administrativo; luego es claro para el

[3] Providencia de 7 de diciembre de 2011, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Doctor VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA, radicación número: 11001-03-24-000-2009-00354-00(2069-09).

Juzgado que el actor pide la nulidad del acto administrativo porque considera que viola normas tanto constitucionales (pie de página del folio 7 «*002DemandayAnexos*») como legales (C-669 de 2006, C-019 de 2004, Decreto 1850 de 2002, Decreto 1381 de 1997 y C-225 de 2011) que garantizan y efectivizan, en concepto del actor, el verdadero alcance y valor de las vacaciones de los docentes oficiales en Colombia.

Debe destacarse que el demandante no está obligado a direccionar el concepto de violación de una forma determinada, pues es su criterio el que prima en este requisito formal, ya que, como se citó, solo basta que la parte demandante relacione las disposiciones normativas que a su juicio han sido transgredidas, explicando, a su modo, el concepto de violación, de una manera coherente con lo pretendido.

Por los anteriores motivos, y en atención a los numerales 3º y 4º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo, la excepción invocada no tiene vocación de prosperidad como quiera que, primero, los hechos esbozados en el líbelo introductorio describen lo acontecido de manera determinada y clasificada sobre la cuestión a la que se hace la referencia y , segundo, porque las razones expuestas por el libelista en el cuerpo de la demanda son suficientes para cumplir con los fundamentos de derecho de la demanda, al tenor de lo previsto en el numeral 4° del artículo 162 ibidem, de conformidad con lo precisado por el H. Consejo de Estado.

En consecuencia, **SE DISPONE**:

PRIMERO: DECLÁRASE NO probada la excepción «*INEPTA DEMANDA*» incoada por la apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: RECONÓCESE PERSONERÍA adjetiva para actuar como apoderada judicial del MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ a la doctora

DANIELA ALEJANDRA GARZÓN ROZO, de conformidad con el poder visible en el folio 14 «*013ContestacionDemanda*» del expediente digital.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
256779AFD23C0A7551D140973B1BBDCD13D4021110B7120341265DDB35B77F50
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:09 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00137-00**
Demandante:	**COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.**
Demandado:	**MUNICIPIO DE RICAURTE**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 8 de octubre de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.,** por conducto de apoderado judicial, contra el **MUNICIPIO DE RICAURTE**, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la Factura No. RIC-112 de 23 de mayo de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ricaurte liquidó el impuesto de alumbrado público para el mes de abril de 2019 y de la Resolución No. 014

de 27 de julio de 2020, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración incoado contra la señalada factura («*010AutoAdmiteDemanda*»).

2.2. El 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda («*012NotificacionPersonal*»).

2.3. El 30 de noviembre de 2020 el MUNICIPIO DE RICAURTE contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas («*013Contestacion*»).

2.4. El 12 de abril de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 10 de marzo de 2021 («*014ConstanciaTerminos*»).

2.5. El 12 de abril de 2021 la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones de mérito planteadas («*015FijacionLista*» y «*016EnvioCorreoTraslado*»).

2.6. El 26 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer («*017ConstanciaDespacho*»).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021)
> ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;
>
> c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.

Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.

No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas sean inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno a la nulidad del acto administrativo contenido en la Factura No. RIC-112 de 23 de mayo de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ricaurte liquidó el impuesto de alumbrado público para la vigencia del mes de abril de 2019 y de la Resolución No. 014 de 27 de julio de 2020, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración incoado contra la aludida factura, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que no fueron propuestas; tampoco hay pruebas por practicar, las partes solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas con la demanda y con su contestación, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; la solicitada a instancia de la parte actora es impertinente, inconducente e inútil; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a realizar la fijación del litigio y a pronunciarse sobre las pruebas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

FIJACIÓN DEL LITIGIO.

De la lectura de la demanda y de su contestación se tiene que las partes coinciden en la existencia de los **actos demandados** en la presente acción, estos son:

- La factura No. RIC-112 de 23 de mayo de 2019 por medio de la cual la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE liquidó el impuesto de alumbrado público para la vigencia del mes de abril de 2019 a la sociedad **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.** por valor de $4.140.580 (Folios 29 «*002DemandaPoderAnexos*» y 227 «*013Contestacion*»).

- La Resolución No. 014 de 27 de julio de 2020 «*Por medio del cual se resuelve un Recurso de Reconsideración, interpuesto por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P./MOVISTAR, en contra de las facturas N° RIC.112-2019, mediante la cual se liquida el impuesto de Alumbrado Público*» (Folios 51 a 65 «*002DemandaPoderAnexos*», 17 a 31 «*008EscritoSubsanacion*» y 250 a 264 «*013Contestacion*»).

En consecuencia, y a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (Folios y 3 «*002DemandaPoderAnexos*»):

- Que se declare que la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. ***i)*** no es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el MUNICIPIO DE RICAURTE para la vigencia fiscal de abril de 2019, ***ii)*** no adeuda suma alguna por concepto de impuesto de alumbrado público por el mes de abril de 2019 y, ***iii)*** que, en caso de haberse producido algún pago con ocasión a los actos administrativos acusados, se reestablezcan sus valores.

En virtud del líbelo introductorio y de su contestación, el Despacho señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El 23 de mayo de 2019 el MUNICIPIO DE RICAURTE expidió la factura No. RIC-112-2019 por valor de $4.140.580, por medio de la cual liquidó el impuesto de alumbrado público a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal de abril de 2019 (Folios 29 «*002DemandaPoderAnexos*» y 227 «*013Contestacion*»).

2. El 1º de agosto de 2019 la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. interpuso el recurso de reconsideración contra la factura No. RIC-112-2019 de 23 de mayo de 2019 (Folios 51, 30 a 48 «*002DemandaPoderAnexos*» y 229 a 247 «*013Contestacion*»).

3. El 27 de julio de 2020 el MUNICIPIO DE RICAURTE, mediante la Resolución No. 014 «*Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reconsideración, interpuesto por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. / MOVISTAR, en contra de las facturas N° RIC.112 de 2019, mediante la cual se liquida el impuesto de Alumbrado Público*», confirmó la liquidación del impuesto de alumbrado público (Folios 51 a 65 «*002DemandaPoderAnexos*» y 250 a 264 «*013Contestacion*»).

A la vez, encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el MUNICIPIO DE RICAURTE de la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P./MOVISTAR, para el mes de abril de 2019, ii) violación al debido proceso por la falta de emplazamiento previo a la expedición de la liquidación oficial del impuesto de alumbrado público.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en establecer la legalidad de los actos administrativos demandados resolviendo los siguientes **problemas jurídicos**: **1)** ¿Es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado en el MUNICIPIO DE RICAURTE la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. para el mes de abril de 2019?, **2)** ¿Debió el MUNICIPIO DE RICAURTE emplazar a la sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. previo a la expedición de la liquidación oficial del impuesto de alumbrado público del mes de abril de 2019?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 23 a 76 de *«002DemandaPoderAnexos»* y 12 a 234 *«008EscritoSubsanacion»* del expediente digitalizado.

Por otra parte, se negará la solicitud de oficiar al MUNICIPIO DE RICAURTE para que:

1. Allegue «*copia auténtica de todas las actuaciones que dieron origen a los actos administrativos objeto de la presente demanda*» en atención a que esta documental fue remitida junto con el escrito de contestación a la demanda de 30 de noviembre de 2020 (*«013Contestacion»*).

2. Certifique «*las cuantías que la electrificadora de CUNDINAMARCA le transfirió para la época o periodos facturados de los actos administrativos demandados, recaudados vía factura del servicio de energía eléctrica*», por impertinente, inconducente e inútil dado que el objeto de la controversia se suscita entorno a si la Sociedad demandante es sujeto pasiva del impuesto de alumbrado público en el MUNICIPIO DE RICAURTE para la vigencia fiscal de abril de 2019 y no respecto a los valores transferidos entre el ente territorial demandado y la electrificadora de Cundinamarca, máxime cuando, entre otras, tampoco esta

prueba es necesaria para determinar los elementos y/o sujeto pasivo del impuesto sobre el alumbrado público, de conformidad con la sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-009 de 6 de noviembre de 2019.

PARTE DEMANDADA

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visibles en los folios 9 a 276 del archivo *«013Contestacion»* del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

---

[1] «**Artículo 207. *CONTROL DE LEGALIDAD*.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -4 de septiembre de 2020: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiendo su conocimiento al este Despacho («004ActaReparto»).
-8 de octubre de 2020: Se admitió la demanda y se ordenó notificar a la demandada. («010AutoAdmiteDemanda»).
-26 de noviembre de 2020: Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («012NotificacionPersonal»).
-30 de noviembre de 2020: Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones previas («013Contestacion»).
-12 de abril de 2021: Fijación en lista («015FijacionLista» y «016EnvioCorreoTraslado»).

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 23 a 76 de *«002DemandaPoderAnexos»* y 12 a 234 *«008EscritoSubsanacion»* del expediente digitalizado, los cuáles serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

CUARTO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visibles en los folios 9 a 276 del archivo *«013Contestacion»* del expediente digitalizado, los cuáles serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

QUINTO: NIÉGUESE por inconducente, impertinente e inútil la solicitud de oficiar al MUNICIPIO DE RICAURTE para que allegue la «*copia autentica de todas las actuaciones administrativas que dieron origen a los actos administrativos objeto de la presente demanda (…)*» y «*certifique las cuantías que la electrificadora de CUNDINAMARCA le transfirió para la época o periodos facturados de los actos administrativos demandados, recaudados vía factura del servicio de energía eléctrica*», de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEXTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SÉPTIMO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado.

OCTAVO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE al doctor LUIS ÁNGEL MURILLO GUZMÁN, en los términos y para el efecto del poder a él conferido visible en el folio 9 «*013Contestacion*» del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
a624c7aad413ff06d3fcbc35c93893c262f0601a91e4002620356ef3a1063398
Documento generado en 03/06/2021 12:03:10 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00153-00**
Demandante:	**PROMOTORA DE GASES DEL SUR-PROGASUR- S.A. E.S.P.**
Demandado:	**MUNICIPIO DE RICAURTE**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 8 de octubre de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad **PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P.,** por conducto de apoderado judicial, contra el **MUNICIPIO DE RICAURTE**, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la Factura No. RIC-030 de 11 de marzo de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ricaurte liquidó el impuesto

de alumbrado público para la vigencia fiscal de los meses de enero a diciembre de 2018 y de la Resolución No. 010 de 26 de mayo de 2020, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración incoado contra la señalada factura (*«006AutoAdmite»*).

2.2. El 26 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«008NotificacionPersonal»*).

2.3. El 3 de diciembre de 2020 el MUNICIPIO DE RICAURTE contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«009ContestacionDemanda»*).

2.4. El 12 de abril de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 10 de marzo de 2021 (*«010ConstanciaTerminos»*).

2.5. El 12 de abril de 2021 la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones de mérito planteadas (*«011FijacionLista»* y *«012EnvioCorreoTraslado»*).

2.6. El 26 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«014ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021)
> ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**
>
> a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;
>
> b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.

Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.

> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas sean inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno a la nulidad del acto administrativo contenido en la Factura No. RIC-030 de 11 de marzo de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ricaurte liquidó el impuesto de alumbrado público para la vigencia fiscal de enero a diciembre de 2018 y de la Resolución No. 010 de 26 de mayo de 2020, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración incoado contra la aludida factura, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que no fueron propuestas; tampoco hay pruebas por practicar, las partes solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas con la demanda y con su contestación, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; las solicitadas a instancia de la parte actora son impertinentes, inconducentes e inútiles; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a realizar la fijación del litigio y a pronunciarse sobre las pruebas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

FIJACIÓN DEL LITIGIO.

De la lectura de la demanda y de su contestación se tiene que las partes coinciden en la existencia de los **actos demandados** en la presente acción, estos son:

- La factura No. RIC-030 de 11 de marzo de 2019, por medio de la cual la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE RICAURTE liquidó el impuesto de alumbrado público del período comprendido de enero a diciembre de 2018 a la sociedad **PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P.,** por valor de $27.611.280 (Folios 63 «*002DemandaPoderAnexos*» y 231 «*009ContestacionDemanda*»).

- La Resolución No. 010 de 26 de mayo de 2020, «*Por medio del cual se resuelve un Recurso de Reconsideración, interpuesto por PROMOTORES DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. (PROGASUR), en contra de las facturas N° RIC.030 de 2019, mediante la cual se liquida el impuesto de Alumbrado Público*» (Folios 66 a 82 «*002DemandaPoderAnexos*» y 255 a 271 «*009ContestacionDemanda*»).

En consecuencia, y a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (Folios 2 y 3 «*002DemandaPoderAnexos*»):

- Que se declare que la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. no adeuda suma alguna por concepto de impuesto de alumbrado público por el período comprendido de enero a diciembre de 2018 y, en caso de que haya efectuado algún pago con ocasión a los actos administrativos que se acusan, se ordene su devolución.

En virtud del líbelo introductorio y de su contestación, el Despacho señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El 11 de marzo de 2019 el MUNICIPIO DE RICAURTE expidió la factura No. RIC-030-2019, por valor de $27.611.280, por medio de la cual liquidó el impuesto de alumbrado público a la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal del año 2018 (Folios 63 «*002DemandaPoderAnexos*» y 231 «*009ContestacionDemanda*»).

2. El 9 de mayo de 2019 la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. interpuso el recurso de reconsideración contra la factura No. RIC-030-2019 de 11 de marzo de 2019 (Folios 233 a 251 «*009ContestacionDemanda*»).

3. El 26 de mayo de 2020 el MUNICIPIO DE RICAURTE, mediante la Resolución No. 010 «*Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reconsideración, interpuesto por PROMOTORES DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. (PROGASUR), en contra de la factura N° RIC.030 de 2019, mediante la cual se liquida el impuesto de Alumbrado Público*», negó el recurso interpuesto y en su lugar confirmó la liquidación del impuesto de alumbrado público (Folios 66 a 82 «*002DemandaPoderAnexos*» y 255 a 271 «*009ContestacionDemanda*»).

A la vez, encuentra que existe **discrepancia**, de manera principal, en relación con: i) la configuración del silencio administrativo positivo ante la falta de respuesta oportuna al recurso de reconsideración presentado el 9 de mayo de 2019, ii) la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público de la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. para el año 2018, iii) la vulneración al debido proceso por haberse omitido el emplazamiento previo a la determinación del impuesto, de manera subsidiaria, iv) la vulneración a los principios de legalidad, equidad, igualdad y capacidad contributiva.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en establecer la legalidad de los actos administrativos demandados resolviendo los siguientes **problemas jurídicos**: **1)** ¿Operó el silencio administrativo positivo ante la presunta falta

de respuesta oportuna al recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad actora el 9 de mayo de 2019 en contra de la factura No. RIC-030-2019 de 11 de marzo de 2019, al tenor de lo consagrado en el artículo 734 del Estatuto Tributario Nacional?, **2)** ¿Es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el MUNICIPIO DE RICAURTE la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. para el período comprendido de enero a diciembre de 2018?, **3)** ¿ Debió el MUNICIPIO DE RICAURTE emplazar a la sociedad PROMOTORA DE GASES DEL SUR S.A. E.S.P. previo a la expedición de la liquidación oficial del impuesto de alumbrado público para el período comprendido de enero a diciembre de 2018?, **4)** ¿Fueron expedidos con violación a los principios de igualdad, equidad, legalidad y capacidad contributiva los actos administrativos demandados?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 47 a 119 «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

Por otra parte, se negará la solicitud de oficiar al MUNICIPIO DE RICAURTE para que:

1. Allegue «*copia autentica, con constancia de sanción y de publicación, del Acuerdo 018 de 2012*» en atención a que esta documental fue allegada junto con el escrito de contestación de la demanda de 3 de diciembre de 2020 (folios 16 a 23 «*009ContestacionDemanda*»). Aunado a que el anterior Acuerdo esta publicado en la página oficial del MUNICIPIO DE RICAURTE, tal y como se aprecia en el siguiente enlace web: https://www.ricaurte-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx.

2 y 3. Informe, por un lado, «*a) ¿qué acciones específicas ha tomado el municipio para determinar con certeza que el valor del impuesto a liquidar a los sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público acata el límite máximo establecido por el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016?, b) el estudio técnico de referencia a que se refiere dicho artículo 351, informando y explicando conforme a qué metodología se efectuó dicho estudio, c) que acciones específicas ha tomado el Municipio para que el régimen jurídico y económico del impuesto de alumbrado público vigente y aplicable desde enero de 2018 en este momento se ajuste a los lineamientos establecidos en los artículo 349 a 353 de la Ley 1819 de 2016*» y, por el otro, «*cuál es el costo mensual para el Municipio de la prestación del servicio de alumbrado público*», por impertinentes, inconducentes e inútiles dado que el objeto de la controversia se suscita entorno a si la Sociedad demandante es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el MUNICIPIO DE RICAURTE para la vigencia fiscal del año 2018 y no respecto de si el Ente territorial acata el máximo establecido por el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016, su metodología y, sobre todo, el costo mensual que soporta el ente demandado para la prestación del servicio de alumbrado público, máxime, cuando entre otras, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 173 del Código General del Proceso, la parte actora pudo haberlas obtenido mediante escrito de petición (situación que no se demostró) si consideraba que dichos informes eran necesarios y no trasladar la carga al Juzgado.

PARTE DEMANDADA

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda

visibles en los folios 11 a 284 del archivo «*009ContestacionDemanda*» del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

---

[1] «**Artículo 207. *CONTROL DE LEGALIDAD*.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -25 de septiembre de 2020: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiendo su conocimiento al este Despacho («004ActaReparto»).
-8 de octubre de 2020: Se admitió la demanda y se ordenó notificar a la demandada. («006AutoAdmite»).
-26 de noviembre de 2020: Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («008NotificacionPersonal»).
-3 de diciembre de 2020: Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones previas («009ContestacionDemanda»).
-12 de abril de 2021: Fijación en lista («011FijacionLista» y «012EnvioCorreoTraslado»).

SEGUNDO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 47 a 119 *«002DemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado, los cuáles serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

CUARTO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visibles en los folios 11 a 284 del archivo *«009ContestacionDemanda»* del expediente digitalizado, los cuáles serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

QUINTO: NIÉGUESE por inconducentes, impertinentes e inútiles la solicitud de oficiar al MUNICIPIO DE RICAURTE para que allegue ***i)*** *«copia autentica, con constancia de sanción y de publicación, del Acuerdo 018 de 2012»*, ***ii)*** informe *«a) ¿qué acciones específicas ha tomado el municipio para determinar con certeza que el valor del impuesto a liquidar a los sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público acata el límite máximo establecido por el artículo 351 de la Ley 1819 de 2016?, b) el estudio técnico de referencia a que se refiere dicho artículo 351, informando y explicando conforme a qué metodología se efectuó dicho estudio, c) que acciones específicas ha tomado el Municipio para que el régimen jurídico y económico del impuesto de alumbrado público vigente y aplicable desde enero de 2018 en este momento se ajuste a los lineamientos establecidos en los artículo 349 a 353 de la Ley 1819 de 2016»* y, ***iii)*** informe *«cuál es el costo mensual para el Municipio de la prestación del servicio de alumbrado público»*, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEXTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SÉPTIMO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

OCTAVO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE al doctor LUIS ÁNGEL MURILLO GUZMÁN, en los términos y para el efecto del poder a él conferido visible en el folio 11 «*009ContestacionDemanda*» del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
a1c99bc0a89287210316df9c171a32f442259f2380e47c496db896c0330b0e6e
Documento generado en 03/06/2021 12:03:11 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2020-00165-00**
DEMANDANTE:	**DIMER SÁNCHEZ BOLAÑOS**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

De conformidad con el artículo 134 del Código General del Proceso procede el Despacho a resolver la solicitud de nulidad presentada por la apoderada judicial de la parte actora el 15 de abril de 2021.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El señor DIMER SÁNCHEZ BOLAÑOS, por conducto de apoderada judicial, el 7 de octubre de 2020 radicó demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su reparto a este Despacho (*«003CorreoInformaReparto»*), con la finalidad de obtener la Nulidad del Acto Administrativo No. 429173 de 31 de marzo de 2020, proferido por la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, por medio del cual se le negó el reajuste y liquidación en un 20% de su asignación salarial básica mensual.

2.2. Este Despacho mediante proveído de 29 de octubre de 2020 inadmitió la demanda por: ***i)*** la inexistencia dentro del plenario de un poder o mandato que acreditara el derecho de postulación de la profesional del derecho que presentó la demanda en nombre del señor DIMER SÁNCHEZ BOLAÑOS, ***ii)*** para que expresara con precisión y claridad las pretensiones de la demanda, ***iii)*** para que remitiera en su integridad el acto administrativo acusado y, ***iv)*** acreditara el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 6º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, esto es, que se haya enviado por medio electrónico copia de la demanda y de sus anexos a los demandados (*«006AutoInadmite»*).

2.3. El anterior auto se notificó en debida forma tal y como se desprende del correo electrónico por medio del cual se dio a conocer el estado No. 34 de 30 de octubre de 2020 visible en el archivo *«007NotificacionEstadoOctubre30»*.

2.4. En providencia de 27 de noviembre de 2020 este Juzgado, en aplicación de los artículos 169 y 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, rechazó la demanda como quiera que la parte actora no subsanó la demanda (*«009AutoRechaza»*).

2.5. De igual modo, el anterior proveído se notificó en debida forma tal y como se desprende del correo electrónico por intermedio del cual se dio a conocer el estado No. 41 de 30 de noviembre de 2020 visible en el archivo *«010NotificacionEstado30Noviembre»*.

2.6. No obstante, el 15 de abril de 2021 la apoderada judicial de la parte demandante presentó escrito promoviendo incidente de nulidad contra el auto de 29 de octubre de 2020, aduciendo, una indebida notificación con base en los siguientes argumentos (*«001EscritoIncidenteNulidad»* de la carpeta *«C02IncidenteNulidad»*):

2.6.1. Manifiesta que el 7 de octubre de 2020 radicó demanda ante los Juzgados Administrativos y que una vez fue repartida a este Despacho, no se le informó el número de radicado del proceso, ante lo cual, se le imposibilitó consultar la plataforma TYBA.

2.6.2. Por lo anterior, aduce que como no tenía el número de radicado para realizar las correspondientes consultas en la plataforma de TYBA *«para hacer seguimientos a los estados»*, considera que se *«evidencia de forma clara la indebida notificación del auto que inadmitió la demanda el 29 de octubre de 2020 y el auto que rechazó la demanda del 27 de noviembre de 2020, toda vez que en ninguno de los dos casos se garantizó la notificación efectiva de las providencias descritas de acuerdo al artículo 199 de la Ley 199 de la Ley 1437 de 2011, de tal forma que se vulneró el debido proceso (…)»*.

2.6.3. Para el efecto, la apoderada judicial señala como causal de nulidad la contemplada en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso.

2.6.4. Aduce que el 18 de marzo de 2021 solicitó ante esta Agencia Judicial información relacionada con el número del expediente y el estado del proceso, por cuanto, asegura, hasta dicha fecha no se había proveído sobre su admisión y tampoco contaba con el acta de reparto. Prosigue, en la misma fecha el Juzgado le proporcionó el radicado y le informó que podía consultarlo en el aplicativo TYBA, pero que no pudo visualizarlo ya que no estaba habilitada para ello.

2.7. El 21 de abril de 2021, se fijó en lista el incidente de nulidad propuesto: *«002FijacionLista»* y *«003CorreoEnvioTraslado»* de la carpeta *«C02IncidenteNulidad»*.

2.8. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«004ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho procede a resolver el incidente de nulidad promovido por la apoderada judicial del señor DIMER SÁNCHEZ BOLAÑOS.

En ese orden, se debe recordar que los artículos 209 y 210 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevén lo relacionado con los asuntos que deben tramitarse como incidente, la oportunidad, el trámite y efecto de estos, así:

> «**Artículo 209.** ***INCIDENTES*** Solo se tramitarán como incidente los siguientes asuntos:
>
> **1. Las nulidades del proceso**
>
> 2. La tacha de falsedad de documentos en el proceso ejecutivo sin formulación de excepciones y las demás situaciones previstas en el Código de Procedimiento Civil para ese proceso.
>
> 3. La regulación de honorarios de abogado, del apoderado o sustituto al que se le revocó el poder o la sustitución.
>
> (…)» (Destaca el Despacho).

> **«Artículo 210.** ***OPORTUNIDAD, TRÁMITE Y EFECTO DE LOS INCIDENTES Y DE OTRAS CUESTIONES ACCESORIAS.*** El incidente deberá proponerse verbalmente o por escrito durante las audiencias o una vez dictada la sentencia, según el caso, con base en todos los motivos existentes al tiempo de su iniciación, y no se admitirá luego incidente similar, a menos que se trate de hechos ocurridos con posterioridad.
>
> La solicitud y trámite se someterá a las siguientes reglas:
>
> 1. Quien promueva un incidente deberá expresar lo que pide, los hechos en que se funda y las pruebas que pretenda hacer valer.
>
> 2. Del incidente promovido por una parte en audiencia se correrá traslado durante la misma a la otra para que se pronuncie y en seguida se decretarán y practicarán las pruebas en caso de ser necesarias.
>
> 3. Los incidentes no suspenderán el curso del proceso y serán resueltos en la audiencia siguiente a su formulación, salvo que propuestos en audiencia sea posible su decisión en la misma.
>
> 4. Cuando los incidentes sean de aquellos que se promueven después de proferida la sentencia o de la providencia con la cual se termine el proceso, el juez lo resolverá previa la práctica de las pruebas que estime necesarias. En estos casos podrá citar a una audiencia especial para resolverlo, si lo considera procedente.
>
> Cuando la cuestión accesoria planteada no deba tramitarse como incidente, el juez la decidirá de plano, a menos que el Código de Procedimiento Civil establezca un procedimiento especial o que

> hubiere hechos que probar, caso en el cual a la petición se acompañará prueba siquiera sumaria de ellos, sin perjuicio de que el juez pueda ordenar la práctica de pruebas».

Pese a lo anterior, y como quiera que en dicha normativa sólo se contempla el trámite a seguir en caso de incidentes promovidos en audiencia, es necesario efectuar la remisión a los artículos 133 a 138 del código General del Proceso.

Respecto a las causales de nulidad, dicho Estatuto Procesal enlista las siguientes:

> **«Artículo 133.** ***CAUSALES DE NULIDAD.*** El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
>
> 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
>
> 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
>
> 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
>
> 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.
>
> 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
>
> 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.
>
> 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.
>
> 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

> Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.
>
> **Parágrafo.** Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece».

Frente a la oportunidad y trámite establece:

> **«Artículo 134.** ***OPORTUNIDAD Y TRÁMITE*****.** Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella.
>
> La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo alegar por la parte en las anteriores oportunidades.
>
> Dichas causales podrán alegarse en el proceso ejecutivo, incluso con posterioridad a la orden de seguir adelante con la ejecución, mientras no haya terminado por el pago total a los acreedores o por cualquier otra causa legal.
>
> **El juez resolverá la solicitud de nulidad previo traslado, decreto y práctica de las pruebas que fueren necesarias**.
>
> La nulidad por indebida representación, notificación o emplazamiento solo beneficiará a quien la haya invocado. Cuando exista litisconsorcio necesario y se hubiere proferido sentencia, esta se anulará y se integrará el contradictorio» (Destaca el Despacho).

Y, establece las siguientes exigencias para alegar la nulidad:

> **«Artículo 135.** ***REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD*****. La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.**
>
> No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

> **La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada.**
>
> El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación» (Resalta el Despacho).

Bajo ese contexto, el Despacho advierte lo siguiente; ***i)*** quien alega la nulidad es la profesional del derecho que aduce ser la apoderada judicial del señor DIMER SÁNCHEZ BOLAÑOS, ***ii)*** consecuente con lo anterior; (a) tiene legitimación para alegar y (b) expone la causal de nulidad la parte o persona «*afectada*», ***iii)*** la apoderada judicial de la parte actora fundamenta la nulidad en la causal 8ª del artículo 133 del Código General del Proceso (folio 11 «*001EscritoIncidenteNulidad*» de la carpeta «*C02IncidenteNulidad*»), ***iv)*** la incidentante esbozó los hechos en que fundamenta su solicitud (folios 10 y 11 «*001EscritoIncidenteNulidad*» de la carpeta «*C02IncidenteNulidad*») y, ***v)*** se dio traslado de la solicitud de nulidad el 21 de abril de 2021 («*002FijacionLista*» y «*003CorreoEnvioTraslado*» de la carpeta «*C02IncidenteNulidad*»), por lo que al tenor de lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 134 y, satisfechas las exigencias del artículo 135 del Código General del Proceso, se decidirá la nulidad planteada.

Así las cosas, descendiendo al caso en estudio, se recuerda que la apoderada judicial de la parte actora señala que se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 8° del artículo 133 del Código General del Proceso, por lo que una vez revisado el expediente y las actuaciones que se desplegaron durante la actuación procesal, se deben realizar las siguientes precisiones:

El numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso preceptúa de manera clara, expresa e inequívoca como causal de nulidad «*cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda*», motivo por el cual, contrastada la actuación y verificada la pieza procesal sobre la cual la apoderada de la parte demandante cimienta la causal de nulidad invocada, se observa que corresponde al auto de 29 de octubre de 2020 que **inadmitió** la demanda, aspecto por el cual, lo refutado no se enmarcaría, a todas luces, en la

causal en comento. No obstante, el Despacho abordará el estudio de la notificación efectuada al auto que inadmitió la demanda con el fin de determinar si le asiste razón a la apoderada judicial del señor SÁNCHEZ BOLAÑOS cuando estima que se notificó de manera indebida, vulnerándose así los derechos de su representado.

Así pues, habiéndose precisado que la nulidad se predica respecto de la indebida notificación del auto de 29 de octubre que inadmitió la demanda, se trae a colación el Capítulo VII -Notificaciones- del Título V -Demanda y Proceso Contencioso Administrativo- de la Parte 2º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues allí se establece la manera en que se deben llevar a cabo las notificaciones de las providencias.

Al respecto, el artículo 198 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé las providencias que deben notificarse de manera personal, así:

> «**Artículo 198.** ***PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL***.
> Deberán notificarse personalmente las siguientes providencias:
>
> 1. Al demandado, el auto que admita la demanda.
>
> 2. A los terceros, la primera providencia que se dicte respecto de ellos.
>
> 3. Al Ministerio Público el auto admisorio de la demanda, salvo que intervenga como demandante. Igualmente, se le notificará el auto admisorio del recurso en segunda instancia o del recurso extraordinario en cuanto no actúe como demandante o demandado.
>
> 4. Las demás para las cuales este Código ordene expresamente la notificación personal».

De la lectura de dicha norma se extrae con claridad que el auto que inadmite la demanda no está enlistado dentro de la misma, situación por la cual se debía dar estricta aplicación al artículo 201 ibidem (original-vigente al momento de notificación-) el cual consagra la manera de notificar los autos no sujetos al requisito de notificación personal, en los siguientes términos:

«**Artículo 201.** ***NOTIFICACIONES POR ESTADO***. **Los autos no sujetos al requisito de la notificación personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario**. La inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella ha de constar:

1. La identificación del proceso.

2. Los nombres del demandante y el demandado.

3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla.

4. La fecha del estado y la firma del Secretario.

El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad de medio notificador durante el respectivo día.

De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará certificación con su firma al pie de la providencia notificada y se enviará un mensaje de datos a quienes hayan suministrado su dirección electrónica.

De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez (10) años.

Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al acceso del público para la consulta de los estados» (Destaca el Despacho).

Norma que, en virtud de la emergencia económica, social y ecológica generada con ocasión del Cóvid-19, y en atención a la fecha de presentación de la demanda y de la expedición del auto inadmisorio, se debía aplicar en concordancia con el artículo 9º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, habida consideración que estableció la manera como se debía realizar la notificación por estado y traslados en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica:

«**Artículo 9°.** ***NOTIFICACIÓN POR ESTADO Y TRASLADOS***. Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.

No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.

> De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia.
>
> Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier interesado.
>
> **Parágrafo**. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, mediante la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por Secretaría, el cual se entenderá realizado a los dos (2) días hábiles siguientes al del envío del mensaje y el término respectivo empezará a correr a partir del día siguiente».

Claro lo anterior, a continuación se hará referencia a la notificación de las providencias de 29 de octubre de 2020 (que inadmitió la demanda) y de 27 de noviembre de 2020 (que rechazó la demanda).

Frente al auto de 29 de octubre de 2020, este se notificó por medio del estado electrónico No. 34 de 30 de octubre de 2020, según se observa en:

1) Los estados electrónicos publicados, cargados y/o dados a conocer a través de la página web habilitada por la Rama Judicial para el efecto, tal y como se desprende del siguiente enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-girardot/313.

2) El correo electrónico de 29 de octubre de 2020, enviado por este Despacho a la dirección digital reportada por la apoderada judicial de la parte demandada, esta es notificacionescoopsolidar@hotmail.com, por medio del cual se le dio a conocer del estado No. 34 de 30 de octubre de 2020. Mensaje de datos que, se debe precisar, incluía los correspondientes enlaces para que la apoderada pudiese acceder a los estados electrónicos (*«007NotificacionEstadoOctubre30»*).

Respecto del auto de 27 de noviembre de 2020, este se notificó mediante el estado No. 41 de 30 de noviembre de 2020, el cual se verifica con:

1) Los estados electrónicos publicados, cargados y/o dados a conocer a través de la página web habilitada por la Rama Judicial para el efecto, tal y como se desprende del siguiente enlace: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-administrativo-de-girardot/313.

2) El correo electrónico de 30 de noviembre de 2020, enviado por este Despacho a la dirección digital reportada por la apoderada judicial de la parte demandada, es decir, a notificacionescoopsolidar@hotmail.com, por medio del cual se le dio a conocer del estado No. 41 de 30 de noviembre de 2020. Mensaje de datos que, se resalta, incluía los correspondientes enlaces para que la apoderada pudiese acceder a los estados electrónicos (*«007NotificacionEstado30Noviembre»*).

De tal suerte que, verificada la forma de notificaciones de los autos de 29 de octubre de 2020 (que inadmitió la demanda) y 27 de noviembre de 2020 (que rechazó la demanda), encuentra el Despacho que se notificaron en debida forma y de conformidad con los artículos 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 9° del Decreto 806 de 2020. Motivos suficientes para concluir que no se configura la causal de nulidad alegada por la apoderada judicial del señor DIMER SÁNCHEZ BOLAÑOS.

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptará el argumento de que la apoderada judicial del señor SÁNCHEZ BOLAÑOS no pudo consultar la plataforma TYBA por el supuesto desconocimiento del número de radicación de su proceso, es de recordarle a la profesional del derecho que el aplicativo TYBA tiene diversas formas o métodos de consulta, dentro de las cuales se encuentra la opción de búsqueda por *«Ciudadano»*. Dicha opción permite consultar los procesos en los que haga parte el número de identificación de la persona consultada. Verificada la anterior opción de consulta, el Despacho constata el registro de todas las actuaciones adelantadas dentro del asunto de la referencia, por lo que se corrobora, aún más, que los fundamentos de la

nulidad planteadas no están llamados a prosperar, aunado a que la aludida plataforma no es un medio notificador sino un apoyo a la gestión judicial, en la cual, se resalta y reitera, aparece la cronología del proceso la que con diligencia puede consultarse por diferentes criterios de búsqueda como se anotó, el documento de identidad o el nombre completo del demandante, y no de manera exclusiva con el radicado del expediente, como lo pretende hacer ver la aludida profesional del derecho.

Cabe destacar, que tal como lo manifestó la aludida abogada, en su escrito de incidente, para poder tener acceso a la revisión del expediente digitalizado debe previamente solicitar ante el Despacho la correspondiente autorización, en atención a que los asuntos sometidos a esta Jurisdicción no pueden ser de dominio público general, sino que solo les asiste interés a las partes, es por lo que, en procura de ello y, en atención a los deberes del Juzgado como instructor del proceso debe guardar la reserva legal, sin que esa situación tampoco se configura en una causal de nulidad-indebida notificación- como alega la apoderada del señor SÁNCHEZ BOLAÑOS.

Frente a esto, el Despacho le recuerda a la apoderada judicial del señor DIMER SÁNCHEZ BOLAÑOS que el numeral 10 del artículo 28 de la Ley 1123 de 22 de enero de 2007, «*por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado*», le impone el deber de «*atender con celosa diligencia sus encargos profesionales*», por lo que no es dable o admisible que pretenda trasladar sus responsabilidades profesionales a este Despacho endilgando una indebida notificación, la cual fue desvirtuada en precedencia.

Por las anteriores consideraciones de declarará no configurada la nulidad alegada por la apoderada judicial del señor DIMER SÁNCHEZ BOLAÑOS y en por lo tanto, negará la solicitud.

En consecuencia, **SE DISPONE**:

PRIMERO: NIÉGUESE la solicitud de nulidad de la notificación de los autos de 29 de octubre y 27 de noviembre de 2020 presentada por la apoderada judicial del señor DIMER SÁNCHEZ BOLAÑOS el 15 de abril de 2021, por las razones expuestas en precedencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
1F761D2931607EC9BC67C757C78DCB426E8C8D1777A80B0F2093D879F776BDEE
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:13 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00168-00**
Demandante:	**IHS TOWERS COLOMBIA S.A. antes CELL SITES SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.**
Demandado:	**MUNICIPIO DE RICAURTE**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la procedencia de dictar la sentencia anticipada, antes de la realización de la audiencia inicial, prevista en el artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. Mediante proveído de 29 de octubre de 2020 este Despacho admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la sociedad **IHS TOWERS COLOMBIA S.A.** antes **CELL SITES SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.,** por conducto de apoderado judicial, contra el **MUNICIPIO DE RICAURTE**, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la Factura No. RIC-166 de 27 de agosto de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ricaurte

liquidó el impuesto de alumbrado público para la vigencia del mes de julio de 2019 y de la Resolución No. 016 de 18 de septiembre de 2020, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración incoado contra la señalada factura (*«006AutoAdmite»*).

2.2. El 25 de noviembre de 2020 se llevó a cabo la notificación personal de la demanda (*«008NotificacionPersonal»*).

2.3. El 10 de diciembre de 2020 el MUNICIPIO DE RICAURTE contestó la demanda sin la proposición de excepciones previas (*«009ContestacionDemanda»*).

2.4. El 12 de abril de 2021 la Secretaría de este Despacho efectuó el correspondiente control de términos, avizorándose que el término de traslado de la demanda feneció el 8 de marzo de 2021 (*«010ConstrolTerminos»*).

2.5. El 12 de abril de 2021 la Secretaría de este Juzgado fijó en lista las excepciones de mérito planteadas (*«011FijacionLista»* y *«012EnvioCorreoTraslado»*).

2.6. El 14 de abril de 2021 la parte demandada allegó escrito pronunciándose frente a las excepciones de mérito propuestas (*«013PronunciamientoExcepciones»*).

2.7. El 26 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«014ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Sea lo primero señalar que el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 adicionó a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual instituyó y reguló la figura de sentencia anticipada y su procedencia, en los siguientes términos:

> «**Artículo 182A** (adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021)
> ***SENTENCIA ANTICIPADA.*** Se podrá dictar sentencia anticipada:
>
> **1. Antes de la audiencia inicial:**

a) Cuando se trate de asuntos de puro derecho;

b) Cuando no haya que practicar pruebas;

c) Cuando solo se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y la contestación y, sobre ellas no se hubiese formulado tacha o desconocimiento;

d) Cuando las pruebas solicitadas por las partes sean impertinentes, inconducentes o inútiles.

El juez o magistrado ponente, mediante auto, se pronunciará sobre las pruebas cuando a ello haya lugar, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio u objeto de controversia.

Cumplido lo anterior, se correrá traslado para alegar en la forma prevista en el inciso final del artículo 181 de este código y la sentencia se expedirá por escrito.

No obstante estar cumplidos los presupuestos para proferir sentencia anticipada con base en este numeral, si el juez o magistrado ponente considera necesario realizar la audiencia inicial podrá hacerlo, para lo cual se aplicará lo dispuesto en los artículos 179 y 180 de este código.

2. En cualquier estado del proceso, cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Si la solicitud se presenta en el transcurso de una audiencia, se dará traslado para alegar dentro de ella. Si se hace por escrito, las partes podrán allegar con la petición sus alegatos de conclusión, de lo cual se dará traslado por diez (10) días comunes al Ministerio Público y demás intervinientes. El juzgador rechazará la solicitud cuando advierta fraude o colusión.

Si en el proceso intervienen litisconsortes necesarios, la petición deberá realizarse conjuntamente con estos. Con la aceptación de esta petición por parte del juez, se entenderán desistidos los recursos que hubieren formulado los peticionarios contra decisiones interlocutorias que estén pendientes de tramitar o resolver.

3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva.

4. En caso de allanamiento o transacción de conformidad con el artículo 176 de este código.

Parágrafo. En la providencia que corra traslado para alegar, se indicará la razón por la cual dictará sentencia anticipada. Si se trata de la causal del numeral 3 de este artículo, precisará sobre cuál o cuáles de las excepciones se pronunciará.

> Surtido el traslado mencionado se proferirá sentencia oral o escrita, según se considere.
>
> No obstante, escuchados los alegatos, se podrá reconsiderar la decisión de proferir sentencia anticipada. En este caso continuará el trámite del proceso» (Destaca el Despacho).

Así las cosas, se puede proferir sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando **i.** se trate de asuntos de puro derecho; **ii.** cuando no haya que practicar pruebas; **iii.** cuando se solicite tener como pruebas las documentales aportadas con la demanda y su contestación y, sobre ellas no se hubiere formulado tacha o desconocimiento y; **iv.** cuando las pruebas pedidas sean inconducentes, impertinentes e inútiles. Asimismo, es deber del juez pronunciarse sobre las pruebas, cuando a ello hubiere lugar, dando aplicación al artículo 173 del Código General del Proceso y fijará el litigio.

Claro lo anterior y, descendiendo al sub examine, una vez revisado el expediente se advierte que el presente medio de control se suscita en torno a la nulidad del acto administrativo contenido en la Factura No. RIC-166 de 27 de agosto de 2019, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del Municipio de Ricaurte liquidó el impuesto de alumbrado público para la vigencia del mes de julio de 2019 y de la Resolución No. 016 de 18 de septiembre de 2020, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración incoado contra la aludida factura, es decir, se trata de un asunto de puro derecho; no hay excepciones con el carácter de previas por resolver, habida cuenta que no fueron propuestas; tampoco hay pruebas por practicar y, únicamente, las partes solicitaron tener como pruebas las documentales allegadas con la demanda y con su contestación, sobre las cuales no se formuló tacha o desconocimiento; así tampoco el Despacho encuentra la necesidad de decretar pruebas de oficio.

Por los anteriores razonamientos, este Juzgado considera que es procedente dictar la sentencia anticipada en el presente medio de control en los términos del numeral 1° del artículo en comento.

Bajo ese contexto, se procederá a realizar la fijación del litigio y a pronunciarse sobre las pruebas, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del aludido artículo 182A.

FIJACIÓN DEL LITIGIO.

De la lectura de la demanda y de su contestación se tiene que las partes coinciden en la existencia de los **actos demandados** en la presente acción, estos son:

- La factura No. RIC-166 de 27 de agosto de 2019, por medio de la cual la SECRETARÍA DE HACIENDA del MUNICIPIO DE RICAURTE liquidó el impuesto de alumbrado público para la vigencia del mes de julio de 2019 a la sociedad **CELL SITES SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.,** por valor de $4.140.580 (Folio 70 «*002DemandaPoderAnexos*»).

- La Resolución No. 016 de 18 de septiembre de 2020, «*Por medio del cual se resuelve un Recurso de Reconsideración, interpuesto por CELL SITES SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S, en contra de la factura N° RIC.166 de 2019, mediante la cual se liquida el impuesto de Alumbrado Público*» (Folios 75 a 89 «*002DemandaPoderAnexos*»).

En consecuencia, y a **título de restablecimiento del derecho** la parte demandante solicita (Folio 6 «*002DemandaPoderAnexos*»):

- Que se declare que la sociedad IHS TOWERS COLOMBIA S.A. antes CELL SITES SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S, no adeuda suma alguna por concepto de impuesto de alumbrado público por el mes de julio de 2019, y que se declare la improcedencia de cualquier suma a título de sanción por inexactitud.

En virtud del líbelo introductorio y de su contestación, el Despacho señala los **hechos relevantes** para el presente caso:

1. El 27 de agosto de 2019 el MUNICIPIO DE RICAURTE expidió la factura No. RIC-166-2019, por valor de $4.140.580, por medio de la cual liquidó el impuesto de alumbrado público a la sociedad CELL SITES SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S para la vigencia fiscal de julio de 2019 (Folio 70 «*002DemandaPoderAnexos*»).

2. El 18 de septiembre de 2019 la sociedad CELL SITES SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. interpuso recurso de reconsideración contra la factura No. RIC-166-2019 de 27 de agosto de 2019 (Folios 51 a 68 «*002DemandaPoderAnexos*»).

3. El 18 de septiembre de 2020 el MUNICIPIO DE RICAURTE, mediante la Resolución No. 016 «*Por medio de la cual se resuelve un Recurso de Reconsideración, interpuesto por CELL SITES SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S, en contra de la factura N° RIC.113 de 2019, mediante la cual se liquida el impuesto de Alumbrado Público*», negó el recurso interpuesto y en su lugar confirmó la liquidación del impuesto de alumbrado público (Folios 75 a 89 «*002DemandaPoderAnexos*»).

A la vez, encuentra que existe **discrepancia** en relación con: i) la configuración del silencio administrativo positivo ante la presunta falta de respuesta oportuna al recurso de reconsideración presentado el 18 de septiembre de 2019 y su consecuente notificación, ii) la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público de la sociedad CELL SITES SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S., para el mes de julio de 2019, iii) la vulneración al debido proceso por haberse omitido el emplazamiento previo a la determinación del impuesto y, iv) la vulneración a los principios de legalidad, reserva de la ley, equidad, igualdad y capacidad contributiva.

De conformidad con lo anterior, la litis se centra en establecer la legalidad de los actos administrativos demandados resolviendo los siguientes **problemas jurídicos**: **1)** ¿Se configura el silencio administrativo positivo ante la presunta falta de respuesta oportuna al recurso de reconsideración interpuesto por la sociedad actora el 18 de septiembre de 2019 en contra de la factura No. RIC-166-2019 de 27 de agosto de 2019, al tenor de lo consagrado en el artículo 734 del Estatuto Tributario Nacional?, **2)** ¿Es la sociedad CELL SITIES SOLUTIONS

COLOMBIA S.A.S. sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el MUNICIPIO DE RICAURTE para el mes de julio de 2019?, **3)** ¿Fueron expedidos con violación al principio de legalidad y reserva de la Ley del impuesto de alumbrado público los actos administrativos demandados?, **4)** ¿Adolece de motivación insuficiente la liquidación oficial demandada?**, 5)** ¿Fueron expedidos con violación al debido proceso los actos administrativos demandados por haberse omitido el emplazamiento previo a la determinación del impuesto de alumbrado público?, **6)** ¿Fueron expedidos con violación a los principios de igualdad, equidad, legalidad y capacidad contributiva los actos administrativos demandados?

En ese orden, el litigio queda fijado en los términos expuestos.

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con el inciso 2º del numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho proceder a pronunciarse sobre las pruebas oportunamente solicitadas por las partes que reúnen los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, así:

PARTE DEMANDANTE

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 30 a 113 del «*002DemandaPoderAnexos*» del expediente digitalizado.

PARTE DEMANDADA

DOCUMENTALES: Con el valor probatorio que la ley les confiere, se tendrán como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visibles en los folios 13 a 281 del archivo «*009ContestacionDemanda*» del expediente digitalizado.

De conformidad con lo anterior, se declarará cerrado el período probatorio dentro de la presente actuación.

SANEAMIENTO DEL PROCESO

Finalmente, acatando lo previsto en el artículo 207[1] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Despacho advierte que, una vez revisada la actuación surtida hasta esta etapa procesal[2], no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que puedan llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

En consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: DÉSE APLICACIÓN al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo relacionado con la procedencia de proferir sentencia anticipada en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: FÍJASE el litigio en los términos expuestos en parte motiva de esta providencia.

---

[1] «**Artículo 207. CONTROL DE LEGALIDAD.** Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».

[2] -13 de octubre de 2020: Presentación de la demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiendo su conocimiento al este Despacho («004ActaReparto»).
-29 de octubre de 2020: Se admitió la demanda y se ordenó notificar a la demandada. («006AutoAdmite»).
-25 de noviembre de 2020: Notificación personal del libelo introductorio a la demandada («008NotificacionPersonal»).
-30 de noviembre de 2020: Parte demandada contesta la demanda sin la proposición de excepciones previas («009ContestacionDemanda»).
-12 de abril de 2021: Fijación en lista («011FijacionLista» y «012EnvioCorreoTraslado»).
-14 de abril de 2021: Pronunciamiento de las excepciones de la parte actora («013PronunciamientoExcepciones»).

TERCERO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la demanda visibles en los folios 30 a 113 *«002DemandaPoderAnexos»* del expediente digitalizado, los cuáles serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

CUARTO: Con el valor probatorio que la ley les confiere, **TÉNGASE** como pruebas los documentos allegados con la contestación de la demanda visibles en los folios 13 a 281 *«009ContestacionDemanda»* del expediente digitalizado, los cuáles serán valorados de manera puntual al momento de proferir la correspondiente sentencia.

QUINTO: DECLÁRASE cerrado el período probatorio en la presente actuación, por lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

SEXTO: DECLÁRASE saneado el proceso hasta esta etapa procesal, como quiera que no se encuentran irregularidades en el procedimiento o causales de nulidad que pueden llegar a invalidar lo actuado y que amerite sanearlo.

SÉPTIMO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderado judicial del MUNICIPIO DE RICAURTE al doctor LUIS ÁNGEL MURILLO GUZMÁN, en los términos y para el efecto del poder a él conferido visible en el folio 13 *«009ContestacionDemanda»* del expediente digitalizado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
91c577fc9e3cf6e755c2b94873a64c8b4d7f4f64b4c744f0f3af424a3e9e3fca
Documento generado en 03/06/2021 12:03:14 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-3333-001-2020-00169-00**
Demandante:	**LUZ MARINA MANRIQUE SÁNCHEZ**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

De conformidad con lo dispuesto en la providencia de 15 de abril de 2021, en la que se dio aplicación al numeral 1º del artículo 182A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo («*011AutoFijaLitigio*») y, vencido el término de ejecutoria sin que las partes hicieran manifestación al respecto, de conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 181 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en concordancia con el inciso 2º del artículo 182 *ibidem*), se **CORRE TRASLADO** a las partes y al Ministerio Público por el término común de diez (10) días, para que presenten sus **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO

JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
125E02710EA8A6392E07E58EAED3877E722A517B4F41D489BF7388CAE23B8E53
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:50 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2020-00197-00**
Demandante:	**NANCY JANNET RODRÍGUEZ RIAÑO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por la señora NANCY JANNET RODRÍGUEZ RIAÑO, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG - por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. La señora NANCY JANNET RODRÍGUEZ RIAÑO, por conducto de apoderado judicial, el 13 de noviembre de 2020 radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«003CorreoReparto»* Y *«004ActaReparto»*).

2.2. Por auto de 20 de noviembre de 2020 se inadmitió la demanda para que: ***i)*** allegara la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios la señora NANCY JANNET RODRÍGUEZ RIAÑO con especificación del municipio, en este sentido, también se ofició a la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG- y, ***ii)*** para que allegara la constancia del envío de la demanda y de los anexos a la Demandada conforme al artículo 6° del Decreto 806 de 2020 y en el mismo sentido la subsanación (*«006AutoInadmite»*).

2.3. El 4 de diciembre de 2020 el apoderado judicial de la demandante allegó la documental con la que pretende subsanar la demanda, adjuntando la constancia del envío de la demanda y los anexos a la demandada, así como el certificado de historia del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (*«008EscritoDemandante»*).

2.4. El 19 de enero de 2021 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO manifestó que la solicitud de la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios la señora NANCY JANNET RODRÍGUEZ RIAÑO fue trasladada a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT, mediante comunicación de 14 de enero de 2021 (*«010CorreoFomag»*).

2.5. Por auto de 11 de marzo de 2021 se requirió a la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT para que certificara si la señora NANCY JANNET RODRÍGUEZ RIAÑO sigue vinculada como docente del Municipio (*«012AutoPrevioAdmitir»*).

2.6. El 12 de abril de 2021 la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GIRARDOT, allegó certificación en la que se constató que la señora NANCY JANNET RODRÍGUEZ RIAÑO está vinculada a la planta global docente del municipio

de Girardot en la Institución Educativa Escuela Normal Superior (*«016EscritoMinEducacion»*).

2.7. El 24 de mayo de 2021 el expediente ingresó al Despacho. (*«017ConstanciDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con los artículos 169 y 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho determinará si la parte actora cumplió la carga de subsanar la demanda en debida forma. En ese orden, se tiene que acreditó el envío simultáneo de la demanda y los anexos a la demandada y allegó el certificado de historia del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, último que coincide con la certificación allegada por la Secretaría de Educación del Municipio de Fusagasugá, por lo que la demanda se tiene por subsanada en los términos indicados.

En ese orden, procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda que en ejercicio del *medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho* presentó la señora **NANCY JANNET RODRÍGUEZ RIAÑO,** por conducto de apoderado judicial, contra la **NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG-,** con el propósito de que se declare la existencia y nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo frente a la peticionó radicada el 21 de junio de 2019, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la prima de junio establecida en el artículo 15,numeral 2, literal B, de la Ley 91 de 1989, en razón de no haber alcanzado el derecho al reconocimiento de la pensión gracia debido a que fue vinculada por primera vez a la docencia oficial el 24 de marzo de 1992.

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de los requisitos exigidos para la admisión.

I. APTITUD FORMAL DE LA DEMANDA

Una vez revisado el contenido de la demanda el Juzgado encuentra que satisface las exigencias previstas en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, habida consideración de que:

1.1. Están identificadas las partes y el representante de la parte actora (folio 2 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.2. Las pretensiones son claras y precisas (folios 2 y 3 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.3. Los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones fueron determinados y numerados (folios 3 y 4 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.4. Los fundamentos de derecho se encuentran debidamente enunciados y argumentados (folios 4 a 11 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.5. Allegó las pruebas documentales que se encuentran en su poder y que pretende hacer valer en el presente proceso (folios 19 a 24 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.6. Realizó una estimación razonada de la cuantía, que resulta necesaria para efectos de determinar la competencia en el presente caso, la cual determinó en **SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($7.761.663).** En ese orden, como quiera que la cuantía no excede los 50 SMLMV, esto es, la suma de CUARENTA Y

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($45.426.300), al tenor del numeral 2° del artículo 155 ibídem, este Despacho tiene la competencia en primera instancia para conocer del presente medio de control (folios 12 y 13 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.7. Indicó el lugar y la dirección de las partes para efectos de las notificaciones (folios 14 y 15 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*»).

1.8. Se advierte cumplido lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021), esto es, acreditó el envío simultaneo de la demanda y sus anexos a la demandada (folio 6 del archivo denominado «*008EscritoDemandante*»).

II. COMPETENCIA

2.1. De conformidad con el numeral 2º del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (factor funcional) este Despacho es competente para conocer del presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que la cuantía no excede los 50 SMMLV.

2.2. En virtud del numeral 3º del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, también se encuentra demostrada la competencia de esta Agencia Judicial debido a que el demandante está vinculada a la planta global docente del municipio de Girardot en la Institución Educativa Escuela Normal Superior (folio 3 del archivo «*008EscritoDemandante*» y folios 4 a 7 del archivo «*016EscritoMinEducacion*»).

III. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

El numeral 1º del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá presupuesto procesal cuando en la demanda se formulen pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

Empero, tratándose de asuntos laborales y pensionales este requisito es facultativo, deviene entonces que su omisión no es impedimento para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En el presente evento el demandante solicita se declare la existencia y nulidad del acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo frente a la peticionó radicada el 21 de junio de 2019, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la prima de junio establecida en el artículo 15,numeral 2, literal B, de la Ley 91 de 1989, en razón de no haber alcanzado el derecho al reconocimiento de la pensión gracia debido a que fue vinculada por primera vez a la docencia oficial el 24 de marzo de 1992.

Por lo que no es exigible el agotamiento del requisito de procedibilidad, no sólo porque se trata de asuntos pensionales, sino porque además, se demanda la nulidad de un acto ficto o presunto producto del silencio administrativo negativo.

IV. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN

En relación con la oportunidad para presentar la demanda, revisando el contenido de los literales d) y c) del numeral 1° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando la demanda se dirija contra actos que nieguen total o parcialmente prestaciones

periódicas y/o contra actos producto del silencio administrativo puede ser presentada en cualquier tiempo.

V. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA.

5.1. Legitimación por Activa.

De conformidad con el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades públicas, los particulares y demás sujetos de derecho que tengan capacidad para comparecer al proceso pueden obrar como demandantes por medio de sus representantes debidamente acreditados, para reclamar ante los jueces el derecho del que son titulares.

El artículo 138 *ibídem*, faculta a toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica a solicitar la nulidad de un acto particular y que se le restablezca el derecho.

En el presente caso, quien se presenta en calidad de demandante es la señora NANCY JANNET RODRÍGUEZ RIAÑO a quien la demandada le negó el reconocimiento y pago de la prima de junio establecida en el artículo 15, numeral 2, literal B, de la Ley 91 de 1989, en razón de no haber alcanzado el derecho al reconocimiento de la pensión gracia debido a que fue vinculada por primera vez a la docencia oficial el 24 de marzo de 1992.

Por lo tanto, resulta claro que la parte actora se encuentra legitimada en la causa para comparecer al presente proceso en calidad de demandante, siendo representada, por el doctor YOBANY LÓPEZ QUINTERO, a quien se le reconoció personería adjetiva para actuar en auto de 20 de noviembre de 2020.

5.2. Legitimación por Pasiva.

Atendiendo al contenido del artículo 159 *ibídem*, en el presente caso deberá concurrir en condición de demandado la **NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG,** autoridad administrativa que si bien no profirió el acto administrativo demandado, es la encargada de reconocer y pagar los derechos prestacionales del personal del magisterio, por lo que no se hace necesaria la vinculación de la Fiduprevisora habida consideración que sólo es la encargada de la administración de los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, siendo ésta última quien tiene la legitimación en la causa por pasiva en el *sub iudice.*

VI. ANEXOS DE LA DEMANDA

La parte demandante allegó la prueba documental que, adujo, se encontraba en su poder y que pretende hacer valer en el presente proceso para probar su derecho. Téngase en cuenta que el inciso 3º del artículo 6º del Decreto 806 de 2020 suprimió el requisito de que la parte demandante allegara las copias para efectos de los traslados para la notificación de la demanda y para el Ministerio Público como quiera que las demandas se presentan por medios digitales.

En consecuencia y, de conformidad con el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SE DISPONE:**

PRIMERO: ADMÍTESE la demanda que en ejercicio del *medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho* presentó la señora **NANCY JANNET RODRÍGUEZ RIAÑO** por conducto de apoderada judicial, contra la **NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-FOMAG,** con el propósito de que se declare la existencia y nulidad del acto ficto o presunto producto del

silencio administrativo negativo frente a la peticionó radicada el 21 de junio de 2019, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la prima de junio establecida en el artículo 15, numeral 2, literal B, de la Ley 91 de 1989, en razón de no haber alcanzado el derecho al reconocimiento de la pensión gracia debido a que fue vinculada por primera vez a la docencia oficial el 24 de marzo de 1992.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE en la forma prevista en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021 al **MINISTRO DE EDUCACIÓN,** o a quien haga sus veces o este haya delegado la facultad de recibir notificación, al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho y a la **AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**.

TERCERO: ADVIÉRTESE al **MINISTRO DE EDUCACIÓN** que durante el término para dar respuesta a la presente demanda, **DEBERÁ** allegar el expediente administrativo que contenga los **antecedentes de la actuación objeto del proceso** y que tenga en su poder. Lo anterior de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO CÓRRASE TRASLADO de la demanda por el término de treinta (30) días de conformidad con el artículo 172 ibidem al **MINISTRO DE EDUCACIÓN,** al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho y a la **AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, el cual comenzará a correr según lo previsto en los artículos 199 y 200 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: ORDÉNASE a la Secretaría del Despacho dar estricto cumplimiento a los previsto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: REMÍTASE a través del correo electrónico institucional de este Juzgado la copia del presente auto admisorio, de la demanda y de sus anexos a la parte demandada y al Ministerio Público. Se advierte que una de las copias allegadas, se mantendrá en la Secretaría de este Despacho, a disposición de los notificados.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
0cef120a90d2ad37ff4e81edb24569dafc40c67524d3bb7fe136e6fb9a469678
Documento generado en 03/06/2021 12:03:56 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación:	**25307-33-33-001-2021-00006-00**
Demandante:	**ERNESTINA ALMECIGA ROA**
Demandado:	**MUNICIPIO DE TOCAIMA**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a decidir sobre la procedencia de librar mandamiento de pago en virtud de la demanda que, invocando la ACCIÓN EJECUTIVA, se adujo incoada por la señora ERNESTINA ALMECIGA ROA contra el MUNICIPIO DE TOCAIMA.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 19 de enero de 2021, fue radicada ante el Despacho que se encontraba fungiendo como oficina de reparto, la solicitud para librar mandamiento ejecutivo a favor de la señora ERNESTINA ALMECIGA ROA contra el MUNICIPIO DE TOCAIMA siendo asignado para su conocimiento a este Juzgado[1].

2.2. En la solicitud se elevaron las siguientes pretensiones[2]:

---

[1] «003CorreoReparto» Co1Principal
[2] Folios 2 y 3 «002DemandaPoderAnexos» Co1Principal

«Solicito, Señor Juez, librar mandamiento de pago en contra del demandado y a favor de mi representada ***ERNESTINA ALMECIGA ROA****, por las siguientes sumas:*

1. *Por la suma de* ***SETENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y TRES PESOS ($72.283.033.oo) M/CTE****, correspondiente al valor de los salarios por pagar indexados, desde el 24 de enero de 2007, hasta el 28 de octubre de 2013.*

2. *Por suma de* ***DIECIOCHO MILLONES OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS ($18.008.157.oo) M/CTE****, correspondiente al valor de las prestaciones sociales indexadas, desde el 24 de enero de 2007, hasta el 28 de octubre de 2013.*

3. *Por el valor de los intereses moratorios, a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, hasta el 30 de noviembre de 2020 y hasta que se satisfagan las pretensiones, por la suma de* ***TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS ($38.399.680.oo) M/CTE.***

4. *Solicito se impongan las costas y agencias en derecho al demandado».*

2.3. El 18 de febrero de 2021 se profirió auto requiriendo a la abogada que presentó la demanda para que allegara el poder con el lleno de los requisitos legales[3].

2.4. El 24 de mayo de 2021 el expediente ingresó al Despacho informando que no se aportó lo solicitado[4].

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Revisada la demanda y sus anexos, se impone proceder a su inadmisión como quiera que:

3.1. No se allegó constancia de radicación de solicitud de pago de la sentencia que se pretende ejecutar, conforme impone el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 que señala:

[3] «oo6AutoRequiere»
[4] «oo8ConstanciaDespacho»

> **«Artículo 192.** ***CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS.*** Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.
>
> Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.
>
> Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.
>
> Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.
>
> En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, este no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.
>
> El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.
>
> Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios correspondientes». (Subraya el Despacho)

Se observa entonces que la solicitud de pago previo a acudir a la Jurisdicción para ejecutar la sentencia, se constituye un requisito para que la demandada proceda con el pago y además se torna en presupuesto irremplazable para la causación de intereses, por lo que deberá ser aportada.

3.2. De otra parte, se reitera que el poder allegado con el escrito de ejecución no cumple el requisito establecido en el artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, puesto que no fue conferido mediante mensaje de datos, tampoco

indica la dirección de correo electrónico del apoderado que, valga la pena mencionar, debe coincidir con la reportada en el Registro Nacional de Abogados, conforme lo impone el artículo mencionado, así como tampoco se expidió en los términos del artículo 74 del Código General del Proceso, hecho frente al cual, si bien de los anexos del escrito allegado se colige que la señora ERNESTINA ALMECIGA ROA no firma, como se señala en su cédula de ciudadanía, tal acto es superable dando aplicación al Decreto 806 de 2020, o, en su defecto, a los procedimientos que en estos casos están facultados para adoptar los Notarios Públicos, por lo que se requerirá en tal sentido.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE a quien aduce ser la apoderada judicial de la señora ERNESTINA ALMECIGA ROA para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, **SO PENA DE RECHAZO,** subsane la demanda en el sentido de que:

1.1. Allegue constancia de radicación de solicitud de pago ante el MUNICIPIO DE TOCAIMA de la sentencia que se pretende ejecutar, conforme impone el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

1.2. Allegue poder conferido con las previsiones establecidas en el artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020, o, en su defecto, del artículo 74 del Código General del Proceso, observando las salvedades señaladas en la parte considerativa para quienes no firman.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f2e4fa2fbb3e20ff1bedc950daf06fc07c69ebc1b176aeceb5e6cf0b7c24cb6e
Documento generado en 03/06/2021 12:04:20 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00020-00**
DEMANDANTE:	**EDDER ALFONSO CABEZAS FIGUEROA**
DEMANDADO:	**EJÉRCITO NACIONAL**
ACCIÓN:	**TUTELA-INCIDENTE DE DESACATO**

JUEZ: **Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN "F", en la providencia de cuatro (4) de mayo de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual **MODIFICÓ**[1] la decisión proferida por este Despacho el siete (7) de abril de dos mil veintiuno (2021), en la que se declararon parcialmente en desacato al Mayor General MAURICIO MORENO RODRÍGUEZ en calidad de COMANDANTE DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL y a la Teniente Coronel AMPARO LÓPEZ PICO en calidad de JEFE DE MEDICINA LABORAL DEL EJÉRCITO NACIONAL respecto de la orden impartida en la sentencia de tutela proferida por este Despacho el veintidós (22) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

[1] Únicamente en el entendido que la condena sea de un salario mínimo legal mensual vigente para cada uno y no de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En firme esta providencia, por secretaría expídanse los oficios correspondientes para hacer efectiva la sanción impuesta al Mayor General MAURICIO MORENO RODRÍGUEZ en calidad de COMANDANTE DE PERSONAL DEL EJÉRCITO NACIONAL y a la Teniente Coronel AMPARO LÓPEZ PICO en calidad de JEFE DE MEDICINA LABORAL DEL EJÉRCITO NACIONAL. Y **ARCHÍVESE** el expediente.

Finalmente, en cuanto a las solicitudes allegadas el 20[2] y 28[3] de mayo de 2021 tendiente a la inaplicación de la sanción impuesta por este Despacho el 7 de abril de 2021 y modificada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN "F", en la providencia de cuatro (4) de mayo de dos mil veintiuno (2021), el Despacho se abstendrá de acceder a la misma, toda vez que en primer lugar, la imposición de la sanción por desacato se efectuó previo el trámite correspondiente, tal como se desprende de lo obrante en el expediente, en aras de salvaguardar el debido proceso y, el derecho a la defensa y contradicción.

Aunado a lo anterior, para el Despacho no son de recibo los argumentos del Coronel ANSTRONGH POLANIA DUCUARA en calidad de Oficial de Gestión Jurídica-DISAN del Ejército, en primer lugar, porque si bien afirma que «*La Dirección de Sanidad Ejército procedió a verificar y el accionante se encuentra con los servicios activos y le fue programada cita para el 02 de junio de 2021 a las 3:15 pm en el HOSPITAL MILITAR CENTRAL, y tiene orden para exámenes*», lo cierto es que se hizo sólo con posterioridad a la providencia que impuso la sanción por desacato y a la que resolvió el grado jurisdiccional de consulta, decisiones que no debe olvidarse que gozan de firmeza, y, en segundo lugar, porque con los soportes que remite no se evidencia *i)* la comunicación enviada al accionante en tal sentido, *ii)* no se acredita lo manifestado pues contrario a ello conforme al pantallazo aportado se observa como fecha fin de afiliación «*5/04/2021 12:00:00 a.m.*», aunado a que no se encuentra acreditado a qué «*orden para exámenes*» se hace referencia, y *iii)* porque la fecha en que supuestamente

[2] «*027SolicitudEjercito*»
[3] «*029EscritoAccionada*»

fue programada dicha cita médica no ha fenecido. Por lo que se denegará tal petición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
4AD94282734C6049131738AA1A9202E6CB6C1DCDAF6A33D13D6B87DF6746E870
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 11:53:02 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2021-00043-00**
Demandante:	**JOSÉ FREDY QUIJANO SANTOS**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor **JOSÉ FREDY QUIJANO SANTOS**, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El señor JOSÉ FREDY QUIJANO SANTOS, por conducto de apoderado judicial, el 15 de febrero hogaño radicó demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«003CorreoReparto»*), con el propósito de obtener la nulidad del oficio No.20183170187711 MDN-CGFM-

COEJC-SEJECJEMGF-COPER-DIPER-1-10 de 2 de febrero de 2018 mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir, por el no pago, a título de salario básico mensual, conforme a lo dispuesto en la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000.

2.2. Mediante auto de 4 de marzo de 2021, notificado por estado No. 10 al día siguiente, con el fin de determinar la competencia en razón del territorio se requirió al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que allegaran la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor JOSÉ FREDY QUIJANO SANTOS, especificando el municipio. Se destaca que el estado fue notificado a la siguiente dirección electrónica suministrada en el libelo introductorio para notificaciones judiciales notificaciones@wyplawyers.com (*«006AutoRequiere»* y *«007NotificacionEstado5Marzo»*).

2.3. En cumplimiento de lo anterior, por secretaría se libraron los oficios No. 0360 de 15 de marzo de 2021 y No. 0713 de 20 de abril de 2021 a las siguientes direcciones electrónicas diper@buzonejercito.mil.co, coper@buzonejercito.mil.co, notificaciones.girardot@mindefensa.gov.co, dipso@ejercito.mil.co y traslados@buzonejercito.mil.co, sin que se hubiese aportado lo solicitado (*«008OficioRequiere»* y *«009OficioRequiere»*).

2.4. El 24 de mayo de 2021 el expediente ingresó al Despacho. (*«010ConstanciDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, se encuentra acreditado que tanto el apoderado judicial de la parte demandante como la Entidad demandada tuvieron pleno conocimiento del requerimiento efectuado por el Despacho, habida cuenta que la primera fue notificada a la dirección electrónica suministrada parea el efecto y la segunda

a los correos electrónicos encontrados en internet, los cuales corresponden a notificaciones@wyplawyers.com, diper@buzonejercito.mil.co, coper@buzonejercito.mil.co, notificaciones.girardot@mindefensa.gov.co, dipso@ejercito.mil.co y traslados@buzonejercito.mil.co, sin embargo, guardaron silencio.

Bajo ese contexto, se requerirá nuevamente al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia alleguen la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor JOSÉ FREDY QUIJANO SANTOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.205.247, **especificando el municipio. Recordándoles sobre la obligación acatar las órdenes judiciales so pena de imponer las sanciones de que trata el artículo 44 del Código General del Proceso.**

Se itera que la documental requerida se torna necesaria para determinar la competencia de este Despacho por razón del territorio, conforme lo señala el numeral 3° del artículo 156, de la Ley 1437 de 2011 y seguir con el curso del mismo.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído alleguen la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor JOSÉ FREDY QUIJANO SANTOS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.205.247, **especificando el municipio. So pena de**

imponer las sanciones de que trata el artículo 44[1] del Código General del Proceso, por desacato a orden judicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
7daef1a067a1e7f431dc386d3e5975a25a70dbd55eb88cab758b0a2fdd87d650

---

[1] «**ARTÍCULO 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.

2. Sancionar con arresto inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.

3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

4. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados para rendir declaración o atender cualquier otra citación que les haga.

5. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso.

6. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o terceros.
7. Los demás que se consagren en la ley.

PARÁGRAFO. Para la imposición de las sanciones previstas en los cinco primeros numerales, el juez seguirá el procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El juez aplicará la respectiva sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.

Cuando el infractor no se encuentre presente, la sanción se impondrá por medio de incidente que se tramitará en forma independiente de la actuación principal del proceso.

Contra las sanciones correccionales solo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano».

Documento generado en 03/06/2021 12:03:57 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2021-00047-00**
Demandante:	**DEIBY YOVAN APONTE RODRÍGUEZ**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor **DEIBY YOVAN APONTE RODRÍGUEZ**, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El señor DEIBY YOVAN APONTE RODRÍGUEZ, por conducto de apoderado judicial, el 16 de febrero hogaño radicó demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«003CorreoReparto»*), con el propósito de obtener la nulidad del oficio No.20183170188541 MDN-CGFM-

COEJC-SEJECJEMGF-COPER-DIPER-1-10 de 2 de febrero de 2018 mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 20% dejada de percibir, por el no pago, a título de salario básico mensual, conforme a lo dispuesto en la Ley 131 de 1985 y el Decreto 1794 de 2000.

2.2. Mediante auto de 4 de marzo de 2021, notificado por estado No. 10 al día siguiente, con el fin de determinar la competencia en razón del territorio se requirió al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que allegaran la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor DEIBY YOVAN APONTE RODRÍGUEZ, especificando el municipio. Se destaca que el estado fue notificado a la siguiente dirección electrónica suministrada en el líbelo introductorio para notificaciones judiciales notificaciones@wyplawyers.com (*«006AutoRequiere»* y *«007NotificacionEstado5Marzo»*).

2.3. En cumplimiento de lo anterior, por secretaría se libró el oficio No. 0361 de 15 de marzo de 2021 y No. 0713 de 20 de abril de 2021 a las siguientes direcciones electrónicas diper@buzonejercito.mil.co, coper@buzonejercito.mil.co, y dipso@ejercito.mil.co, (*«008OficioRequiere»*).

2.4. En virtud del anterior requerimiento, el 20 de mayo de 2021 el Teniente Coronel JAISON LEONARDO GÓMEZ PÉREZ en calidad de jefe de la Sección de Nómina del Ejército Nacional, certificó que la última unidad de prestación de servicios del señor DEIBY YOVAN APONTE RODRÍGUEZ corresponde al *«BATALLÓN DE INFANTERÍA # 39 SUMAPAZ»* (*«009EscritoEjercito»*).

2.5. El 24 de mayo de 2021 el expediente ingresó al Despacho. (*«010ConstanciDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, debe precisarse que si bien la certificación expedida por el Teniente Coronel JAISON LEONARDO GÓMEZ PÉREZ en calidad de jefe de la Sección de Nómina del Ejército Nacional, no especificó el municipio del último lugar de prestación de servicios del demandante, sí señaló que la última unidad del señor DEIBY YOVAN APONTE RODRÍGUEZ corresponde al «*BATALLÓN DE INFANTERÍA # 39 SUMAPAZ*», por lo que en aras de impartir celeridad dentro del presente trámite el Despacho realizó la consulta en el siguiente enlace web https://www.dateas.com/es/explore/unidades-sanidad-militar-colombia/batalln-de-infantera-no39-sumapaz-8 donde se constató que dicha unidad se ubica en el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, siendo competencia de esta Jurisdicción.

Puntualizado lo anterior, y al realizar un estudio sobre el cumplimiento de los requisitos de admisión de la demanda, encuentra el Despacho que dentro del asunto de la referencia, no se advierte el poder en ejercicio del derecho de postulación, por lo que es del caso requerir para que se allegue de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso o en su lugar conforme lo señalado en el artículo 5 del Decreto 806 de 2020.

Así tampoco cumple con el requisito del numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues no aportó la constancia de publicación, comunicación, notificación o, ejecución del acto acusado, esto es del oficio No. 20183170188541 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 de 2 de febrero de 2018 por medio del cual la demandada negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial conforme a lo señalado en la Ley 131 de 1985, consistente en el 20% salarial.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE a la parte actora para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, subsane la demanda SO PENA DE RECHAZO, en el sentido que allegue:

- El poder en ejercicio de su derecho de postulación, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 o, en su defecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Código General del Proceso.

- La constancia de publicación, comunicación, notificación o, ejecución del acto administrativo acusado, esto es del oficio No. 20183170188541 MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 de 2 de febrero de 2018.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
d3c4aa99bc00084c244a7ee2480aa8a0d0eae27cce6936da763691f0a1ec7b56
Documento generado en 03/06/2021 12:03:58 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2021-00049-00**
Demandante:	**JHON JAIRO ORTÍZ CASTRO**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor **JHON JAIRO ORTÍZ CASTRO**, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El señor JHON JAIRO ORTÍZ CASTRO, por conducto de apoderado judicial, el 17 de febrero hogaño radicó demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«003CorreoReparto»*), con el propósito de que se declare la existencia del el acto ficto o presunto producto

del silencio administrativo negativo respecto a la petición elevada el 29 de enero de 2018, en donde se solicitó el reconocimiento de la diferencia salarial del 20% y el reconocimiento y pago del subsidio familiar, con base en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.

2.2. Mediante auto de 4 de marzo de 2021, notificado por estado No. 10 al día siguiente, con el fin de determinar la competencia en razón del territorio se requirió al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que allegaran la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor JHON JAIRO ORTÍZ CASTRO, especificando el municipio. Se destaca que el estado fue notificado a la siguiente dirección electrónica suministrada en el libelo introductorio para notificaciones judiciales notificaciones@wyplawyers.com («*006AutoRequiere*» y «*007NotificacionEstado5Marzo*»).

2.3. En cumplimiento de lo anterior, por secretaría se libraron los oficios No. 0362 de 15 de marzo de 2021 y No. 0710 de 20 de abril de 2021 a las siguientes direcciones electrónicas diper@buzonejercito.mil.co, coper@buzonejercito.mil.co, dipso@ejercito.mil.co y traslados@buzonejercito.mil.co, sin que se hubiese aportado lo solicitado («*008OficioRequiere*» y «*009OficioRequiere*»).

2.4. El 24 de mayo de 2021 el expediente ingresó al Despacho. («*010ConstanciDespacho*»).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, se encuentra acreditado que tanto el apoderado judicial de la parte demandante como la Entidad demandada tuvieron pleno conocimiento del requerimiento efectuado por el Despacho, habida cuenta que la primera fue notificada a la dirección electrónica suministrada parea el efecto y la segunda

a los correos electrónicos encontrados en internet, los cuales corresponden a notificaciones@wyplawyers.com, diper@buzonejercito.mil.co, coper@buzonejercito.mil.co, notificaciones.girardot@mindefensa.gov.co, dipso@ejercito.mil.co y traslados@buzonejercito.mil.co, sin embargo, guardaron silencio.

Bajo ese contexto, se requerirá nuevamente al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia alleguen la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor JHON JAIRO ORTÍZ CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.279.216, **especificando el municipio. Recordándoles sobre la obligación acatar las órdenes judiciales so pena de imponer las sanciones de que trata el artículo 44 del Código General del Proceso.**

Se itera que la documental requerida se torna necesaria para determinar la competencia de este Despacho por razón del territorio, conforme lo señala el numeral 3° del artículo 156, de la Ley 1437 de 2011 y seguir con el curso del mismo.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído alleguen la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor JHON JAIRO ORTÍZ CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.279.216, **especificando el municipio. So pena de imponer**

las sanciones de que trata el artículo 44[1] del Código General del Proceso, por desacato a orden judicial.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
f49c748160db4faeb5f2b043b7211750514d243302f7d52fca3fdbcdd875ddd0
Documento generado en 03/06/2021 12:03:59 AM

[1] «**ARTÍCULO 44. *PODERES CORRECCIONALES DEL JUEZ*.** Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales:

1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas.
2. Sancionar con arresto inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia.
3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución.

4. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados para rendir declaración o atender cualquier otra citación que les haga.

5. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso.

6. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o terceros.
7. Los demás que se consagren en la ley.

PARÁGRAFO. Para la imposición de las sanciones previstas en los cinco primeros numerales, el juez seguirá el procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El juez aplicará la respectiva sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.

Cuando el infractor no se encuentre presente, la sanción se impondrá por medio de incidente que se tramitará en forma independiente de la actuación principal del proceso.

Contra las sanciones correccionales solo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano».

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

Radicado:	**25307-33-33-001-2021-00062-00**
Demandante:	**JHON ALEJANDRO RODRÍGUEZ RUÍZ**
Demandado:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
Medio de Control:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
Juez:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor **JHON ALEJANDRO RODRÍGUEZ RUÍZ**, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 5 de marzo de 2021 el señor JHON ALEJANDRO RODRÍGUEZ RUÍZ, por conducto de apoderado judicial, radicó demanda mediante el correo electrónico de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho («003CorreoReparto»), con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución No. 5516 de 4 de noviembre de 2020 mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

2.2. Mediante auto de 11 de marzo de 2021, notificado por estado No. 11 al día siguiente, con el fin de determinar la competencia en razón del territorio se

requirió al apoderado judicial de la parte actora y a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que allegaran la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor JHON ALEJANDRO RODRÍGUEZ RUÍZ, especificando el municipio. (*«006AutoRequiere»* y *«007NotificacionEstado12Marzo»*).

2.3. El 26 de marzo de 2021 el apoderado judicial de la parte actora allegó certificación laboral entregada por la demandada previo escrito de petición y acción de tutela en el que se indicó que el señor JHON ALEJANDRO RODRÍGUEZ RUÍZ ingresó como soldado regular en el *«B. INF. SUMAPAZ»* (*«008EscritoDemandante»*).

2.4. Por secretaría se libró el oficio No. 0560 de 8 de abril de 2021 a las siguientes direcciones electrónicas diper@buzonejercito.mil.co, coper@buzonejercito.mil.co y dipso@ejercito.mil.co, sin que se hubiese aportado lo solicitado (*«009OficioRequiere»*).

2.5. El 24 de mayo de 2021 el expediente ingresó al Despacho. (*«010ConstanciDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, se encuentra acreditado que tanto el apoderado judicial de la parte demandante allegó la certificación expedida por la parte demandada respecto a la última unidad de prestación de servicios del señor RODRÍGUEZ RUÍZ, no obstante en la misma únicamente se especificó que ingresó como soldado regular en el *«B. INF. SUMAPAZ»,* sin que de dicha certificación se advierta con claridad y exactitud la unidad a la que perteneció ni mucho menos el Municipio.

Bajo ese contexto, atendiendo que la parte actora realizó las gestiones correspondientes, pero que las mismas han sido infructuosas, se requerirá nuevamente a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO

NACIONAL para que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia allegue la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor JHON ALEJANDRO RODRÍGUEZ RUÍZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.885.831, especificando el municipio. **Recordándole sobre la obligación de acatar las órdenes judiciales so pena de imponer las sanciones de que trata el artículo 44 del Código General del Proceso.**

Se itera que la documental requerida se torna necesaria para determinar la competencia de este Despacho por razón del territorio, conforme lo señala el numeral 3° del artículo 156, de la Ley 1437 de 2011 y seguir con el curso del mismo.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL para que en el término de diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído allegue la constancia o certificación del último lugar donde prestó o debió prestar sus servicios el señor JHON ALEJANDRO RODRÍGUEZ RUÍZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.885.831, **especificando el municipio. So pena de imponer las sanciones de que trata el artículo 44 del Código General del Proceso, por desacato a orden judicial.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
c005ec65847b890822894026070b5e523742ec138301fe9eecdc5745b0a84a20
Documento generado en 03/06/2021 12:04:00 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00076-00**
DEMANDANTE:	**SANDRA PATRICIA OVIEDO OLAVE**
DEMANDADO:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por la señora SANDRA PATRICIA OVIEDO OLAVE, por conducto de apoderado judicial, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. La señora SANDRA PATRICIA OVIEDO OLAVE, por conducto de apoderado judicial, el 20 de mayo de 2019 radicó demanda ante el Juzgado Laboral del Circuito de Girardot (Folio 3 del archivo «*01ExpedienteDigital*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgadoLaboralGirardot*»).

2.2. El JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE GIRARDOT mediante auto de 27 de septiembre de 2019, previo a proveer sobre la admisión de la demanda, requirió a la Entidad demandada para que allegara copia de la Resolución No. 2075 de 27 de junio de 1990, por medio de la cual se concedió una pensión de jubilación al señor CELIMO RAMÍREZ (q.e.p.d.) con el fin de determinar la calidad laboral del causante y de ese modo la jurisdicción competente (Folio 38 del archivo «*01ExpedienteDigital*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgadoLaboralGirardot*»).

2.3. Por auto de 5 de marzo de 2021 el JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE GIRARDOT ordenó remitir el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Girardot por considerar que carecía de jurisdicción y competencia en atención a que, de conformidad con las Resoluciones No. 2001 de 24 de octubre de 1988 y 2075 de 27 de junio de 1990, se había podido determinar que el causante CELIMO RAMÍREZ había adquirido el estatus de pensionado como empleado público por haber desempeñado como último cargo el de «*Auditor Fiscal del Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca*» (Folios 110 a 112 del archivo «*10AutoFaltaDeCompetencia*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgadoLaboralGirardot*»).

2.4. Por reparto de 17 de marzo de 2021 el proceso de la referencia le correspondió a este Despacho («*004ActaReparto*»).

2.5. Este Despacho mediante proveído de 26 de marzo de 2021 inadmitió la demanda para que el apoderado judicial de la parte actora; ***i)*** adecuara la demanda a todos los parámetros y requisitos establecidos para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, teniendo en cuenta las normas procesales previstas para el efecto (artículo 161 a 166 ibidem) y, ***ii)*** allegara el poder debidamente conferido que acredite el derecho de postulación del profesional del derecho que presentó la demanda, en los términos del artículo 74 del Código General del Proceso o en

los del artículo 5º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 (*«006AvocaInadmiteDemanda»*).

2.6. El anterior auto se notificó en debida forma tal y como se desprende del correo electrónico por medio del cual se dio a conocer el estado No. 13 de 5 de abril de 2021 visible en el archivo *«007NotificacionEstado5Abril»*.

2.7. El 23 de abril de 2021, esto es, después de haberse transcurrido el termino para subsanar la demanda, el apoderado judicial de la parte actora solicitó el *«desglose de todos los anexos originales del proceso de la referencia»* previa fijación de *«fecha y hora para acercarme a su Despacho»* para que le sean entregados *«los anexos»* (*«008SolicitudDemandante»*).

2.8. El 26 de abril de 2021 el proceso ingresó en silencio al Despacho para proveer (*«009ConstanciaDespacho»*).

2.9. Encontrándose el expediente al Despacho, el 12 de mayo de 2021 el apoderado judicial de la parte actora solicitó, nuevamente, el desglose de los anexos de la demanda (*«010SolicitudDesglose»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, y de conformidad con los artículos 169[1] y 170[2] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este

[1] «**Artículo 169. *RECHAZO DE LA DEMANDA.*** Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad.

2. **Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida.**

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial» (Destaca el Despacho).

[2] «**Artículo 170. *INADMISIÓN DE LA DEMANDA.*** Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, **para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda**» (Destaca el Despacho).

Despacho determinará si la parte actora cumplió la carga de subsanar la demanda en debida forma.

En ese sentido, de conformidad con los hechos expuestos en el acápite de antecedentes de esta providencia y constatando, por un lado, que el auto inadmisorio de la demanda se notificó en debida forma al correo electrónico dispuesto en el acápite de notificaciones del escrito de la demanda («*pebega2303@hotmail.com*» visible en el folio 5 del archivo «*01ExpedienteDigital*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgadoLaboralGirardot*») y, por el otro, que la parte actora guardó silencio según se desprende de la constancia secretarial de 26 de abril de 2021 («*008ConstanciaDespacho*»), se concluye que la parte actora no dio cumplimiento a lo ordenado por el Despacho en auto de 26 de marzo de 2021, por lo que se rechazará la demanda, de conformidad con lo establecido en los artículo 169 y 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, frente a las solicitudes del apoderado judicial de la parte actora consistente en la devolución de los anexos físicos de la demanda, este Despacho recuerda que la demanda se impetró ante el Juzgado Laboral del Circuito de Girardot el 20 de mayo de 2019 (Folio 3 del archivo «*01ExpedienteDigital*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgadoLaboralGirardot*»), la cual fue remitida en medio digital, a este Despacho hasta el 17 de marzo de 2021, tal y como se desprende de la parte inferior del folio 1 del archivo «*003CorreoReparto*». No obstante, fue solo hasta el 20 de mayo de 2021 que este Despacho recibió por parte del Juzgado Laboral del Circuito de Girardot el expediente físico (entiéndase la actuación adelantada ante la Jurisdicción Ordinaria) por lo que es procedente autorizar la devolución de la demanda y sus anexos, como consecuencia del rechazo.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: RECHAZAR la demanda instaurada por la señora SANDRA PATRICIA OVIEDO OLAVE contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL DE PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, de conformidad con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: En firme esta decisión, **DEVUÉLVASE** la demanda y los anexos físicos a la parte actora y **ARCHÍVESE** el expediente previas las constancias de rigor**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
8C3CAC840EB550D26B27ABB81B6614589B0AE68BEA221E6DF774E78A125D5D39
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:15 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00090-00**
DEMANDANTE:	**CRISTINA BAUTISTA RIVERA**
DEMANDADO:	**E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL AFANADOR DE TOCAIMA**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda que en ejercicio del *medio de control de nulidad y restablecimiento* presentó la señora **CRISTINA BAUTISTA RIVERA**, por conducto de apoderado judicial, contra la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA**, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. GR 100/2021 de 15 de marzo de 2021 mediante la cual la Entidad demandada negó la existencia de una relación laboral entre esta con la demandante y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

A N T E C E D E N T E S

El 23 de marzo de 2021 la señora CRISTINA BAUTISTA RIVERA, por conducto de apoderado judicial, radicó demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*).

Mediante proveído de 15 de abril de 2021 este Despacho inadmitió la demanda con el fin de que la parte actora; ***i)*** allegara el escrito de petición por medio del cual solicitó a la Entidad demandada las pruebas relacionadas en el acápite *«4.2. PRUEBAS EN PODER DE LA PARTE DEMANDADA PEDIDA CON DERECHO DE PETICIÓN»*, ***ii)*** acreditara el cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, ***iii)*** adjuntara la constancia de publicación, comunicación o notificación del acto administrativo que se acusa (*«006AutoInadmite»*).

El 16 de abril de 2021 el apoderado judicial de la parte actora subsanó la demanda (*«008EscritoDemandante»*).

El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«009ConstanciaDespacho»*).

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de los requisitos exigidos para la admisión.

I. APTITUD FORMAL DE LA DEMANDA.

Una vez revisado el contenido de la demanda el Juzgado encuentra que satisface las exigencias previstas en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, habida consideración de que:

1.1. Están identificadas las partes y sus representantes (Folios 2 y 16 *«008EscritoDemandante»*).

1.2. Las pretensiones son claras y precisas (Folios 2 a 5 *«008EscritoDemandante»*).

1.3. Los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones fueron determinados y numerados (Folios 5 y 6 *«008EscritoDemandante»*).

1.4. Los fundamentos de derecho se encuentran debidamente enunciados y argumentados (Folios 6 a 12 «*008EscritoDemandante*»).

1.5. Allegó las pruebas documentales que se encuentran en su poder y que pretende hacer valer en el presente proceso (Folios 17 a 47 «*008EscritoDemandante*»).

1.6. Realizó una estimación razonada de la cuantía, que resulta necesaria a efectos de determinar la competencia en el presente caso, la cual estimó en $34.800.000 (Folio 15 «*008EscritoDemandante*»).

1.7. Indicó el lugar y la dirección de las partes para efectos de las notificaciones, con los respectivos canales digitales (Folio 16 «*008EscritoDemandante*»).

1.8. Acreditó cumplir con la obligación descrita en el numeral 8º del artículo en comento (adicionado por la Ley 2080 de 2021), esto es, que remitió de manera simultánea la demanda y sus anexos a la entidad demandada (folio 1 «*008EscritoDemandante*»).

II. COMPETENCIA.

2.1. De conformidad con el numeral 2º del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (factor funcional) este Despacho es competente debido a que el asunto es de naturaleza laboral y la estimación razonada de la cuantía ($34.800.000) no superan los $45.426.300, correspondientes a los 50 SMLMV (año 2021).

2.2. En virtud del numeral 3º del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, también se encuentra demostrada la competencia de esta Agencia Judicial debido a que el último lugar de prestación de servicios de la demandante fue en la E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA (Folio 38 «*008EscritoDemandante*»).

II. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

El numeral 1º del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá presupuesto procesal cuando en la demanda se formulen pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

Empero, tratándose de asuntos laborales y pensionales este requisito es **facultativo**, deviene entonces que su omisión no es impedimento para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

IV. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

En relación con la oportunidad para presentar la demanda, revisando el contenido del literal d) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando la demanda pretenda la nulidad y el restablecimiento de un derecho, esta debe presentarse dentro del término de los cuatro (4) meses siguientes al de la notificación del acto administrativo.

En el sub examine, se tiene que el Oficio No. GR 100/2021 de 15 de marzo de 2021 fue notificado el **15 de marzo de 2021** (Folio 27 *«008EscritoDemandante»*), por lo que el demandante tenía hasta el **15 de julio de 2021** para impetrar el presente medio de control, no obstante, se observa, según se desprende del acta individual de reparto visible en el archivo *«004ActaReparto»* que la actora presentó la demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, Cundinamarca **23 de marzo de 2021**, lo que deviene que la presente acción se interpuso dentro del término otorgado para ello.

V. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA.

5.1. Legitimación por Activa.

De conformidad con el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades públicas, los particulares y demás sujetos de derecho que tengan capacidad para comparecer al proceso pueden obrar como demandantes por medio de sus representantes debidamente acreditados, para reclamar ante los jueces el derecho del que son titulares.

El artículo 138 *ibidem*, faculta a toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica a solicitar la nulidad de un acto particular y que se le restablezca el derecho.

En el asunto de la referencia, quien se presenta en calidad de demandante es la señora CRISTINA BAUTISTA RIVERA, a quien se le negó la existencia de una relación laboral y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

Por lo tanto, resulta claro que la actora se encuentra legitimada en la causa para comparecer al proceso en calidad de demandante, siendo representada por el doctor LUIS GERMÁN PEÑA GARCÍA (Folios 17 a 21 «*008EscritoDemandante*»), a quien se le reconocerá personería adjetiva para actuar.

5.2. Legitimación por Pasiva.

Atendiendo al contenido del artículo 159 *ibidem*, en el presente caso deberá concurrir en condición de demandada, la E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA, autoridad administrativa que expidió el acto que se demanda, por lo que es la que tiene la legitimación en la causa por pasiva en el *sub iudice*.

VI. ANEXOS DE LA DEMANDA.

La parte demandante allegó la prueba documental que, adujo, se encontraba en su poder y que pretende hacer valer en el presente proceso para probar su derecho. Téngase en cuenta que el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo suprimió el requisito de que la parte demandante allegara las copias para efectos de los traslados para la notificación de la demanda y para el Ministerio Público como quiera que las demandas se presentan por medios digitales.

En consecuencia y, de conformidad con el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SE DISPONE:**

PRIMERO: ADMÍTESE la demanda que en ejercicio del *medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho* presentó la señora **CRISTINA BAUTISTA RIVERA**, por conducto de apoderado judicial, contra la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA**, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. GR 100/2021 de 15 de marzo de 2021 mediante la cual la Entidad demandada negó la existencia de una relación laboral entre esta con la demandante y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE en la forma prevista en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, al Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA**, o a quien haga sus veces o este haya delegado la facultad de recibir notificación y al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho**.**

TERCERO: ADVIÉRTESE a la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA** que, durante el término para dar respuesta a la

presente demanda, **DEBERÁ <u>allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que tenga en su poder.</u>** Lo anterior de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: CÓRRASE TRASLADO de la demanda por el término de treinta (30) días de conformidad con el artículo 172 *ibídem* al Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR DE TOCAIMA** y al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho, el cual comenzará a correr según lo previsto en los artículos 199 y 200 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: ORDÉNASE a la Secretaría del Despacho dar estricto cumplimiento a los previsto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: REMÍTASE a través del correo electrónico institucional la copia del presente auto admisorio, de la demanda y de sus anexos a la parte demandada y al Ministerio Público. Se advierte que una de las copias allegadas, se mantendrá en la Secretaría de este Despacho, a disposición de los notificados.

SÉPTIMO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA al doctor LUIS GERMÁN PEÑA GARCÍA para actuar como apoderado judicial de la señora CRISTINA BAUTISTA RIVERA, de conformidad con el poder visible en los folios 17 a 21 *«008EscritoDemandante»*.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
0BD44F745845AE25A5346BFFDBC5E5ECB6816F3F16CF0428189B2A84918DE5BC
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:17 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00091-00**
DEMANDANTE:	**ELKIN FABIAN TRIANA SEGURA**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor ELKIN FABIAN TRIANA SEGURA, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 24 de marzo de 2021 el señor ELKIN FABIAN TRIANA SEGURA, por conducto de apoderado judicial, radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto*), con el propósito de obtener la nulidad de la Orden Administrativa de Personal No. 2049 de 31 de octubre de 2020 mediante la cual la Entidad demandada lo retiró del servicio activo por la

inasistencia al servicio por más de diez (10) días consecutivos sin causa justificada.

2.2. Mediante proveído de 15 de abril de 2021 este Despacho inadmitió la demanda para que el apoderado judicial de la parte actora: ***i)*** determinara, clasificara y enumerara, de conformidad con el numeral 3º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los hechos y omisiones que sirvieran de fundamento de las pretensiones, ***ii)*** explicara el concepto de violación, en virtud de lo exigido en el numeral 4º ibidem y, ***iii)*** acreditara el cumplimiento de los preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, que remitiera por medio electrónico y de manera simultánea la copia de la demanda y de sus anexos a los demandados (*«007AutoInadmite»*).

2.3. El 28 de abril de 2021 el apoderado judicial del señor ELKIN FABIAN TRIANA SEGURA allegó escrito de subsanación y reforma de la demanda (*«009EscritoDemandante»* y *«010EscritoDemandanteReforma»*).

2.5. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«011ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, y de conformidad con los artículos 169 y 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho determinará si la parte actora cumplió la carga de subsanar la demanda en debida forma.

En ese sentido, de conformidad con los hechos expuestos en el acápite de antecedentes de esta providencia y constatando, por un lado, que el auto inadmisorio de la demanda se notificó en debida forma al correo electrónico dispuesto en el acápite de notificaciones del escrito de la demanda

(*«carlosponcedeleon22.cpdl@gmail.com»* visible en el folio 15 del archivo *«002DemandaPoderAnexos»*) y, por el otro, que el apoderado judicial de la parte actora:

No cumplió con lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, que al momento de presentar la demanda, el demandante remitiera **simultáneamente**[1] por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados a los canales oficiales dispuestos, lo anterior en atención a que tal y como se desprende de los folios 1 *«003CorreoReparto»* y 18 *«002DemandaPoderAnexos»* el escrito de demanda no se presentó, se insiste, de **manera simultánea** ante el correo de reparto y ante los canales de notificaciones de la parte demandada, pues, los escritos se presentaron de manera no simultánea, de manera independiente y en diferentes horas.

En ese mismo hilo, tanto la subsanación como el escrito de la reforma de la demanda, tal y como se advierte de los folios 1 *«009EscritoDemandante»* y 1 *«010EscritoDemandanteReforma»* tampoco se enviaron de manera simultánea a la parte demandada, aún a pesar de haberse advertido de manera expresa en el auto inadmisorio de la demanda de 15 de abril de 2021 que, se reitera, al tenor de lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, exigía que *«el escrito de subsanación se debía remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas oficiales y dispuestas para tal fin de manera simultánea, esto es, es un mismo correo en o a modo copia»* (folios 3 y 4 *«007AutoInadmite»*).

Para el efecto se trae a colación lo consagrado en el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021:

> «**Artículo 35.** ***Modifíquese el numeral 7 y adiciónese un numeral al artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, el cual quedará así***:

[1] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

(…)

8. El demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación se inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda, la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado» (Destaca el Despacho).

Por su parte, y para efectos de ilustrar que dicha exigencia procesal estaba prevista aún con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, el Decreto 806 de 4 de junio de 2020 preceptuaba para esta Jurisdicción lo siguiente:

«**Artículo 6.** ***DEMANDA.*** La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda.

Las demandas se presentarán en forma de mensaje de datos, lo mismo que todos sus anexos, a las direcciones de correo electrónico que el Consejo Superior de la Judicatura disponga para efectos del reparto, cuando haya lugar a este.

De las demandas y sus anexos no será necesario acompañar copias físicas, ni electrónicas para el archivo del juzgado, ni para el traslado.

En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, **el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la**

> **demanda.** De no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.
>
> En caso de que el demandante haya remitido copia de la demanda con todos sus anexos al demandado, al admitirse la demanda la notificación personal se limitará al envío del auto admisorio al demandado» (Destaca el Despacho).

Motivos por los cuales, de conformidad con los artículos 169[2] y 170[3] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se rechazará la demanda en razón a que la parte actora no dio cumplimiento a lo ordenado por el Despacho en auto de 15 de abril de 2021.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: RECHAZAR la demanda instaurada por el señor ELKIN FABIAN TRIANA SEGURA contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: En firme esta decisión, **DEVUÉLVASE** la demanda y los anexos sin necesidad de desglose y **ARCHÍVESE** el expediente previas las constancias de rigor**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

---

[2] «**Artículo 169.** ***RECHAZO DE LA DEMANDA.*** Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad.

2. **Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida**.

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial» (Destaca el Despacho).

[3] «**Artículo 170.** ***INADMISIÓN DE LA DEMANDA.*** Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, **para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda**» (Destaca el Despacho).

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
ACF0BE57F439E7CDDCDC6521C580DF53AEA73A7BFDB7D6068E81A7CE67A6C94B
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:18 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00093-00**
DEMANDANTE:	**BIBIANA JARA QUINTERO**
DEMANDADO:	**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

JUEZ: **Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda que en ejercicio del *medio de control de nulidad y restablecimiento* presentó la señora **BIBIANA JARA QUINTERO**, por conducto de apoderado judicial, contra la **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. DP-2021-001 de 10 de febrero de 2020 mediante la cual la Entidad demandada negó la existencia de una relación laboral entre esta con la demandante y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

A N T E C E D E N T E S

El 25 de marzo de 2021 la señora BIBIANA JARA QUINTERO, por conducto de apoderado judicial, radicó demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*).

Mediante proveído de 15 de abril de 2021 este Despacho inadmitió la demanda con el fin de que la parte actora; ***i)*** allegara de manera íntegra y legible los folios 273, 282, 285 y 295 del archivo *«002DemandaPoderAnexos»*, ***ii)*** acreditara el cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, ***iii)*** adjuntara la constancia de publicación, comunicación o notificación del acto administrativo que se acusa (*«006AutoInadmite»*).

El 19 de abril de 2021 el apoderado judicial de la parte actora subsanó la demanda en debida forma (*«008EscritoDemandante»*).

El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«009ConstanciaDespacho»*).

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de los requisitos exigidos para la admisión.

I. APTITUD FORMAL DE LA DEMANDA.

Una vez revisado el contenido de la demanda el Juzgado encuentra que satisface las exigencias previstas en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, habida consideración de que:

1.1. Están identificadas las partes y sus representantes (Folios 90 y 91 *«008EscritoDemandante»*).

1.2. Las pretensiones son claras y precisas (Folios 91 a 101 *«008EscritoDemandante»*).

1.3. Los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones fueron determinados y numerados (Folios 101 a 107 *«008EscritoDemandante»*).

1.4. Los fundamentos de derecho se encuentran debidamente enunciados y argumentados (Folios 107 a 118 *«008EscritoDemandante»*).

1.5. Allegó las pruebas documentales que se encuentran en su poder y que pretende hacer valer en el presente proceso (Folios 7 a 89 y 123 a 392 «*008EscritoDemandante*»).

1.6. Realizó una estimación razonada de la cuantía, que resulta necesaria a efectos de determinar la competencia en el presente caso, la cual estimó en $18.802.900 (Folio 121 «*008EscritoDemandante*»).

1.7. Indicó el lugar y la dirección de las partes para efectos de las notificaciones, con los respectivos canales digitales (Folio 122 «*008EscritoDemandante*»).

1.8. Acreditó cumplir con la obligación descrita en el numeral 8º del artículo en comento (adicionado por la Ley 2080 de 2021), esto es, que remitió de manera simultánea la demanda y sus anexos a la entidad demandada (folio 1 «*008EscritoDemandante*»).

II. COMPETENCIA.

2.1. De conformidad con el numeral 2º del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (factor funcional) este Despacho es competente debido a que el asunto es de naturaleza laboral y la estimación razonada de la cuantía ($18.802.900) no superan los $45.426.300, correspondientes a los 50 SMLMV (año 2021).

2.2. En virtud del numeral 3º del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, también se encuentra demostrada la competencia de esta Agencia Judicial debido a que el último lugar de prestación de servicios de la demandante fue en la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ (Folio 139 y 140 «*008EscritoDemandante*»).

II. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

El numeral 1º del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá presupuesto procesal cuando en la demanda se formulen pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

Empero, tratándose de asuntos laborales y pensionales este requisito es **facultativo**, deviene entonces que su omisión no es impedimento para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

No obstante, con el fin de acreditar este presupuesto, con la demanda se allegó la constancia de conciliación prejudicial de 24 de marzo de 2021 (Folios 147 a 156 «*008EscritoDemandante*»).

IV. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

En relación con la oportunidad para presentar la demanda, revisando el contenido del literal d) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando la demanda pretenda la nulidad y el restablecimiento de un derecho, esta debe presentarse dentro del término de los cuatro (4) meses siguientes al de la notificación del acto administrativo.

En el sub examine, se tiene que el Oficio No. DP-2021-001 de 10 de febrero de 2020 fue notificado el **11 de febrero de 2021** (Folio 138 «*008EscritoDemandante*»), por lo que el demandante tenía hasta el **11 de junio de 2021** para impetrar el presente medio de control, no obstante, se observa, según se desprende del acta individual de reparto visible en el archivo «*004ActaReparto*» que la actora presentó la demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, Cundinamarca el **25 de marzo de 2021**, lo que deviene que la presente acción se interpuso dentro del término otorgado para ello.

V. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA.

5.1. Legitimación por Activa.

De conformidad con el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades públicas, los particulares y demás sujetos de derecho que tengan capacidad para comparecer al proceso pueden obrar como demandantes por medio de sus representantes debidamente acreditados, para reclamar ante los jueces el derecho del que son titulares.

El artículo 138 *ibidem*, faculta a toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica a solicitar la nulidad de un acto particular y que se le restablezca el derecho.

En el asunto de la referencia, quien se presenta en calidad de demandante es la señora BIBIANA JARA QUINTERO, a quien se le negó la existencia de una relación laboral con la entidad demandada y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

Por lo tanto, resulta claro que la actora se encuentra legitimada en la causa para comparecer al proceso en calidad de demandante, siendo representado por el doctor LUIS ALFREDO ROJAS VARGAS (Folios 77 a 89 «*008EscritoDemandante*»), a quien se le reconocerá personería adjetiva para actuar.

5.2. Legitimación por Pasiva.

Atendiendo al contenido del artículo 159 *ibidem*, en el presente caso deberá concurrir en condición de demandada, la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, autoridad administrativa que expidió el acto que se demanda, por lo que es la que tiene la legitimación en la causa por pasiva en el *sub iudice*.

VI. ANEXOS DE LA DEMANDA.

La parte demandante allegó la prueba documental que, adujo, se encontraba en su poder y que pretende hacer valer en el presente proceso para probar su derecho. Téngase en cuenta que el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo suprimió el requisito de que la parte demandante allegara las copias para efectos de los traslados para la notificación de la demanda y para el Ministerio Público como quiera que las demandas se presentan por medios digitales.

En consecuencia y, de conformidad con el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SE DISPONE:**

PRIMERO: ADMÍTESE la demanda que en ejercicio del *medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho* presentó la señora **BIBIANA JARA QUINTERO**, por conducto de apoderado judicial, contra la **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. DP-2021-001 de 10 de febrero de 2020 mediante la cual la Entidad demandada negó la existencia de una relación laboral entre esta con la demandante y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE en la forma prevista en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, al Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**, o a quien haga sus veces o este haya delegado la facultad de recibir notificación y al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho**.**

TERCERO: ADVIÉRTESE a la **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ** que, durante el término para dar respuesta a la presente

demanda, **DEBERÁ <u>allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que tenga en su poder.</u>** Lo anterior de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: CÓRRASE TRASLADO de la demanda por el término de treinta (30) días de conformidad con el artículo 172 *ibídem* al Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ** y al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho, el cual comenzará a correr según lo previsto en los artículos 199 y 200 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: ORDÉNASE a la Secretaría del Despacho dar estricto cumplimiento a los previsto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: REMÍTASE a través del correo electrónico institucional la copia del presente auto admisorio, de la demanda y de sus anexos a la parte demandada y al Ministerio Público. Se advierte que una de las copias allegadas, se mantendrá en la Secretaría de este Despacho, a disposición de los notificados.

SÉPTIMO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA al doctor LUIS ALFREDO ROJAS VARGAS para actuar como apoderado judicial de la señora BIBIANA JARA QUINTERO, de conformidad con el poder visible en los folios 77 a 89 «*008EscritoDemandante*».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
BB21EDB2C09720FCDF7D49F0D44B13F9BC1CD12F0F199F4011382C3DCB6F8545
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:19 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00098-00**
DEMANDANTE:	**ORANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor ORANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ, por conducto de apoderada judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 18 de diciembre de 2020 el señor ORANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ, por conducto de apoderada judicial, radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Ibagué, correspondiéndole su conocimiento al JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ («*02ActaReparto*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgado9Administrativolbague*»), con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo «*de 21 de julio de 2020*» por medio del cual la Entidad

demandada negó la reliquidación y reajuste «*de los salarios, primas, vacaciones, prestaciones sociales y la asignación de retiro del actor*» conforme al IPC.

2.2. Mediante providencia de 10 de marzo de 2021 el JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE IBAGUÉ remitió el asunto de la referencia a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, por considerar que carecía de competencia por el factor territorial en atención a que el último lugar de prestación de servicios del actor fue en Nilo, Cundinamarca («*14AutoFaltaCompetencia*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgados9AdministrativoIbague*»).

2.3. Remitido el proceso, y efectuado el reparto entre los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot el 6 de abril de 2021 le correspondió su conocimiento a este Despacho («*004ActaReparto*»).

2.4. Mediante proveído de 15 de abril de 2021 este Despacho inadmitió la demanda para que la apoderada judicial de la parte actora, de conformidad con el numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo allegara la copia del acto administrativo que se acusa, esto es, del acto administrativo de 21 de julio de 2020 junto con la constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución («*006AutoInadmite*»).

2.5. El 20 de abril de 2021 la apoderada judicial del señor ORANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ allegó escrito de subsanación de la demanda («*008EscritoDemandante*»).

2.6. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer («*009ConstanciaDespacho*»).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

En ese orden, y de conformidad con los artículos 169 y 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este Despacho determinará si la parte actora cumplió la carga de subsanar la demanda en debida forma.

En ese sentido, de conformidad con los hechos expuestos en el acápite de antecedentes de esta providencia y constatando, por un lado, que el auto inadmisorio de la demanda se notificó en debida forma al correo electrónico dispuesto en el acápite de notificaciones del escrito de la demanda («*eperdroit@hotmail.com*» visible en el folio 13 del archivo «*01Demanda*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgado9AdministrativoIbague*») y, por el otro, que la apoderada judicial de la parte actora:

1. En el escrito de subsanación de la demanda allegado el 20 de abril de 2021 de manera expresa reafirmó de manera inequívoca que «*el acto administrativo a demandar es el oficio del 21 de julio de 2020, por medio del cual EJÉRCITO NACIONAL negó la reliquidación y reajuste de los salarios, primas, vacaciones, prestaciones sociales y la asignación de retiro del mayor RA) ORRANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ con base en el Índice de Precio al Consumidor (IPC)*» (folio 2 «*008EscritoDemandante*») y,

2. Que no remitió lo exigido en aludido auto, requisito consagrado en el numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, que debe acompañar la demanda con «*la copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución*», lo anterior en atención a que tal y como se desprende de los folios 19 a 20 «*01Demandante*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgado9AdministrativoIbague*» y 4 a 5 «*008EscritoDemandante*» la apoderada judicial de la parte actora no allegó la copia del acto administrativo que pretende enjuiciar con su constancia de notificación, sino que allegó un oficio emanado por la Gestor y Orientador Servicio al Ciudadano DIRECCIÓN

DE PRESTACIONES SOCIALES del EJÉRCITO NACIONAL de **10 de agosto de 2020**, es decir, remitió un oficio que a todas luces discrepa del acto administrativo que pretende anular en el presente medio de control, pues, resalta este Despacho que las pretensiones de la demanda son las siguientes (folio 4 «*01Demanda*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgado9AdministrativoIbagué*»):

> «***Que se Declare la Nulidad del acto administrativo del 21 de julio de 2020**, por medio del cual EJÉRCITO NACIONAL negó la reliquidación y reajuste de los salarios, primas, vacaciones, prestaciones sociales y la asignación de retiro del Mayor (RA) ORANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ (…), con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) (…)*» (Destaca el Despacho).

Exigencia que de manera expresa impone el numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo cuando preceptúa:

> «**Artículo 166.** ***ANEXOS DE LA DEMANDA.*** **A la demanda deberá[1] acompañarse:**
>
> 1. **Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso.** Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación.
>
> (…)» (Destaca el Despacho).

Al respecto, el H. Consejo de Estado ha manifestado lo siguiente:

---

[1] https://dle.rae.es/deber: DEBER 1: 1. tr. Estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva. U. t. c. prnl. Deberse A la patria.
2. tr. Tener obligación de corresponder a alguien en lo moral.
3. tr. Cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos.
4. tr. adeudar (‖ tener una deuda material). Pedro debe cien euros a Juan.
5. tr. Tener por causa, ser consecuencia de. U. t. c. prnl. La escasez de los pastos se debe A la sequía.
6. tr. U. como auxiliar en las perífrasis, en las que añade una nota de inseguridad o probabilidad al verbo principal. Debe DE hacer frío. Debieron DE salir a pelear.
DEBER 2:
1. m. Aquello que se tiene la obligación de hacer.
2. m. deuda (‖ obligación de pagar).
3. m. Ejercicio que, como complemento de lo aprendido en clase, se encarga, para hacerlo fuera de ella, al alumno de los primeros grados de enseñanza. U. m. en pl.
hacer alguien su deber
1. loc. verb. Cumplir con su obligación en lo moral o en lo laboral.

*MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – **Requisitos de la demanda / ANEXOS DE LA DEMANDA – Obligación de aportar copia de los actos demandados con la constancia de notificación o ejecutoria** / INADMISIÓN DE LA DEMANDA – Por no acompañar copia del acto acusado con la de publicación, comunicación, notificación o ejecutoria / RECHAZO DE LA DEMANDA.*

El legislador utilizó la expresión "A la demanda deberá acompañarse", como una clara muestra de que el aporte de los documentos allí referidos no es facultativo de quien quiere acceder a esta Jurisdicción, sino que constituye una carga o requisito expresamente exigible por parte del Juez al momento de decidir sobre la procedencia de la admisión de la demanda y por consiguiente, su incumplimiento impide continuar el trámite de la misma. *Basado en el numeral primero del artículo en mención, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, inadmitió la demanda incoada por el actor y lo requirió para que, en el término de 10 días, allegará copia de las constancias de publicación, comunicación, notificación o ejecución de los actos administrativos demandados. No obstante lo anterior, en el término referido, el actor allegó la constancia de notificación de la Resolución 1419 de 9 de agosto de 2013, pero omitió su obligación de aportar el respectivo documento que demostrara la publicación, comunicación, notificación o ejecución de la Resolución 0326 de 11 de febrero de 2014, acto administrativo que también había sido demando y que era absolutamente necesario en el proceso para determinar el término de caducidad del medio de control instaurado, pues con él quedó agotada la vía gubernativa; y tan cierto es que la constancia de notificación es determinante, que el artículo 169 del C.P.A.C.A., consagra como causal de rechazo la caducidad, presupuesto éste que solo puede establecerse de la constancia de notificación del acto que agota la vía gubernativa.* ***El incumplimiento de la mencionada obligación que se encuentra a cargo de quien acude ante la Jurisdicción para demandar un acto administrativo de contenido particular, llevó a que el a quo, acertadamente, rechazara la demanda contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el actor, con fundamento en lo consagrado en el numeral segundo del artículo 169 del C.P.A.C.A.*** *(…)*»[2].

Motivos por los cuales, de conformidad con los artículos 169[3] y 170[4] del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se

---

[2] Providencia de 31 de agosto de 2015, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: Doctora MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, radicación número: 76001-23-33-000-2014-00608-01.

[3] «**Artículo 169.** ***RECHAZO DE LA DEMANDA.*** Se rechazará la demanda y se ordenará la devolución de los anexos en los siguientes casos:

1. Cuando hubiere operado la caducidad.

2. **Cuando habiendo sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente establecida**.

3. Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial» (Destaca el Despacho).

[4] «**Artículo 170.** ***INADMISIÓN DE LA DEMANDA.*** Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, **para que el**

rechazará la demanda en razón a que la parte actora no dio cumplimiento a lo ordenado por el Despacho en auto de 15 de abril de 2021.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: RECHAZAR la demanda instaurada por el señor ORANGEL RAFAEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL, de conformidad con las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: En firme esta decisión, **ARCHÍVESE** el expediente previas las constancias de rigor**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
CC93E4C8980929992C5E57DBCF3795F67807C2F003A94C46FC337EDDF5311B4D
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:20 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:

---

demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda» (Destaca el Despacho).

HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00099-00**
DEMANDANTE:	**MARTHA LUCIA PRIETO DUARTE**
DEMANDADO:	**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda que en ejercicio del *medio de control de nulidad y restablecimiento* presentó la señora **MARTHA LUCIA PRIETO DUARTE**, por conducto de apoderado judicial, contra la **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. DP-2021-004 de 12 de febrero de 2020 mediante la cual la Entidad demandada negó la existencia de una relación laboral entre esta con la demandante y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

A N T E C E D E N T E S

El 8 de abril de 2021 la señora MARTHA LUCIA PRIETO DUARTE, por conducto de apoderado judicial, radicó demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*).

Mediante proveído de 15 de abril de 2021 este Despacho inadmitió la demanda con el fin de que la parte actora; ***i)*** allegara de manera íntegra y legible la «*orden de apoyo en operaciones asistenciales No. 514-2015*» y, ***ii)*** acreditara el cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (*«006AutoInadmite»*).

El 19 de abril de 2021 el apoderado judicial de la parte actora subsanó la demanda en debida forma (*«008EscritoDemandante»*).

El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«009ConstanciaDespacho»*).

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de los requisitos exigidos para la admisión.

I. APTITUD FORMAL DE LA DEMANDA.

Una vez revisado el contenido de la demanda el Juzgado encuentra que satisface las exigencias previstas en el artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, habida consideración de que:

1.1. Están identificadas las partes y sus representantes (Folios 86 y 87 *«008EscritoDemandante»*).

1.2. Las pretensiones son claras y precisas (Folios 87 a 97 *«008EscritoDemandante»*).

1.3. Los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones fueron determinados y numerados (Folios 97 a 103 *«008EscritoDemandante»*).

1.4. Los fundamentos de derecho se encuentran debidamente enunciados y argumentados (Folios 103 a 114 *«008EscritoDemandante»*).

1.5. Allegó las pruebas documentales que se encuentran en su poder y que pretende hacer valer en el presente proceso (Folios 5 a 85 y 119 a 474 «*008EscritoDemandante*»).

1.6. Realizó una estimación razonada de la cuantía, que resulta necesaria a efectos de determinar la competencia en el presente caso, la cual estimó en $19.686.513 (Folio 117 «*008EscritoDemandante*»).

1.7. Indicó el lugar y la dirección de las partes para efectos de las notificaciones, con los respectivos canales digitales (Folio 118 «*008EscritoDemandante*»).

1.8. Acreditó cumplir con la obligación descrita en el numeral 8º del artículo en comento (adicionado por la Ley 2080 de 2021), esto es, que remitió de manera simultánea la demanda y sus anexos a la entidad demandada (folio 1 «*008EscritoDemandante*»).

II. COMPETENCIA.

2.1. De conformidad con el numeral 2º del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (factor funcional) este Despacho es competente debido a que el asunto es de naturaleza laboral y la estimación razonada de la cuantía ($19.686.513) no superan los $45.426.300, correspondientes a los 50 SMLMV (año 2021).

2.2. En virtud del numeral 3º del artículo 156 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, también se encuentra demostrada la competencia de esta Agencia Judicial debido a que el último lugar de prestación de servicios de la demandante fue en la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ (Folios 224 a 232 «*008EscritoDemandante*»).

II. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

El numeral 1º del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá presupuesto procesal cuando en la demanda se formulen pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

Empero, tratándose de asuntos laborales y pensionales este requisito es **facultativo**, deviene entonces que su omisión no es impedimento para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

No obstante, con el fin de acreditar este presupuesto, con la demanda se allegó la constancia de conciliación prejudicial de 6 de abril de 2021 (Folios 143 a 156 «*008EscritoDemandante*»).

IV. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

En relación con la oportunidad para presentar la demanda, revisando el contenido del literal d) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando la demanda pretenda la nulidad y el restablecimiento de un derecho, esta debe presentarse dentro del término de los cuatro (4) meses siguientes al de la notificación del acto administrativo.

En el sub examine, se tiene que el Oficio No. DP-2021-004 de 5 de febrero de 2020 fue notificado el **12 de febrero de 2021** (Folio 136 «*008EscritoDemandante*»), por lo que el demandante tenía hasta el **12 de junio de 2021** para impetrar el presente medio de control, no obstante, se observa, según se desprende del acta individual de reparto visible en el archivo «*004ActaReparto*» que la actora presentó la demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, Cundinamarca el **8 de abril de 2021**, lo que deviene que la presente acción se interpuso dentro del término otorgado para ello.

V. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA.

5.1. Legitimación por Activa.

De conformidad con el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades públicas, los particulares y demás sujetos de derecho que tengan capacidad para comparecer al proceso pueden obrar como demandantes por medio de sus representantes debidamente acreditados, para reclamar ante los jueces el derecho del que son titulares.

El artículo 138 *ibidem*, faculta a toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica a solicitar la nulidad de un acto particular y que se le restablezca el derecho.

En el asunto de la referencia, quien se presenta en calidad de demandante es la señora MARTHA LUCIA PRIETO DUARTE, a quien se le negó la existencia de una relación laboral con la entidad demandada y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

Por lo tanto, resulta claro que la actora se encuentra legitimada en la causa para comparecer al proceso en calidad de demandante, siendo representado por el doctor LUIS ALFREDO ROJAS VARGAS (Folios 71 a 85 «*008EscritoDemandante*»), a quien se le reconocerá personería adjetiva para actuar.

5.2. Legitimación por Pasiva.

Atendiendo al contenido del artículo 159 *ibidem*, en el presente caso deberá concurrir en condición de demandada, la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, autoridad administrativa que expidió el acto que se demanda, por lo que es la que tiene la legitimación en la causa por pasiva en el *sub iudice*.

VI. ANEXOS DE LA DEMANDA.

La parte demandante allegó la prueba documental que, adujo, se encontraba en su poder y que pretende hacer valer en el presente proceso para probar su derecho. Téngase en cuenta que el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo suprimió el requisito de que la parte demandante allegara las copias para efectos de los traslados para la notificación de la demanda y para el Ministerio Público como quiera que las demandas se presentan por medios digitales.

En consecuencia y, de conformidad con el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SE DISPONE:**

PRIMERO: ADMÍTESE la demanda que en ejercicio del *medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho* presentó la señora **MARTHA LUCIA PRIETO DUARTE**, por conducto de apoderado judicial, contra la **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio No. DP-2021-004 de 12 de febrero de 2020 mediante la cual la Entidad demandada negó la existencia de una relación laboral entre esta con la demandante y el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE en la forma prevista en el artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, al Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**, o a quien haga sus veces o este haya delegado la facultad de recibir notificación y al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho**.**

TERCERO: ADVIÉRTESE a la **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ** que, durante el término para dar respuesta a la presente

demanda, **DEBERÁ <u>allegar el expediente administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que tenga en su poder.</u>** Lo anterior de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO: CÓRRASE TRASLADO de la demanda por el término de treinta (30) días de conformidad con el artículo 172 *ibídem* al Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ** y al señor **PROCURADOR DELEGADO** en lo judicial ante este Despacho, el cual comenzará a correr según lo previsto en los artículos 199 y 200 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

QUINTO: ORDÉNASE a la Secretaría del Despacho dar estricto cumplimiento a los previsto en el artículo 201 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: REMÍTASE a través del correo electrónico institucional la copia del presente auto admisorio, de la demanda y de sus anexos a la parte demandada y al Ministerio Público. Se advierte que una de las copias allegadas, se mantendrá en la Secretaría de este Despacho, a disposición de los notificados.

SÉPTIMO: RECONÓCESE PERSONERÍA ADJETIVA al doctor LUIS ALFREDO ROJAS VARGAS para actuar como apoderado judicial de la señora MARTHA LUCIA PRIETO DUARTE, de conformidad con el poder visible en los folios 71 a 85 «*008EscritoDemandante*».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO

JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
D92BCBCDE3DDCE401A51478E0E8FA6CBC3A303AB85189408FE9B283EF78EB12C
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:21 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00100-00**
DEMANDANTE:	**RUBÉN CAMILO BONILLA PARRA**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda que en ejercicio del *medio de control de nulidad y restablecimiento* presentó el señor **RUBÉN CAMILO BONILLA PARRA**, por conducto de apoderado judicial, contra la **NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**, con el propósito de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 2858 de 26 de octubre de 2021 mediante la cual la Entidad demandada retiró del servicio activo al actor *«por llamamiento a calificar servicios»*.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 8 de abril de 2021 el señor RUBÉN CAMILO BONILLA PARRA, por conducto de apoderado judicial, radicó demanda ante el correo de reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*).

2.2. Mediante proveído de 15 de abril de 2021 este Despacho inadmitió la demanda con el fin de que la parte actora; ***i)*** acreditara el cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, ***ii)*** remitiera el poder debidamente conferido en donde el asunto este claramente identificado, determinado e individualizado con toda precisión y dirigido al juez de conocimiento, de conformidad con los previsto en el artículo 74 del Código General del Proceso o en el artículo 5º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020 (*«007AutoInadmite»*).

2.3. El 22 de abril de 2021 el apoderado judicial de la parte actora subsanó la demanda (*«009EscritoDemandante»*).

2.4. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«010ConstanciaDespacho»*).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, una vez revisado el expediente, el Despacho observa que en anterior oportunidad no se advirtió que la demanda no cumple con el requisito del numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, que acompañe con la demanda la constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución del acto administrativo que se enjuicia, lo anterior debido a que el radiograma de 27 de octubre de 2020 visible a folios 54 *«005EscritoDemandante»* y 32 *«009EscritoDemandante»* no satisface tal exigencia en consideración a que no se desprende la fecha en que el demandante tuvo conocimiento y/o se notificó de la Resolución No. 2858 de 26 de octubre de 2020.

Motivo por el cual se hace necesario requerir a la parte actora en tal sentido para que allegue de manera legible la constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución de la Resolución No. 2858 de 26 de octubre de 2020. Advirtiéndole que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección

electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales y dispuestas para tal fin** de la entidad demandada de **manera simultánea**[1], esto es, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

En Consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial del señor RUBÉN CAMILO BONILLA PARRA para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, subsane la demanda en los términos exigidos por el numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, para que allegue la constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución de la Resolución No. 2858 de 26 de octubre de 2020, **SO PENA DE RECHAZO**.

SEGUNDO: RECUÉRDASELE al apoderado judicial del señor BONILLA PARRA que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales** de las entidades demandadas de **manera simultánea**, esto es, en un mismo correo electrónico, situación que deberá acreditar, tal como lo prevé el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo**.**

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A

[1] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
6C306D17315827A87AB9B623F0D93807DB59659DDACD239E9C668B0F986D27F2
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:22 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2021-00106-00**
Demandante:	**GREGORIA LÓPEZ, GLORIA BEATRIZ RODRÍGUEZ DÍAZ, CECILIA CAMPOS y PABLO DAVID HERRERA CASTRO**
Demandado:	**MUNICIPIO DE GIRARDOT**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto por la apoderada judicial de la parte ejecutante contra el auto de 22 de abril de 2021 por medio del cual se inadmitió la demanda.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. LA PROVIDENCIA RECURRIDA.

El 22 de abril de 2021[1] se profirió auto con el que se inadmitió la demanda, requiriendo al extremo actor para que en el término de los diez días siguientes a la notificación de la providencia se sirviera:

[1] Archivo denominado «o06AutoInadmite» del Cuaderno Principal del expediente digitalizado

> «***1.1.*** *Allegue constancia de ejecutoria de la sentencia que pretende ejecutar.* ***En el caso de no contar con la misma, deberá indicarlo expresamente con el fin de que por la Secretaría del Despacho sea expedida.***
>
> ***1.2.*** *Acredite que se agotó la conciliación prejudicial previo a elevar la solicitud de ejecución.*
>
> ***1.3.*** *Acredite el cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»), esto es, envíe la demanda al demandado y al Juzgado en el mismo mensaje.* ***De la subsanación también debe enviarse mensaje simultáneo al demandado y al Juzgado.***
>
> *(…)*»

2.2. DEL RECURSO INCOADO.

Mediante memorial allegado el 26 de abril de 2021[2], la apoderada judicial de la parte demandante interpuso el recurso de reposición contra el auto proferido el 22 de abril de 2021, con el que se inadmitió la demanda por ella presentada.

Como sustento indicó que la Corte Constitucional en las sentencias C-533 y C-830 de 2013 declaró exequible el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, bajo el entendido de que el requisito de la conciliación prejudicial no puede ser exigido, cuando los trabajadores tengan acreencias laborales a su favor susceptibles de ser reclamadas a los municipios mediante un proceso ejecutivo.

Por lo anterior, aduce, como quiera que en el presente asunto se pretende ejecutar una sentencia en la que se accedió a las pretensiones laborales del demandante, no debe exigirse el requisito establecido en la señalada normativa.

---

[2] Archivo denominado «oo8RecursoReposicion» del Cuaderno Principal del expediente digitalizado

III. C O N S I D E R A C I O N E S

3.1. Del recurso de reposición.

Señala el artículo 318 del Código General del Proceso:

> **«Artículo 318. *PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES*.** Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.
>
> El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.
>
> El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.
>
> El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.
>
> Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.
>
> **Parágrafo.** Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente»

3.1.2. Se evidencia entonces, la procedencia del recurso de reposición, el cual fue presentado en tiempo, como quiera que la notificación del auto recurrido se surtió por estado de 23 de abril de 2021[3] y el recurso fue radicado el 26 de abril de 2021.

[3] Archivo denominado «007NotificacionEstado23Abril» del cuaderno principal del expediente digitalizado.

3.1.3. Ahora bien, observados los motivos de inconformidad expresados por la apoderada judicial, el Despacho procedió a consultar las sentencias que invocó, encontrando que la Corte Constitucional en Sentencia C-533 de 2013, señaló:

> ***«8. El legislador viola los derechos laborales y el derecho a la igualdad de los trabajadores que tienen deudas con municipios, susceptibles de ser reclamadas mediante un proceso ejecutivo***
>
> *Por último, la Sala Plena considera que la respuesta al tercer problema jurídico es afirmativa. Le asiste la razón al accionante cuando acusa a la norma de violar los derechos laborales constitucionales así como el derecho a la igualdad entre los trabajadores.*
>
> *8.1. Tal como se indicó previamente, en la sentencia C-160 de 1999, la Corte decidió que una norma legal que establece la conciliación prejudicial obligatoria en materia laboral, de forma general, sin distinciones y precisiones necesarias para asegurar los derechos fundamentales, en especial, el derecho de acceso a la justicia, es inconstitucional.[54] Concretamente, se estableció que ello era así, a propósito de los procesos laborales ejecutivos. Para la Corte " […] la conciliación no opera en los procesos ejecutivos, porque en razón de su naturaleza la conciliación busca crear una situación de certeza en cuanto a los derechos laborales que el trabajador reclama al empleador, lo cual, por sustracción de materia no se requiere cuando ya se posee un título ejecutivo del cual emana una obligación a cargo de éste que para el trabajador configura un derecho cierto e indiscutible que no se puede renunciar ni negociar, como lo prevé el art. 53 de la Constitución Política."[55] Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en varias ocasiones, en especial en la sentencia C-893 de 2001,[56] en la cual se decidió que "sí es inconstitucional la norma que consagra la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en asuntos laborales"; indicó que una regla legal de ese estilo "[…] quebranta abiertamente el principio constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta, según el cual, corresponde a la Ley tener en cuenta la facultad de los trabajadores para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, la cual se ve afectada cuando se exige al particular acudir a la conciliación como requisito previo a la presentación de la demanda.".[57]*
>
> *8.2. En tal medida, la restricción al derecho laboral que supone la exigencia de la conciliación como un requisito de procedibilidad de la acción ejecutiva, es una medida legislativa irrazonable constitucionalmente, en tanto se vale de un medio prohibido. Esto es, si bien el artículo 47 de la Ley1551 de 2012 busca fines que no sólo son legítimos constitucionalmente, sino que además son imperiosos, el medio por el cual optó el legislador está prohibido constitucionalmente, como lo ha señalado la jurisprudencia. En tanto el artículo 53 de la Constitución contempla el derecho a 'la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales', la jurisprudencia constitucional ha indicado que una norma que desconozca abiertamente esta restricción, vulnera un mandato expreso de la Constitución.*
>
> *8.3. La jurisprudencia también ha sostenido que exigir la conciliación prejudicial como requisito procesal en materia de procesos judiciales de forma general e imprecisa es una herramienta legal irrazonable constitucionalmente,*

entre otros motivos, cuando se emplean normas vagas y ambiguas o altamente indeterminadas, que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos judiciales laborales.[58] *El artículo 47 de la Ley 1551 de 2012 fija el requisito procesal de la conciliación prejudicial en procesos ejecutivos contra municipios de manera amplia, pero a la vez se establecen una serie de parámetros y reglas que hacen más o menos precisa la aplicación de la figura. Sin embargo, al hacer referencia a los procesos ejecutivos en contra de municipios, sin distinción alguna, se puede concluir que la norma acusada contempla también las obligaciones de carácter laboral.*

8.3.1. Podría alegarse que la norma acusada debe ser interpretada de acuerdo con la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional en la materia. De hecho, la participación del Ministerio de Hacienda dentro del presente proceso, interpreta que la norma contempla el requisito de la conciliación prejudicial en un "tipo de procesos [que] hace referencia a obligaciones patrimoniales adquiridas por parte de los municipios con los particulares. Son obligaciones dinerarias no laborales […]". Sin duda que es una forma adecuada de interpretar la norma a la luz de la Constitución Política.

8.3.2. Pero el proceso ha servido para mostrar que no es ésta la única interpretación posible. La incertidumbre de las reglas se evidencia al contrastar la posición del Ministerio, por una parte, y de la Federación Colombiana de Municipios por otra. En su intervención, la Federación indica que "[…] cuando la conciliación se trate de créditos laborales no podrá conducir al desconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles, tan sólo se ocupará de la programación del pago según las posibilidades de flujo de recursos de los Municipios y la mayor conveniencia del convocante."

8.4. Adicionalmente la Sala Plena de la Corte considera que la imposición del requisito procesal de la conciliación prejudicial en materia de procesos ejecutivos laborales que se adelante en contra de un municipio constituye una violación a la especial protección que brinda el principio de igualdad a los trabajadores.

8.4.1. El artículo 53 establece los principios que han de regir la ley laboral en el estado social de derecho. Entre otros, además del respeto al derecho constitucional a irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, se contempla expresamente el principio de igualdad de oportunidades a los trabajadores. En tal medida, se torna categórica la protección que ha dado la Constitución, la ley y la jurisprudencia a sus derechos, impidiendo que se les imponga el requisito procesal de la conciliación prejudicial, especialmente si se hace mediante normas vagas y ambiguas o altamente indeterminadas, y sin fijar parámetros básicos como, por ejemplo, la imposibilidad de conciliar derechos laborales mínimos o de exigirla especialmente para procesos ejecutivos.

8.4.2. Pero en cualquier caso, no existe en el proceso defensa alguna de por qué no se viola el derecho a la igual protección de los trabajadores bajo la Constitución, al establecer desde las propias reglas que regulan los derechos procesales, un trato diferente entre los trabajadores municipales y el resto de trabajadores. Por qué las reglas del proceso ejecutivo para reclamar derechos laborales han de ser unas para los trabajadores de las entidades territoriales y otras para el resto de los trabajadores. En especial, qué justificaría el trato diferente entre trabajadores del sector público en cuanto a las reglas de acceso

a la justicia. A diferencia de lo que ocurre con las acreencias en general, las deudas laborales están sometidas a una condición específica, señalada en la Constitución Política y que ha de ser cumplida por el legislador: las protecciones que se den a los trabajadores deben ser respetuosas del principio de igualdad. La Corte tampoco advierte prima facie, razón alguna que permitiera una distinción de trato que sólo se podría justificar si es un medio estrictamente necesario. Dada la exigencia de igualdad en el trato a los trabajadores, en especial cuando sus derechos se encuentran en conexidad con el derecho al acceso a la justicia, como ocurre en el presente caso, introducir una regla diferente debe estar estrictamente justificado.

8.4.3. En el presente caso, el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, considera que la norma legal acusada bajo el orden constitucional y legal vigente, no es aplicable a obligaciones laborales; la Federación Nacional de Municipios por su parte sostiene que sí, pero solicita a la Corte que de acuerdo con su jurisprudencia reiterada se declare la exequibilidad condicionada de la norma.[59] Es claro entonces, que la regulación vigente no es precisa en cuanto a cuáles son las condiciones de aplicación del artículo 47 demandado a los procesos ejecutivos en contra de los municipios, en los que se reclamen obligaciones de carácter laboral, y como podría ser interpretada válidamente, como que incluye controversias de este tipo, porque la norma dispone que en todo proceso ejecutivo adelantado contra un municipio debe llevarse a cabo previamente una conciliación, es factible afirmar que el legislador viola los derechos laborales de los trabajadores que tienen deudas reconocidas, pendientes de pago por los dichos entes territoriales, susceptibles de ser reclamadas mediante un proceso ejecutivo, en especial los derechos a 'la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales' (art. 53, CP) y su derecho a la igualdad (art. 13, CP), al exigirles un requisito procesal (la conciliación prejudicial) que está expresamente excluido por la ley para el resto de los trabajadores.

Esto quiere decir que, aunque la norma es ajustada a la Constitución a la luz de los dos primeros cargos analizados, es a la vez inconstitucional a la luz del tercer cargo estudiado. Esto lleva a que la decisión de la Sala sea la de declarar exequible la norma constitucional, bajo el entendido que la misma no es aplicable a los procesos ejecutivos en contra de municipios que puedan tener por objeto el reclamo de deudas laborales reconocidas, a los trabajadores susceptibles de ser cobradas mediante proceso ejecutivo.

(…)

RESUELVE

Declarar ***EXEQUIBLE*** *los apartes acusados del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, 'por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios',* ***bajo el entendido de que el requisito de la conciliación prejudicial no puede ser exigido, cuando los trabajadores tengan acreencias laborales a su favor, susceptibles de ser reclamadas a los municipios mediante un proceso ejecutivo****».* (Subraya el Despacho)

En la Sentencia C-830 de 2013, la guardiana de la Constitución ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia C-533 de 2013.

Observadas entonces las valoraciones efectuadas por la Corte Constitucional en la sentencia transcrita, encuentra el Despacho que le asiste razón a la recurrente, por cuanto en el presente asunto se persigue la ejecución de una obligación surgida en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, por lo que sin mayores elucubraciones se repondrá la decisión adoptada el 22 de abril de 2021 y en consecuencia dejará sin efectos el numeral 1.2 de la parte resolutiva de la mencionada providencia.

Se aclarará que los demás apartes del auto se mantienen incólumes.

Por todo lo anterior y en consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: REPONER la decisión adoptada el 22 de abril de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el numeral 1.2 de la parte resolutiva de la mencionada providencia conforme a lo expuesto.

TERCERO: Los demás apartes del auto quedan incólumes.

CUARTO: Por Secretaría, realícese el conteo del término concedido en el auto contra el que se interpuso recurso observando las previsiones del artículo 118 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
398f05128d66777bfb3f82da9f6036139a75a244af7915d4a367703a0b5b695c
Documento generado en 03/06/2021 12:04:21 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación:	**25307-33-33-001-2021-00108-00**
Demandante:	**LUCY AURORA RIVEROS CANO**
Demandado:	**MUNICIPIO DE GIRARDOT**
Medio de Control:	**EJECUTIVO**
Juez:	**ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver el recurso de reposición interpuesto por la apoderada judicial de la parte ejecutante contra el auto de 22 de abril de 2021 por medio del cual se inadmitió la demanda.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. LA PROVIDENCIA RECURRIDA.

El 22 de abril de 2021[1] se profirió auto con el que se inadmitió la demanda, requiriendo al extremo actor para que en el término de los diez días siguientes a la notificación de la providencia se sirviera:

[1] Archivo denominado «o06AutoInadmite» del Cuaderno Principal del expediente digitalizado

*«**1.1.** Allegue constancia de ejecutoria de la sentencia que pretende ejecutar. **En el caso de no contar con la misma, deberá indicarlo expresamente con el fin de que por la Secretaría del Despacho sea expedida.***

***1.2.** Acredite que se agotó la conciliación prejudicial previo a elevar la solicitud de ejecución.*

1.3.** Acredite el cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»), esto es, envíe la demanda al demandado y al Juzgado en el mismo mensaje. **De la subsanación también debe enviarse mensaje simultáneo al demandado y al Juzgado.

(…)»

2.2. DEL RECURSO INCOADO.

Mediante memorial allegado el 26 de abril de 2021[2], la apoderada judicial de la parte demandante interpuso el recurso de reposición contra el auto proferido el 22 de abril de 2021, con el que se inadmitió la demanda por ella presentada.

Como sustento indicó que la Corte Constitucional en las sentencias C-533 y C-830 de 2013 declaró exequible el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, bajo el entendido de que el requisito de la conciliación prejudicial no puede ser exigido, cuando los trabajadores tengan acreencias laborales a su favor susceptibles de ser reclamadas a los municipios mediante un proceso ejecutivo.

Por lo anterior, aduce, como quiera que en el presente asunto se pretende ejecutar una sentencia en la que se accedió a las pretensiones laborales del demandante, no debe exigirse el requisito establecido en la señalada normativa.

[2] Archivo denominado «oo8RecursoReposicion» del Cuaderno Principal del expediente digitalizado

III. C O N S I D E R A C I O N E S

3.1. Del recurso de reposición.

Señala el artículo 318 del Código General del Proceso:

> **«Artículo 318. *PROCEDENCIA Y OPORTUNIDADES*.** Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.
>
> El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.
>
> El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.
>
> El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.
>
> Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.
>
> **Parágrafo.** Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente»

3.1.2. Se evidencia entonces, la procedencia del recurso de reposición, el cual fue presentado en tiempo, como quiera que la notificación del auto recurrido se surtió por estado de 23 de abril de 2021[3] y el recurso fue radicado el 26 de abril de 2021.

[3] Archivo denominado «007NotificacionEstado23Abril» del cuaderno principal del expediente digitalizado.

3.1.3. Ahora bien, observados los motivos de inconformidad expresados por la apoderada judicial, el Despacho procedió a consultar las sentencias que invocó, encontrando que la Corte Constitucional en la sentencia C-533 de 2013, señaló:

> «***8. El legislador viola los derechos laborales y el derecho a la igualdad de los trabajadores que tienen deudas con municipios, susceptibles de ser reclamadas mediante un proceso ejecutivo***
>
> *Por último, la Sala Plena considera que la respuesta al tercer problema jurídico es afirmativa. Le asiste la razón al accionante cuando acusa a la norma de violar los derechos laborales constitucionales así como el derecho a la igualdad entre los trabajadores.*
>
> *8.1. Tal como se indicó previamente, en la sentencia C-160 de 1999, la Corte decidió que una norma legal que establece la conciliación prejudicial obligatoria en materia laboral, de forma general, sin distinciones y precisiones necesarias para asegurar los derechos fundamentales, en especial, el derecho de acceso a la justicia, es inconstitucional.[54] Concretamente, se estableció que ello era así, a propósito de los procesos laborales ejecutivos. Para la Corte " […] la conciliación no opera en los procesos ejecutivos, porque en razón de su naturaleza la conciliación busca crear una situación de certeza en cuanto a los derechos laborales que el trabajador reclama al empleador, lo cual, por sustracción de materia no se requiere cuando ya se posee un título ejecutivo del cual emana una obligación a cargo de éste que para el trabajador configura un derecho cierto e indiscutible que no se puede renunciar ni negociar, como lo prevé el art. 53 de la Constitución Política."[55] Esta posición jurisprudencial ha sido reiterada en varias ocasiones, en especial en la sentencia C-893 de 2001,[56] en la cual se decidió que "sí es inconstitucional la norma que consagra la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en asuntos laborales"; indicó que una regla legal de ese estilo "[…] quebranta abiertamente el principio constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta, según el cual, corresponde a la Ley tener en cuenta la facultad de los trabajadores para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, la cual se ve afectada cuando se exige al particular acudir a la conciliación como requisito previo a la presentación de la demanda.".[57]*
>
> *8.2. En tal medida, la restricción al derecho laboral que supone la exigencia de la conciliación como un requisito de procedibilidad de la acción ejecutiva, es una medida legislativa irrazonable constitucionalmente, en tanto se vale de un medio prohibido. Esto es, si bien el artículo 47 de la Ley1551 de 2012 busca fines que no sólo son legítimos constitucionalmente, sino que además son imperiosos, el medio por el cual optó el legislador está prohibido constitucionalmente, como lo ha señalado la jurisprudencia. En tanto el artículo 53 de la Constitución contempla el derecho a 'la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales', la jurisprudencia constitucional ha indicado que una norma que desconozca abiertamente esta restricción, vulnera un mandato expreso de la Constitución.*
>
> *8.3. La jurisprudencia también ha sostenido que exigir la conciliación prejudicial como requisito procesal en materia de procesos judiciales de forma general e imprecisa es una herramienta legal irrazonable constitucionalmente, entre otros motivos, cuando se emplean normas vagas y ambiguas o altamente*

indeterminadas, que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos judiciales laborales.[58] *El artículo 47 de la Ley 1551 de 2012 fija el requisito procesal de la conciliación prejudicial en procesos ejecutivos contra municipios de manera amplia, pero a la vez se establecen una serie de parámetros y reglas que hacen más o menos precisa la aplicación de la figura. Sin embargo, al hacer referencia a los procesos ejecutivos en contra de municipios, sin distinción alguna, se puede concluir que la norma acusada contempla también las obligaciones de carácter laboral.*

8.3.1. Podría alegarse que la norma acusada debe ser interpretada de acuerdo con la Constitución Política y la jurisprudencia constitucional en la materia. De hecho, la participación del Ministerio de Hacienda dentro del presente proceso, interpreta que la norma contempla el requisito de la conciliación prejudicial en un "tipo de procesos [que] hace referencia a obligaciones patrimoniales adquiridas por parte de los municipios con los particulares. Son obligaciones dinerarias no laborales […]". Sin duda que es una forma adecuada de interpretar la norma a la luz de la Constitución Política.

8.3.2. Pero el proceso ha servido para mostrar que no es ésta la única interpretación posible. La incertidumbre de las reglas se evidencia al contrastar la posición del Ministerio, por una parte, y de la Federación Colombiana de Municipios por otra. En su intervención, la Federación indica que "[…] cuando la conciliación se trate de créditos laborales no podrá conducir al desconocimiento de derechos ciertos e indiscutibles, tan sólo se ocupará de la programación del pago según las posibilidades de flujo de recursos de los Municipios y la mayor conveniencia del convocante."

8.4. Adicionalmente la Sala Plena de la Corte considera que la imposición del requisito procesal de la conciliación prejudicial en materia de procesos ejecutivos laborales que se adelante en contra de un municipio constituye una violación a la especial protección que brinda el principio de igualdad a los trabajadores.

8.4.1. El artículo 53 establece los principios que han de regir la ley laboral en el estado social de derecho. Entre otros, además del respeto al derecho constitucional a irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales, se contempla expresamente el principio de igualdad de oportunidades a los trabajadores. En tal medida, se torna categórica la protección que ha dado la Constitución, la ley y la jurisprudencia a sus derechos, impidiendo que se les imponga el requisito procesal de la conciliación prejudicial, especialmente si se hace mediante normas vagas y ambiguas o altamente indeterminadas, y sin fijar parámetros básicos como, por ejemplo, la imposibilidad de conciliar derechos laborales mínimos o de exigirla especialmente para procesos ejecutivos.

8.4.2. Pero en cualquier caso, no existe en el proceso defensa alguna de por qué no se viola el derecho a la igual protección de los trabajadores bajo la Constitución, al establecer desde las propias reglas que regulan los derechos procesales, un trato diferente entre los trabajadores municipales y el resto de trabajadores. Por qué las reglas del proceso ejecutivo para reclamar derechos laborales han de ser unas para los trabajadores de las entidades territoriales y otras para el resto de los trabajadores. En especial, qué justificaría el trato diferente entre trabajadores del sector público en cuanto a las reglas de acceso a la justicia. A diferencia de lo que ocurre con las acreencias en general, las deudas laborales están sometidas a una condición específica, señalada en la

Constitución Política y que ha de ser cumplida por el legislador: las protecciones que se den a los trabajadores deben ser respetuosas del principio de igualdad. La Corte tampoco advierte prima facie, razón alguna que permitiera una distinción de trato que sólo se podría justificar si es un medio estrictamente necesario. Dada la exigencia de igualdad en el trato a los trabajadores, en especial cuando sus derechos se encuentran en conexidad con el derecho al acceso a la justicia, como ocurre en el presente caso, introducir una regla diferente debe estar estrictamente justificado.

8.4.3. En el presente caso, el Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, considera que la norma legal acusada bajo el orden constitucional y legal vigente, no es aplicable a obligaciones laborales; la Federación Nacional de Municipios por su parte sostiene que sí, pero solicita a la Corte que de acuerdo con su jurisprudencia reiterada se declare la exequibilidad condicionada de la norma.[59] Es claro entonces, que la regulación vigente no es precisa en cuanto a cuáles son las condiciones de aplicación del artículo 47 demandado a los procesos ejecutivos en contra de los municipios, en los que se reclamen obligaciones de carácter laboral, y como podría ser interpretada válidamente, como que incluye controversias de este tipo, porque la norma dispone que en todo proceso ejecutivo adelantado contra un municipio debe llevarse a cabo previamente una conciliación, es factible afirmar que el legislador viola los derechos laborales de los trabajadores que tienen deudas reconocidas, pendientes de pago por los dichos entes territoriales, susceptibles de ser reclamadas mediante un proceso ejecutivo, en especial los derechos a 'la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales' (art. 53, CP) y su derecho a la igualdad (art. 13, CP), al exigirles un requisito procesal (la conciliación prejudicial) que está expresamente excluido por la ley para el resto de los trabajadores.

Esto quiere decir que, aunque la norma es ajustada a la Constitución a la luz de los dos primeros cargos analizados, es a la vez inconstitucional a la luz del tercer cargo estudiado. Esto lleva a que la decisión de la Sala sea la de declarar exequible la norma constitucional, bajo el entendido que la misma no es aplicable a los procesos ejecutivos en contra de municipios que puedan tener por objeto el reclamo de deudas laborales reconocidas, a los trabajadores susceptibles de ser cobradas mediante proceso ejecutivo.

(…)

RESUELVE

Declarar ***EXEQUIBLE*** *los apartes acusados del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, 'por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios',* ***bajo el entendido de que el requisito de la conciliación prejudicial no puede ser exigido, cuando los trabajadores tengan acreencias laborales a su favor, susceptibles de ser reclamadas a los municipios mediante un proceso ejecutivo****».* (Subraya el Despacho)

En la Sentencia C-830 de 2013, la guardiana de la Constitución ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia C-533 de 2013.

Observadas entonces las valoraciones efectuadas por la Corte Constitucional en la sentencia transcrita, encuentra el Despacho que le asiste razón a la recurrente, por cuanto en el presente asunto se persigue la ejecución de una obligación surgida en proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, por lo que sin mayores elucubraciones se repondrá la decisión adoptada el 22 de abril de 2021 y en consecuencia dejará sin efectos el numeral 1.2 de la parte resolutiva de la mencionada providencia.

Se aclarará que los demás apartes del auto se mantienen incólumes.

Por todo lo anterior y en consecuencia, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT**,

R E S U E L V E

PRIMERO: REPONER la decisión adoptada el 22 de abril de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el numeral 1.2 de la parte resolutiva de la mencionada providencia conforme a lo expuesto.

TERCERO: Los demás apartes del auto quedan incólumes.

CUARTO: Por Secretaría, realícese el conteo del término concedido en el auto contra el que se interpuso recurso observando las previsiones del artículo 118 del Código General del Proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

Firmado Por:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
37c529456d8a6685501ad1fffa870ebaf35999884c976bd835f30eac831f220a
Documento generado en 03/06/2021 12:04:22 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00111-00**
DEMANDANTE:	**MIRYAM CONSUELO HIDALGO REYES**
DEMANDADO:	**COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL MUNICIPIO DE GIRARDOT**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por la señora MIRYAM CONSUELO HIDALGO REYES, por conducto de apoderado judicial, contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y el MUNICIPIO DE GIRARDOT por el medio de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. La señora MIRYAM CONSUELO HIDALGO REYES, por conducto de apoderado judicial, el 14 de abril de 2021 radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*), con el propósito de obtener la nulidad del Acuerdo No. 20182210000526 de 12 de enero de 2018 proferido por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL *«por el cual se establecen las*

reglas del concurso abierto de mérito para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General, de carrera administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Girardot, proceso de selección No. 535 de 2017-Cundinamarca» y, la nulidad de los actos administrativos contentivos en el Decreto 139 de 15 de septiembre de 2017 «*Por la cual se ajusta el Manuel especifico de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Alcaldía del Municipio de Girardot-Cundinamarca*» y en la Resolución No. 0638 de 2020 «*por medio de la cual se efectúa un nombramiento en período de prueba y se da por terminado un nombramiento en provisionalidad*» proferidos por el MUNICIPIO DE GIRARDOT.

2.2. El 26 de abril de 2021 el proceso ingresó al Despacho (*«005ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de la demanda con el objeto de decidir sobre su admisión.

Así las cosas, se advierte que la demanda no cumple con las exigencias establecidas en el numeral 2º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concerniente a que «*lo que se pretenda*» se debe expresar «*con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado,* ***con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones***». Lo anterior, por cuanto plasma de manera general e indistinta las pretensiones de la demanda, toda vez, que como el mismo apoderado lo señala en líbelo introductorio, acumula pretensiones del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 con las del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 *es judem*, sin que se expresen con precisión y claridad para cada uno de los actos administrativos enjuiciados, pues, nótese como el abogado demandante **aduce pretender únicamente la nulidad** del Acuerdo No. 20182210000526 de 12 de enero de 2018 proferido por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, no obstante, a título de

restablecimiento del derecho solicita de dicha Entidad el pago de acreencias laborales hasta la fecha de reintegro de la demandante, situación que, en criterio de este Despacho, no se enmarca dentro de la posibilidad de acumulación de pretensiones en los términos del artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que se le requerirá que exprese con claridad, precisión y de manera separada las pretensiones para cada uno de los actos administrativos demandados.

Siguiendo con la lectura de la demanda, se observa que esta tampoco cumple con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, relativo a que la parte actora debe aportar «*las documentales que se encuentren en su poder*», lo anterior en atención a que no allegó la «*sentencia del Consejo de Estado, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), radicación número: 11001-03-25-000-2013-01304-00(3319-13)*», documento enunciado como adjunto (folio 10 «*002DemandaPoderAnexos*»).

Motivos por los cuales se hace necesario requerir al apoderado judicial de la señora MIRYAM CONSUELO HIDALGO REYES para que subsane en debida forma la demanda. Advirtiéndole que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales y dispuestas para tal fin** de la entidad demandada de **manera simultánea**[1], esto es, en un mismo correo «*en o a modo copia*», en los términos del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»).

En consecuencia, **SE DISPONE:**

[1] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial de la señora MIRYAM CONSUELO HIDALGO REYES para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, **SO PENA DE RECHAZO**, subsane la demanda en el sentido de que:

1.1. De conformidad con el numeral 2º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, exprese con claridad, precisión y de manera separada las pretensiones para cada uno de los actos administrativos demandados, teniendo en cuenta las previsiones realizadas en la parte considerativa de esta providencia.

1.2. Allegue, de conformidad con numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, de manera íntegra y legible la «*sentencia del Consejo de Estado, consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Bogotá D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), radicación número: 11001-03-25-000-2013-01304-00(3319-13)*», documento enunciado como adjunto (folio 10 «*002DemandaPoderAnexos*»).

SEGUNDO: ADVIÉRTASELE Y RECUÉRDASELE al apoderado judicial de la señora MIRYAM CONSUELO HIDALGO REYES que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales** de las entidades demandadas de **manera simultánea**, esto es, en un mismo correo electrónico, situación que se deberá acreditar, tal como lo prevé el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
CB4E77966C77F2F50695519BB10C243100817BCFA4D30CB40FEDAA0DE11B6205
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:23 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00113-00**
DEMANDANTE:	**MIGUEL ÁNGEL CELIS PEÑARANDA**
DEMANDADO:	**MUNICIPIO DE TOCAIMA**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor MIGUEL ÁNGEL CELIS PEÑARANDA, en nombre propio, contra el MUNICIPIO DE TOCAIMA por el medio de control de nulidad.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 20 de abril de 2020 el señor MIGUEL ÁNGEL CELIS PEÑARANDA radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, correspondiéndole su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*), con el propósito de obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. 054 y 055 de 28 de mayo de 2019, por medio de las cuales el Ente territorial demandado autorizó la subdivisión material de los predios denominados *«Cavillino»* y *«Asia»* en la vereda conocida como *«San Pablo»* del municipio de Tocaima, respectivamente.

2.2. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer («*005ConstanciaDespacho*»).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de la demanda con el objeto de decidir sobre su admisión.

En ese orden, se advierte que la demanda no cumple con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concerniente a que debe contener «*los hechos y omisiones que sirven de fundamento a las pretensiones,* ***debidamente determinados, clasificados y numerados***», lo anterior por cuanto que los esbozados en el acápite de «*III.-CONSIDERACIONES DE HECHO*» (folios 6 a 26 «*002Demanda*») no están debidamente determinados, clasificados y numerados, entre otras, de manera cronológica. Aunado a que también se prestan para confundirse con fundamentos de derecho o con inferencias inductivas o deductivas del demandante, lo cual está proscrito.

Del mismo modo, se observa que la demanda tampoco satisface la exigencia del numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, relativo a que la parte actora debe aportar «*las documentales que se encuentren en su poder*», lo anterior en atención a que:

- Se allegó de manera ilegible los documentos obrantes a folios 35 a 38 «*PRUEBAS DOCUMENTALES LOTEO ILEGAL SAN PABLO -PARTE 01*» de la carpeta «*anexo 02 – PRUEBAS DOCUMENTALES*» de la carpeta «*002AnexosNulidad*» del cuaderno «*01Cuaderno Principal*» y 51 a 57 «*PRUEBAS DOCUMENTALES LOTEO ILEGAL SAN PABLO -PARTE 02*» de la carpeta «*anexo 02 – PRUEBAS DOCUMENTALES*» de la carpeta «*002AnexosNulidad*» del cuaderno «*01Cuaderno Principal*».

-No se remitió los siguientes documentos enunciados en el acápite de pruebas de la demanda (folios 58 a 66 *«002Demanda»* de la carpeta *«01Cuaderno Principal»*): **(a)** *«1. Copia del EOT del Municipio de Tocaima – Acuerdo Municipal No. 42 de 2001, y No. 024 de 2008 (…)»*, **(b)** *«4. Fotos aéreas tomadas en GOOGLE EARTH, años 2019 y 2020, donde se evidencia la afectación en capa vegetal, flora y cuerpos hídricos, como consecuencia de los movimientos de tierra, descapote, intervención de maquinaria amarilla para realizar trazado de vías, y explanación»*, **(c)** *«27. "Informe de visita técnica ocular realizada por el actual secretario de la Oficina de planeación y Gestión del Riesgo, a los predios Asía y Clavillino, ubicados en la vereda San Pablo del Municipio de Tocaima, remitido al Inspector de Policía con comunicación No. 2020-SPFR-0868 del 19 de junio de 2020 (…)»*, **(d)** *«35. Radicado No. 2019-E-4372 del 22 de julio de 2019, mediante el cual se registra el INFORME DE POLICÍA, que establece que el 20 de julio se verificó una actividad consistente en (…)»*, **(e)** *«36. Comunicación No. 4643 del 1 de agosto de 2019 (…)»*, **(f)** *«37. Comunicación No. 000817 del 1º de agosto de 2019, mediante la cual vecinos de la vereda de san pablo, solicitaron ante la PERSONERÍA MUNICIPAL DE TOCAIMA, atender el llamado para evitar que se siga ocasionando daño ambiental y se contiene adelantando un loteo no permitido»* y, **(g)** *«43. Radicado No. 0604 de 30 de enero de 2020, correspondiente al Informe del Comandante de Estación de Policía de Tocaima (…)»*.

Motivos por los cuales se hace necesario requerir a la parte actora en tal sentido para que subsane en debida forma la demanda.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al señor MIGUEL ÁNGEL CELIS PEÑARANDA para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, **SO PENA DE RECHAZO**, subsane la demanda en el sentido de que:

1.1. Relate, en atención a lo previsto en el numeral 3º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los hechos y omisiones que sirven de fundamento a sus pretensiones de manera determinada, clasificada, numerada, de manera cronológica y sin inferencias

inductivas o deductivas del demandante ya que ello debe realizarse en el acápite correspondiente a la explicación del concepto de la violación.

1.2. Allegue, de conformidad con numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, de manera **íntegra y legible**:

> 1.2.1. Los documentos obrantes a folios 35 a 38 *«PRUEBAS DOCUMENTALES LOTEO ILEGAL SAN PABLO -PARTE 01»* de la carpeta *«anexo 02 – PRUEBAS DOCUMENTALES»* de la carpeta *«002AnexosNulidad»* del cuaderno *«01Cuaderno Principal»* y 51 a 57 *«PRUEBAS DOCUMENTALES LOTEO ILEGAL SAN PABLO -PARTE 02»* de la carpeta *«anexo 02 – PRUEBAS DOCUMENTALES»* de la carpeta *«002AnexosNulidad»* del cuaderno *«01Cuaderno Principal»*.
>
> 1.2.2. La documental enunciada en el acápite de pruebas de la demanda, la cual fue enunciada, pero no remitida (folios 58 a 66 *«002Demanda»* de la carpeta *«01Cuaderno Principal»*): **(a)** *«1. Copia del EOT del Municipio de Tocaima – Acuerdo Municipal No. 42 de 2001, y No. 024 de 2008 (…)»*, **(b)** *«4. Fotos aéreas tomadas en GOOGLE EARTH, años 2019 y 2020, donde se evidencia la afectación en capa vegetal, flora y cuerpos hídricos, como consecuencia de los movimientos de tierra, descapote, intervención de maquinaria amarilla para realizar trazado de vías, y explanación»*, **(c)** *«27. "Informe de visita técnica ocular realizada por el actual secretario de la Oficina de planeación y Gestión del Riesgo, a los predios Asía y Clavillino, ubicados en la vereda San Pablo del Municipio de Tocaima, remitido al Inspector de Policía con comunicación No. 2020-SPFR-0868 del 19 de junio de 2020 (…)»*, **(d)** *«35. Radicado No. 2019-E-4372 del 22 de julio de 2019, mediante el cual se registra el INFORME DE POLICÍA, que establece que el 20 de julio se verificó una actividad consistente en (…)»*, **(e)** *«36. Comunicación No. 4643 del 1 de agosto de 2019 (…)»*, **(f)** *«37. Comunicación No. 000817 del 1º de agosto de 2019, mediante la cual vecinos de la vereda de san pablo, solicitaron ante la PERSONERÍA*

MUNICIPAL DE TOCAIMA, atender el llamado para evitar que se siga ocasionando daño ambiental y se contiene adelantando un loteo no permitido» y, **(g)** *«43. Radicado No. 0604 de 30 de enero de 2020, correspondiente al Informe del Comandante de Estación de Policía de Tocaima (…)»*.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
81F48C5704F492DF800B586ABEB0335E595C1FA11A61A9A95B53D3160AB8B33E
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:25 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00114-00**
DEMANDANTE:	**LUIS EVELIO GALLEGO ESCAMILLA**
DEMANDADO:	**NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por el señor LUIS EVELIO GALLEGO ESCAMILLA, por conducto de apoderado judicial, contra la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 26 de febrero de 2021 el señor LUIS EVELIO GALLEGO ESCAMILLA, por conducto de apoderado judicial, radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Bogotá D.C., correspondiéndole su conocimiento Al JUZGADO 46 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. (*«02ACTAREPARTO»* de la carpeta *«002ActuaciónJuzgado46AdministrativoBogota»*), con el propósito de obtener la nulidad

de la Resolución No. 282169 de 28 de julio de 2020, mediante la cual la Entidad demandada reconoció las cesantías definitivas al actor.

2.2. Mediante proveído de 19 de marzo de 2021 el JUZGADO 46 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. remitió el asunto de la referencia a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, por considerar que carecía de competencia por el factor territorial en atención a que el último lugar de prestación de servicios del actor fue en Nilo, Cundinamarca (*«03AUTOREMITEPORCOMPETENCIA»* de *«002ActuacionJuzgado46AdministrativoBogota»*).

2.3. Remitido el expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, y efectuado el correspondiente reparto, el 20 de abril de 2021 le correspondió su conocimiento a este Despacho (*«004ActaReparto»*).

2.2. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«005ConstanciaDespacho»*).

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Puestas en ese estadio las cosas, el Despacho abordará el estudio de la demanda con el objeto de decidir sobre su admisión.

Así las cosas, se advierte que la demanda no cumple con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, relativo a que la parte actora debe aportar «*las documentales que se encuentren en su poder*», lo anterior en atención a que no se allegó el «*certificado de desacuartelamiento*» mencionado en el acápite de pruebas del líbelo introductorio (folio 7 *«01DEMANDAYANEXOS»* de la carpeta *«002ActuacionJuzgado46AdministrativoBogota»*).

Seguidamente, se observa que la demanda tampoco cumple con el requisito del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «*Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)*»)- concordante con el inciso 4º del artículo 6º del Decreto 806 de 2020 (aplicable al momento de presentación de la demanda), esto es, que el demandante al momento de presentar la demanda debe de manera **simultánea**[1] enviar, por medio electrónico, copia de ella y de sus anexos a los demandados y/o parte demandada, es decir, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

Del mismo modo, se constata que la demanda no satisface la exigencia preceptuada en el numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consistente en que la demanda se debe acompañar con la «*constancia de publicación, comunicación, notificación o ejecución*» del acto administrativo acusado, lo anterior por cuanto que no obra en el expediente la constancia de notificación, publicación, comunicación o ejecución de la Resolución No. 282169 de 28 de julio de 2020.

Por último, se advierte que el mandato visible en el folio 15 «*01DEMANDAYANEXOS*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgado46AdministrativoBogotas*» no satisface las exigencias, bien sea, del artículo 74 del Código General del Proceso o del artículo 5º del Decreto 806 de 2020, en consideración a que el mandato «*no fue presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario*» (artículo 74 del Código General del Proceso), ni tampoco se confirió «*mediante*[2] *mensaje de datos*» (artículo 5º Decreto 806 de 2020).

Motivos por los cuales se hace necesario requerir al apoderado judicial del señor LUIS EVELIO GALLEGO ESCAMILLA para que subsane en debida forma la demanda. Advirtiéndole que el escrito de subsanación se debe remitir

[1] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.
[2] https://dle.rae.es/mediante: 1. prep. Por medio de, con, con la ayuda de.

tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **dispuestas para tal fin** de los demandados de **manera simultánea**[3], esto es, en un mismo correo «*en o a modo copia*», en los términos del numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)»).

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE al apoderado judicial del señor LUIS EVELIO GALLEGO ESCAMILLA para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, **SO PENA DE RECHAZO**, subsane la demanda en el sentido de que:

1.1. Allegue, de conformidad con numeral 5º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, concordante con el numeral 2º del artículo 166 ibidem, de manera íntegra y legible el «*certificado de desacuartelamiento*» mencionado en el acápite de pruebas del libelo introductorio (folio 7 «*01DEMANDAYANEXOS*» de la carpeta «*002ActuacionJuzgado46AdministrativoBogota*»).

1.2. Acredite el cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (numeral adicionado por el artículo 35 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 «*Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)*»), esto es, que remita por medio electrónico y de manera **simultánea** la copia de la demanda y de sus anexos a los demandados a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin, esto es, en un mismo correo «*en o a modo copia*».

[3] https://dle.rae.es/simultanear: 1. tr. Realizar en el mismo espacio de tiempo dos operaciones o propósitos.

1.3. Satisfaga la exigencia establecida en el numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y allegue la «*constancia de publicación, comunicación, notificación, o ejecución*» de la Resolución No. 282169 de 28 de julio de 2020

1.4. Allegue el poder debidamente conferido donde el asunto este claramente identificado, determinado e individualizado con toda previsión y dirigido al juez de conocimiento, de conformidad con el artículo 74 del Código General del Proceso. Debe recordarse que el poder debe remitirse teniendo en cuenta lo previsto en el artículo en comento o en el artículo 5º del Decreto 806 de 4 de junio de 2020.

SEGUNDO: ADVIÉRTASELE Y RECUÉRDASELE al apoderado judicial del señor LUIS EVELIO GALLEGO ESCAMILLA que el escrito de subsanación se debe remitir tanto a la dirección electrónica de este Despacho como a las direcciones electrónicas **oficiales** de las entidades demandadas de **manera simultánea**, esto es, en un mismo correo electrónico, situación que se deberá acreditar, tal como lo prevé el numeral 8º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
316B1A3E57041CD5C93FAA05B1F11B91701F1705B8A1183FBD318E78E458D495
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:26 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00155-00**
DEMANDANTE:	**GLORIA ROA CAMACHO**
DEMANDADO:	**CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR-**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

Procede el Despacho a decidir sobre la aprobación de la conciliación extrajudicial realizada ante la Procuraduría 199 Judicial I para Asuntos Administrativos de 20 de abril de 2020, en la que obra como convocante la señora **GLORIA ROA CAMACHO,** por conducto de apoderada judicial, y como convocada la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR-.**

I. A N T E C E D E N T E S

1.1. El 16 de marzo de 2021 fue radicada ante la PROCURADURÍA 199 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE GIRARDOT la solicitud de conciliación extrajudicial que por conducto de apoderada judicial presentó la señora GLORIA ROA CAMACHO (Folio 1 y 67 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

1.2. La apoderada judicial de la señora GLORIA ROA CAMACHO en la mencionada convocatoria solicitó (Folio 5 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»):

«PRIMERA: Se declare la NULIDAD parcial del ACTO ADMINISTRATIVO contenido en la comunicación oficial No. Oficio ID 5522774 de fecha 16 de Marzo de 2020, emitida por la Jefe Jurídica de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por medio de la cual se resolvió la petición de interés particular intitulada "PETICIÓN DE REAJUSTE Y PAGO RETROACTIVO PARTIDAS ASIGNACIÓN" formulada el 25 de Febrero del año 2.020.

Como consecuencia de la anterior y A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

PRIMERO: Condénese a LA NACIÓN–MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, a reconocer y pagar a favor de La Señora la GLORIA ROA CAMACHO, por concepto de reajuste de asignación de retiro, todos los valores que dejaron de incrementársele y pagársele con sus mesadas y primas de asignación de retiro, durante el lapso comprendido entre Primero (1) de Enero del 2017, hasta el 31 de Diciembre del 2019, como consecuencia de la desatención del principio de oscilación y haberse mantenido estáticas y sin aumento, las partidas de 1/12 DE LA PRIMA DE NAVIDAD, 1/12 DE LA PRIMA DE SERVICIOS, 1/12 PRIMA DE VACACIONES y SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN de su asignación de retiro.

Las sumas que resulten de la anterior declaración deberán ser actualizadas, mes a mes, tomando como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con lo señalado en el inciso final del artículo 187 del CPACA, de acuerdo con la fórmula que ha establecido el H. Consejo de Estado, para el efecto, así: (...).

SEGUNDO: Condénese a LA NACIÓN –MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, a reconocer y pagar a favor de la señora La Señora GLORIA ROA CAMACHO, por concepto de retroactivos, en ocasión al incremento del 4.5% sobre el ajuste de salarios y prestaciones.

TERCERO: Se declare que en el presente asunto no hay lugar a aplicar la prescripción de los valores que en el presente se reclaman, por corresponder a suma que fueron impagadas por la omisión y/o interpretación errónea que, de manera general, realizó la NACIÓN–MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL–CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL a las normas prestacionales del personal escalafonado en el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, y bajo el entendido que, según el precedente judicial del H. Consejo de Estado "el fenómeno de la prescripción opera sobre mesadas y no sobre el reajuste de la asignación de retiro" y al violarse el principio de oficiosidad dispuesto en el artículo 1010 del Decreto 1091 de 1995».

1.3. El 16 de marzo de 2021, el PROCURADOR 199 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS admitió la referida solicitud de conciliación extrajudicial (Folio 67 *«002ExpedienteConciliacionJudicial»*).

1.4. El 25 de junio de 2020, en virtud de la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del Covid-19, se llevó de manera «*NO presencial*» la audiencia de conciliación extrajudicial de la referencia, en la que se llegó al siguiente acuerdo (Folios 126 a 129 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»):

> *«(…) 1) Que la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR- pagará o consignará a favor de GLORIA ROA CAMACHO, la suma total de Un Millón Setecientos Diecisiete Mil Ocho Pesos Moneda Corriente ($1.717.008 M/CTE), por concepto del ciento por ciento (100%) del capital respecto de la actualización de las partidas computables de la asignación mensual de retiro denominadas subsidio de alimentación y doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones conforme lo establecido en el artículo 42 del Decreto 4433 de 2004, con una indexación del setenta y cinco (75%), suma dineraria que se cancelarán dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de la cuenta de cobro con los documentos pertinentes en la entidad, tiempo en el cual no habrá lugar al pago de intereses, aplicando la prescripción trienal contemplada en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, norma prestacional vigente al momento de la adquisición del derecho a gozar de la prestación, es decir, la prescripción trienal de las mesadas que conlleven la reliquidación planteada, con anterioridad al 25 de febrero de 2017 (…)».*

1.5. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho para proveer (*«005ConstanciaDespacho»*).

Puestas en ese estadio las cosas, y para emitir pronunciamiento alguno respecto de la aprobación o improbación del acta de conciliación es del caso hacer las siguientes,

II. C O N S I D E R A C I O N E S

2.1 DE LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

El artículo 116 de la Carta Magna prevé la conciliación como uno de los mecanismos que permiten la solución ágil y efectiva para la solución de los conflictos que se suscitan entre particulares y, entre el Estado y aquellos.

La Conciliación lleva inmersa la vigencia de los principios de economía, celeridad, eficiencia, eficacia en la solución de los conflictos y como garantía del acceso efectivo a la administración de justicia.

De conformidad con el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, podrán conciliar, total o parcialmente, prejudicial o judicialmente, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En materia Contenciosa Administrativa la Ley autoriza el uso de este mecanismo, siempre que se acrediten unas exigencias especiales que deben ser valoradas. Al respecto la jurisprudencia del Consejo de Estado[1] ha sido reiterada al referirse que el acuerdo conciliatorio se someterá a los siguientes supuestos de aprobación:

> *«(…)*
>
> *- Que no haya operado el fenómeno procesal de la caducidad de la acción (art. 61 ley 23 de 1991, modificado por el art. 81 ley 446 de 1998).*
>
> *- Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 Ley 23 de 1991 y 70 Ley 446 de 1998).*
>
> *- Que las partes estén debidamente representadas y que tales representantes tengan capacidad para conciliar.*
>
> *-Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65ª Ley 23 de 1991 y art. 73 Ley 446 de 1998).*[2]
>
> *- Que el solicitante actúe a través de abogado titulado (parágrafo 3 del artículo 1 de la Ley 640 de 2001).*
>
> *- Que tratándose de conciliaciones con entidades y organismos de derecho público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y de los entes descentralizados de estos mismos niveles,*

[1]Ver, entre otras, las providencias radicadas bajo los números: 21.677, 22.557, 23.527, 23.534 y 24.420 de 2003.
[2]Consejo de Estado. Auto del 21 de octubre de 2009, radicado 36.221, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

deberán aportar el acta del COMITÉ DE CONCILIACIÓN (artículo 65B de la Ley 23 de 1991, adicionado por el artículo 75 de la ley 443 de 1998)[3]*».*

2.2. DE LA COMPETENCIA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

El artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala que corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, además de los relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.

2.3 DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD CONVOCADA

Descendiendo al *sub - examine*, quien obra como Entidad convocada es el CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, establecimiento público de orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrita al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, que se encuentra integrada al sector descentralizado por servicios de orden nacional, a partir de lo regulado por el artículo 38, numeral 2º, literal a) de la Ley 489 de 1998[4].

---

[3] En la exposición de motivos al proyecto de ley 127/90 Cámara "por la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales" (ley 23 de 1991) el gobierno señaló: "5. Conciliación en el campo contencioso-administrativo...La conciliación se realizará bajo la responsabilidad del Fiscal de la Corporación, y bajo el control posterior de la Sala del Tribunal o del Consejo que corresponda, para garantizar a plenitud los derechos del Estado." (SENADO DE LA REPÚBLICA, Historia de las leyes, Legislatura 1991-1992 Tomo III, Pág. 88 y 89, subrayas no originales). Tan importante se consideró el control de legalidad posterior que luego en la ponencia para primer debate al citado proyecto el Representante a la Cámara Héctor Elí Rojas indicó: "...El pliego de modificaciones incluye mecanismos de control jurisdiccional sobre la conciliación prejudicial para, en todo caso, tener la seguridad de que los intereses del Estado no resulten lesionados o traicionados en dicho trámite" (Historia de las leyes, Op. Cit. p. 97).

[4] Sentencia de 19 de julio de 2018, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, radicación número: 52001-23-31-000-2012-00174-01 (1869-17).

En relación, es del cado hacer referencia a lo manifestado por el H. Consejo de Estado en las sentencias de 5 y 19 de julio de 2018[5], las cuales describen la naturaleza jurídica de la CAJA DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, de la siguiente forma:

> ***«1.1.1 De la naturaleza jurídica de la asignación de retiro y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.***
>
> ***(…)***
>
> *La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, creada y reglamentada por los Decretos 0417 y 3075 de 1955, 782 de 1956, 2343 de 1971, 2003 de 1984 y 823 de 1995,* ***es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, que se encuentra integrada al sector descentralizado por servicios del orden nacional, a partir de lo regulado por el artículo 38, numeral 2, literal a) de la Ley 489 de 1998.***
>
> *Según los artículos 5° y 6° del Acuerdo 008 del 19 de octubre de 2001, por el cual se adoptan los estatutos internos de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, su objetivo fundamental es reconocer y pagar las asignaciones de retiro al personal de oficiales, suboficiales, personal del nivel ejecutivo, agentes y demás estamentos de la Policía Nacional que adquieran el derecho a tal prestación, así como la sustitución pensional a sus beneficiarios y desarrollar la política y los planes generales que en materia de servicios sociales de bienestar adopte el Gobierno Nacional respecto de dicho personal.*
>
> *De acuerdo con el artículo 3.10 de la Ley 923 de 2004, las Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional son las entidades responsables de las labores de administración de aportes, reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así como de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes; aspectos absolutamente independientes del reconocimiento de las acreencias laborales causadas con ocasión de la prestación del servicio de los servidores de la entidad, que como empleadora tiene atribuida la Policía Nacional, es decir, las propias de la relación de trabajo*» (Destaca el Despacho).

2.4. DE LA COMPETENCIA DEL DESPACHO PARA RESOLVER EL PRESENTE ASUNTO.

Este despacho es competente para decidir sobre la legalidad del acuerdo conciliatorio *sub-lite*, por cuanto el último lugar de prestación de servicios fue

---

-Sentencia de 5 de julio de 2018, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, radicación número: 19001-23-33-000-2015-00315-01 (3075-17).

[5] *Ibidem.*

en la «*Estación de Policía de Fusagasugá (DECUN)*», el cual se ubica dentro de su comprensión territorial[6]; se suscitó con ocasión a la solicitud de la reliquidación y reajuste de la asignación de retiro del convocante conforme a lo establecido en los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004, según el aumento decretado por el Gobierno Nacional respecto de las partidas computables de la asignación mensual de retiro denominadas subsidio de alimentación y doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones. Del mismo modo, el monto de la pretensión y del pago acordado no supera los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.5. DE LOS REQUISITOS PARA APROBAR LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

2.5.1. Caducidad de la Acción:

Tal como lo consagra el literal c) del numeral 1º del artículo 164 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cuando se pretende la nulidad y restablecimiento un derecho, podrá demandarse en cualquier tiempo, cuando la demanda se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas.

En el presente asunto, no opera la caducidad, dado que se reclama la nulidad del acto que niega la reliquidación y/o reajuste de la asignación de retiro de la señora GLORIA ROA CAMACHO, razón por la cual este acto es demandable en cualquier tiempo (Folios 21 a 26 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

2.5.2 Derechos económicos disponibles por las partes:

Se trata del pago de unos derechos laborales en favor de la Convocante.

En este sentido, las partes acordaron en relación con la actualización de las partidas computables de la asignación de retiro, denominadas subsidio de

[6] Folios 4, 13 y 27 a 62 «002ExpedienteConciliacionJudicial».

alimentación y doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones: **i)** que se pagaría la suma equivalente al cien por ciento (100%) del capital; **ii)** que el tiempo de pago después de la aprobación judicial de la conciliación sería dentro de los seis (6) meses siguientes a la radicación de cuenta de cobro con los documentos pertinentes en la Entidad; **iii)** que se reconocería un valor correspondiente al 75% de la indexación, y, **iv)** que no se reconocería valor alguno por intereses (Folios 126 a 129 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

Sobre ese respecto, el Consejo de Estado[7] ha establecido la posibilidad para acudir a la conciliación en temas pensionales cuando con aquella se logre el reconocimiento de los derechos ciertos e indiscutibles del administrado, señalando:

> «*Ahora bien en el campo del derecho administrativo laboral, la Constitución Política establece la facultad de conciliación únicamente sobre derechos inciertos y discutibles, así como la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social y de los beneficios mínimos establecidos en normas laborales (arts. 483 y 534 de la CP).*
>
> *De lo anterior se concluye que la conciliación en derecho administrativo laboral puede versar sobre los efectos económicos de un acto administrativo de carácter particular sujeto de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando:*
>
> *i) Se trate de derechos inciertos y discutibles.*
>
> *ii) Sean asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley.*
>
> *iii)* ***Se respete la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social y a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales (…)***
>
> *En el mismo sentido la Corte Constitucional ha sido enfática al señalar que las transacciones y acuerdos conciliatorios en los que se desconozcan el derecho a la seguridad social o los mínimos de las normas laborales carecen de fuerza frente a la Constitución Política, señalando que el alcance de las conciliaciones en derecho laboral es relativo, pues no pueden extenderse a derechos irrenunciables de los trabajadores. A este respecto ha considerado:*
>
> > *"En lo referente a las conciliaciones en materia laboral, si bien, en cuanto cumplan las condiciones legales, están llamadas a resolver las*

[7] Providencia de 14 de junio de 2012, consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE, Radicación número: 25000-23-25-000-2008-01016-01 (1037-11)

> *diferencias entre patronos y trabajadores en aspectos salariales y prestacionales, carecen de fuerza, frente a la Constitución, para hacer que el trabajador mediante ellas renuncie a derechos suyos ciertos e indiscutibles, como es el caso de la pensión de jubilación, que le debe ser reconocida y pagada cuando se cumplan los requisitos de ley para obtenerla.*
>
> *Así, pues, el alcance de las conciliaciones es relativo, en cuanto ponen fin a controversias referentes a los derechos laborales de los cuales se trata en sus textos, pero no pueden extenderse a derechos irrenunciables de los trabajadores. Respecto de éstos las cláusulas de renuncia se tienen por no escritas y no pueden oponerse válidamente a las pretensiones del reclamante si lo que éste pide es la efectividad del derecho irrenunciable"*[8].
>
> *Así las cosas, siendo legal en sí misma la audiencia de conciliación como etapa procesal, se debe reiterar que:* ***"Esta apreciación debe entenderse en el sentido de que no puede transigirse menoscabando los derechos fundamentales. Pero, cosa diferente es que se llegare a un acuerdo que precisamente conlleve la protección del derecho fundamental"***[9]. *Así en cada caso se debe analizar si la conciliación conllevó realmente a "allanamiento del ente accionado a los hechos presentados por el accionante que dio como resultado un acuerdo sobre las alternativas técnicas para superar la violación del derecho"*[10].
>
> ***Por tanto, se insiste en que si como resultado de la audiencia de conciliación, se protege el derecho reclamado en el proceso en razón de la fórmula de arreglo, que es aceptada por las partes y avalada por el conciliador, quien vela porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, dicho acuerdo debe tenerse como válido***.[11]" (Destaca el Despacho).

En atención a lo expresado por el Alto Tribunal, la conciliación será totalmente válida como mecanismo de solución de conflictos, cuando con ella se logre el reconocimiento por parte de la entidad de los derechos laborales irrenunciables e intransigibles del administrado y/o pensionado.

De acuerdo con ello, encuentra este Despacho que en el presente asunto, se reitera, la Entidad convocada, CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, reconoció el 100% del reajuste de las partidas computables a la asignación de retiro denominadas subsidio de alimentación

---

[8] T-1008-99 de 1999.

[9] T-232 de 1996.

[10] T-677 de 2001.

[11] *Ibidem.*

y doceavas partes de las primas de navidad, servicios y vacaciones, esto es, el 100% de lo pretendido por el convocante y el 75% de la indexación correspondiente, aplicando la respectiva prescripción trienal consagrada en la ley.

Se tiene entonces, que al reconocer el 100% del capital correspondiente al reajuste solicitado, la convocada reconoce en su totalidad el derecho que le asiste a la señora GLORIA ROA CAMACHO, quien, en este caso, no renunció a su derecho, siendo viable la posible aprobación del acuerdo en estas condiciones.

Ahora bien, en relación con lo reconocido por concepto de indexación, esto es, el 75%, es preciso aclarar que dicho concepto no hace parte del derecho irrenunciable del particular, siendo entonces un asunto netamente económico que no afecta el aspecto sustancial del derecho y sobre el que sí puede disponer el afectado, pensionado y/convocante, razón por la que, en ese mismo sentido, sería viable aceptar el acuerdo conciliatorio logrado.

2.5.3. Representación de las partes:

Verificado en el expediente que tanto la señora GLORIA ROA CAMACHO, como la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR- se encuentran habilitados para actuar, con capacidad suficiente para ser parte y comparecer al proceso, que lo hacen por medio de apoderado judicial, y que han conferido a sus apoderados poder expreso para conciliar.

- **Convocante:** Representante judicial, doctora CARDEY JULLIETTE PÁRAMO OVALLE (Folios 8 y 9 *«002ExpedienteConciliacionJudicial»*[12]).

- **Convocado:** Representante judicial, doctor RUBÉN DARÍO REYES SÁNCHEZ (Folio 90 *«002ExpedienteConciliacionJudicial»*).

[12] En dicho mandato de manera expresa se consagró que su apoderado quedaba facultado para conciliar.

2.5.4. Pruebas necesarias para el acuerdo conciliatorio:

Se encuentra probado que la señora GLORIA ROA CAMACHO el 25 de febrero de 2020 solicitó ante la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL el reajuste de su asignación de retiro con su consecuente pago de retroactivo (Folios 10 y 11 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

Que, en virtud de dicha solicitud, la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL expidió el Oficio No. 20201200-010075271 Id: 552774 de 16 de marzo de 2020, mediante el cual informó que «*su petición NO será atendida favorablemente en vía administrativa, quedando en libertad de proceder conforme lo indicado en la presente respuesta, es decir, acudir en conciliación extrajudicial o por vía judicial*» (folios 21 a 25 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

Que mediante el Acta No. 16 de 16 de enero de 2020, emanada por el Comité de Conciliación de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, se recomendó de forma general «*conciliar judicial y extrajudicialmente en las mesadas anteriores a las vigencias 2018 y 2019, aplicando la prescripción conforme a la fecha de retiro de las mesadas no reclamadas de manera oportuna, a todo aquel personal retirado de la POLICÍA NACIONAL, que tenga derecho (…)*» (Folios 104 a 107 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

Que, a través del Oficio de 14 de abril de 2020, la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de la Entidad convocada manifestó el ánimo conciliatorio por parte de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL con la señora GLORIA ROA CAMACHO (Folios 102 y 103 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

2.5.5. Acta del Comité de Conciliación:

Se allegó la correspondiente acta del comité de conciliación, dentro de la cual se manifestó el ánimo conciliatorio por parte de la CAJA DE SUELDOS DE

RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR- con la señora GLORIA ROA CAMACHO (Folios 102 y 103 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

2.6. DEL RÉGIMEN PENSIONAL DEL PERSONAL DE NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL

En virtud de lo dispuesto por el artículo 218 de la Constitución Política, la fuerza pública está integrada en forma exclusiva por la Fuerzas Militares y la Policía Nacional, a su turno, el artículo 218 ibidem, prevé que la POLICÍA NACIONAL es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, por lo que la ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.

Por su parte la Ley 4 de 1992 «*Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política*», dispone en su artículo 1º que:

> «**Artículo 1º**. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
>
> (…)
>
> d) Los miembros de la Fuerza Pública.
>
> (…)»

Seguidamente el artículo 2º establece que, para la fijación del régimen salarial y prestacional de dichos servidores, el Gobierno Nacional tendrá dentro de sus objetivos y criterios: «*a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del*

Estado tanto del régimen general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales».

De manera puntual, el artículo 13 de la Ley 4 de 1992 señala que «*el Gobierno Nacional establecerá una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y retirado de la Fuerza Pública de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2º de esa norma*».

Ahora bien, con la expedición de la Ley 180 de 1995 «*por la cual se modifican y expiden algunas disposiciones sobre la Policía Nacional y del Estatuto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional y se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para desarrollar la Carrera Policial denominada "Nivel Ejecutivo", modificar normas sobre estructura orgánica, funciones específicas, disciplina y ética y evaluación y clasificación y normas de la Carrera Profesional de Oficinas, Suboficiales y Agentes*», se precisó que la Policía Nacional se conforma de oficiales, personal del nivel ejecutivo, suboficiales, agentes, alumnos y por quienes prestan el servicio militar obligatorio en esa institución, así como por los servidores públicos no uniformados, pertenecientes a ella, además, dotó de facultades extraordinarias al ejecutivo para reglamentar la carrera policial del nivel ejecutivo.

En desarrollo de ese mandato legal, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 132 de 1995, en cuyo artículo 15 señaló:

> «**Artículo 15.** ***RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL DEL PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO.*** El personal que ingrese al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional se someterá al régimen salarial y prestacional determinado en las disposiciones que sobre salarios y prestaciones dicte el Gobierno Nacional».

Dicho régimen salarial y prestacional se determinó en el Decreto 1091 de 1995, proferido por el presidente de la República, que expidió el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la POLICÍA NACIONAL, creado mediante el Decreto 132 de 1995.

Dicha norma dispuso, por un lado, las prestaciones a favor de dicho personal (artículos 4, 5, 11, 12, 13 y 15) y, por el otro, mediante el artículo 49, que, a partir de la vigencia de ese Decreto, al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que sea retirado del servicio activo, se le liquidará las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas:

> «**Artículo 49. *BASES DE LIQUIDACIÓN*.** A partir de la vigencia del presente decreto, al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que sea retirado del servicio activo, se le liquidará las prestaciones sociales unitarias y periódicas sobre las siguientes partidas.
>
> **a) Sueldo básico;**
> **b) Prima de retorno a la experiencia;**
> **c) Subsidio de Alimentación;**
> **d) Una duodécima parte (1/12) de la prima de navidad;**
> **e) Una duodécima parte (1/12) de la prima de servicio;**
> **f) Una duodécima parte (1/12) de la prima de vacaciones**» (Destaca el Despacho)

Y el parágrafo único de la misma norma dispuso que fuera de las partidas específicamente señaladas en ese artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, auxilios y compensaciones consagradas en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 y en ese Decreto, serían computables para efectos de cesantías, asignaciones de retiro, pensionados, sustituciones pensionales y demás prestaciones sociales.

Ahora bien, pese a que el artículo 51 del mencionado Decreto reguló lo pertinente a la asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo, esa disposición fue declarada nula por el H. Consejo de Estado mediante sentencia de 14 de febrero de 2007[13], por transgredir los mandatos de la ley marco, es decir, la Ley 4 de 1992.

Luego, el artículo 56 del Decreto 1091 de 1995 consagró **el principio de oscilación de asignaciones de retiro y pensiones** así:

> «**Artículo 56. *OSCILACIÓN DE ASIGNACIONES DE RETIRO Y PENSIONES*. Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata**

[13] Expediente número 1240-04, consejero ponente: ALBERTO ARANGO MANTILLA.

> **el presente decreto se liquidarán tomando en cuenta las variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de este Decreto.** En ningún caso aquellas serán inferiores al salario mínimo legal.
>
> El personal del nivel ejecutivo o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes prestacionales en otros sectores de la Administración Pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley» (Destaca el Despacho).

En el mismo sentido, el artículo 60 *ibidem* consagró como término prescriptivo de los derechos allí consagrados 4 años contados desde la fecha en que se hicieron exigibles y señaló que el reclamo escrito, recibido por autoridad competente, sobre el derecho interrumpe la prescripción.

No obstante, en este punto es imperioso acotar que el Decreto 132 de 1995 fue derogado por el artículo 95 del Decreto 1791 de 2000, que modificó las normas de carrera de personal de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la POLICÍA NACIONAL.

Posteriormente, se expidió una nueva ley marco, contenida en la Ley 923 de 2004 «*Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política*», la cual dentro del marco pensional y de asignación de retiro de sus miembros, previó en su artículo 3º, los siguientes criterios:

> «**Artículo 3º. *ELEMENTOS MÍNIMOS.*** El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
>
> (…)
>
> 3.3. Las partidas para liquidar la asignación de retiro serán las mismas sobre las cuales se fije el aporte a cargo de los miembros de la Fuerza Pública.

> 3.4. El aporte para la asignación de retiro a cargo de los miembros de la Fuerza Pública será fijado sobre las partidas computables para dicha asignación, el cual estará a cargo de los miembros de la Fuerza Pública en un porcentaje que no será inferior al cuatro punto cinco por ciento (4.5%), ni superior al cinco por ciento (5%).
>
> (…)
>
> 3.13. **El incremento de las asignaciones de retiro y de las pensiones del personal de la Fuerza Pública será el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones de los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo**» (Destaca el Despacho).

Obedeciendo ese mandato legal, el Decreto 4433 de 2004 «*por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública*», fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros, entre otros, del personal del Nivel Ejecutivo y agentes de la POLICÍA NACIONAL, dicho régimen debía atender los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad y, como partidas computables de la asignación de retiro consagró:

> «**Artículo 23. *PARTIDAS COMPUTABLES*.** La asignación de retiro, la pensión de invalidez, y la pensión de sobrevivencia a las que se refiere el presente decreto del personal de la Policía Nacional, se liquidarán según corresponda en cada caso, sobre las siguientes partidas así:
>
> (…)
>
> **23.2 Miembros del Nivel Ejecutivo**
>
> **23.2.1 Sueldo básico.**
>
> **23.2.2 Prima de retorno a la experiencia.**
>
> **23.2.3 Subsidio de alimentación.**
> **23.2.4 Duodécima parte de la prima de servicio.**
>
> **23.2.5 Duodécima parte de la prima de vacaciones.**
>
> **23.2.6 Duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.**
>
> **Parágrafo**. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de la asignación de retiro, las pensiones, y las sustituciones pensionales» (Destaca el Despacho).

Del mismo modo, consagró **el principio de oscilación** en los siguientes términos:

> «**Artículo 42.** ***OSCILACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO Y DE LA PENSIÓN.*** **Las asignaciones de retiro y las pensiones contempladas en el presente decreto se incrementarán en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado. En ningún caso las asignaciones de retiro o pensiones serán inferiores al salario mínimo legal mensual vigente.**
>
> El personal de que trata este decreto, o sus beneficiarios no podrán acogerse a normas que regulen ajustes en otros sectores de la administración pública, a menos que así lo disponga expresamente la ley» (Destaca el Despacho).

Luego de una serie de pronunciamientos jurisprudenciales del H. Consejo de Estado, que dejaron sin piso jurídico la regulación del régimen pensional y de la asignación de retiro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional[14], el ejecutivo nacional expidió el Decreto 1858 de 2012 *«por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional»*, que fijó lo pertinente en esa materia:

> «**Artículo 3º.** Fíjanse como partidas computables de liquidación dentro del régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó a la institución antes del 1º de enero de 2005, previsto en el presente decreto, las siguientes:
>
> **1. Sueldo básico.**
>
> **2. Prima de retorno a la experiencia.**
>
> **3. Subsidio de alimentación.**
>
> **4. Duodécima parte de la prima de servicio.**
>
> **5. Duodécima parte de la prima de vacaciones.**
>
> **6. Duodécima parte de la prima de navidad devengada, liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro.**
>
> **Parágrafo**. Ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, que devengue el personal a que se refiere este decreto, serán computables para efectos de la asignación de retiro, las pensiones o las sustituciones pensionales».

[14] Sentencia de 3 de septiembre de 2018, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS, Radicado número: 11001-03-25-000-2013-00543-00 (1060-13).

«**Artículo 4º.** El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias» (Destaca el Despacho).

Respecto al principio de oscilación, en materia de asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, el Consejo de Estado en el fallo de 26 de enero de 2006[15], indicó:

«EL PRINCIPIO DE LA OSCILACIÓN EN LA LIQUIDACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO Y LAS PENSIONES DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES

La regla general es que las normas con fundamento en las cuales se efectúa la liquidación del monto pensional se mantienen intangibles y no puede ser modificadas, salvo que sean más favorables, so pena de incurrir en violación de los derechos adquiridos. Respecto de régimen especiales, puede establecerse la modificación constante de la normatividad que regula el monto pensional y bajo esta consideración, el ***PRINCIPIO DE OSCILACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIONES*** *es de aplicación excepcional para determinar el monto de tales prestaciones, siempre que no se contraríe el derecho constitucional al reajuste periódico de las pensiones legales (artículo 53) y legal, a que ningún caso se desmejores los salarios y las prestaciones legales (artículo 2°, literal a) de la ley 4 de 1992).*

En las anteriores condiciones, es perfectamente posible la aplicación del ***PRINCIPIO DE OSCILACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO Y PENSIONES*** *consagrado en las normas especiales de Carrera del Personas de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares previstas en el Decreto 612 de marzo 15 de 1977 (artículo 130), el Decreto 0089 de 18 de enero de 1984 (artículo 161), el decreto 95 de 11 de enero 1989 (artículo 164) y el Decreto 1211 de 1990 (artículo 169).*

De los preceptos citados, emerge con claridad que el PRINCIPIO DE OSCILACIÓN que se contempla de manera especial para calcular el monto de la asignación de retiro, hace referencia a que se deben tomar en cuenta las ***"variaciones que en todo tiempo se introduzcan en las asignaciones de actividad para cada grado".*** *La asignación por actividad es la* ***"asignación mensual"*** *la cual determina para los Coroneles por "****el Decreto 232 de 1997 y los las disposiciones legales que lo modifiquen o complementen"*** *(artículo 64 del Decreto 612 de 15 de marzo 1997), por las* ***"disposiciones legales vigentes"*** *(artículo 69 del decreto 0089 de 18 de enero 1984),* ***"conforme a las cuantías y porcentajes que fije el Gobierno, sobre materia"*** *(parágrafo del artículo 71 del Decreto 95 de 1989) y por* ***"las disposiciones legales vigentes"*** *(artículo 73 del Decreto 1211 de 1990).*

Siendo así y como quiera que el PRINCIPIO DE OSCILACIÓN implica la variación de la asignación mensual, la administración podía modificar el quantum de la asignación de retiro del demandante tomando en cuenta las variaciones que introdujeron las normas expedidas con posterioridad la Ley 4

[15] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO, radicación número: 25000-23-25-000-1999-04300-01 (3405-04).

de 1992, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998 y 62 de 1999 que establecieron porcentajes para calcular la asignación mensual de los Coroneles que comprende ***el "sueldo básico mensual"*** *y las primeras, ítems que igualmente año por año fueron modificados.*

Surge de lo precedente, como quiera que la asignación mensual tiene efectos para calcular el ***"sueldo básico"*** *que es una de las partidas computables para determinar la asignación de retiro, la cual se determina también sobre la primera actividad, la prima de antigüedad, la prima de Estado Mayor, la doceava parte de la primera navidad, la primera de vuelo, los gastos de representación y el subsidio familiar, acorde con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 325 de 1959 invocado por la entidad demandada para efectuar el reconocimiento de la mentada prestación social y cuyo tenor literal es reiterado en el Decreto 188 de 1968, se observa que la administración no desconoció derechos adquiridos.*

En efecto, con la aplicación de Decretos de 921 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998 y 62 de 1999 la administración no desconoció el mentado derecho constitucional en tanto la excepcionalidad del régimen permitía que la partida computable "sueldo básico" con base en normas posteriores.

Además, en forma indudable la aplicación de los decretos surgidos al amparo de la Ley 4 de 1992 no implico el desmejoramiento del monto de la asignación de retiro que venía percibiendo el actor, afirmación que surge al revisar la constancia emitida por el ***Jefe de la Sección Liquidación y Control de Nomina****, allegada al expediente, en la cual consta que la prestación liquidada al actor aumento progresivamente año por año.*
(…)

De manera que la administración, simplemente acato los Decretos 921 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de 1998 y 62 de 1999 expedidos por el Gobierno Nacional quien quedo autorizado en el artículo 2 de la ley 4 de 1992 para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos entre ellos los de la Fuerza Pública y por ende, no hubo desconocimiento de los derechos consagrados en el artículo 3 de la C.P al reajuste periódico de la pensiones legales y en el literal a), articulo 2 de la ley 4 de 1992 según el cual en ningún caso se podrán desmejorar las pensiones y prestaciones sociales» (Resaltado y negrilla del texto original).

Y en la sentencia de 5 de abril de 2018[16], precisó:

«***El método de reajuste tradicionalmente utilizado para las liquidaciones y reajustes de las asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional lo constituye el principio de oscilación[17], según el cual, las asignaciones de retiro tendrán en cuenta la totalidad de las variaciones que en todo tiempo se introduzcan a las asignaciones que se devengan en actividad, «con base en la escala gradual porcentual» decretada por el gobierno***

[16] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, radicación número: 25000-23-42-000-2015-06499-01 (0155-17).

[17] Consagrado en el artículo 56 del Decreto 1091 de 1995.

Nacional», esto con el fin de garantizar la igualdad de remuneración a quienes han cesado en la presentación de sus servicios *(Resaltado del Juzgado).*

Sin embargo, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 con la adición de la Ley 238 de 1995 señala como excepciones al sistema integral de seguridad social las siguientes:

> *"[…] El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Lay 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincula a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.*
>
> *[…"*
>
> *PARÁGRAFO 4- Adicionado por el art 1 Ley 238 de 1995. Las excepciones consagradas en el presente artículo no implican negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y 142 de esta ley para los pensionados de los sectores aquí contemplados […]» (Subrayas de la Subsección).*

A su vez, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 indica:

> *"[…] ARTICULO 14- Reajuste de pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustaran anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el gobierno". (Se subraya).*

Esta Sección en sentencia del 17 de mayo del 2007[18] *afirmo que:*

> *"[…] Por consiguiente, no existe la menor duda en el sentido de que bajo los mandatos del articulo original 279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional no eran acreedores del reajuste de sus pensiones como lo dispone el artículo 14 de aquella, vale decir, teniendo en cuenta la variación porcentual del índice de Precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, sino como lo disponía el decreto 1212 de 1990, o sea mediante la oscilación de las asignaciones de los miembros de la Policía Nacional en actividad.*
>
> *[…] a partir de la vigencia de la ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, si tienen derecho a que les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor*

[18] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 17 de mayo de 2007, consejero ponente: JAIME MORENO GARCÍA número interno: 8464-2005.

certificado por el DANE como los dispuso el artículo 14 de la última, y a la mesada 14 en los términos del artículo 142 ibidem […]".

En efecto, esta Corporación en la sentencia citada y en reiterada jurisprudencia[19] determino:

"1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de 1995 fecha de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo 70 de la Ley 100 presentaron una modificación en que a los pensionados de los sectores allí contemplados, entre ellos los de las Fuerzas Militares y Policía Nacional[20], en virtud del principio favorabilidad y conforme a los artículos 14 y 142 de la Lay 100 de 1993 se les podía reajustar la asignación de retiro conformo al índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior certificado por el DANE y la mesada 14, respectivamente, siempre que el incremento realizado por el Gobierno Nacional en los decretos anuales de las asignaciones en la actividad de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional sea inferior.

2- En vigencia de la ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional conforme al índice de precios al consumidor señalado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 en cada caso concreto aplica desde el año de 1996 hasta 2004, toda vez que a partir del 1º de enero 2005 se implementó nuevamente la aplicación de principio de oscilación a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004.

3.- El reajuste conforme al IPC, índice directamente en la base de la respectiva prestación pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a partir del año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación.

En otras palabras, los incrementos que se efectúen sobre la asignación de retiro de un oficial o suboficial de la fuerza Pública en retiro a partir de la entrada en vigencia al Decreto 4433 de 2004, esto es, el 1º de enero de 2005 deben tener en cuenta el incremento de la variación porcentual del índice de precios al consumidos de los años 1996 a 2004».

Se deduce de lo anterior, sin lugar a dudas, que las asignaciones de retiro que aquí se han estudiado, se calculan respetando las partidas computables de sueldo básico, prima de retorno a la experiencia, subsidio de alimentación y a las duodécimas partes de las primas de servicio, vacaciones y navidad, así mismo, que tal asignación de retiro, con todos sus componentes, se

[19] Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de mayo de 2016, consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ, número interno: 1640-2012, ii) Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: GUSTAVO GÓMEZ ARANGUREN, numero interno: 1479-2009, iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de marzo de 2010, consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, numero interno: 0479-2009.

[20] C-432 de 2004 afirmó que la asignación de retiro se asimilaba a las pensiones de vejez o jubilación.

incrementará en el mismo porcentaje en que se aumenten las asignaciones en actividad para cada grado, de conformidad con el principio de oscilación.

3. CASO CONCRETO

En esa secuencia, se encuentra probado que:

-El 12 de diciembre de 2016, mediante la Resolución No. 9420, la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL reconoció la asignación de retiro de la señora GLORIA ROA CAMACHO (Folios 16 y 17 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

-La asignación de retiro de la señora GLORIA ROA CAMACHO no se incrementó en su integridad para los años 2017, 2018 y 2019, en razón a que se omitió realizar el ajuste porcentual respecto del subsidio de alimentación y de las duodécimas partes de las primas de servicio, vacaciones y navidad (Folios 108 a 110 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

-El 25 de febrero de 2020, la señora GLORIA ROA CAMACHO solicitó ante la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL el reajuste de su asignación de retiro con su consecuente pago de retroactivo (Folios 10 y 11 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

-Que, en virtud de dicha solicitud, la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL expidió el Oficio No. 20201200-010075271 Id: 552774 de 16 de marzo de 2020, mediante el cual informó que «*su petición NO será atendida favorablemente en vía administrativa, quedando en libertad de proceder conforme lo indicado en la presente respuesta, es decir, acudir en conciliación extrajudicial o por vía judicial*» (folios 21 a 286«*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

-Que mediante el Acta No. 16 de 16 de enero de 2020, emanada por el Comité de Conciliación de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, se recomendó de forma general «*conciliar judicial y*

extrajudicialmente en las mesadas anteriores a las vigencias 2018 y 2019, aplicando la prescripción conforme a la fecha de retiro de las mesadas no reclamadas de manera oportuna, a todo aquel personal retirado de la POLICÍA NACIONAL, que tenga derecho (…)» (Folios 104 a 107 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

-Que, a través del Oficio de 14 de abril de 2020, la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación de la Entidad convocada manifestó el ánimo conciliatorio por parte de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, con la señora GLORIA ROA CAMACHO (Folios 102 y 103 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

Bajo ese contexto, debe tenerse en cuenta que, como se expuso en el acápite 2.6 de este proveído, así como las asignaciones de retiro se calculan respetando las partidas computables de sueldo básico, subsidio de alimentación y las duodécimas partes de las primas de servicio, vacaciones y navidad, estas en su integridad, deben incrementarse de acuerdo con el porcentaje que aumenten las asignaciones en actividad de cada grado, en virtud del principio de oscilación, consagrado en la normatividad que regula la materia.

Para el caso en estudio, se advierte que los pagos efectuados y reconocidos por la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL (Folios 27 a 61 y 108 a 110 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»), omitieron o no tuvieron en consideración el aumento porcentual por concepto de oscilación para las partidas alegadas y reclamadas por la convocante.

En ese orden y, teniendo en cuenta que a la señora GLORIA ROA CAMACHO en su calidad de retirada y/o pensionada de la Policía Nacional se le ha venido pagando su asignación de retiro por debajo a la que realmente se le debía pagar, tiene la convocante, sin lugar a duda, de conformidad con el derrotero expuesto, derecho a que se reajuste y se reliquide su asignación de retiro teniendo en consideración el incremento porcentual de las partidas omitidas.

Para el caso en estudio se cuentan así:

Incremento	Año	Pagado	Derecho	Diferencia	Diferencia Anual	Prescripción Trienal
6,75%	2017	2.403.927	2.431.320	27.393	383.502	328.716
5,09%	2018	2.505.629	2.555.075	49.446	692.244	692.244
4,50%	2019	2.618.383	2.670.054	51.671	723.394	723.394
	2020	2.806.763	2.806.763	0	0	
				TOTAL	**1.799.140**	**1.744.354**

Ahora, contrastando lo anterior con la propuesta presentada en audiencia de conciliación por el apoderado judicial de la Entidad convocada, se encuentra que este manifestó que en la sesión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR-, en el Acta 27 de 8 de abril de 2021, consideró que a la convocante le asiste derecho a la reliquidación de la asignación de retiro, respecto a la aplicación de las partidas computables del nivel ejecutivo, razón por la cual determinaron que les asistía ánimo conciliatorio (Folios 102 y 103 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»), y en ese aspecto, puso en consideración la siguiente formula conciliatoria (Folio 113 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»):

VALOR TOTAL A PAGAR POR PARTIDAS COMPUTABLES DE NIVEL EJECUTIVO	
	CONCILIACIÓN
Valor de Capital Indexado	*1.875.077*
Valor Capital 100%	*1.749.833*
Valor Indexación	*125.244*
Valor Indexación por el (75%)	*93.933*
valor Capital más (75%) de la Indexación	*1.843.766*
Menos Descuento CASUR	*-62.742*
Menos Descuento Sanidad	*-64.016*
VALOR A PAGAR	***1.717.008***

A su turno, la apoderada de la parte convocante revisado el ofrecimiento hecho por la parte convocada, CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR-, manifestó que «*una vez verificada la propuesta de la entidad convocada y de conformidad con las facultades conferidas, manifiesto que la parte convocante acepta dicha propuesta*» (Folio 119 «*002ExpedienteConciliacionJudicial*»).

En ese estadio las cosas, con fundamento en los argumentos, normas y posiciones jurisprudenciales que fueron expuestas en el cuerpo de esta

providencia, el Despacho considera que el acuerdo conciliatorio no es lesivo del patrimonio público, ni va contra el ordenamiento jurídico, pues incluso se pactó por debajo de la operación matemática que se efectuó en la presente providencia, circunstancia que se encuentra plausible en virtud de la naturaleza de la conciliación, por lo que se impartirá su aprobación.

Por lo anteriormente expuesto, el **JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT,**

R E S U E L V E:

PRIMERO: APRUÉBASE en todas sus partes el acuerdo conciliatorio suscrito entre la señora GLORIA ROA CAMACHO y la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL-CASUR- en la audiencia de Conciliación Extrajudicial llevada a cabo ante la PROCURADURÍA 199 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS el 20 de abril de 2020.

SEGUNDO: A costa de la parte convocante **EXPÍDASE** copia auténtica de la presente providencia con nota de ser primera copia que presta mérito ejecutivo.

TERCERO: Ejecutoriado este auto, **ARCHÍVESE** el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
C91A85C849048F5C50A1B92595B7F55F5AE907855966DB8DE2F477008BFCD703
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:03:27 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE GIRARDOT

Girardot, tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN:	**25307-3333-001-2021-00117-00**
DEMANDANTE:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**
DEMANDADO:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ**
MEDIO DE CONTROL:	**NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)**
JUEZ:	**Dra. ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO**

A U T O

I. A S U N T O

Procede el Despacho a resolver sobre la admisión de la demanda incoada por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, por conducto de apoderado judicial, contra la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad).

II. A N T E C E D E N T E S

2.1. El 23 de abril de 2021 la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, por conducto de apoderado judicial, radicó demanda ante los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Girardot, con el propósito de obtener la nulidad de la Resolución No. 197 de 31 de julio de 2019 «*POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA PAGAR UNAS CESANTIAS TOTALES*», correspondiendo su conocimiento a este Despacho («*005ActaReparto*»).

2.2. El 10 de mayo de 2021 el proceso ingresó al Despacho («*006ConstanciaDespacho*»).

III. C O N S I D E R A C I O N E S

En primer lugar, el Juzgado advierte que la demanda no cumple con el requisito del numeral 1º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues no aportó la constancia de publicación, comunicación, notificación o, ejecución del acto acusado, esto es de la Resolución No. 197 de 31 de julio de 2019 «*POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA PAGAR UNAS CESANTIAS TOTALES*», la cual se hace necesaria para hacer el respectivo análisis de caducidad, pues aunque es la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, quien demanda su propio acto administrativo, debe tenerse en cuenta que el H. Consejo de Estado ha sido reiterativo en señalar que si la relación laboral se encuentra vigente, las cesantías revisten el carácter de prestación periódica, contrario sensu, si el vínculo ha finalizado adquieren el carácter unitario, por lo que se requerirá en tal sentido.

De otro lado, no se realizó la estimación razonada de la cuantía conforme lo señala el numeral 6 del artículo 162 de la Ley 1437.

Así también, se observa que el documento denominado «*4. Copia de la Resolución No. 128 de fecha 8 de mayo de 2019, por medio de la cual se acepta la renuncia de la señora ARAMINTA PINZÓN VELA*» señalado en el acápite de pruebas del libelo introductorio no fue allegado, por lo que deberá aportarlo de manera legible en virtud de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Finalmente, señaló como demandada únicamente a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, olvidando que dentro de sus pretensiones solicita se ordene a la señora ARAMINTA PINZÓN

VELA reintegrar una suma de dinero correspondiente al mayor valor pagado por concepto de cesantías definitivas, lo que la convierte en sujeto pasivo dentro de la presente actuación.

En consecuencia, **SE DISPONE:**

PRIMERO: REQUÍERESE a la parte actora para que en el término de los diez (10) días siguientes a la notificación de este proveído, subsane la demanda SO PENA DE RECHAZO, en el sentido que:

- Allegue la constancia de publicación, comunicación, notificación o, ejecución del acto administrativo acusado, esto es de la Resolución No. 197 de 31 de julio de 2019 «*POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA PAGAR UNAS CESANTÍAS TOTALES*».

- Realice la estimación razonada de la cuantía.

- Allegue el documento señalado en el acápite de pruebas del libelo introductorio consistente en «*4. Copia de la Resolución No. 128 de fecha 8 de mayo de 2019, por medio de la cual se acepta la renuncia de la señora ARAMINTA PINZÓN VELA*».

- Determine con precisión y claridad quién comporta el extremo pasivo.

SEGUNDO: RECONÓCESE personería adjetiva para actuar como apoderada judicial de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGÁ, a la doctora MÓNICA ALEJANDRA PACHÓN CASTILLO, conforme al poder a ella conferido obrante en el folio 9 del archivo denominado «*002DemandaPoderAnexos*».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA FABIOLA CÁRDENAS HURTADO
JUEZ

FIRMADO POR:

ANA FABIOLA CARDENAS HURTADO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 001 SIN SECCIONES ADMINISTRATIVO DE GIRARDOT

ESTE DOCUMENTO FUE GENERADO CON FIRMA ELECTRÓNICA Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 527/99 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN:
154642E17156CA25021383AFCCD31ADA3822E4DAA135120CB85F546F9A689522
DOCUMENTO GENERADO EN 03/06/2021 12:04:01 AM

VALIDE ÉSTE DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN LA SIGUIENTE URL:
HTTPS://PROCESOJUDICIAL.RAMAJUDICIAL.GOV.CO/FIRMAELECTRONICA